



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**DEMOCRACIA ELECTORAL Y NEOLIBERALISMO EN EL SALVADOR.
LA TRANSICIÓN POLÍTICA SALVADOREÑA ENTRE 1979 Y 2009**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTA

Carmen Elena Villacorta Zuluaga

TUTORA: MTRA. IRENE SÁNCHEZ RAMOS





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

**DEMOCRACIA ELECTORAL Y NEOLIBERALISMO EN EL SALVADOR.
LA TRANSICIÓN POLÍTICA SALVADOREÑA ENTRE 1979 Y 2009**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

P R E S E N T A

Carmen Elena Villacorta Zuluaga

TUTORA: MTRA. IRENE SÁNCHEZ RAMOS

LA REALIZACIÓN DE ESTA TESIS CONTÓ CON EL APOYO DE: EL PROGRAMA DE BECAS PARA EXTRANJEROS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) DEL GOBIERNO DE MÉXICO, EL PROGRAMA DE BECAS PAPIIT DE LA UNAM Y EL PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA RED MACRO UNIVERSIDADES



Ciudad Universitaria

México, 2010

*Al espíritu combativo del pueblo salvadoreño,
a sus luchas pasadas, presentes y venideras.*

Agradecimientos

A la generosidad del pueblo de México hacia los latinoamericanos que encontramos en este país la posibilidad de ampliar nuestro horizonte, relativizar nuestro provincianismo y crecer; al programa de becas para extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por permitirme dedicación exclusiva a los estudios de Maestría; al programa de becas de intercambio académico de la Red Macro-Universidades del Banco Santander, por su apoyo en las estancias de investigación que nutrieron este trabajo; al programa de becas PAPIT-UNAM y a Fernando Neira por proporcionarme el apoyo necesario para redactar esta tesis.

A la UCA de El Salvador, por su formación en pensamiento crítico y su empeño en conservar el legado heredado por nuestros mártires; a la UNAM, por permitirme complementar mi proceso formativo, disciplinario y local, con un aprendizaje multidisciplinario y latinoamericanista; al Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos por mantener palpitante a una comunidad académica inquieta y crítica; a mis compañeros de la Maestría por su interés en América Latina, por haber propiciado debates fecundos en el seno de los seminarios y por haberme dado lecciones valiosas en el esfuerzo conjunto de la Asamblea Estudiantil.

A Irene Sánchez Ramos, por su cariño por El Salvador, su solidaridad y sus diversas enseñanzas; a Mónica Toussaint, porque con su dominio de la política exterior inauguró para mí un nuevo punto de vista desde el cual comprender mejor a Centroamérica y por su invaluable apoyo; a Mario Vásquez y a Josué Sansón debo el descubrimiento de los objetos de estudio que me apasionaron durante los últimos tres años y que marcarán los derroteros de mi trayectoria académica futura: la historia de El Salvador y el testimonio político latinoamericano; al resto de mis maestros, quienes desde la filosofía, la literatura, la sociología, la antropología y la historia me abrieron las puertas al conocimiento de las múltiples búsquedas emprendidas por los latinoamericanos para lograr la comprensión de nuestro continente y su emancipación; a Ricardo Ribera, tutor salvadoreño de esta tesis.

Al seminario independiente sobre El Salvador y al Comité por el Cambio en El Salvador por acompañar mi viaje permanente hacia el pulgarcito de América; a las queridas amistades que me han ayudado a mantener vigentes los lazos con El Salvador a lo largo de estos seis años de vida mexicana; a mis seres queridos en México por haber acuerpado de diferentes maneras mis transformaciones; a mis padres, por haberme inculcado la sensibilidad hacia cuanto nos rodea; a mi hermano, ejemplo de perseverancia, vocación y compromiso con las metas trazadas; a mi familia en general, cuyo respeto a mis decisiones me ha permitido volar, cuyo soporte emocional me ha permitido caminar; a Gustavo, por su modo de asumir la vida a través de hechos más que de palabras, y por compartir conmigo su sabiduría, su disciplina y su sencillez, en el esfuerzo cotidiano por ser consecuentes.

ÍNDICE

Introducción.....	i
CAPÍTULO I. Neoliberalismo y democracia en el Nuevo Orden Mundial.	
Su impacto en El Salvador	1
1.1 La democracia como problema en El Salvador de posguerra	1
1.2 Neoliberalismo y globalización: los nuevos rostros del neoliberalismo	17
1.3 ¿Por qué hablar de democracia neoliberal?	24
1.4 Democracia electoral y transición neoliberal en El Salvador	33
Capítulo II. La “coyuntura de definición” (1979-1981) como el inicio de la transición hacia la democracia electoral en El Salvador	41
2 La crisis de hegemonía como rasgo constitutivo de la “coyuntura de definición”	49
2.1 La irrupción de la izquierda revolucionaria	52
2.2 La moderación inmoderada	63
2.3 Estados Unidos en Centroamérica	73
CAPÍTULO III La década de 1980: guerra civil, democracia electoral, regionalización y pacificación	91
3 Tres proyectos de nación y un desenlace inesperado	95
3.1 El FMLN y el movimiento popular durante la guerra	98
3.2 La politización de la burguesía multisectorial: ARENA como proyecto político	114
3.3 Regionalización del conflicto, regionalización de la pacificación	132
3.3.1 La declaración franco-mexicana: nota disonante en la relegitimación del régimen	136
3.3.2 Los Acuerdos de Contadora y Esquipulas: pasos hacia la regionalización de la paz	142
Capítulo IV. Acuerdos de paz y transición neoliberal en El Salvador.....	153
4.1 El final de la guerra civil en El Salvador. 1989-1992: <i>segunda coyuntura de definición</i> en la transición política salvadoreña	157
4.1.1 “Hasta el Tope” y la situación de empate militar	160
4.1.2 La negociación	166
4.1.3 La paz política	174
4.2 El Salvador en la ARENA neoliberal	185
4.2.1 La <i>aristocracia financiera</i> en el poder	186
4.2.2 Del “presidente de la paz” al “defensor del Estado de Derecho”	196
4.2.3 Sai Baba en El Salvador	204
4.2.4 Saturación mediática y derrota electoral de ARENA	213
Cap. V. Politología y democracia electoral en El Salvador	219
5.1 Gobernabilidad y democracia: una expresión del enfoque institucionalista	220
5.1.1 ¿Transición hacia dónde?	238
5.2 Latinoamericanismo vs. politicismo. El otro abordaje	248
Conclusiones.....	258
Fuentes	266

Introducción

Este texto es el resultado de tres años de trabajo en el marco de la realización de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero es también fruto de un esfuerzo por sistematizar observaciones, intercambios, lecturas y aprendizajes que he realizado en torno de la realidad de El Salvador durante los últimos 14 años de mi vida. Por eso se trata de un producto académico que no sólo involucra una investigación respecto del devenir sociopolítico salvadoreño a lo largo de las últimas tres décadas, sino también la reflexión de alguien cuya vida y motivaciones se encuentran atravesadas por ese devenir de manera personal e íntima. Para alguien que nació en El Salvador algunos años antes del estallido de la guerra civil, pero creció en otro país (Colombia), rodeada de anécdotas, discusiones airadas sobre las coyunturas políticas, libros comprometidos y emisiones de “Radio Venceremos” que daban cuenta del desenvolvimiento de la lucha salvadoreña, regresar poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, con el sueño revolucionario aún latiendo en el ocaso de la adolescencia, significó un verdadero impacto.

No era anhelo de transformación, solidaridad, compañerismo, ni ideales de justicia social lo que se respiraba en el ambiente. Era desencanto, pugna electoral, individualismo y una desgarradora ausencia de horizonte lo que predominaba. ¿Qué había pasado con la utopía y el ímpetu estremecedor de la revolución? ¿En qué condiciones la guerrilla más poderosa de América Latina se había convertido en un partido político? ¿Qué factores desencadenaron el tránsito entre una situación tan cruda de conflicto armado hacia un proceso de democratización de corte neoliberal? ¿Por qué El Salvador se parecía tan poco al que perduraba dentro de mi imaginario? ¿Cómo había sido, a ciencia cierta, antes? ¿Realmente había cambiado tanto? ¿Qué había cambiado?

Son algunas de las inquietudes que incentivaron la construcción de un marco explicativo y un relato histórico que me permitiera hilvanar y dar sentido a las tensiones

y transformaciones experimentadas por El Salvador desde la caída de las dictaduras militares, en 1979, hasta el triunfo del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en las elecciones presidenciales de 2009. Precisamente porque en la construcción de ese relato se juega el cerrar de un ciclo en mi propia biografía y la posibilidad de comprenderme a mí misma mejor de lo que podía comprenderme antes, asumo la responsabilidad de aportar un punto de vista al análisis de la reciente historia política salvadoreña. Como salvadoreña que ha tenido que aproximarse a las entrañas de El Salvador habiendo estado vinculada a él, pero sin haber vivido siempre ahí, aspiro a ofrecer una mirada hasta cierto punto externa, que dialogue con las múltiples miradas que hoy confluyen, conviven, se contraponen y permean el transcurrir de la vida en el pulgarcito de América.

Esta apuesta epistemológica no se basa únicamente en motivaciones emocionales o psicológicas, sino que hace pie en la antropología filosófica del filósofo vasco Xavier Zubiri. La raigambre filosófica de este trabajo se nutre de la formación que en esa disciplina recibí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), marcada por la impronta de Zubiri y de Ignacio Ellacuría¹. Del estudio de la filosofía zubiriana retomo su definición del ser humano como un ser constituido por una “inteligencia sentiente”. Esta categoría me permite situarme más allá de las concepciones dualistas que insisten en separar la razón de la sensación, el intelecto de la sensibilidad. “Inteligencia sentiente” significa que los actos de intelección implican a las sensaciones y viceversa, en la sensación se inserta también la razón. La diferencia entre seres humanos y animales radica, justamente, en que los animales no cobran conciencia de sus sensaciones ni pueden tomar decisiones respecto de ellas, pues están impelidos a actuar siempre y únicamente siguiendo sus instintos. El ser humano, en cambio, “siente la realidad o, lo que es lo mismo, entiende sentientemente lo real”². Por

¹ Una breve y clara exposición acerca de la adscripción de la UCA a la corriente zubiriana-ellacuriana, puede verse en: Samour, H., “Zubiri en El Salvador”. Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/deptos/filosofia/web/admin/files/1201492862.pdf>

² Para una aproximación a estas ideas, ver: Zubiri, X., “Notas sobre la inteligencia humana”. Disponible en: <http://www.zubiri.org/works/spanishworks/notassobre.htm>

eso se ve impulsado a tomar decisiones, es decir a “hacerse cargo de la realidad”³. “La inteligencia aprehende la realidad sintiéndola, así como la sensibilidad humana siente intelectivamente. La inteligencia no ‘ve’ la realidad impasiblemente, sino impresionantemente. La inteligencia humana está en la realidad no comprensiva, sino impresionantemente”⁴.

Expuesto someramente lo anterior, puedo afirmar que este trabajo es un modo de hacerme cargo de las impresiones que la realidad salvadoreña ha dejado en mí. Y puedo afirmar también, de modo más general, que las impresiones que deja la realidad en nuestra aprehensión determinan las construcciones de conocimiento que producimos en torno a ella. Por eso existen diversas miradas respecto de los mismos fenómenos. Y por eso construir conocimiento implica, también, confrontar entre sí esas miradas que son diversas porque están motivadas por diversos intereses, condicionadas por diversos contextos y adscritas a diversos enfoques.

Aspectos históricos

Lo que aquí se propone es una lectura de la transformación política experimentada por El Salvador durante las tres últimas décadas. De acuerdo a esa lectura, la denominada *transición a la democracia* en el caso salvadoreño dio inicio en 1979, cuando un grupo de militares progresistas, en alianza con un grupo de civiles, lideraron el golpe de Estado que marcó el quiebre de la alianza oligárquico-militar, dando lugar a una prolongada crisis de hegemonía. Durante la convulsa década de 1980, tres actores políticos permanecieron enfrentados, disputando entre sí el predominio del proyecto de nación enarbolado por cada cual: i) el FMLN encarnó un proyecto revolucionario-socialista; ii) el Partido Demócrata Cristiano (PDC) —que fue el partido gobernante a lo largo de la mayor parte del período— encarnó el proyecto reformista, con el respaldo económico, político y militar de los Estados Unidos, el cual desarrollaba, a su vez, una estrategia contrainsurgente y contrarrevolucionaria en todo

³ La filosofía política desarrollada por Ignacio Ellacuría a partir de los planteos metafísicos y epistemológicos de Zubiri insiste en el llamado de la realidad a “hacernos cargo de ella”.

⁴ Zubiri, X., *op. cit.*

el Istmo centroamericano; *iii*) la politización de un grupo ultraconservador, ligado a la élite agroexportadora y empresarial, a los cuerpos paramilitares y a las facciones retardatarias del ejército, decantó en la conformación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), caracterizado por su anticomunismo y antirreformismo virulento. ARENA encarnó en sus orígenes un proyecto reaccionario.

La interacción de estos tres actores (*strictu sensu* cuatro, dado que Estados Unidos se constituyó en actor, con participación directa en los asuntos domésticos del país) devino en la pervivencia de una guerra civil entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, respaldado con ingente cantidad de recursos económicos y armamentísticos provenientes de Estados Unidos. El apoyo otorgado por el país del norte al gobierno de El Salvador estuvo destinado a impedir una correlación de fuerzas favorable al grupo insurgente, el cual mostró notables habilidades militares en los teatros de operaciones y contó con el apoyo del régimen castrista en Cuba y el gobierno sandinista en Nicaragua, entre otras solidaridades.

La apuesta de Ronald Reagan —presidente de la primera potencia mundial durante toda la década de 1980— era vencer al FMLN por la vía armada. Pero, aunque su estrategia priorizó el ala militar, tuvo también un brazo político que consistió en presionar a los actores que se encontraban bajo su esfera de influencia a crear un sistema electoral eficiente (del mismo modo operó el gobierno estadounidense en Guatemala, Honduras y Nicaragua). De ahí el origen contrainsurgente del sistema electoral salvadoreño que emergió paralelamente al desarrollo de la confrontación armada.

Pese al soporte proporcionado por la Casa Blanca, el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) vio frustrado su objetivo de derrotar militarmente al FMLN. Tampoco el grupo insurgente logró acceder al poder por la vía armada. De hecho, la situación de empate militar y la consolidación de la democracia electoral fueron dos de los factores internos que, sumados a la metamorfosis ocurrida en el mundo a raíz de la desarticulación de la Unión Soviética, coadyuvaron a la salida negociada del conflicto. Desde el punto de vista del reacomodo hegemónico de la élite

económica salvadoreña, un elemento determinante en la flexibilización de la posición del partido ARENA —convertido en partido gobernante en las elecciones de 1989— para abandonar su consigna “negociación es traición” y pactar con el FMLN el cese de la guerra civil, fue su interés por impulsar en El Salvador una reforma económica apegada al modelo neoliberal. Quizá uno de los rasgos más paradójicos del desenlace negociado del conflicto salvadoreño fue que un actor particularmente reaccionario y adversario de la apertura democrática, en cuyo seno pervivían fuerzas que pugnaban por la vuelta al orden establecido por la dictadura militar, terminó siendo el principal beneficiario de la liberalización del régimen, en la medida en que le fue funcional para legitimar políticamente la implementación del proyecto neoliberal que impulsó a lo largo de los veinte años ininterrumpidos que se mantuvo en el poder del Ejecutivo (entre 1989 y 2009).

La transición hacia la democracia electoral había empezado a darse formalmente a inicios de los años ochenta. No obstante, los Acuerdos de Paz, firmados en 1992 entre el gobierno de ARENA y el FMLN, constituyeron un momento fundacional de la democratización del país al posibilitar el ingreso de la izquierda revolucionaria al sistema de partidos y al escenario electoral, espacios que antes de la guerra habían permanecido vedados a su participación. Fue a partir de entonces cuando la democracia cobró particular relevancia en los foros de discusión y entre las diferentes fuerzas vivas de la sociedad.

La propagación de una atmósfera discusiva democratizante corrió paralelamente al desarrollo de los fenómenos característicos de la posguerra salvadoreña: el estallido de la violencia social, una de cuyas vertientes más problemáticas ha sido el fortalecimiento de las pandillas juveniles o “maras”, y la respuesta represiva de los gobiernos de ARENA frente a un flagelo cada vez más sentido por la población; la persistencia de la migración, en este período de un tipo de migración más económica que política, y el rápido incremento del ingreso de divisas en concepto de “remesas familiares”, hasta convertirse en la principal fuente de ingresos del país; la consolidación del FMLN como partido político y su posicionamiento como

segunda fuerza política; la continuidad de la polarización política, esta vez expresada en los partidos mayoritarios ARENA y FMLN en los escenarios electorales e institucionales; las escisiones y pugnas intestinas en ambos partidos; la apertura de los medios de comunicación a la difusión de diferentes posiciones ideológicas; la incapacidad de la infraestructura institucional para corregir fallos endémicos, como los relativos al funcionamiento de los mecanismos electorales, a los procedimientos judiciales o a la incentivación de una mayor participación ciudadana; la juiciosa aplicación de la receta neoliberal, con la consiguiente precarización del empleo, debilitamiento del agro, financierización y terciarización de la economía, dolarización, privatización y reducción del tamaño y competencias estatales; y el surgimiento de nuevos actores sociales articulados en torno de nuevas protestas, entre los cuales destaca la lucha del gremio médico en contra de la privatización del sector salud.

Todos los señalados son elementos constitutivos del proceso salvadoreño en las décadas de 1980, 1990 y 2000, y es necesario tenerlos presentes a la hora de observar lo que ha ocurrido y lo que ha cambiado en ese lapso. Sin embargo, el propósito de este trabajo es enfatizar sobre la implementación del neoliberalismo y la consolidación de la democracia electoral, observando la funcionalidad de la última respecto del primero. El principal hallazgo de esta investigación fue que la comprensión de la transición política experimentada por El Salvador en su historia reciente exige el análisis de esos dos fenómenos. Tal análisis me llevó a su necesaria ubicación en los ámbitos centroamericano, latinoamericano y mundial. Las transformaciones experimentadas por El Salvador están determinadas por las sustantivas modificaciones experimentadas por el orden internacional a finales del siglo XX.

El desmembramiento de la URSS condujo a una readecuación del sistema de dominación mundial encabezado por Estados Unidos. Tal readecuación empezó a vertebrarse, a partir de la década de 1970, en torno del modelo neoliberal. El debilitamiento y desaparición de la “amenaza soviética”, que había fungido como estímulo político para la implementación del Estado de Bienestar como parte de la estrategia de “contención del comunismo”, coadyuvó a la puesta en práctica de la

doctrina formulada por el filósofo y economista austríaco Frederik von Hayek [y retomada más tarde por el economista estadounidense Milton Friedman y sus discípulos], sustentada sobre la desregulación de la economía, el libre flujo de capitales, la reducción del Estado, la política antisindical y la reestructuración de los aparatos productivos locales en función de la inserción en los mercados internacionales⁵.

El arribo de Ronald Reagan al Ejecutivo estadounidense en 1980 se produjo en una coyuntura histórica que planteaba al país del norte el desafío de reafirmar su aminorada hegemonía en todo el orbe. La respuesta de Reagan frente a tal desafío consistió, desde el punto de vista político-diplomático y militar, en impulsar agresivas medidas contra las erupciones de protesta y las luchas de liberación nacional que se libraron durante la década de los ochenta en distintos países del tercer mundo, al tiempo que reivindicó el discurso en pro de la democracia electoral para deslegitimar ideológicamente a los procesos revolucionarios.

En Centroamérica, su gobierno puso en práctica la estrategia conocida como *Guerra de Baja Intensidad (GBI)* diseñada para desgastar paulatina pero sostenidamente los esfuerzos revolucionarios que a lo largo de la década desafiaron al modelo de dominación elitista e imperialista en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Mientras que El Salvador fue el elegido para la ejecución de la vertiente *contrainsurgente* de la GBI, en Nicaragua se aplicó con todo rigor la *reversión* o *desestabilización* del gobierno instituido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional a partir de 1979. Las medidas contrainsurgentes adquirieron en Guatemala particularidades propias, relacionadas con la autonomía adquirida por la Fuerza Armada de ese país. No obstante, Washington presionó a los tres países a instaurar la infraestructura electoral necesaria para garantizar el recambio periódico de gobernantes por la vía electoral, de acuerdo con los parámetros de la democracia representativa.

Reagan otorgó un impulso decidido a los postulados neoliberales, aplicándolos en su propio país vía el impulso de la carrera armamentista, la política antisindical y los

⁵ Cfr. Regalado, R., *América Latina entre siglos. Dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda*, Ocean Sur, 2008, pp. 80-85.

recortes arancelarios a las élites económicas. A lo largo de su mandato las medidas de estabilización y ajuste estructural se implementaron con especial énfasis en los países suramericanos, cuyas economías, afectadas por la crisis de la deuda externa de 1982, quedaron vulnerables ante las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)⁶. Durante el mismo período, Centroamérica se convirtió en el laboratorio en el que la Casa Blanca ensayó su nueva estrategia anticomunista. Sobresalió la negativa por parte de Washington a apoyar las iniciativas multilaterales en pro de la pacificación. No fue sino hasta que los gobiernos ruso y estadounidense pusieron fin a la Guerra Fría por medios diplomáticos, que la primera potencia —bajo la administración de George H. Bush (1989-1993)— otorgó apoyo decidido a la salida negociada de la crisis centroamericana.

La regionalización del conflicto dio entonces paso a la “regionalización de la pacificación”, con la destacable participación de México. Los gobiernos del Istmo emprendieron entonces la tarea de democratizar la región en un momento en el que en sus sociedades reinaba el desencanto sobre el potencial transformador de la política y presionadas desde el exterior para acelerar la construcción de un andamiaje institucional que legitimara un proyecto económico anti-popular: el neoliberalismo. Las expectativas de progreso y bienestar general generadas a raíz de la pacificación de la región empezaron a declinar cuando las condiciones de vida de las mayorías populares, lejos de mejorar, empeoraron.

La apertura manifestada en los escenarios electorales y en los medios de comunicación contrastó con el cierre de espacios para el debate en torno de la pobreza y con la ausencia de políticas destinadas a combatirla. La llamada consolidación de la democracia en Centroamérica coincidió con la concentración de la riqueza, esta vez no en torno del modelo agroexportador, sino del sistema financiero. Con todo y los altos índices de abstención registrados en la mayor parte de los comicios del período posbélico, el sistema electoral se convirtió en el único modo de acceso al poder del Estado en toda la región. Ello dio de sí interesantes resultados, como el triunfo

⁶ *Ibid.*

electoral del sandinismo y el avance del FMLN salvadoreño como fuerza política, en virtud del cual gobernó San Salvador a lo largo de tres períodos consecutivos, logró mayor cantidad de curules que ARENA en la Asamblea Legislativa y se hizo de las alcaldías de los municipios más numerosos del país. Sin embargo, en El Salvador, los sucesivos triunfos electorales del partido ARENA le posibilitaron a la élite financiera conservar el poder del Ejecutivo a lo largo de cuatro períodos consecutivos y legitimar políticamente la implementación del modelo neoliberal durante los 20 años que duró su hegemonía. Después de esa larga *transición neoliberal*, los electores salvadoreños dieron el triunfo al FMLN en los comicios presidenciales de 2009.

Aspectos metodológicos

¿Por qué darle tanto espacio al relato histórico? De hecho, tres de los cinco capítulos que conforman esta tesis (los capítulos II, III y IV) están dedicados a narrar la secuencia de acontecimientos que resumo en el apartado anterior. Y sin embargo, lo que estoy presentando en esta introducción no es un trabajo estrictamente historiográfico. No se trata de una investigación sustentada sobre fuentes primarias orientada a producir conocimientos nuevos respecto de la historia reciente de El Salvador. No me he propuesto alumbrar zonas oscuras del pasado salvadoreño. Mis objetivos fueron más modestos: i) estudiar las fuentes que, desde distintas perspectivas, me permitieran comprender la transformación política del país; ii) construir un relato por medio del cual afianzar y apropiarme del conocimiento adquirido respecto de esa transformación; y iii) abonar a la discusión histórica en el contexto salvadoreño, proponiendo un abordaje de la transición política capaz de dialogar con la interpretación de los politólogos institucionalistas, pues su enfoque es dominante dentro de la academia salvadoreña actual.

Para la elaboración de ese relato me apoyé en una perspectiva nutrida por tres vertientes: una filosófica, una histórica y una latinoamericanista. Respecto de la matriz filosófica debo decir que mi formación de grado se dio en una escuela particularmente preocupada por llevar a cabo un quehacer académico vinculado con el devenir histórico

de la realidad salvadoreña. No en vano el mayor aporte filosófico de Ignacio Ellacuría consiste en haber desarrollado una “filosofía de la realidad histórica”. La realidad, de acuerdo con este planteamiento, es constitutivamente histórica, es decir, se construye históricamente. La filosofía debe ser, por tanto, una disciplina volcada sobre la comprensión de la realidad histórica.

En consecuencia con esa concepción, Ellacuría generó en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) un conjunto de instituciones dedicadas a la observación, el análisis y la interacción con las coyunturas políticas, económicas y sociales generadas en el contexto salvadoreño. En una de esas instituciones —el extinto Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)— tuve la oportunidad de desempeñarme como analista política y redactar semanalmente artículos de opinión para el semanario *Proceso*, por un lapso de tres años. Mi modo de abordar el acontecer político está, pues, condicionado por el espíritu filosófico, crítico y dialógico, propio de mi formación disciplinaria, y también por el trabajo ensayístico en el cual me entrené durante mi experiencia laboral en el CIDAI como observadora y redactora de la coyuntura política.

Esas experiencias en la UCA me proporcionaron un acceso invaluable, pero limitado al conocimiento de El Salvador, pues me permitieron observar al país desde una óptica coyunturalista y circunscrita a los actores políticos locales que ocuparon papeles protagónicos entre los años 1997 y 2000. A la Maestría en Estudios Latinoamericanos, y específicamente a los seminarios sobre Centroamérica impartidos por los historiadores mexicanos Mario Vázquez y Mónica Toussaint, debo el haber tomado contacto y haber podido profundizar en la comprensión de la historia de El Salvador y en los vínculos que ésta guarda con los dinamismos propios de la región centroamericana y latinoamericana. Precisamente porque en mi caso el contacto con la historia es lo más nuevo, es a lo que di mayor preponderancia en este trabajo. Pero esa preponderancia tiene que ver también con mi preocupación por la tendencia al olvido u omisión del pasado, que en el transcurso de la investigación pude percibir en ciertos núcleos académicos con fuerte ascendente sobre la construcción de conocimiento

político en El Salvador. Un caso representativo de ello fue la afirmación sostenida en el marco de un conversatorio sobre la coyuntura pre-electoral salvadoreña en 2008, en el que se aseguró con vehemencia que ni el FMLN actual, ni el partido ARENA actual, ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actual tienen nada que ver con lo que fueron en el pasado⁷.

Desde mi punto de vista, la explicación de todo proceso político exige el conocimiento de su evolución en la historia, es decir, de los factores que fueron condicionando la emergencia y transformación de acontecimientos y actores que a su vez generaron nuevos condicionamientos e imprimieron formas específicas a los nuevos contextos en el transcurso del tiempo. De ahí mi inquietud por proponer una lectura de la transición política de El Salvador que otorgara peso y densidad histórica al proceso, a contrapelo de interpretaciones provenientes de la Ciencia Política de corte institucionalista, representadas por los politólogos salvadoreños Álvaro Artiga-González y Ricardo Córdova Macías, cuyo interés, centrado en el desarrollo institucional, pierde de vista las determinaciones históricas, económicas e internacionales del devenir sociopolítico. No creí necesario realizar una investigación estrictamente historiográfica para ofrecer un trabajo en el que la historia cobrara un lugar central. Aunque la información obtenida a través de las entrevistas fue sumamente valiosa, mi investigación fue eminentemente bibliográfica, continuando con la tradición de indagación filosófica a la que pertenezco. Por eso me siento en deuda con las fuentes en las que me apoyé.

En primer lugar, quise reivindicar ciertas tesis en las que reconozco esfuerzos investigativos rigurosos, actualizados y con potencial para aportar conocimiento respecto de la transición salvadoreña. En ese sentido, recuperé el exhaustivo trabajo sobre el desarrollo del movimiento popular salvadoreño durante las décadas 1970,

⁷ La afirmación corresponde al investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Raúl Benítez Manaut y fue emitida durante la Conferencia “El Salvador en la coyuntura electoral: balance y perspectivas”, realizada el jueves 12 de noviembre de 2008 en CIALC-UNAM. Durante la década de 1980, Benítez Manaut trabajó de cerca con uno de los politólogos salvadoreños más reconocidos en la actualidad, cuya formación de posgrado se desarrolló inicialmente en México: Ricardo Córdova Macías.

1980, 1990 y 2000, de la socióloga austríaca Kristina Pirker (Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, 2008); el trabajo sobre la consolidación de la hegemonía del partido ARENA, de la socióloga salvadoreña Irene Lungo (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-México, 2008); el trabajo sobre la génesis del FMLN y su transformación en partido político, del sociólogo español Alberto Martín Álvarez (Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 2004); y la lectura del conflicto salvadoreño ofrecida por Irene Sánchez (Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, 1997).

En segundo lugar, las estancias de investigación en El Salvador me permitieron desarrollar un conjunto de entrevistas que nutrieron mi investigación. Actores políticos, como el efemelenista Hato Hasbún y los areneros Antonio Cornejo, Ricardo Valdivieso y Orlando Cocal; y académicos, como los politólogos Álvaro Artiga-González y Ricardo Córdova Macías, el historiador Ricardo Ribera, el latinoamericanista Ralph Sprenkels y el abogado Santiago Orellana, me posibilitaron un rico intercambio de ideas y percepciones respecto del devenir socio político salvadoreño en el cual ellos se encuentran inmersos. Las entrevistas citadas en este trabajo fueron realizadas en San Salvador en diciembre de 2008 y entre marzo y mayo de 2009, gracias al apoyo del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y de la beca de movilidad otorgada por la Red Macro-Universidades.

En tercer lugar, el estudio de los relatos testimoniales escritos por militantes de diversas procedencias, pero sobre todo provenientes de la izquierda revolucionaria en El Salvador, constituyó una vía de acceso hacia la reconstrucción de la atmósfera de la época bélica y la aproximación a los derroteros con los que se han enfrentado quienes se desarrollaron en el campo político desde entonces hasta ahora. En cuarto lugar, no puedo dejar de mencionar los textos que conocí por medio de los seminarios sobre América Latina y Centroamérica que, en el marco de la Maestría, me permitieron ahondar en el conocimiento producido en nuestro continente.

Todas las lecturas, conversaciones y reflexiones que procuro sistematizar aquí me corroboraron el carácter colectivo, dialógico e intersubjetivo de la construcción del

conocimiento. Quizá por eso el trabajo está redactado en tercera persona, aludiendo siempre a un “nosotros”. La realización de esta indagación me permitió, también, una primera aproximación a la historia como disciplina, con toda la complejidad que la diversidad de intereses y visiones respecto de ella confluyen a la hora de elaborarla y fijarla en la memoria.

Entre los múltiples significados que pueden darse —y que tiene de hecho— el concepto de “latinoamericanismo”, este trabajo es latinoamericanista en dos sentidos: en primer lugar, porque parte de la constatación de la existencia de un pensamiento latinoamericano, es decir, de una historia de las ideas producidas en Latinoamérica, que posee rasgos específicos que la caracterizan y distinguen de la producción del conocimiento en otras latitudes. De ese corpus textual latinoamericano se nutre esta investigación. En segundo lugar, el tomar contacto con esa tradición de pensamiento, por una parte, y con la historia de América Latina en su conjunto, por otra, me permitió ubicar la realidad de El Salvador en su respectivo marco geopolítico e histórico. Si bien, Centroamérica es una región peculiar dentro del continente y como tal deber ser considerada, lo cierto es que forma parte de él y esa pertenencia ha definido su desarrollo de un modo insuficientemente enfatizado.

Dado que, más que proporcionar datos nuevos, esta tesis apunta hacia un nuevo marco de interpretación de los datos que circulan entre centroamericanólogos, académicos salvadoreños y estudiosos de El Salvador, el punto de vista latinoamericanista es quizá el aporte más significativo que puedo ofrecer al conjunto de análisis históricos y politológicos que hoy en día nutren las discusiones académicas sobre la transición política en Centroamérica. Si bien, en dichos análisis se encuentran explicaciones imprescindibles acerca de los actores y las dinámicas propias de la reciente historia regional, sucede con frecuencia que la observación detallada de los procesos locales conduce a perder de vista la estrecha relación que guardan con el contexto internacional. Por eso el marco conceptual de este trabajo se instala en coordenadas espaciales más amplias y la reconstrucción de la historia política de El

Salvador procura tener en cuenta los acontecimientos que impactaron a nivel continental.

El abordaje de la historia latinoamericana a partir de Centroamérica me llevó a la constatación de que es incorrecto hablar de análisis de América Latina sin tener en cuenta a la parte central del continente. Primero, porque lo que allí ocurre no se comprende a cabalidad sino es en perspectiva regional y, segundo, porque la estratégica ubicación del Istmo y su importancia geopolítica para Estados Unidos han hecho de él un bastión en donde más de una vez se han puesto en juego los intereses del Imperio. El golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009 en Honduras es una prístina muestra de ambas cosas.

Múltiples y profundos vasos comunicantes conectan a Centroamérica con los procesos que se viven en el resto del continente. El hecho de que Centroamérica sea una región singular dentro del mapa latinoamericano, lejos de llevar a soslayar su examen acucioso, debe capturar la atención de quienes hemos adoptado a América Latina como objeto de estudio y buscamos comprender su modo de desenvolverse, sin perder de vista la singularidad de las regiones y naciones que la integran.

La situación de subordinación de las economías de Centroamérica respecto de Estados Unidos, y en menor medida de Europa, ha minado históricamente las posibilidades de los países del Istmo de decidir de forma autónoma sus destinos políticos. Por esa razón Centroamérica ha estado más supeditada a los vaivenes del modelo capitalista y a los discursos con los que éste ha pretendido legitimarse de lo que pudiera parecer a simple vista. La democratización de los países centroamericanos ha estado, pues, condicionada económica, política e ideológicamente por el orden internacional reinante de modo mucho más determinante de lo que los actores políticos de la región están dispuestos a reconocer. De ahí la necesidad de trazar las coordenadas al interior de las cuales considero pertinente encuadrar la discusión sobre la construcción de la democracia en El Salvador. Esas coordenadas son el proyecto económico neoliberal y la consolidación de la democracia electoral.

A pesar de que el relato democratizador propio de la posguerra marcó el devenir de la región tras el fin de la crisis y de que con ello Centroamérica pasó a formar parte de un fenómeno continental, el interés en el Istmo no volvió a alcanzar la magnitud que acompañó a la década precedente. Otro de los objetivos del presente trabajo es hacer hincapié sobre la situación paradójica que caracteriza a la realidad centroamericana como una zona geográfica, económica, histórica, política y culturalmente ligada al resto de Latinoamérica y, no obstante, omitida en los análisis de alcance regional. Muestra de ello es el hecho de que muchos teóricos de la transición a la democracia, consciente o inconscientemente, pasen de largo sobre las transiciones políticas de Centroamérica a la hora de reflexionar en torno de la democratización en el continente.

El olvido que actualmente caracteriza al grueso de la academia mexicana respecto de América Central es un vivo ejemplo de esto que afirmo. Específicamente sobre El Salvador, pasados 17 años de la célebre firma de los Acuerdos de Paz, el tema salvadoreño ha perdido actualidad en el paisaje del análisis internacional. Pareciera que, terminada la guerra, el pequeño país centroamericano hubiera quedado condenado a su vieja condición de casi anonimato. Este hecho no puede menos que llamar la atención, particularmente en el contexto mexicano, el cual se convirtió, durante la década de 1980, en un importante centro de producción intelectual acerca de El Salvador y Centroamérica. La llamada “crisis centroamericana” incentivó un sin número de análisis coyunturales, sociológicos e históricos, que dieron cuenta de las causas, las dinámicas y las posibles salidas a esa intensa y prolongada situación de violencia. Esa proliferación de producción hizo de los ochenta centroamericanos un período ampliamente conocido, sobre todo, en México. Anhele con este trabajo aportar a la comprensión de lo ocurrido en El Salvador desde 1992 en adelante y a ubicar el tema dentro del ámbito latinoamericanista que ha enriquecido mi formación.

Descripción del contenido

La tesis se divide en cinco capítulos. El Capítulo I es un marco conceptual que consta de cuatro apartados. El primero alude a la centralidad que los conceptos de democracia y transición política adquirieron en la Centroamérica pos-crisis. Lo que en esa sección pongo de manifiesto es el vínculo entre los discursos democratizantes centroamericanos y la tendencia “transitológica” que se inauguró en América Latina durante la década de 1980. En el segundo se expone el proceso de expansión del neoliberalismo como trasfondo internacional de la emergencia y consolidación de la democracia electoral en Centroamérica y El Salvador. Me interesa mostrar cómo la democracia electoral forma parte del proyecto neoliberal, pues constituye su vía de legitimación política. De ahí la emergencia del concepto *democracia neoliberal*, útil para comprender lo ocurrido en El Salvador de posguerra. A ello me refiero en el tercer apartado. Y en el cuarto, señalo la contraposición entre dos concepciones de democracia presentes a lo largo de las décadas recientes, tanto en el plano académico como en el de la praxis histórica latinoamericana. Tales concepciones son: la democracia política, formal, electoral, funcional al neoliberalismo versus la democracia sustantiva, socioeconómica, integral, cuestionadora del orden neoliberal.

En el capítulo II detallo lo ocurrido entre el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 y el estallido de la guerra civil en 1981, lapso al que —retomando el concepto propuesto por Irene Sánchez— considero la primera *coyuntura de definición* dentro de la transición política salvadoreña. A diferencia de otras posiciones, ubico en ese momento el inicio de dicha transición. Destacan en ese período: i) la unificación de cinco fuerzas guerrilleras en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la articulación entre éstas y el masivo movimiento popular propio de finales de la década de 1970 en El Salvador, por una parte, y las fuerzas políticas socialdemócratas y socialcristianas, por otra; ii) la nueva alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y la Fuerza Armada de El Salvador, caracterizada por la aplicación de la política “reformas con represión”; iii) la inauguración de la injerencia

estadounidense en el conflicto salvadoreño durante la administración de James Carter (1977-1981), como parte de la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica.

El capítulo III contiene una exposición del desarrollo paralelo de los dos componentes de la transición a la democracia ocurrida en El Salvador durante la década de 1980: la guerra civil y la creación del sistema electoral. Además de la profundización de la intervención de la Casa Blanca por medio de la implementación de la *Guerra de Baja Intensidad (GBI)* —a la cual se hace alusión en el último apartado del Capítulo II— rasgos constitutivos de esta década son: *i)* la persistencia de la guerra en virtud de la creciente profesionalización de los ejércitos enfrentados, *ii)* la emergencia de ARENA como la institución partidaria de las élites económicas, *iii)* la confrontación política y militar entre tres proyectos de nación: el revolucionario (representado por el FMLN), el reformista-pro injerencista (representado por el PDC) y el reaccionario (representado por ARENA), *iv)* la aparición de un nuevo movimiento popular concentrado en reivindicaciones gremiales específicas, *v)* la continuidad de la violación contra los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Armada y los aparatos paramilitares y *vi)* las iniciativas multilaterales en pro de la salida negociada del conflicto.

El capítulo IV se divide en dos grandes secciones: la primera está dedicada a explicar el proceso de negociación entre el FMLN y ARENA, procurando enfatizar en los elementos más sobresalientes de la coyuntura comprendida entre noviembre de 1989 —momento en el que la ofensiva efemelenista “Hasta el Tope” evidenció la situación de empate militar entre sus tropas y las del ejército gubernamental— y enero de 1992 —momento de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec. A ese período crítico lo denominé *segunda coyuntura de definición* en la transición política salvadoreña. La segunda sección del capítulo consiste en una reconstrucción de los hechos más relevantes de los veinte años que duró la etapa posbélica en El Salvador, denominada *transición neoliberal* y caracterizada por la hegemonía arenera, la entronización del modelo neoliberal en el país, la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento del FMLN como proyecto partidario, además de todos los rasgos arriba enumerados.

Con el triunfo del candidato del FMLN en las elecciones presidenciales de 2009 considero concluido el proceso de transición y consolidación de la democracia electoral en el país y finalizada la posguerra en El Salvador. Desde mi punto de vista, el arribo de la izquierda al Ejecutivo abre un nuevo capítulo en la historia política del país, en la medida en que ciertas condiciones de posibilidad para la modificación del funcionamiento de las instituciones democráticas quedaron en manos de quienes han defendido una concepción de democracia que asume la redistribución de la riqueza como meta fundamental⁸.

El capítulo V consiste en confrontar el marco conceptual ofrecido en el primer capítulo con la exposición de los planteos de Álvaro Artiga-González como uno de los principales exponentes del institucionalismo salvadoreño. También es un capítulo dividido en dos secciones: la primera se ocupa de perfilar el enfoque teórico y metodológico del autor, con el objeto de entender desde qué óptica analiza la transición y la consolidación de la democracia salvadoreña. En la segunda parte del capítulo, explico mis objeciones frente a esa óptica y las razones por las cuales propongo “otro abordaje” de la historia reciente del país. De ese “otro abordaje”, histórico-filosófico y latinoamericanista, se desprenden dos categorías que considero útiles para emprender nuevas indagaciones respecto del problema de la democracia en El Salvador: la contraposición entre *democracia escéptica* (incrédula de sí misma, antidemocrática de fondo, funcional a las leyes del mercado) y *democracia utópica* (anhelante de una democratización cada vez más profunda, no sólo política sino también económica, con potencial subversivo).

⁸ Cabe señalar que al momento de redactar estas líneas se cumple un año de la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador, lo cual ha impuesto al FMLN nuevos derroteros, toda vez que Funes ha insistido en desmarcarse del ideario partidario y defender una agenda que busca más la conciliación que la confrontación con las élites económicas y la derecha ideológica. El escenario para la superación de la democracia circunscrita a lo procedimental y la ampliación de la lucha democrática hacia aspectos socioeconómicos se complejiza para un partido de izquierda presionado por los sectores de la población que continúan sembrando en él esperanzas de cambio en las condiciones de vida y limitado en su capacidad de acción al no manejar el cien por ciento de los hilos de la conducción del Estado el cual, a su vez, se encuentra supeditado al control que sobre él ejercen los grupos económicamente poderosos.

Por último, concluyo este trabajo asegurando que el caso salvadoreño muestra con notable nitidez cómo el actual sistema de dominación mundial, sustentado sobre el neoliberalismo, adoptó a la democracia electoral como su mecanismo de legitimación política. El reacomodo de las élites económicas y la construcción de ARENA como su instrumento partidario, la conversión del FMLN en un partido político y la creación de un andamiaje electoral a imagen y semejanza de las democracias de los países industrializados respondieron a la readecuación del orden internacional que, con el fin del Guerra Fría, pasó de ser un orden bipolar a uno unipolar, con Estados Unidos avanzando en la implementación de la ‘*financierización*’ de la economía. Esa es la razón por la cual muchos de los discursos oficiales que reivindican la democracia lo hacen en aras de negar su práctica efectiva y de impedir su profundización, es decir, de impedir que la democracia toque a los intereses económicos reinantes. La insaciable exigencia de reproducción del mercado propia del capitalismo es incompatible con las políticas de combate a la pobreza necesarias para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población latinoamericana. Y ello plantea al desarrollo de la región derroteros éticos, políticos y epistemológicos específicos.

En lo concerniente a la discusión teórica que planteo con el institucionalismo salvadoreño, mi propuesta es interpretar la transición política como el resultado de la tensión dialéctica entre dos concepciones y prácticas de la democracia: la *democracia escéptica* y la *utópica*. Más que medir el avance de la democratización tomando como parámetro un *continuum* que va de menos a más, en donde el más equivale a las democracias que operan en los países industrializados (tal como lo propone el politólogo Álvaro Artiga-González), mi propuesta es observar cómo el movimiento oscilante entre la democracia escéptica y la utópica, entre lo formal y lo sustantivo, entre lo político y lo económico, entre el marco legal y la protesta social, entre lo posible y lo deseable, va configurando el proceso con todas sus peculiaridades.

CAPÍTULO I. Neoliberalismo y democracia en el Nuevo Orden Mundial. Su impacto sobre El Salvador

Nuestra investigación sobre la transición política salvadoreña nos permitió llegar a tres constataciones que funcionan como premisas básicas de este trabajo. La primera es que la consolidación de la democracia electoral y la implementación del modelo neoliberal a lo largo de los veinte años que siguieron a la firma de los Acuerdos de Chapultepec firmados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en 1992, son dos de las transformaciones más notables experimentadas por El Salvador a lo largo de las últimas tres décadas. La segunda es que tales transformaciones sólo pueden ser comprendidas a cabalidad a la luz del reacomodo experimentado por el orden mundial tras la desarticulación de la Unión Soviética, fenómeno que facilitó la expansión del neoliberalismo como proyecto económico e ideológico del sistema capitalista. Y la tercera es que el aparato electoral de El Salvador actual se originó en la década de 1980, cuando Estados Unidos ensayó en Centroamérica su nueva estrategia anticomunista, uno de cuyos ejes fue la introducción de la democracia electoral en El Salvador y en el resto del Istmo centroamericano. Tras la caída de la URSS y la firma de los Acuerdos de Paz salvadoreños, ese aparato electoral le fue funcional al partido ARENA para legitimar políticamente la implementación del modelo neoliberal durante los cuatro lustros consecutivos en los que se mantuvo en el poder.

Neoliberalismo y democracia electoral son, pues, dos conceptos clave dentro de este análisis. De ahí que dediquemos este primer capítulo a explicar qué entendemos por cada uno, cómo se relacionan entre sí y cómo se vinculan con el devenir sociopolítico de El Salvador. El primer apartado expone las razones por las cuales la democracia se convirtió en el eje articulador de las preocupaciones de los actores y observadores de los procesos salvadoreño y centroamericano durante la posguerra, mostrando que el auge de los términos transición y democratización en la Centroamérica de los noventa y dos mil entroncó con el afán “transitológico” y

democratizador que empezó a darse en toda América Latina durante los años ochenta. El segundo apartado alude al neoliberalismo como el exitoso proyecto económico de las súper potencias que, en conjunción con el fenómeno de la globalización, consiguió expandirse a través del globo terráqueo. En el tercer apartado observamos en qué consiste la relación entre neoliberalismo y democracia electoral, haciendo énfasis en que la formalidad democrática exigida por los países industrializados a los países periféricos se enfrenta con la profunda antidemocracia que caracteriza al orden internacional.

El objetivo del capítulo es mostrar que la transición a la democracia electoral en El Salvador se dio dentro del contexto de la neoliberalización del mundo, liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña. La transformación del régimen político salvadoreño que inició en 1980 coincidió con el replanteamiento de la hegemonía mundial, sustentado sobre el proyecto neoliberal. Durante ese período, la estrategia de contención del comunismo, el impulso de la carrera armamentista y la defensa de la democracia electoral y los derechos humanos, rasgos constitutivos de las dos administraciones de Ronald Reagan, repercutieron directamente en El Salvador y en toda Centroamérica. Una vez finalizada la Guerra Fría y habiéndose habilitado ya mecanismos para el funcionamiento de la democracia formal, la región quedó preparada para ingresar de lleno a la ola neoliberal que una década atrás se había empezado a echar a andar en todo el continente. No en vano, economistas, politólogos y filósofos empezaron a plantearse inquietudes respecto del papel que debería jugar El Salvador dentro de un Nuevo Orden Mundial signado por el proyecto neoliberal.

1.1 La democracia como problema en El Salvador de posguerra

Los procesos de pacificación que se desarrollaron durante la década de 1990, poniendo fin a la “crisis centroamericana”, inauguraron una nueva etapa regional. El cambio de discurso que empezó a producirse entonces, tanto en los ambientes políticos como en los académicos, da cuenta no sólo de las transformaciones que venían presentándose en el Istmo, sino de la mutación que el derrumbe del mundo

socialista estaba ocasionando en el orden internacional. Términos como “revolución”, “lucha de clases”, “liberación nacional”, “antiimperialismo”, “anti-capitalismo” e “instauración del socialismo”, fueron cada vez más dejados de lado en virtud del surgimiento de conceptos como “movimientos sociales”, “transición a la democracia”, “democratización”, “governabilidad”, “ciudadanía”, “globalización”, “neoliberalismo” y “posmodernidad”. Una revisión bibliográfica de las obras producidas durante las últimas décadas del Siglo XX y lo que va del XXI basta para hacerse una idea de la profundidad de los cambios ocurridos en este período.

La pérdida de legitimidad de las dictaduras militares en el Cono Sur, el declive de la efervescencia revolucionaria, la desarticulación de la Unión Soviética y la derrota electoral del sandinismo fueron hechos que impactaron hondamente en el ámbito intelectual en toda América Latina, provocando en los ejes de análisis desplazamientos notables. Si en las décadas sesenta y setenta la reflexión académica en la región giraba en torno a temas como la consolidación de los regímenes autoritarios, el influjo del fascismo en los dinamismos políticos latinoamericanos, la profundización del capitalismo e industrialización en las economías periféricas y la adopción de la teoría marxista, dependentista o desarrollista como herramientas para la transformación de nuestras sociedades; durante los años ochenta y noventa pasaron a ocupar un lugar preponderante en el ámbito de la filosofía y las ciencias sociales las cuestiones relativas al fin de los meta-relatos, el auge de la posmodernidad, la transición y consolidación de la democracia, la construcción de ciudadanía y la emergencia de los movimientos sociales.

En Centroamérica, los conflictos armados en Guatemala, Nicaragua y El Salvador durante la década de 1980 constituyeron el núcleo alrededor del cual se articularon los diferentes análisis, discursos y prácticas políticas. No sólo los tres países directamente implicados en situaciones de guerra, sino otros de la región, especialmente México y Costa Rica, pueden dar fiel cuenta de ello, toda vez que en diversas narrativas, testimonios, archivos y exilios se evidencia la centralidad que la crisis centroamericana adquirió en toda el área. A diferencia de lo ocurrido en el sur del continente, en donde

las transiciones a la democracia se dieron procesualmente y ofrecieron más tiempo para ser meditadas por los observadores, el viraje analítico y discursivo que se dio en la Centroamérica de la década de 1990 fue más abrupto. Terminadas las guerras civiles, el Istmo quedó inmerso de inmediato en la parte más tardía de la “ola”¹ de la democratización latinoamericana y, de súbito, fue la *democratización* lo que empezó a articular las preocupaciones, reflexiones y distintas posiciones en torno del proceso sociopolítico de la subregión. La pérdida del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por la vía electoral y Los Acuerdos de Paz firmados en El Salvador y Guatemala entre las fuerzas militarmente enfrentadas instalaron a Centroamérica en una fase democratizadora que encontró su correspondencia conceptual con los desarrollos teóricos e históricos que en materia de transición política venían dándose en el resto del continente.

Fue entonces cuando académicos, políticos de oficio y una amplia gama de líderes de opinión se abocaron a reflexionar en torno de las posibilidades de la consolidación de la democracia política en una zona del continente en la que, a excepción de Costa Rica, ésta no había existido. Aunque se ha insistido bastante en ello, es importante no perder de vista que en el caso de las transiciones políticas centroamericanas no se trataba, como en otros países de Latinoamérica (Uruguay, Argentina y Chile, por ejemplo), de un “retorno a la democracia”, sino de la creación de un sistema político-institucional democrático que partía prácticamente de cero y que *strictu sensu* empezó a edificarse durante los primeros años de la década de 1980.

Dentro de la vasta cantidad de literatura disponible acerca de la democracia en América Latina, analistas de diverso signo han señalado al autoritarismo como rasgo constitutivo de las clases dominantes latinoamericanas, identificándolo como uno de los grandes obstáculos para la democratización en el subcontinente². Dicha raigambre

¹ El término “ola” para designar períodos en los que diferentes subregiones adelantaron procesos de democratización a nivel mundial fue acuñado por el politólogo estadounidense Samuel Huntington y popularizado por los teóricos de la democracia. Ver: Huntington, S., *La tercera ola. La democratización a finales del Siglo XX*, Paidós, Barcelona, 1994.

² El filósofo mexicano Abelardo Villegas vincula esa tradición autoritaria con el pensamiento ilustrado latinoamericano, cuyos representantes defendían la democracia como principio metafísico y derecho

autoritaria se vivió con particular crudeza en Centroamérica, en donde los sectores retardatarios de las oligarquías y las cúpulas militares prefirieron el uso sistemático de la represión a la implementación de medidas reformistas, en pro de una distribución más equitativa de la riqueza y mayores niveles de participación en la vida política. Ni en Guatemala, ni en Nicaragua ni en El Salvador, cuyos esfuerzos revolucionarios pusieron en crisis al Istmo durante la década de los ochenta, hubo bipartidismos vigorosos ni experiencias popular-reformistas. Las transiciones a la democracia se dieron allí desde regímenes oligárquico-militares, dictatoriales, que gobernaron casi ininterrumpidamente a lo largo de la mayor parte del siglo XX³.

La eficacia de Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 por el gobierno y la cúpula guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hizo de El Salvador un país paradigmático en la región centroamericana. A partir de ese acontecimiento, doce años de guerra civil llegaron a su fin. La violencia política dejó de ser el foco de concentración de las energías nacionales y los salvadoreños se embarcaron en la tarea de aprender a hacer política sin el respaldo de las armas. El insurgente FMLN se convirtió en el segundo partido político más votado, disputando el primer lugar al gubernamental partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) —al cual venció finalmente en las elecciones presidenciales de 2009. El ingreso de la izquierda revolucionaria a la arena electoral que había sido inaugurada diez años atrás supuso, para muchos, el inicio de la transición a la democracia. Para otros, la transición inició una década antes. Si bien no existe consenso entre los estudiosos del tema acerca de cuándo fechar el inicio de la transición y de cuándo establecer su conclusión,

inalienable del pueblo, al tiempo que declaraban la incapacidad de los desposeídos para ocuparse de los asuntos políticos. Su reconstrucción histórica de la génesis y evolución de los partidos políticos en el subcontinente durante el siglo XIX muestra cómo el caudillismo, el corporativismo y la dictadura se impusieron sobre la retórica y las formas democráticas. Ver: Villegas, A., *Arar en el mar: la democracia en América Latina*, CCyDEL-UNAM / Miguel Ángel Porrúa, México, 1995.

³ La síntesis del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas en ese sentido es esclarecedora: “Lo autoritario que se intenta superar no es solamente una estructura política, sino una manera de ser de toda la sociedad y su sistema de dominación incluido [...] Si lo autoritario tiene un carácter *orgánico*, su sustitución no corresponde simplemente a una crisis coyuntural política, sino a un largo proceso de luchas que en Centroamérica se asocian a la crisis del orden oligárquico y a las batallas políticas por su modificación”, Torres Rivas, E., citado por Magallón, M., *La democracia en América Latina*, CCyDEL-UNAM / Plaza y Valdés, México, 2003, p. 154.

lo que nos interesa resaltar es que los conceptos de *transición* y *democratización* cobraron desde entonces particular protagonismo en los foros de discusión.

La ingente cantidad de textos surgidos sobre esta temática da buena cuenta de ello. El siguiente cuadro presenta un panorama ilustrativo, no exhaustivo, al respecto. Entre el sinnúmero de libros, artículos y ensayos producidos a lo largo de la posguerra que se ocupan desde diversos enfoques de los problemas asociados a la democracia, optamos por aquellos recogidos en revistas u obras locales o de circulación regional, publicados sobre todo en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México y España, en cuyos títulos fuera explícito el abordaje de los conceptos de nuestro interés. Incorporar los artículos de opinión publicados en la prensa escrita o los textos que, sin mencionarlo en el título, abordan directamente la temática o guardan relación estrecha con ella, hubiera hecho inmanejable la lista.

Cuadro 1 Bibliografía sobre transición política y democracia en El Salvador y Centroamérica 1990-2009
Fuente: Elaboración propia.

Año	Títulos
1990	<ul style="list-style-type: none"> • Instituto Centroamericano de Estudios Políticos ICEP, <i>Iglesia católica, crisis y democratización en Centroamérica</i>, Guatemala, 1990. • Sancho, Eduardo, <i>El Salvador: democracia y desmilitarización</i>, México, 1990. • Torres-Rivas, Edelberto, “Centroamérica: Guerra, transición y democracia”, en <i>Centroamérica: entre el conflicto y la democracia</i>, Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 10, No. 20, julio-diciembre, UAM-IZ, México, 1990.
1991	<ul style="list-style-type: none"> • Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INCEP, <i>El proceso de paz y democratización de Centro América. Documentación y cronología 1991-1992</i>, en: Panorama Centroamericano, Temas y Documentos de Debate, No 1/95, enero-febrero, Guatemala, 1995. • Torres-Rivas, Edelberto, “Centroamérica: la transición autoritaria a la democracia”, en <i>Revista de Estudios Políticos</i>, No. 74, octubre-diciembre, 1991⁴.
1992	<ul style="list-style-type: none"> • Centro de Investigación y Acción Social CINAS, <i>El Salvador: Transición socio-política, de la guerra a la paz</i>, Cuaderno de trabajo No. 14, 1992. • <i>Revista Tendencias</i>, “Sociedad abierta y transición”. No. 7, febrero, p. 8, San Salvador, 1992. • UAM-Iztapalapa, <i>Transición en América Latina: los casos de Chile y El Salvador</i>, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 1992.
1993	<ul style="list-style-type: none"> • Cienfuegos, Fermán, et al, <i>Visiones alternativas sobre la transición</i>, Editorial Sombrero Azul, San Salvador, 1993. • Steichen, Régine (compiladora), <i>Democracia y democratización en Centroamérica</i>, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 1993. • Cuenca, Breny, “Ética y verdad: pilares del debate democrático”, <i>Revista Tendencias</i>,

⁴ Disponible en: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_074_419.pdf

	<p>No. 17, febrero, pp. 13-15, San Salvador, 1993.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revista Tendencias</i>, “Pugna dentro de la izquierda: ¿desarrollo democrático o rezagos de sectarismo?”, <i>Ibid</i>, pp. 8-12.
1994	<ul style="list-style-type: none"> • Aguilar Urbina, Francisco J. (editor-compilador), <i>Desmovilización, desmilitarización y democratización en Centroamérica</i>, Centro para la paz y la reconciliación (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano)-International Center for Human Rights and Democratic Development, San José, Québec, Montreal, 1994. • Alvarenga, Ivo, “Proceso electoral y democratización”, Cuaderno de trabajo No. 6, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 1994. • Barba, Jaime, “Probabilidad de la democracia en El Salvador”, en: <i>La democracia hoy</i>, Istmo Editores, San Salvador, 1994, pp. 103-123. • Bendel, Petra, “Partidos políticos y democratización en América Central”, <i>Anuario de Estudios Centroamericanos</i>, Vol. 20, No. 2, pp. 27-39, Universidad de Costa Rica UCR, San José, 1994⁵. • Dada Hirezi, Héctor, “La transición salvadoreña y los partidos políticos”, Cuaderno de trabajo No. 6, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 1994. • Solís Rivera, Luis G. y Francisco Rojas (editores), <i>De la guerra a la integración: la transición y la seguridad en Centroamérica</i>, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano/FLACSO-Chile, 1994. • Lungo Uclés, Mario, “Los obstáculos a la democratización en El Salvador”, en <i>La democracia hoy</i>, Istmo Editores, San Salvador, 1994, pp. 125-139. • <i>Revista Tendencias</i>, <i>Elecciones de marzo. Radiografía de la transición</i>, Suplemento electoral, No. 29, abril, San Salvador, 1994. • Vargas, Mauricio, “Gobernabilidad y democracia”, <i>Revista Presencia</i>, No. 22, San Salvador, 1994.
1995	<ul style="list-style-type: none"> • CIDAI, “La transición salvadoreña a un año del gobierno de Armando Calderón Sol”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 559-560, mayo-junio, UCA Editores, San Salvador, 1995. • Córdova Macías, Ricardo y Mitchel A. Seligson, “El Salvador de la guerra a la paz. Una cultura política en transición”, FUNDAUNGO-IDELA-Universidad de Pittsburgh, San Salvador, 1995. • Dada Hirezi, Héctor, “Los acuerdos de paz y la democratización”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 558, abril, UCA Editores, San Salvador, 1995.
1996	<ul style="list-style-type: none"> • Editorial, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, “¿Es El Salvador un país democrático?”, No. 577-578, noviembre-diciembre, UCA Editores, San Salvador, 1996. • González, Luis Armando, “Acerca de la transición a la democracia”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 573-574, julio-agosto, UCA Editores, San Salvador, 1996. • González, Luis Armando, “Cruzada contra la delincuencia: ¿democracia versus autoritarismo?”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 576, octubre, UCA Editores, San Salvador, 1996. • Guido Béjar, Rafael y Stefan Roggenbuck (editores), <i>Partidos y actores políticos en transición: la derecha, la izquierda y el centro en El Salvador</i>, Konrad Adenauer Stiftung-UCA Editores, San Salvador, 1996. • Sermeño, Ángel, <i>El Salvador: una transición democrática de baja intensidad (1992-1995)</i>, Tesis de Maestría en Ciencia Política, UNAM, México, 1996. • Torres-Rivas, Edelberto, “Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica”, <i>Anuario de Estudios Centroamericanos</i>, año/vol. 22, No. 001, pp. 7-40, Universidad de Costa Rica UCR, San José, 1996⁶.

⁵ Disponible en: <http://cariari.ucr.ac.cr/~anuario/bendel.pdf>

1997	<ul style="list-style-type: none"> • Editorial, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, “Nuevas posibilidades para la transición”, No. 581-582, marzo-abril, UCA Editores, San Salvador, 1997. • <i>Proceso</i> (semanario de análisis coyuntural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA), “Transición democrática y sociedad civil”, No 767, julio 23, 1997, San Salvador⁷. • Ribera, Ricardo, <i>Pinceladas para un cuadro de la transición</i>, Ediciones para el Debate, San Salvador, 1997. • Turcios, Roberto, “El Salvador. Una transición histórica y fundacional”, <i>Nueva Sociedad</i>, No. 150, julio-agosto, 1997⁸. • Vidal, Juan Héctor, <i>Por los senderos de la transición. Economía y Sociedad</i>, Universidad Tecnológica de El Salvador, San Salvador, 1997.
1998	<ul style="list-style-type: none"> • Cardenal, Ana Sofía y Josep M. Sanahuja, “La difícil conquista de la paz y la democracia en El Salvador”, en: <i>Centroamérica después de la crisis</i>, Institut d’Ciències Polítiques i Socials, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1998. • FLACSO-El Salvador, <i>Las elecciones de 1997. ¿Un paso más a la transición democrática?</i>, San Salvador, 1998. • PNUD, <i>El desafío democrático. Reflexiones de las sociedades centroamericanas ante el resultado del Latinobarómetro 1996</i>, San José, 1998. • Ramos, Carlos Guillermo, “El Salvador. Transición y procesos electorales”, <i>Nueva sociedad</i>, No. 158, noviembre-diciembre, 1998, pp. 28-39⁹. • Ramos, Carlos Guillermo, et al., “De los acuerdos de Chapultepec a la construcción de la democracia”, <i>Revista Aportes</i>, No. 5, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 1998.
1999	<ul style="list-style-type: none"> • Aguilar Sánchez, Carlos, “Los procesos de democratización bajo el esquema neoliberal. El caso de Nicaragua”, Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, 1992¹⁰. • Córdova Macías, Ricardo, José Miguel Cruz y Mitchel Seligson, <i>Auditoría de la democracia en El Salvador 1999</i>, FUNDAUNGO-IUDOP/UCA-Universidad de Pittsburgh, 1999¹¹. • Montobbio, Manuel, <i>La metamorfosis del pulgarcito: transición política y proceso de paz en El Salvador</i>, Icaria Antrazyt-FLACSO, Barcelona, 1999. • Sojo, Carlos, <i>Democracias con fracturas. Gobernabilidad, reforma económica y transición en Centroamérica</i>, FLACSO-Costa Rica, San José, 1999.
2000	<ul style="list-style-type: none"> • Artiga-González, Álvaro, “La democratización y el proceso electoral de 2000”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 615-616, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 2000. • Cruz, José Miguel, “Violencia, democracia y cultura política en América Latina”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 619-620, mayo-junio, UCA Editores, San Salvador, 2000. • Martínez-Uribe, Antonio, “El Salvador: percepción de élites y el rol de los militares en la democracia”, <i>Revista Aportes</i>, No. 9, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 2000.

⁶ Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/152/15222101.pdf>

⁷ Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc767.html>

⁸ Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2616_1.pdf

⁹ Disponible en:

http://pdf2.biblioteca.hegoa.efaber.net/ebook/7004/El_Salvador._Transicion_y_Procesos_Electorales.pdf

¹⁰ Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/1999/asanchez.pdf>

¹¹ Disponible en:

<http://sitemason.vanderbilt.edu/files/jQGpdC/Auditoria%20de%20la%20Democracia%20El%20Salvador%201999.pdf>

2001	<ul style="list-style-type: none"> • Chamorro, Carlos F., “Centroamérica. El turno de los medios en la agenda de la democratización”, <i>Revista Envío</i>, No. 232, julio, Universidad Centroamericana UCA, Managua, 2001¹². • Simón Rodríguez, María Elena, “Una propuesta feminista: la democracia vital”, <i>Revista Envío</i>, No. 231, junio, Universidad Centroamericana UCA, Managua, 2001¹³.
2002	<ul style="list-style-type: none"> • Azurmendi, Mikel, “Inmigrar para vivir en democracia”, <i>Istmo Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos</i>, No. 4, julio-diciembre, 2002¹⁴. • Editorial, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, “El diálogo social: complemento democrático”, No. 644, junio, UCA Editores, San Salvador, 2002. • González, Luis Armando, “A propósito de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad en El Salvador”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 644, junio, UCA Editores, San Salvador, 2002.
2003	<ul style="list-style-type: none"> • Arnson, Cinthya J. (editora), <i>El Salvador’s democratic transition ten years after the peace accord</i>, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program, Washington DC, 2003¹⁵. • Artiga-González, Álvaro, “El autoritarismo que se niega a morir y que prefiere acabar con la democratización política”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 656, junio, UCA Editores, San Salvador, 2003. • Cruz, José Miguel, “Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra”, <i>América Latina hoy: Revista de Ciencias Sociales</i>, Vol. 35, 2003¹⁶. • Selva Sutter, Ernesto, “Reforma de salud reivindicativa, democrática y con enfoque público”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 651-652, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 2003. • Solís, Otón, “CAFTA: el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Una oportunidad para el desarrollo democrático en peligro”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 660, octubre, UCA Editores, San Salvador, 2003.
2004	<ul style="list-style-type: none"> • Editorial, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, “Iconocracia versus democracia: el poder totalitario de la cultura de la imagen”, No. 661-662, mayo, UCA Editores, San Salvador, 2004.
2005	<ul style="list-style-type: none"> • González, Luis Armando, “Populismo, dictaduras militares y transición-consolidación democrática”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 677, marzo, UCA Editores, San Salvador, 2005. • Ramos, Marisa, <i>Sistemas judiciales y democracia en Centroamérica: la perspectiva de los jueces</i>, Fundación CIDOB, Serie América Latina No. 8, CIDOB Ediciones, Barcelona, 2005¹⁷. • Rodríguez, Ernesto, “Juventud, desarrollo y democracia en América Latina: nuevos enfoques para las políticas públicas en tiempos de gobiernos neo-progresistas”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 685-686, noviembre-diciembre, UCA Editores, San Salvador, 2005.
2006	<ul style="list-style-type: none"> • CIDAI, “Democratización y cultura política en El Salvador”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 688-689, febrero-marzo, UCA Editores, San Salvador, 2006.

¹² Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/1092>

¹³ Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/1087>

¹⁴ Disponible en: <http://collaborations.denison.edu/istmo/n04/articulos/democracia.html>

¹⁵ Disponible en: <http://wilsoncenter.org/topics/pubs/elsalvador.pdf>

¹⁶ Disponible en: <http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/ALH-PDF-TIFF/ALHvol35/ALHvol35cruz.pdf>

¹⁷ Disponible en:

http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/america_latina/num_8_sistemas_judiciales_y_democracia_en_centroamerica_la_perspectica_de_los_jueces

	<ul style="list-style-type: none"> • Segovia, Alexander, “Integración real y grupos centroamericanos de poder económico. Implicaciones para la democracia y el desarrollo regional”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 691-692, mayo-junio, UCA Editores, San Salvador, 2006.
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Alfaro, Salvador O., “Nuevos espacios democráticos: participación popular y gobiernos locales”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 706, agosto, UCA Editores, San Salvador, 2007¹⁸. • González, Luis Armando y Rodolfo Cardenal (compiladores), <i>El Salvador: La transición y sus problemas</i>, UCA Editores, San Salvador, 2007. • Ranum, Eline C., “El crimen violento y la democracia en El Salvador”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 703-704, mayo-junio, UCA Editores, San Salvador, 2007¹⁹. • Sanmartín, Antonio, “El poder del cuarto poder: la influencia del marketing político en las democracias modernas”, <i>Revista de Estudios Centroamericanos ECA</i>, No. 706, agosto, UCA Editores, San Salvador, 2007²⁰.
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Ribera, Ricardo, <i>Tiempos de transición. El Salvador entre la guerra y la paz</i>, inédito, 2008.
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Santiago Vélez, José G., “Los procesos de democratización en América Central. La inestabilidad más allá de los pactos y los votos”, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid, Seminario de Investigadores en Formación, 15 y 16 de junio de 2009²¹. • Solís, Luis Guillermo, “Integración regional y gobernabilidad democrática en Centroamérica: Notas para un debate”, FLACSO-Secretaría General, Ponencia presentada para el IV Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, 15-18 de junio, Panamá, 2009²².

¿Qué conclusiones podemos extraer de esta sistematización? ¿Para qué la presentamos? En primer lugar, nos interesa poner de manifiesto que los textos sobre transición política y democracia han ocupado un lugar preponderante en la producción intelectual del y sobre el Istmo, a partir de la superación de la crisis de los ochenta hasta la fecha. El observador interesado en comprender lo que ha ocurrido en la subregión en las últimas décadas se encontrará, pues, con este caudal de literatura relacionada con los procesos democráticos. El hecho de que entre 1990 y 2009 no

¹⁸ Disponible en:

http://www.uca.edu.sv/publica/ued/eca-proceso/ecas_anter/eca/2007/706/art7-eca%20706.pdf

¹⁹ Disponible en:

http://www.uca.edu.sv/publica/ued/eca-proceso/ecas_anter/eca/2007/703-704/art1-eca%20703-704.pdf

²⁰ Disponible en:

http://www.uca.edu.sv/publica/ued/eca-proceso/ecas_anter/eca/2007/706/art8-eca%20706.pdf

²¹ Disponible en:

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/doctorado/Seminario%20de%20Investigadores%20en%20Formacion/SIF2009_Santiago_Velez.pdf

²² Disponible en: http://www.flacso.org/uploads/media/Luis_Guillermo_Solis.pdf

exista un año en el que no se haya publicado algún texto acerca de la democratización en Centroamérica y El Salvador indica el carácter sistemático e ininterrumpido de la preocupación por la democracia que empezó a permear en el ámbito intelectual a escala regional.

Sirva la evidencia ofrecida para mostrar por qué no resulta excesivo afirmar que durante la posguerra la democracia se convirtió en la columna vertebral de las inquietudes epistemológicas, éticas y políticas de los centroamericanos. Pero no porque no se hayan dado otros fenómenos de primera importancia, como el de la violencia social, sino porque esos fenómenos —el del aumento paulatino de la delincuencia inclusive— empezaron a valorarse al interior del marco de la construcción de la democracia y a analizarse en función de su incompatibilidad con el proceso de consolidación democrática, como puede verse en los títulos que hemos recogido.

Esto no significa que antes de 1990 no existiera preocupación respecto de la democracia. Al contrario. En el caso de El Salvador, los principales actores del conflicto enarbolaron discursos democráticos y propusieron a la democracia como una de las conquistas fundamentales entre sus derroteros políticos. De hecho, diferentes reconstrucciones de la historia de Centroamérica coinciden en señalar la ausencia total de democracia como uno de los detonantes del estallido revolucionario a nivel subregional. Antes y durante la guerra, la democracia se proyectaba en el horizonte como una meta a la cual era indispensable llegar. Como veremos a lo largo de los próximos capítulos de este trabajo, hacer coincidir a los actores pro, anti y pseudo-democráticos del escenario salvadoreño en una plataforma común que permitiera construir una convivencia democrática significó la renuncia o puesta entre paréntesis de determinadas aspiraciones, convicciones y posiciones ideológicas. De la dificultad que supone esta empresa habla bien la inmensa cantidad de reflexiones surgidas al respecto y de la cual hemos querido dejar constancia.

Las posibilidades de intercambio político abiertas con la pacificación distaron mucho de la utopía democrática nebulosamente prefigurada o infundadamente rechazada por los actores políticos locales. Y es que una cosa era proclamar la lucha por

la conquista de la democracia o su defensa en contra de quienes impedían su concreción —lo cual ubicaba a la democracia en el territorio de lo abstracto— y otra muy diferente tener que edificarla junto con el mismo enemigo al cual pocos años antes se había pretendido eliminar. La democracia como problema práctico, compartido por los diversos actores políticos, y los recambios que operaron en el mundo a partir del fin de la Guerra Fría desencadenaron un viraje discursivo hacia las posiciones moderadas que podría resumirse como un desplazamiento entre el eje analítico democracia-revolución (propio de la guerra) hacia el eje cualitativa y terminológicamente distinto: transición-consolidación de la democracia (propio de la posguerra). Fue entonces cuando se produjo la proliferación de la literatura transitológica y democratizante en Centroamérica.

Entre sus autores no sólo destacan figuras académicas, sino que sobresalen también líderes políticos de izquierda y de derecha, comentaristas y analistas coyunturales, autoridades universitarias y directores de organismos no gubernamentales. Un lente aún más amplio nos permitiría observar que periodistas, grupos feministas, pastores religiosos, autoridades eclesiásticas, artistas y críticos de arte, entre otros sectores de la sociedad civil, incorporaron a la democracia y a las múltiples dificultades para su construcción como temas importantes en sus reflexiones, en sus modos de observar los acontecimientos, en sus maneras de ejercer la crítica social y de influenciar la opinión de sus respectivos auditorios.

Que esto es así lo revela la gran variedad de aspectos que se asocian con la democracia en el cuadro que hemos expuesto. Allí encontramos tratamientos de lo democrático circunscritos al ámbito político, como sería lo relativo a los partidos, la institucionalidad, la cultura democrática, el ejercicio electoral y los rebrotes autoritarios. Pero encontramos también la problematización de la democracia en términos de sus vínculos con la violencia social, la criminalidad, la seguridad pública, la desmilitarización y desmovilización de los ex combatientes, las posibilidades del desarrollo económico regional, el papel de los medios de comunicación, la conciencia de género, la impartición de justicia, la integración centroamericana y el

fortalecimiento del sistema de salud. Otros temas no vislumbrados aquí, pero de los cuales también existen numerosas reflexiones e indagaciones en relación con la democracia son: la corrupción, la delincuencia juvenil, los Derechos Humanos, el desafío medioambiental, la promoción cultural y el palpitante —pero oficialmente ignorado por los gobiernos— asunto de la recuperación de la memoria histórica, etc.

El segundo aspecto que nos interesa resaltar de nuestro cuadro es que la multiplicidad de títulos, autores e instancias patrocinadoras que confluyen en el interés por explicar y apuntalar la democratización centroamericana refleja cómo, no sólo los políticos e intelectuales, sino también las instituciones emergentes y preexistentes y los diversos sectores sociales tuvieron que replantear su quehacer y meditar acerca del necesario reacomodo que el nuevo contexto político les impuso. Una forma de interpretar esta explosión de discursos democratizadores dos décadas después de que empezaron a producirse, sería observándolos como un conjunto de respuestas diversas frente a la pregunta de fondo acerca de ¿qué papel correspondía jugar a los partidos políticos, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los profesionales, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los artistas, a los comerciantes, a los medios de comunicación, a las ONG's nacionales y extranjeras, a las agencias de cooperación y a las grandes mayorías que continuaron siendo socioeconómicamente excluidas, en la construcción de un país que estaba aprendiendo a barajar sus diferencias políticas por medio de mecanismos democráticos? Y más aún, ¿qué tipo de democracia defendería cada uno?

En la línea de este segundo aspecto que señalamos, una mirada atenta sobre el aparato crítico que respalda nuestro cuadro arroja un dato a considerar. Y es que, si bien las alusiones, críticas y proclamas hacia la democracia y la democratización vienen desde diferentes frentes y desde una amplia gama de actores —prácticamente desde todos los sectores vivos de la sociedad— hay nombres, casas editoriales e instituciones recurrentes. El cuadro que presentamos, como se dijo ya, no es exhaustivo. Eso quiere decir que muchos autores y centros de producción del conocimiento y análisis de la realidad nacional y regional quedaron fuera de la lista. Con todo y esa deficiencia,

creemos no equivocarnos al ver en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-sede El Salvador) y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) a los principales centros de producción académica en torno de la transición política en El Salvador. En ellos, bajo el liderazgo de los politólogos y científicos sociales salvadoreños Álvaro Artiga-González, José Miguel Cruz, Carlos Guillermo Briones y Ricardo Córdova Macías, se ha construido y se construye una parte significativa del conocimiento teórico de lo político a nivel nacional. Por eso no está de más preguntarse acerca de los enfoques, las perspectivas y las fuentes de las cuales abrevan estos autores. A ello dedicamos el último capítulo (el V) de este trabajo. Por ahora dejaremos consignado otro dato interesante respecto de este punto y es la estrecha colaboración existente entre estas tres instancias: publicaciones conjuntas y coautorías diversas estarían mostrando un nivel de coincidencia que nos permite adelantar que este grupo de investigadores comparten premisas teóricas y metodológicas y coinciden en algunos de sus objetivos de investigación²³.

En tercer lugar, nos gustaría precisar que el uso indistinto de Centroamérica y El Salvador como *locus* analítico en esta primera parte de nuestra reflexión no obedece a un error conceptual, proclive a deslizarse hacia la confusión del lector. Obedece, más bien, a una realidad claramente reflejada en el cuadro 1: la preocupación por la

²³ En su descripción del desarrollo de la politología salvadoreña y de quienes la ejercen, Álvaro Artiga-González confirma nuestra conclusión: “Todos ellos graduados fuera del país, algunos en Estados Unidos y otros en México o España. En la medida en que los programas de doctorado de estos dos últimos países han recibido una influencia anglosajona importante en las últimas décadas, se puede afirmar que existe una cierta homogeneidad en la formación de los doctores en ciencia política salvadoreños [...]El reducido número de doctores en ciencia política en El Salvador ha obligado a la especialización temática. Así, tenemos especialistas en seguridad y política global, cultura política y opinión pública, partidos y sistemas de partidos, sistemas electorales y modernización del Estado [...] Son dos centros los que más encuestas de opinión sobre temas políticos hacen en El Salvador: la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo) y el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Ambas instituciones, y sus investigadores, participan en una red de centros de investigación coordinados por la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos [...] Como se trata de un grupo reducido de politólogos con cierta especialización temática, por de pronto no han surgido divisiones ni conflictos en su interior que les signifique algún tipo de desgaste intelectual. Las relaciones entre ellos son más bien personales antes que institucionales. Ello favorece un clima de cooperación entre las organizaciones de las que forman parte”. Ver: “La Ciencia Política en El Salvador: sus primeros pasos”, *Revista de Ciencia Política*, Vol. 25, No. 1, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2005000100012&script=sci_arttext

democracia cobró particular centralidad tanto en El Salvador, como en toda Centroamérica. Pero esto no es nuevo. La historia subregional está constituida por la situación paradójica de la terca pervivencia de pequeños Estados-nación, cuya fragilidad los ha forzado a buscarse, y a encontrarse de hecho, los unos a los otros en más de un sentido. La prolongación de los regímenes políticos dictatoriales, la industrialización propia de la década de 1950, el desarrollo del fallido Mercado Común Centroamericano durante los sesenta, la emergencia de movimientos revolucionarios en los setenta y los conflictos armados durante los largos años de 1980 son quizá los ejemplos más visibles de cuán estrechos y profundos han llegado a ser los vasos comunicantes que mantienen conectados a los países del área. Los mismos fenómenos decisivos se han manifestado, con sus respectivas particularidades, en todos. Y así como en la llamada pacificación del Istmo intervinieron los gobiernos regionales, a través de la iniciativa que fue Esquipulas II, al proceso de democratización los países centroamericanos concurren en conjunto. Ésta no fue, ni tenía por qué ser, la excepción.

Leyendo este fenómeno desde El Salvador, nuestro objeto de estudio, conviene señalar que la particularidad del conflicto salvadoreño demarcó también la particularidad de su resolución: el frente guerrillero salvadoreño no sufrió una derrota militar (como ocurrió en Guatemala), pero tampoco consiguió hacerse del poder por la vía armada, como sí lo logró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua. El FMLN “debutó” en el escenario democrático a raíz de la negociación llevada a cabo para tal fin con su principal rival, el derechista partido ARENA. Sobre todo esto abundaremos más adelante. Lo que nos interesa remarcar aquí es que la magnitud de la guerra salvadoreña y la eficacia de sus Acuerdos de Paz le dieron al “pulgarcito de América” especial notoriedad, al punto de convertirlo en foco de atención de una amplia gama de estudios en diferentes partes del mundo y, en especial, en la propia Centroamérica.

Por otra parte, y en correspondencia con algo que habíamos apuntado arriba, dentro del mundo académico la atmósfera intelectual democratizante sirvió de caldo de cultivo para el desarrollo de la Ciencia Política en la región, siendo los estudios

comparados una metodología frecuente dentro de esta disciplina. De manera pues que razones históricas y académicas abrieron cauce a la confluencia analítica entre el proceso salvadoreño y los demás procesos del Istmo, e incluso con los de otras partes del continente y del globo terráqueo. En el cuadro aparece un título que promete la indagación sobre las transiciones políticas en El Salvador y en Chile. Inclusive existen esfuerzos por comparar el proceso transicional en El Salvador con el proceso en Suráfrica, por citar un ejemplo²⁴.

Esto nos lleva al cuarto elemento del cual queremos dejar constancia, amparándonos en nuestra investigación, y es el de los nexos entre las transiciones políticas centroamericanas y las transiciones que venían dándose en el resto de América Latina. Los conceptos de *transición*, *consolidación de la democracia* y *democratización* no surgieron en Centroamérica, no fueron producto de una invención centroamericana. Los centroamericanos que empezaron a hacer uso de ellos como cosa de todos los días, adaptándolos a sus propias circunstancias y dotándolos de nuevos significados, los heredaron de autores que venían pensando en las transiciones políticas desde regímenes autoritarios desde una década atrás. Por eso no le falta razón al filósofo mexicano Mario Magallón cuando afirma que, en lo que respecta al manejo de esa terminología, los intelectuales del Istmo “se subieron a caballo ensillado”. Y por lo mismo no es extraño encontrar entre los textos que acá hemos esquematizado y en otros, provenientes sobre todo de la Ciencia Política, la afirmación de que las transiciones latinoamericanas —las de Centroamérica inclusive— se enmarcan dentro de la “Tercera Ola” de las democratizaciones que empezaron a producirse en el mundo en el ocaso del siglo XX²⁵.

En quinto y último lugar, nos gustaría dejar señalado que el cuadro que presentamos es una pequeña muestra del sinnúmero de textos que se han producido y no dejan de producirse sobre la democracia, en este caso referida a Centroamérica. Quizá se trate de uno de los asuntos más abordados, tanto en los ambientes

²⁴ Wood, Elizabeth Jean, *Forging Democracy from Below. Insurgent transitions in South Africa and El Salvador*, Cambridge University Press, Nueva York, 2000 (reimpreso en 2000, 2003, 2004 y 2005).

²⁵ Huntington, S., *op cit.*

académicos, como en la esfera de la actividad política en toda América Latina, al grado de haber permeado ya nuestras mentalidades. Si prestamos un poco de atención, veremos cómo la gran mayoría de los discursos vinculados con lo social presentes en las aulas, en los medios de comunicación y en las conversaciones casuales toman en cuenta a la democracia o aluden a lo democrático en uno u otro sentido. Por una parte, eso facilita su investigación, pues abunda el material de dónde escoger y del cual abreviar para nutrir las propias reflexiones. Pero, por otra parte, esa abundancia plantea preguntas sobre ¿qué decir acerca de un tema sobre el cual se ha dicho ya tanto?, ¿vale la pena aventurarse a dar la propia visión?, ¿habrá algo nuevo que aportar?

Una primera respuesta frente a tal desafío nos lleva a decir que, precisamente porque hablar de *transición*, *democracia* y *democratización* se convirtió en algo tan común en El Salvador de posguerra, insistimos en la necesidad de preguntarnos qué significa, por qué se popularizó de tal modo y qué posiciones éticas, ideológicas y epistemológicas se ponen en juego en la vasta discusión que se generó a partir de su implementación.

1.2 Neoliberalismo y globalización: los nuevos rostros del capitalismo

La estructura socioeconómica del mundo actual está anclada sobre dos pilares fundamentales: la internacionalización de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de la información. Si bien los orígenes de ambos fenómenos podrían rastrearse desde décadas e incluso centurias atrás, su exacerbación hacia finales del siglo XX condujo a la adopción de nuevos términos para referirse a ellos: “neoliberalismo” y “globalización”. Llama la atención que los análisis sobre neoliberalismo se encuentren sistemáticamente asociados a los análisis sobre globalización, al punto que no se pueda mencionar uno sin aludir al otro. En este sentido, el economista salvadoreño Francisco Javier Ibisate habla de “simbiosis” entre neoliberalismo y globalización, estableciendo un paralelismo entre el momento actual del desarrollo capitalista y el final del siglo XIX cuando “el liberalismo de mercado se

desarrolló sobre las fuerzas motrices de la revolución industrial”²⁶. Lo que ocurre hoy en día es que la globalización provee las herramientas tecnológicas y las ramificaciones culturales por medio de las cuales se expande la mundialización de los dispositivos económicos e ideológicos del proyecto neoliberal²⁷.

F. J. Ibisate identifica la globalización con la “revolución tecnológica” que sirve de soporte a la transnacionalización del comercio mundial. Para este autor, dicho comercio se da en función de tres mercados: i) el de las empresas transnacionales, cuyos capitales superan en muchos casos y en altos porcentajes a los del Producto Interno Bruto (PIB) de los países periféricos; ii) el del mercado financiero, en el que convergen los capitales de bancos y megaempresas, articulados por medio de mecanismos especulativos que someten a la economía mundial a la zozobra y la inestabilidad permanentes; y iii) el de los grandes medios de comunicación: “oligopolios o monopolios que transmiten al instante no sólo hechos y sucesos, sino la interpretación de tales sucesos. Crean la nueva cultura del hombre hecho para producir, ganar y consumir. Hoy día los gastos en publicidad se emparejan con los pasados costos de la carrera armamentística”²⁸.

Neoliberalismo significa, en pocas palabras, estrategia económica de recomposición del capitalismo tras la crisis mundial de la década de 1970, por medio de la apertura controlada de los mercados a escala planetaria. Tal crisis se convirtió en criterio de oportunidad para que un grupo de teóricos —entre los que destacan Friedrich A. Hayek, Milton Friedman y el grupo conocido como “los chicanos boys”, liderado por éste último— introdujeran su propuesta de política económica basada en la afirmación de que la regulación estatal de la economía, en sus versiones keynesiana y

²⁶ Ibisate, Francisco Javier, “Neoliberalismo y globalización”, ECA, No. 600, octubre, p. 893. Disponible en: http://www.uca.edu.sv/publica/ued/eca-proceso/ecas_antier/eca/600art1.html

²⁷ Nayar López define a la globalización como “ligada al modelo neoliberal impuesto en la mayoría de los países desde hace más de 25 años, sobre todo en América Latina. Así, estamos hablando de la globalización neoliberal como la pauta del dominio capitalista en la última parte del siglo XX y lo que va del XXI”. El autor enfatiza en los procesos de transformación que sufrieron los Estados latinoamericanos por parte de los gobiernos locales en función de su adaptación al esquema neoliberal dominante, ver: López, N., *Del Plan Puebla-Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal*, Plaza y Valdés, México, 2009.

²⁸ *Idem.*

socialista, no sólo atenta contra las libertades individuales, cercenando las posibilidades de crecimiento económico de las personas y los países, sino también provoca un agigantamiento del Estado que resulta improductivo y nocivo, al grado de culminar invariablemente en colapso. El incremento constante de las demandas sociales satura al Estado, convirtiéndolo en un obstáculo para el desenvolvimiento autónomo de la economía de acuerdo con sus propias leyes.

El neoliberalismo, como programa de reforma económica, no tiene en su punto de mira una problemática metafísica, antropológica o cultural: lo que se propone es liberar al mercado de elementos perturbadores, entre los que destacan el control estatal. Es un programa cuyo propósito es traducirse en un conjunto de políticas económicas a ser adoptadas por los equipos de gestión públicos y privados. Entre las políticas más relevantes se encuentran las de ajuste estructural, las de apertura externa y las de reducción de los aparatos estatales; todas ellas tienen como objetivo estabilizar a las economías, propiciar su inserción en el mercado mundial y eliminar las interferencias estatales en la dinámica del mercado²⁹.

El anticomunismo intransigente propio del planteo neoliberal coincidió con el auge del neoconservadurismo en Norteamérica y Europa. Conocido es que los gobiernos de Augusto Pinochet en Chile, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos inauguraron la puesta en marcha del programa neoliberal que rápidamente se expandió a escala planetaria. Roberto Regalado, politólogo y especialista en relaciones internacionales, de origen cubano, señala que en América del Sur se dio el primer intento frustrado de echar a andar el modelo neoliberal —aunque aún no se acuñaba el término— a mediados del Siglo XX, “ante la caída de la demanda de sus productos primarios de exportación —que habían mantenido altos sus niveles durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra— [...] Pero su aplicación se detiene porque se hace necesario calzar la reducción del nivel de vida de la población con grados de coerción y represión para los cuales las condiciones aún no estaban creadas. Ese fue el papel desempeñado por las dictaduras que afloraron en la región en los años sesenta, setenta y ochenta”³⁰, décadas durante las cuales el proyecto neoliberal comienza a echar raíces en Suramérica, especialmente a partir de la

²⁹ González, L. A., “Globalización y neoliberalismo”, *ECA*, No. 603, enero, San Salvador, 1999, pp. 65, 66.

³⁰ Regalado, R., *América Latina entre siglos*, Ocean Sur, 2006, p. 81.

crisis de la deuda externa que estalla en 1982, dejando a las economías regionales vulnerables frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la descripción que ofrece Regalado de las principales medidas de “estabilización macroeconómica” y “ajuste estructural” tomadas por las potencias al interior de sus propios países, obtenemos un retrato del proyecto que empezó a aplicarse —como efecto dominó y con los matices impuestos por las características de las economías locales— en la mayor parte de los países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía.

Aunque Gran Bretaña y los Estados Unidos asumieron en conjunto el papel protagónico de la implementación del neoliberalismo a escala universal, hubo diferencias en las modalidades de esa doctrina aplicadas, respectivamente, por Thatcher y Reagan. El neoliberalismo británico es más ‘puro’ y ‘ortodoxo’, con énfasis en la contracción de la emisión monetaria, la elevación de las tasas de interés, la reducción impositiva para la franja poblacional de más altos ingresos, la abolición de los controles sobre los flujos de capitales, el fomento del desempleo masivo, la represión a las huelgas, la aprobación de leyes antisindicales y el recorte de los gastos sociales, todo ello complementado posteriormente por un amplio programa privatizador que comienza por la vivienda pública, continúa con el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua. Por su parte, en los Estados Unidos —país donde no existía un ‘Estado de Bienestar’ que dismantelar—, el elemento central de la política de Reagan fue el incremento de la carrera armamentista, sustentada en los mayores déficits fiscales registrados hasta entonces en la historia de esa nación [...] Salvo esta ruptura con la ortodoxia neoliberal en materia de equilibrio fiscal [...] Reagan aplicó el esquema de reducción de los impuestos a los ricos, aumento de las tasas de interés y la represión a la huelga de los controladores aéreos de 1981, que sentó las pautas de su política antisindical³¹.

El título de la obra *Globalización financiera* del filósofo mexicano Mario Rojas da cuenta de la fusión entre globalización y neoliberalismo a la que hemos aludido. En sus páginas introductorias encontramos una lista de rasgos constitutivos del

³¹ *Ibid*, p. 84. Perry Anderson puntualiza en que el objetivo del “keynesianismo militar disfrazado” impulsado por Reagan tenía como objetivo competir con la Unión Soviética y quebrar la economía del mundo socialista. “La victoria de Occidente en la Guerra Fría, con el colapso de su adversario comunista, no fue el triunfo de cualquier capitalismo, sino el tipo específico liderado y simbolizado por Reagan y Thatcher en los años ’80”. El autor atribuye a la agresiva implementación del proyecto neoliberal en los países ex soviéticos la razón de ser del predominio de la hegemonía neoliberal a escala mundial, pese a los déficits que a comienzos de la década de 1990 mostraba el modelo. Más pormenores acerca de esta paradoja en: Anderson, P., “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en: *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Emir Sader y Pablo Gentili (comp.), 2ª ed., CLACSO, Buenos Aires, pp. 192-198. Cabe señalar que Anderson propone una periodización distinta a la de Regalado del auge neoliberal en Latinoamérica. Texto disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf>

funcionamiento global del mundo, tal como los apologistas del sistema capitalista lo promueven:

La globalización en general es entendida como el proceso a nivel mundial de expansión, interconexión e integración creciente de los mercados (de materias primas, bienes y servicios), las finanzas, la tecnología, la información, los conocimientos, y por ende —se afirma— de interconexión e integración creciente entre los Estados-Nación, las culturas, las formas de vida, los comportamientos. Se sostiene, y se hace creer, que se trata de un proceso que se acelera —o se lo hizo acelerar— desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado, de un fenómeno completamente nuevo, inédito, modernizador, ineludible, irreversible, cuya tenencia es, y cuyo resultado final será, la homogenización del mundo³².

M. Rojas ofrece un análisis filosófico del aspecto nuclear de la economía global: el mercado financiero. La sistematización de datos e informes de economistas especializados que nutren sus reflexiones permite concluir que los administradores del capital presionaron por la implementación de la política neoliberal a nivel mundial, con el objeto de reducir al mínimo la soberanía de los países periféricos e incrementar al máximo su situación de dependencia respecto de los grandes poderes. Por medio de la realización de préstamos, el cobro de elevadas tasas de interés, la adquisición de bancos de reserva y empresas nacionales rentables, las transnacionales y las súper potencias mermaron el margen de acción de los Estados-nación de la periferia, cuyos gobiernos quedaron a merced de las decisiones del gran capital. Las cúpulas megaempresariales y las élites de las bolsas de valores, apoyadas por los organismos de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), empezaron a encontrar más rentable especular con el plusvalor mundial en el mercado financiero que incentivar la producción. Frente a la pregunta sobre por qué la recuperación de las ganancias que el proyecto neoliberal consiguió durante la década de 1980 no condujo a una recuperación de la inversión, el historiador inglés Perry Anderson responde: “Esencialmente, porque la desregulación financiera,

³² Rojas Hernández, M., *Globalización financiera, despojo y radicalización de la dominación capitalista*, Ed. Dríada, México, 2008, p. 12.

que fue un elemento de suma importancia en el programa neoliberal, creó condiciones mucho más propicias para la inversión especulativa que la productiva”³³.

Rojas describe el ámbito financiero como un supermercado especulativo — ubicado en rascacielos y operando en ordenadores que calculan infinidad de cifras por segundo— en el que el dinero se reproduce a sí mismo por medio de movimientos bursátiles sustentados en endeudamientos, devaluación de monedas locales y descalabro económico de bancos, países y regiones enteras. No son individuos quienes manejan los movimientos especulativos, aclara Rojas, sino instituciones poderosas — Wall Street y el gobierno de los Estados Unidos las principales— las que se encargan de asegurar que siga habiendo divisas para alimentar el sistema. Justamente para eso fue creado el modelo neoliberal. El debilitamiento de los Estados (por supuesto, no de todos los Estados) promovido por tal modelo no ha desembocado, como se ofreció, en un libre juego de oferta y demanda en el que todos compiten en igualdad de condiciones. Lo que ha conseguido, porque para eso fue diseñado, ha sido facilitar que unos cuantos enclaves geográficos y un conjunto de consorcios comerciales se conviertan en propietarios de los recursos, bienes y servicios que millones de trabajadores producen a lo largo y ancho del mundo.

La contienda, de proporciones globales, para apropiarse de la riqueza a través de la ‘manipulación financiera’ es la fuerza rectora detrás de la crisis. Es también el origen de la agitación económica y de la devastación social. Esta manipulación de las fuerzas del mercado por agentes poderosos constituye una forma de guerra financiera y económica. No hay necesidad de conquistar territorios perdidos ni de enviar ejércitos invasores. A fines del siglo XX, la descarada ‘conquista de las naciones’, que significa controlar los valores productivos, la mano de obra, los recursos naturales y las instituciones, puede llevarse a cabo de manera impersonal desde la sala de consejo: las órdenes salen de una computadora terminal o de un teléfono celular. Los datos necesarios se comunican al instante a los mercados financieros principales; con frecuencia, el resultado es perjudicial para la economía de algún país³⁴.

³³ Anderson, P., *op. cit.*, p. 195.

³⁴ M. Chossudovsky, citado en M. Rojas, *Ibid.*, p. 50.

También el politólogo salvadoreño L. A. González comprende la globalización como un fenómeno eminentemente económico, cimentado sobre la desigualdad de las relaciones entre las distintas regiones del planeta.

No todos los países tienen la misma importancia en la economía global, pues existe una clara jerarquía entre ellos: los países del centro del sistema, los nuevos países industrializados y los países estancados industrialmente o en vías de industrialización. En efecto, esa división determina el lugar que cada nación (o grupo de naciones) ocupa en el orden global. Las que ocupan el último lugar son aquellas cuya importancia en el mercado mundial es menor, lo cual quiere decir que la mayor parte de países están en esa situación formando la “periferia” del sistema capitalista mundializado³⁵.

La adopción de la globalización y el neoliberalismo como sus nuevos rostros y sus nuevos vehículos ha facultado al capitalismo para venderse como un sistema de avanzada, innovador y vanguardista. Pero esa estrategia publicitaria esconde la realidad que le es consustancial: su viejo carácter colonialista, que impone la dominación económica de Estados Unidos y los demás países poderosos sobre el resto³⁶. En eso no hay mayores modificaciones. Internet puede coadyuvar a la democratización de la información, siempre y cuando la división internacional y la división social del trabajo se conserven. La globalización es la vitrina deslumbrante que oculta lo profundamente conservador del neoliberalismo, cuyo propósito ha sido conservar el sistema de dominación de unas regiones del mundo sobre otras y, concretamente, de unos grupos económicos sobre la mayoría de la humanidad.

Tanto M. Rojas, como otros pensadores que han abordado la cuestión, argumentan a favor de la idea de que el poder económico y político sobre la riqueza generada por pueblos y naciones se encuentra condensado en el mercado financiero. La propagación mundial del proyecto neoliberal constituye la prueba más fehaciente de intervencionismo económico y político para beneficio de los grandes emporios. La apertura o cierre de fuentes de empleo, los despidos masivos, los montos y tiempos de

³⁵ González, L. A., “Globalización y neoliberalismo”, *op. cit.*, pp. 56, 57.

³⁶ Distintos autores han señalado las distorsiones a las que son sometidos los conceptos al uso, en aras de disfrazar la realidad. Al respecto, Mario Rojas cita a Raúl Fornet en su apreciación acerca de cómo el término *globalización* oculta “precisamente la hegemonía imperial de los países capitalistas del Norte o de las grandes empresas y centros financieros con una palabra que quiere sugerir ‘integración’, crecimiento común a escala mundial, etc.”, *op. cit.*, p. 14.

pago de los salarios, los derechos laborales, los precios de la canasta básica, el acceso a satisfactores naturales, sociales y culturales, en definitiva, las decisiones fundamentales de los gobiernos de los países periféricos, los dineros necesarios para combatir el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, los riesgos frente a los desastres naturales y demás calamidades, dependen de las transacciones en las bolsas de valores, supeditadas a los intereses de las élites que las manejan.

1.3 ¿Por qué hablar de democracia neoliberal?

¿En qué consiste y cómo se da la relación entre economía y política en el contexto del neoliberalismo? Aportando elementos para dilucidar esta cuestión, L. A. González se remonta a los orígenes de las dos tradiciones liberales e insiste en la importancia de marcar la diferencia entre liberalismo político y liberalismo económico. El liberalismo político —señala— proviene de Locke, Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, Stuart Mill y los padres fundadores de la Unión Americana; consiste en la defensa de las libertades civiles y políticas y se caracteriza por haber mantenido una continuidad conceptual desde su surgimiento hasta ahora. El liberalismo económico, en cambio, fue teorizado originalmente por David Ricardo y Adam Smith, cobrando auge desde el siglo XVIII hasta inicios del XX, momento en que cesó su influencia. Se basa en cuatro principios: a) la eficacia del mercado como asignador óptimo de recursos; b) la libre competencia como dinamizadora de la economía; c) la autorregulación del mercado por la “mano invisible; y d) la exclusión del Estado de las actividades económicas³⁷. Entre 1920 y 1980 el liberalismo económico fue considerado obsoleto, hasta que la revitalización de la que fue objeto en manos de F. A. Hayek y compañía (desde la década de 1940) le abrió cauce y lo puso en práctica.

Según L. A. González, no tomar en cuenta esta distinción suele llevar a equívocos a la hora de afrontar críticamente los planteamientos neoliberales, porque una cosa es defender el liberalismo político, otra defender el liberalismo económico y otra diferente defender ambos. Si bien es cierto que hay quienes suscriben uno de los

³⁷ *Ibid.*, p. 62.

dos liberalismos sin adherirse al otro, no deja de ser llamativo que la retórica neoliberal tienda a enumerar a la democracia electoral como una de sus bondades. Para la muestra, qué mejor botón que las afirmaciones de Francis Fukuyama, autor de la polémica tesis sobre el “fin de la historia”. Refrendando los postulados que lo hicieron famoso en el marco de la caída del muro de Berlín, según los cuales la historia camina inexorablemente hacia el libre mercado y la democratización, sostuvo una vez más, una década después:

Muchos lectores no comprendieron que yo estaba haciendo referencia a la historia en su sentido hegeliano y marxista de evolución progresiva de las instituciones políticas y económicas humanas. Mi razonamiento era que la historia entendida de esa forma está dirigida por dos fuerzas básicas: la evolución de las ciencias naturales y la tecnología, que establece las bases para la modernización económica, y la lucha por el reconocimiento, que, en última instancia, exige un sistema político que reconozca los derechos humanos universales. Al contrario que los marxistas, yo afirmaba que este proceso de evolución histórica no culminaba en el socialismo, sino en la democracia y en la economía de mercado³⁸.

Hasta cierto punto, los hechos acreditan la convicción de Fukuyama porque el discurso neoliberal ha venido aparejado con un discurso democratizador. La democracia electoral ha sido funcional al modelo capitalista, ahora neoliberal y globalizado. Los lineamientos neoliberales han minimizado a los Estados de los países periféricos en lo que se refiere a regulación del mercado, prestaciones sociales y derechos laborales, al tiempo que les ha exigido adoptar la democracia representativa como régimen político, si es que pretenden ocupar un lugar dentro del concierto internacional. Mientras tanto, ni el FMI, ni el BM, ni el BID, ni la OMC, ni las transnacionales, ni los países industrializados, ni ninguno de los actores que toman las decisiones económicas que afectan al conjunto de la población mundial están regulados democráticamente; y en los foros en los que concurren los distintos países a deliberar sobre el futuro de la economía del mundo, los países periféricos son omitidos

³⁸ Fukuyama, F., “Pensando sobre el fin de la historia diez años después”, *El País*, Madrid, 17 de junio de 1999. Disponible en: <http://www.alcoberro.info/planes/fukuyama3.htm>

e invisibilizados³⁹. La exigencia de democratización impuesta a los países de la periferia se estrella contra la antidemocracia en los asuntos financieros, científicos, tecnológicos, ecológicos, militares, sociales y culturales que atañen al conjunto de la humanidad.

El tema de la transición a la democracia está acompañado por un discurso que enarbolan los países neoliberales económicamente fuertes. Así, desde el proyecto neoliberal los procesos de democratización se van haciendo extensivos en la región [América Latina]. Se busca una ‘mayor participación democrática’, fundada en una supuesta concepción de ética política ‘igualitaria’ y ‘justa’ [No obstante, se trata de] un modo de democratización selectiva y excluyente, que se extiende en el ámbito mundial⁴⁰.

En Chile y Argentina las políticas de estabilización y ajuste estructural empezaron a ser implementadas por las dictaduras militares, so pretexto de que el “derrame” económico que vendría junto con la liberalización del mercado posibilitaría la instauración de regímenes democráticos en el futuro próximo. Durante los ochenta, la caída de esas dictaduras puso en boga el concepto de transición a la democracia. Eso explica que diversos analistas suramericanos definan las etapas de su historia reciente en términos de una *dictadura neoliberal* a la cual le siguió una *democracia neoliberal*, subrayando que la modificación en el ámbito político no impidió la continuidad del proyecto económico. En Centroamérica, neoliberalismo y consolidación de la democracia vinieron de la mano, justo después del fin de la crisis en el Istmo. Sobre el carácter formal de la democracia representativa y su relación con el proyecto económico hegemónico a nivel mundial, Regalado asegura:

El neoliberalismo desarrolla su propio concepto de democracia. La *democracia neoliberal* se caracteriza por el culto a los elementos formales de la democracia burguesa, tales como el pluripartidismo, las elecciones periódicas, el voto secreto, el rechazo al fraude, la alternancia en el gobierno y otros, pero con un Estado desprovisto de la capacidad de ejercer el poder político real y, por consiguiente, ubicado fuera del ‘espacio de confrontación gramsciano, en el que la izquierda y el movimiento popular pudieran arrancarle concesiones en materia de política social y redistribución de riqueza. La democracia liberal se complementa con un concepto de *derechos humanos*, que enfatiza las libertades civiles destinadas a legitimar este ejercicio antidemocrático,

³⁹ F. J. Ibisate proporciona ejemplos de esto en su artículo “¿Hacia un pos-neoliberalismo?”, *ECA*, No. 615, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 2000, pp. 59-77.

⁴⁰ Magallón, M. *op. cit.*, p. 163.

pero excluye, incluso cuando los acepta de palabra, la satisfacción de los derechos económicos y sociales⁴¹.

La consideración del Estado como un ente obsoleto, costoso e ineficaz que debe ser debilitado, e incluso finiquitado, en aras de la superación del subdesarrollo y el verdadero progreso se tradujo en la privatización y desmantelamiento del precario ‘Estado de Bienestar’ que los países latinoamericanos—unos más consistentemente que otros— habían logrado constituir durante las décadas anteriores. Los despidos masivos y la flexibilización de las leyes laborales dejaron a la población en edad productiva en condiciones de extrema vulnerabilidad e inestabilidad, al tiempo que la mercantilización de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la recreación y los recursos naturales desprotegió a las familias. En definitiva, la pauperización de las masas latinoamericanas, lejos de mermar, se profundizó, pues ni el anunciado efecto del “derrame” se produjo, ni la región logró un repunte económico sostenido. Al contrario, en un análisis que data de mediados de la década de los noventa, el politólogo argentino Atilio Borón arrojaba datos sobre la tendencia regresiva de las economías regionales una década después de llevado a cabo el ‘ajuste’. La toma de estas medidas condujo al "descenso en los niveles de producción y consumo, aumento en los índices de desempleo y subempleo, creciente importancia de las migraciones (...), disminución en los salarios reales, contracción del salario indirecto, deterioro en la distribución y todo tipo de tensiones sociales"⁴².

El estancamiento de las economías que, como la chilena, la mexicana y la boliviana, implementaron las medidas del Consenso de Washington⁴³ y la creciente

⁴¹ Regalado, R., *op. cit.*, pp. 83, 84.

⁴² Cortés F. y R. M. Rubalcava, citados en Borón, *op. cit.*, p. 254.

⁴³ Formulado por el economista inglés John Williamson, en su calidad de miembro del Banco Mundial, el *Consenso de Washington* fue el nombre con que se bautizó al conjunto de medidas que los países de América Latina debían implementar en respuesta al vacío dejado por el fracaso del modelo de sustitución por importaciones y a la crisis de la deuda externa padecida por las economías de la región a lo largo de la década de 1980. El nombre hace referencia al consenso alcanzado en 1989 por el Congreso de Washington, las agencias económicas de la administración estadounidense, el Consejo de la Reserva Federal y los tecnócratas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) en cuanto a la imposición a los países latinoamericanos de: *i*) disciplina presupuestaria; *ii*) cambios en las prioridades del gasto público; *iii*) reforma fiscal; *iv*) liberalización de las tasas de interés; *v*) una tasa de cambio competitiva, regulada por el mercado; *vi*)

pérdida de derechos ciudadanos que devino con las políticas de ajuste estructural repercutieron negativamente sobre la incipiente consolidación de la democracia por dos razones básicas. Primero, porque el empobrecimiento de la mayor parte de los posibles electores cercenó la legitimidad de los regímenes democráticos. ¿Para qué la democracia si las condiciones de vida de las mayorías empeoraron respecto de las que se tenían durante los regímenes autoritarios? Borón recupera el diagnóstico de Agustín Cueva sobre la “des-ciudadanización” padecida en América Latina, subrayando el paulatino fortalecimiento de las figuras del mendigo y del narcotraficante. Figuras que, dada su intrínseca marginalidad, no se vinculan con la credibilidad en el sistema democrático⁴⁴. En segundo lugar, el debilitamiento del Estado favoreció el secuestro del aparato electoral por parte de los dueños del capital. Las condiciones de participación en las contiendas no son equitativas. Aunque los propios sistemas electorales estén diseñados para la alternancia de gobernantes y proporcionen mecanismos institucionales para hacerlo, con frecuencia quienes poseen el dinero para financiar campañas, comprar políticos y maniobrar en el juego de la política, cuentan con muchas ventajas para inclinar la balanza a su favor y definir el rumbo económico de los países.

Debilitamiento del Estado, pauperización del empleo, desprotección del trabajador, políticas antisindicales, privatizaciones, importancia capital de las migraciones y los recursos generados por los migrantes, incentivo de las exportaciones no tradicionales, disminución de los gravámenes a las élites económicas, aumento de tasas impositivas para el consumo, incremento de la inversión extranjera sin regulación estatal, estancamiento de la economía y aumento del abstencionismo electoral fueron

liberalización del comercio internacional; *vii*) liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; *viii*) privatización de empresas públicas; *ix*) la desregulación; *x*) la protección de los derechos de propiedad. Ver: Casilda Béjar, Ramón, “América Latina y el Consenso de Washington”, Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española), No 2803, abril-mayo, 2004. Disponible en: http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2803_19-38_4F750124143128257278CDB775B3F4F9.pdf

⁴⁴ “Las sociedades latinoamericanas son ya, desde la base hasta la cúspide, sociedades marcadas por las figuras del narcotraficante y el mendigo: o se trafica con drogas o se apela a la caridad del Norte”, Cueva, A. (1990), citado en Borón, *op. cit.*, Cap. V, pp. 198, 199. Disponible en: <http://168.96.200.17/ar/libros/estado/capituloV.pdf>

todos hechos que ocurrieron en la Centroamérica democrática de los años noventa y dos mil. En el caso concreto de El Salvador, el partido ARENA — que gobernó por cuatro períodos consecutivos, entre 1989 y 2009— defendió el proyecto neoliberal como único modelo económico viable y como el mejor para lograr el progreso. Incluso justificó la dolarización amparado en la necesidad de insertar la economía del país al mercado internacional, evitando las fluctuaciones de la devaluación del colón (la ex moneda local).

Respecto de este proceso, la socióloga austríaca Kristina Pirker asegura: “No fue hasta fines de los ochenta y principios de los años noventa que se instrumentaron los programas de ajuste estructural orientados a insertar las economías centroamericanas a la economía internacional. Tanto la estabilización como las políticas de ajuste estructural transformaron las sociedades centroamericanas profundamente, al impulsar nuevas ramas productivas (como las maquilas), agudizar la crisis del agro centroamericano e impulsar el crecimiento del sector informal”⁴⁵. Y en alusión al proceso salvadoreño afirma:

Al analizar las acciones gubernamentales para implementar el ajuste estructural en El Salvador llama la atención la facilidad con la cual el gobierno de ARENA se apropió del discurso neoliberal para dismantelar las instituciones estatales formadas por los gobiernos anteriores. Esta situación coincide [...] con el resto de América Latina donde los gobiernos latinoamericanos también incluyeron las propuestas radicales de los promotores del neoliberalismo en sus agendas, a raíz del fracaso de las medidas habituales para lograr una estabilización a corto plazo de los desequilibrios macroeconómicos⁴⁶.

La penetración del neoliberalismo en América Latina contribuyó a hacer todavía más estrecho el círculo vicioso en el que históricamente se ha encontrado atrapada la posibilidad regional de desarrollo económico, político y social. La vulnerabilidad de los Estados de la región no sólo disminuyó su capacidad para responder frente a las necesidades básicas de las mayorías populares, sino que sometió a los países periféricos al autoritarismo internacional ejercido por las potencias mundiales y las transnacionales. En esas circunstancias, la transición a la democracia en el sub

⁴⁵ Pirker, K., *op. cit.*, p. 296.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 276.

continente ha sido contradictoria e insuficiente. Se construyeron democracias representativas, electorales, diseñadas para sostener la “reforma neoliberal”. Es decir, para perpetuar la existencia de las condiciones de desigualdad que obstaculizan la profundización de la democracia socioeconómica, también conocida como “sustantiva”. Y no obstante, en una región tradicionalmente autoritaria, la democracia ha demostrado su potencial transformador, en cuanto vehículo de las aspiraciones de fuerzas políticas y sociales anteriormente negadas y marginadas de los escenarios gubernamentales.

El triunfo del proyecto democratizador en América Latina se explica por su funcionalidad respecto de los intentos de las potencias por conservar su dominación sobre el Tercer Mundo, pero también porque la deslegitimación de las respuestas autoritarias abrió un compás de posibilidades de maniobra a los partidos de izquierda y al movimiento popular que terminó por vigorizar los procesos democratizadores. La *democracia neoliberal* se ha visto, pues, interpelada por una *democracia sustantiva*, inconforme con la pura formalidad, que persigue resultados en el ámbito socioeconómico, no sólo político. Así entendida, la democracia tiene también un potencial subversivo que devela el trasfondo antidemocrático del neoliberalismo.

El neoliberalismo remata en una concepción y una práctica profundamente autoritaria en la gestión de la cosa pública. Por eso el dilema neoliberal no es entre estado y mercado, sino entre democracia y mercado. Y sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo [...] Las políticas neoliberales provocan el progresivo vaciamiento de los nuevos regímenes democráticos. Estos se convierten en una pura forma, y la vida social regresa al paroxismo de una situación "cuasi-hobbesiana" de lucha de todos contra todos, de "sálvese quien pueda", que abre las puertas a toda clase de comportamientos aberrantes⁴⁷.

También Mario Magallón llama la atención sobre la raigambre autoritaria del neoliberalismo, citando a uno de sus más prominentes autores. En la cita referida, el filósofo y economista austríaco Friedrich A. Hayek reconoce que “la democracia en sí misma nunca ha sido un valor central del neoliberalismo. Ya que libertad y democracia

⁴⁷ Borón, A., “Introducción. Después del saqueo: el capitalismo latinoamericano a comienzos del nuevo siglo”, *op. cit.*, pp. 15 y 16. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/estado/introducción.pdf>

pueden tornarse incompatibles si la mayoría democrática llega a interferir los derechos incondicionales de los diversos agentes económicos y disponer de sus propiedades como quisiese”⁴⁸. El ejemplo más prístino de ello se dio recientemente en Honduras, cuando el golpe de Estado que expulsó al presidente Manuel Zelaya del país, en junio de 2009, demostró que las élites económicas hondureñas, apoyadas por la facción retardataria del ejército, no estaban dispuestas a tolerar un régimen político adverso a su modelo de dominación económica. El carácter democrático del gobierno importó poco frente al hecho de que estaba traicionando sus expectativas de continuidad. El que la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos hubieran manifestado su rechazo rotundo al golpe de Estado y hubieran favorecido la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), señalándolo como una amenaza para la profundización de la democracia en el continente, fueron muestras del compromiso adquirido por parte de los gobiernos de la región hacia el respeto de las formas democráticas.

Jordi Corominas, filósofo español, problematiza las contradicciones que atraviesan al discurso democrático partiendo de la idea de que nos encontramos, no sólo en un único sistema económico, sino en una única sociedad mundial. “Después de la guerra fría, los problemas globales aparecen más claramente como un problema importante en las agendas políticas, y esta perspectiva global cuestiona o replantea un sinnúmero de términos, mitos y teorías al uso tanto en ética como en filosofía social y política”⁴⁹. El avance del neoliberalismo y la globalización ha agudizado la apertura de las fronteras y ha incrementado la interdependencia entre las distintas regiones del mundo, obligando a reformular, entre otros, el concepto de Estado-nación. Dada la interconexión entre zonas geográficas, sectores económicos, grupos étnicos e identidades culturales, la democracia no puede ser concebida como un asunto que competa únicamente a un territorio o a un grupo poblacional. Compete a ese territorio y a ese grupo en tanto inserto a un engranaje más amplio: el de la sociedad mundial.

⁴⁸ Magallón, M., *op. cit.*

⁴⁹ Corominas, J., “Sociedad mundial y democracia”, *ECA*, No. 618, abril, San Salvador, 2000, p. 418.

La sociedad mundial genera disparidades cada vez más profundas entre los seres humanos y experimenta —con más fuerza cada día— la contradicción entre un régimen mundial fuera de todo control democrático y con un extraordinario poder para defender los intereses económicos, políticos y culturales de un pequeño fragmento de la humanidad, y la pervivencia de un cierto debate y juego político democrático dentro de los estados-nación con cada vez menos poder para incidir en las cuestiones más vitales (aire que se respira, comida, salud, educación, vestir) de los ciudadanos inscritos en sus fronteras⁵⁰.

J. Corominas coincide con F. J. Ibsate en subrayar la desregulación y discrecionalidad con la que operan las transnacionales y los mercados financieros, los cuales, en virtud de los multimillonarios recursos que manejan, tienen potestad para presionar a los Estados a su favor, al tiempo que se encuentran exentos de cualquier control democrático. Además de ofrecer datos que muestran cómo el mecanismo por medio del cual opera la economía global está diseñado para favorecer a las élites empresariales a costa de la pauperización de la mayoría —en una línea de análisis semejante la sostenida por M. Rojas— Corominas expone evidencias de esta disparidad en los rubros de: población, salud, diferencias de género, cultura, tecnología, violencia y ecología⁵¹. La antidemocracia que caracteriza a las relaciones internacionales no sólo afecta particularmente a regiones como Centroamérica, sino que impone a la democratización en el área derroteros directamente proporcionales con el tamaño de las desventajas de su ubicación dentro del orden mundial. Las inquietudes planteadas por L. A. González al respecto continúan estando vigentes.

Si la globalización, como proceso de reestructuración del orden económico internacional y como proceso de mundialización de la economía capitalista, supone una reasignación del lugar de los países periféricos en el mercado mundial, la pregunta que queda en pie tiene que ver —para quien analiza desde un país como El Salvador— con el lugar de los países centroamericanos en dicho mercado. ¿Aspira la región centroamericana a convertirse, en conjunto y en cada uno de los países que la conforman, en un bloque industrializado? ¿Reúne la región las condiciones mínimas para ello, comenzando con las de su propia integración? ¿No estará Centroamérica destinada a ocupar, como hasta ahora, un lugar de tercera (¿o cuarta?) clase en el sistema económico mundial? Estas son preguntas insoslayables de cara al posicionamiento de la región centroamericana en el proceso de globalización⁵².

⁵⁰ *Idem.*

⁵¹ *Ibid.*, p. 426 y ss.

⁵² González, L. A., “Globalización y neoliberalismo”, *op. cit.*, p. 57.

Desde nuestra preocupación específica, que es comprender la transformación política experimentada por El Salvador en las décadas recientes, a las preguntas de L. A. González añadimos la relativa a ¿cuál es la naturaleza de la transición a la democracia en un Estado tradicionalmente frágil y dependiente como el salvadoreño? Y más aún ¿qué tipo de democracia debe éste consolidar, inserto como está en un ajedrez internacional de suyo antidemocrático? ¿Será la democracia neoliberal el único camino posible para El Salvador, tal como lo sostuvo y lo puso en práctica ARENA a lo largo de las dos largas décadas que duró la posguerra salvadoreña?

1.4 Democracia electoral y transición neoliberal en El Salvador

En el primer apartado hicimos referencia a la transición política y la democratización como conceptos fundamentales de la terminología acuñada durante los años noventa y dos mil, tanto por académicos e intelectuales, como por políticos y líderes sociales. Quizá las palabras escogidas por Rubén Zamora —político y socialcristiano salvadoreño— para describir la etapa inaugurada por El Salvador con la firma de los Acuerdos de Paz resuman bien lo que quisimos explicitar: “Parafraseando aquel famoso dicho de Régis Debray sobre ‘la revolución en la revolución’, yo diría que en esta etapa lo que hay es una ‘transición en la transición’. La complicación consiste precisamente en eso: coinciden una transición de tipo histórico, más estructural, y la transición más inmediata, de la guerra a la paz”⁵³. La transición histórica fue la transición hacia la democracia política. La transición coyuntural consistió —como lo explica el autor— en el fin de la guerra y el ingreso del FMLN al sistema de partidos. Ambos procesos transicionales contribuyen a explicar por qué los sectores vivos de la sociedad salvadoreña adoptaron discursos democráticos como guías de su propio quehacer y raseros para medir la actuación de los otros. La otra parte de la explicación

⁵³ Entrevista realizada por la *Revista Envío*, No. 123, enero, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, 1992. Disponible en: <http://www.envio.org.ni/articulo/2296>

hay que buscarla en la atmósfera pro-democrática que empezó a respirarse en el mundo a raíz del derrumbe de la URSS.

Como hemos apuntado, el discurso pro-democrático producido en el ámbito local entroncó con el corpus de reflexiones en torno de las transiciones políticas y la consolidación de la democracia que constituía entonces la tendencia dominante. Tanto en el sentido histórico como en el teórico, los procesos de democratización centroamericanos se vincularon con las demás democratizaciones latinoamericanas. Desde el punto de vista histórico, la democratización constituyó una tendencia gubernamental que ha marcado el rumbo de nuestro continente a lo largo de las tres últimas décadas. No en vano los aspectos relativos al fortalecimiento de la institucionalidad y a la profundización de la democracia se convirtieron en temas obligados de las agendas políticas y las promesas de campaña a lo largo y ancho de Latinoamérica. En ese sentido, no se debe perder de vista que cada proceso de democratización ocurrió de acuerdo con las particularidades propias de cada país, dando de sí matices específicos, únicos e irrepetibles. Desde el punto de vista teórico, existe un considerable esfuerzo de comprensión, análisis y medición de la transición y la consolidación de la democracia como hechos históricos. Los ‘transitólogos’ empezaron a hablar de transición a la democracia a inicios de la década de 1980, cuando las dictaduras del sureste europeo y el Cono Sur (entre otras en el orbe) empezaron a dar paso a gobiernos establecidos por medio de mecanismos electorales.

Indagar acerca de esto en el contexto centroamericano ofrece la particularidad de que la consolidación de la democracia empezó a darse en el Istmo justo después de la caída del muro de Berlín, e incluso fue posible en buena medida debido a la transformación mundial que ese acontecimiento produjo. En el caso de El Salvador, la democratización consistió en un proceso de reacomodo del sistema político y de reformulación del modelo de dominación de las élites oligárquicas. Dicho proceso ocurrió simultáneamente al derrumbe del mundo socialista y el necesario replanteamiento al que a partir de ello se vio obligada la izquierda en todo el orbe, por un lado, y a la entronización del neoliberalismo como eje vertebrador del

relanzamiento de la hegemonía capitalista a nivel mundial, por otro. Esa coincidencia permitió al partido formado por la élite empresarial Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA) consolidarse a través del sistema electoral fundado durante la etapa bélica, en la década de 1980, y desarrollar el modelo neoliberal a lo largo de la etapa posbélica, durante los años noventa y dos mil. De ahí que coincidamos con el académico y político salvadoreño Hato Hasbún en su definición de la transición salvadoreña como una *transición neoliberal*⁵⁴.

Los capítulos II, III y IV del presente trabajo proponen una reconstrucción de la historia reciente de El Salvador, destacando tres aspectos que consideramos fundamentales para comprender la naturaleza y evolución de la transición política ocurrida en el país a partir del golpe de Estado de 1979 que marcó el quiebre del régimen militar, devino en el estallido de la guerra civil y el inicio de la edificación del actual andamiaje jurídico-institucional, y culminó con el arribo del candidato del FMLN al Ejecutivo en las elecciones presidenciales de marzo de 2009. Esos aspectos son: i) el protagonismo de los Estados Unidos en la implementación del sistema político en virtud del cual El Salvador empezó a ser reconocido por sus logros en materia de democracia electoral durante la década de los noventa; ii) el impacto de la metamorfosis experimentada en el orden geopolítico a finales del siglo XX sobre el proceso sociopolítico salvadoreño; y iii) la coincidencia entre la reconfiguración del sistema de dominación mundial y la construcción de la hegemonía del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ambos proyectos sostenidos sobre dos pilares: el neoliberalismo y la democracia electoral.

Más que emprender un esfuerzo historiográfico, procuramos situarnos en el plano de la interpretación de los relatos históricos que actualmente predominan en la academia salvadoreña respecto del inmediato pasado del país, con el objeto de arrojar elementos que contribuyan a la discusión sobre los supuestos en los cuales se basan y los enfoques desde los cuales tales discursos de la transición se producen. En ese

⁵⁴ 2º parte de la entrevista realizada para esta investigación el 18 de diciembre de 2008, en enlace vía internet, México-San Salvador.

sentido, el politólogo salvadoreño Álvaro Artiga-González, en un artículo sobre la Ciencia Política en El Salvador, establece una división nítida entre los enfoques ‘politológico’ y ‘sociológico’ como las dos perspectivas predominantes en las ciencias sociales salvadoreñas⁵⁵. Se trata de una división que, a grandes rasgos, encuentra su correlato en las posiciones contrapuestas que frente a la democracia sostienen ‘minimalistas’ y ‘maximalistas’ en el ámbito latinoamericano y que, en última instancia, remite a formas opuestas de concebir la relación entre la política, la economía y la sociedad, como esferas relativamente independientes o como aspectos indisolublemente imbricados.

El debate en torno de las posibilidades de la democracia en Latinoamérica ha dado lugar a una multiplicidad de posturas. Filósofos, historiadores, sociólogos y politólogos —“transitólogos” inclusive— se han ocupado de investigar, teorizar, explicar, prescribir y predecir la realidad latinoamericana adoptando los conceptos de *transición, consolidación y calidad de la democracia* como referentes. El predominio de las posiciones “politicistas” en el debate, especialmente durante las décadas de 1990, abrió paso, entre otras cosas, al planteamiento de una “transitología” como “Ciencia o Arte de la democratización”⁵⁶, interesada en dar cuenta de cuándo y por qué se inicia una transición a la democracia, qué las define y qué las caracteriza, quiénes las obstaculizan y quiénes posibilitan su avance y consolidación. Lo característico de esta perspectiva teórica sería el esfuerzo por explicar lo político por lo político mismo, en función de los actores y las instituciones que se encargan de gestionar esa esfera, con relativa independencia de las demás dimensiones de la realidad.

⁵⁵ Artiga-González, A., “La Ciencia Política en El Salvador...”, *op. cit.*, *Diferencias internas más importantes dentro del ámbito de la politología salvadoreña*. En este texto, el autor menciona la diferencia generacional existente entre politólogos y ‘sociólogos’ como una de las razones de las diferencias conceptuales entre ambos grupos de académicos. Aquí deseamos el aspecto generacional y damos énfasis a las escuelas y tradiciones a las que los investigadores nos adscribimos para dar cuenta de las diferencias de enfoque. Tanto dentro como fuera de El Salvador, las diferencias conceptuales son palpables también en las nuevas generaciones.

⁵⁶ Schmitter, P., “Transitología: la Ciencia o el Arte de la Democratización”, *Arenas. Revista sinaloense de Ciencias Sociales*, Primera Época, núm. 2, abril-septiembre, 1997, México, pp. 13-15.

Frente a ese “politicismo” reaccionaron autores de variopintas procedencias, que empezaron a llamar la atención sobre lo que consideraron un enfoque demasiado reducido. A su juicio, el entusiasmo despertado por la transición a la democracia condujo a un sobredimensionamiento de la esfera política, a costa de una invisibilización de las determinantes económicas, sociales, jurídicas y culturales. Se trata, en resumen, de la discusión entre la forma “minimalista” y la forma “maximalista” de entender la democracia y de posicionarse, por tanto, frente a la transición hacia ella.

Si nos atenemos a la definición procedimental o “minimalista” de democracia y la comprendemos como un engranaje de instituciones encargado de regular la competencia electoral entre los diferentes actores políticos para acceder al poder del Estado y gobernar una sociedad, *transición a la democracia* puede definirse como el proceso mediante el cual una sociedad x, que carece de una estructura institucional que garantice el funcionamiento de mecanismos democráticos, va alcanzando cada vez mayores niveles de democratización hasta llegar a constituir un *régimen político democrático*. El problema de la democracia se circunscribe, desde esta perspectiva, al establecimiento de unas determinadas reglas del juego y a las garantías para su cumplimiento, pues de ese modo estarían asegurados los mecanismos para la representación de las diversas fuerzas sociales y las diversas ideologías. De ahí la denominación de *democracia representativa*.

La posición “maximalista” considera insuficiente esta manera de concebir la democracia argumentando que el correcto funcionamiento de mecanismos, como por ejemplo el electoral, no garantiza la mejoría de las condiciones de vida de las mayorías y, por tanto, la democracia *procedimental* o *representativa* no lleva necesariamente a una democracia *social* o *sustantiva*, en la que todos los ciudadanos puedan vivir y ser realmente considerados como tales. Quienes pugnan por esta definición amplia de democracia aducen, además, que la persistencia de las desigualdades socioeconómicas en América Latina fragiliza todo proceso de democratización, pues las estructuras

institucionales que logran erigirse se hallan cimentadas sobre bases endeble que terminan, más temprano que tarde, siendo erosionadas⁵⁷.

La necesidad de subrayar la contraposición entre estas dos visiones viene dada porque cada una entraña una epistemología y una concepción de sociedad —por tanto una ética— distinta. La defensa de la democracia procedimental se ha hecho sobre todo desde la Ciencia Política y bajo ella subyace una reivindicación de la especificidad disciplinaria para comprender las diversas realidades sociales e históricas. La ética no se encuentra dentro su campo de interés. Desde ese punto de vista, la construcción del conocimiento científico social debe hacerse recurriendo a las metodologías propias de cada disciplina: al economista le corresponde hacer ciencia económica, al sociólogo sociología, al historiador historia y al politólogo Ciencia Política. El institucionalismo salvadoreño pretende trabajar al margen de la ética, ocupándose de cómo son los procesos, más que de cómo deberían ser. Pero lo cierto es que ese ocuparse de procesos políticos entraña un “modelo”, una idea previa de cómo esos procesos deberían de producirse. La suya es también una apuesta ética y una decisión política, no sólo epistemológica.

La defensa de la democracia social y económica, o sustantiva, se ha hecho sobre todo desde posiciones teóricas que cuestionan la compartimentación del conocimiento, poniendo de relieve que en la realidad los diferentes aspectos se encuentran imbricados de tal suerte que resulta imposible comprender a cabalidad uno de ellos desvinculado de los demás. En estos enfoques la ética adquiere un lugar central. La democracia debe estar puesta al servicio de que cada vez más ciudadanos sean tratados como tales y vivan mejor. Su apuesta supone modificaciones profundas dentro del todo social. En ambos casos se ponen en juego también posiciones

⁵⁷ Horacio Cerutti cuestiona las teorías de la transición a la democracia desde una perspectiva epistemológica, haciendo hincapié en el olvido de la dimensión histórico-estructural del que éstas adolecen. Ver: Cerutti, H., *Democracia e integración en nuestra América* (ensayos), Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2007. En ese mismo tenor crítico, un autor que se ha encargado de desarrollar el análisis histórico en contra posición con el “politicismo transitológico” es Atilio Borón. Ver: Borón, A., *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, 2003. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/estado/estado.html>

ideológicas, porque ninguna ciencia ni ninguna teoría es aséptica ni puede operar fuera del entramado de intereses que atraviesa a la polis. Desde nuestro criterio, maximalismo y minimalismo son modos de situarse frente a la democracia y son también modos de situarse frente al sistema capitalista y frente al Nuevo Orden Mundial. El minimalismo propone un sistema político que no confronta al capitalismo. El maximalismo lo confronta en diversos niveles de radicalidad.

El concepto de *transición a la democracia* remite, pues, a la tensión no resuelta entre dos polos: en qué ha consistido efectivamente la democratización en América Latina, por un lado, y cómo ésta ha sido pensada, qué se ha esperado y qué se continúa esperando de ella, por otro. Se trata de una tensión en la cual se ponen en juego dos cuestiones de primera importancia para nuestro continente: ¿qué tipo de sociedad queremos habitar y qué tipo de conocimiento de lo social e histórico queremos construir en América Latina?⁵⁸ El hecho de que los procesos de democratización en Centroamérica se hayan dado aparejados de la implementación de la receta neoliberal no es azaroso. ¿Cómo es que se da y en qué consiste ese maridaje? ¿Qué reflexiones nos suscita? Es lo que nos proponemos responder a lo largo de las siguientes páginas.

Nuestra tesis es que el proceso salvadoreño refleja la eficacia de la instrumentalización de la democracia electoral en manos del neoliberalismo. Pero muestra también cómo la instauración de la *democracia neoliberal* en América Latina ha sido problemática y ha tenido que enfrentar resistencias planteadas desde el movimiento popular. En el caso salvadoreño, el “desafío revolucionario” forzó a la apertura de un sistema político cerrado a la participación de las fuerzas de la izquierda. En ese sentido, coincidimos con Artiga-González cuando afirma que sólo la sumatoria de diversos elementos, tales como: la imposibilidad de conseguir un crecimiento económico sostenido por parte del presidente Napoleón Duarte durante los ochenta, los intereses de Estados Unidos y de los demás países de la región en el área centroamericana, el empate miliar entre el FMLN y las Fuerzas Armadas de El Salvador,

⁵⁸ También Abelardo Villegas vincula la discusión en torno de la democracia con la pregunta acerca del tipo de sociedad deseable para América Latina, *op. cit.*, Capítulo VII “El modelo deseable”, p. 99.

la emergencia de ARENA como fuerza partidaria enarbolando un proyecto neoliberal y el fin de la guerra fría, coadyuvaron a la salida negociada del conflicto y al inicio de la consolidación de la democracia electoral en el país.

A nuestro juicio, el hecho de que las ex fuerzas revolucionarias convertidas en partido político a partir de 1992 sean hoy en día gobierno, evidencia que en El Salvador la tensión dialéctica entre ‘minimalismo’ y ‘maximalismo’ ha dado de sí un devenir sociopolítico y económico complejo, contradictorio y conflictivo. En tal devenir es posible constatar el impacto de los acontecimientos y corrientes más influyentes del continente, así como las transformaciones sufridas por los principales actores políticos salvadoreños al calor de los cambios a nivel nacional e internacional.

CAPÍTULO II. La ‘coyuntura de definición’ (1979-1981) como el inicio de la transición hacia la democracia electoral en El Salvador

A la altura de 1982, instaurado ya el sandinismo en el poder en Nicaragua y planteadas ya las guerras civiles en Guatemala y El Salvador, el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas consideró parciales los análisis que intentaban dar cuenta de la “crisis centroamericana” en términos eminentemente políticos o eminentemente económicos, pues el origen de la convulsa situación que caracterizó al Istmo en esos años sólo puede entenderse tomando en cuenta ambos aspectos.

Tal como ocurrió en el resto de Latinoamérica, en las inmediaciones del siglo XX en Centroamérica se llevaron a cabo esfuerzos industrializadores y dinamizadores de la economía: se implementó tecnología de avanzada en la producción agrícola, se diversificó la producción y se incentivó el crecimiento y modernización de las áreas manufactureras y de servicios. Los sistemas bancarios y financieros incrementaron su tamaño y cobertura, al tiempo que el Estado tuvo que ser amplificado. Como resultado de estas reformas, durante las décadas 1950 y 1960 el Istmo centroamericano gozó de una prosperidad económica sin precedentes. No obstante, las tradicionales relaciones sociales de producción, basadas en la sobreexplotación del campesinado, se mantuvieron intactas e incluso fueron agravadas por la expropiación de parcelas de subsistencia para la expansión de los monocultivos de exportación (café, azúcar, etc.). Así fue como una ingente cantidad de campesinos fue arrojada al sub o al desempleo, incrementando la miseria al interior de los pequeños países de la región. Así define Torres Rivas a las sociedades centroamericanas, en tono comparativo con el resto del continente:

Las experiencias populistas en el cono sur proveen ejemplos de control y canalización de los conflictos reivindicativos. Las de Venezuela y México, por ejemplo, ofrecen experiencias no siempre sutiles de cooptación de la clase obrera y de otros grupos. En América Latina, toda experiencia democrática conocida se ha apoyado siempre en dos clases de fenómenos; satisface parcialmente algunas demandas de algún grupo social y reglamenta la participación electoral para incluir una oposición tolerada. En Centroamérica, con excepción de Costa Rica, estos hechos no se han producido. Son definitivamente sociedades bloqueadas de arriba abajo, con un sistema de dominación

que reconstituye constantemente la exclusión de nuevas fuerzas como condición de permanencia. Esta exclusión se realiza en forma violenta, y a veces, como negación directa de su propia legalidad constitutiva¹.

El académico y político salvadoreño Román Mayorga Quiróz coincide con este diagnóstico al cuestionar la reticencia de las clases dominantes centroamericanas a modernizarse, incluso dentro de las exigencias y parámetros propios del desarrollo capitalista:

No fueron, en absoluto, capaces de plantear un proyecto de nación, un modelo de sociedad, o marco general de la misma, que fuese aceptable a las mayorías y diferente al que dichas oligarquías habían mantenido tradicionalmente. Siguieron aferradas a la ideología dominante que las estructuras engendraron, a valores abstractos de supuesta validez universal, a modelos implícitos de sociedad abstraídos de realidades completamente distintas, sin caer en la cuenta de la falta de historicidad de sus concepciones y de manera que, prácticamente, resultaba indiscutible el principio de inviolabilidad de sus privilegios².

Esta exclusión sostenida en el ámbito económico se sostuvo también en el ámbito político. El escritor y político salvadoreño David Escobar Galindo lo resume asegurando que: “Nosotros no logramos establecer un manejo dinámico del poder. Ese manejo tiene que ser fundamentalmente político, porque las fuerzas sociales y económicas se conducen en el escenario político. Para eso están los partidos. Unos representan más a unas fuerzas y otros a otras. Al no aflorar esa representación, las fuerzas desnudas protagonizaron ese dinamismo con toda la crudeza”³.

Temerosas de la irrupción del movimiento popular que empezaba a articularse en torno de los nuevos actores que los recambios económicos fueron produciendo⁴, las

¹ Torres Rivas, E., “¿Quién destapó la caja de Pandora? (Reflexiones sobre la crisis y los actores del conflicto en Centroamérica)”, en *La crisis centroamericana*, EDUCA-FLACSO, San José, 1987, p. 37.

² Mayorga Quirós, R., “Centroamérica en los años ochenta”, recogido en: *Centroamérica en crisis*, El Colegio de México, 1980, pp.209-226.

³ Bosco Martín, J., “Estamos aprendiendo a ejercer bien el poder”, entrevista a David Escobar Galindo, “Acuerdos de Paz 1992-2002”, *El Diario de Hoy*, San Salvador, lunes 21 de enero de 2002. Disponible en: <http://www.elsalvador.com/noticias/2002/1/21/nacional/nacio11.html>

⁴ Shafik Handal, líder del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), describe el surgimiento de esos nuevos actores en El Salvador del modo siguiente: “Surgió una clase obrera más calificada [...] un proletariado y semiproletariado agrícola muy resentido por su reciente proletarización y, por tanto, muy explosivo; un enorme sector marginal urbano producto de la emigración rural provocada por el desarrollo del capitalismo en la agricultura; y un importante sector pequeñoburgués intelectual, también marginal, nacido de la expansión

clases dominantes optaron por modernizar no el sistema político, sino el aparato represivo. Esta contradicción entre modernización económica de las sociedades centroamericanas de mediados del siglo XX en función de una inserción más competitiva al capitalismo y conservación del tradicional sistema de dominación económica, política y social es el fenómeno que se encuentra en la base del estallido de la crisis centroamericana.

La perspectiva *politicista* adoptada por el politólogo salvadoreño Ricardo Córdova Macías no obsta para que éste reconozca los factores socioeconómicos como parte de las causas que originaron el conflicto en El Salvador. Córdova Macías coordinó al grupo de investigadores salvadoreños que participó en una investigación patrocinada por el PNUD con el objetivo de indagar sobre el impacto de los Acuerdos de Paz en los procesos de democratización en Guatemala y El Salvador. Fruto de ello es el trabajo *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado*⁵. Aunque en la parte correspondiente a El Salvador se aclara que “el estudio es guiado por un concepto netamente político de democracia que centra su atención en los aspectos políticos de representación e institucionalización del régimen democrático [...] De allí que un análisis de la democracia social y económica queda fuera del alcance del proyecto”⁶, Córdova Macías aparece como referente cuando al reconstruir el contexto histórico se alude a la excesiva polarización económica como una de las razones del estallido de la guerra⁷.

de la educación media y universitaria, que no tiene correspondencia con las capacidades ocupacionales que el establecimiento económico nacional proporciona. Crecieron también las capas medias urbanas en general”. Entrevista recogida en: *Pueblos en armas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Entrevistas de Marta Harnecker*, Serie Popular Era, México, 1984, pp. 151, 152.

⁵ Azpuru, D.; Blanco, L.; Córdova Macías, R.; Loya Marín, N.; Ramos C. G.; Zapata, A., *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado*, Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo (IDRC)/FyG Editores, Guatemala, 2007.

⁶ Córdova Macías, R., *et al.*, “Capítulo II. La contribución del proceso de paz a la construcción de la democracia en El Salvador (1992-2004)”, *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto...*, *Ibid.*, p. 53.

⁷ “Se han identificado algunos factores socio-económicos que coadyuvaron a la crisis: Primero, el estado de pobreza en que vivía la mayoría de la población; segundo, las crecientes desigualdades sociales en la distribución del ingreso y de la riqueza; tercero, la concentración de la propiedad de la tierra y un fuerte aumento de las familias sin tierra; y cuarto, el deterioro de los salarios mínimos reales”, *Ibid.*, p. 58.

En contraste con esa posición encontramos la de su colega, el también politólogo salvadoreño Álvaro Artiga-González. Para ese segundo autor, el hecho de que la desigualdad socioeconómica se hubiera mantenido e incluso profundizado después de los Acuerdos de Paz, sin que esto hubiera reavivado el conflicto, prueba que las causas del mismo fueron eminentemente políticas, no económicas.

Llegamos a dónde llegamos, que no sabemos qué es, simplemente como resultado de los reajustes de todos los actores que estaban interviniendo en ese momento. Ahora, ¿qué es eso? Podemos estudiarlo. ¿Cómo fue ese proceso? A eso le llamamos transición. La fechamos aquí, la terminamos acá. Ahí está simbólicamente el acuerdo y lo que viene después es la implementación de unos Acuerdos y ya eso es un nuevo régimen, se acabó la transición, hay unas nuevas reglas del juego. El pacto es un nuevo régimen político y eso es lo que cambió. Por eso lo demás no iba a cambiar, porque el problema era un problema político. Yo critico la lectura de que las causas de la guerra eran la pobreza y la desigualdad. Las causas de la guerra eran políticas. Resueltas las causas políticas terminó la guerra. Las supuestas causas económicas y sociales siguieron, se empeoraron, y no hay guerra. Entonces no hay causas, si no hay efecto, esas no son las causas⁸.

Nuestra objeción frente a esta lectura es que una guerra civil no es un fenómeno que pueda explicarse apelando a una única causa. Tampoco se trata de un acontecimiento que pueda producirse mecánicamente, en cualquier momento, al margen de las circunstancias. Todo lo contrario, implica tal cantidad de recursos y tal capacidad de compromiso, sacrificio y determinación por parte de quienes deciden participar en ella, que sólo en condiciones especiales y de confluencia de diversos elementos puede ser llevada a cabo.

En su crítica a la “teoría de la legitimidad”, el politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski cuestiona el argumento de la pérdida de legitimidad como explicación del desgaste de los regímenes autoritarios. A su juicio, no es la legitimidad sino la imposición de la fuerza lo que determina la pervivencia de un régimen. Un régimen puede mantenerse vigente por largo tiempo, aún siendo ilegítimo. Lo que lo hace tambalear es la existencia de una alternativa, la expectativa albergada cada vez por más individuos y sectores sociales de construir un régimen político distinto al imperante. Desde nuestra lectura, lo que hizo explosiva la

⁸ Entrevista realizada para esta investigación el 6 de mayo de 2009 en San Salvador.

“coyuntura de definición” (1979-1981) en El Salvador fue la conjugación de la situación de injusticia estructural con la creciente convicción de amplios sectores poblacionales en la posibilidad de instituir un nuevo régimen político. Diez años después, la inexistencia de esa posibilidad, sumada al profundo desgaste y desencanto que predominó durante la posguerra, devino en el repliegue de la capacidad organizativa del movimiento popular salvadoreño y en su desarticulación. No es, pues, que los pobres de El Salvador hubieran dejado de estar insatisfechos con su pobreza. Es, entre otras cosas, que los sectores populares politizados perdieron la confianza en sus propias posibilidades de modificar su situación socio-económica.

Un régimen comienza a quebrantarse si algunos miembros del bloque gobernante buscan apoyo externo [...] Allí donde han aparecido perspectivas de una ‘apertura’, siempre estuvieron involucrados grupos gobernantes que buscaron apoyo político en fuerzas hasta entonces excluidas de la política por el régimen autoritario. Esto no significa que, una vez iniciada la liberalización, sólo sean movilizados políticamente esos socios elegidos: dada la señal, a menudo es seguida por una ola de movilización popular. Pero, a mi juicio, el primer umbral crítico en la transición hacia la democracia es, precisamente, el movimiento iniciado por algún grupo del bloque gobernante para lograr apoyo de fuerzas exteriores a él⁹.

El umbral crítico aludido por Przeworski se traspasó en El Salvador el 15 de octubre de 1979, día en el que se llevó a cabo el último de los sucesivos golpes de Estado que signaron el devenir de los gobiernos militares en El Salvador. A partir de entonces, y en virtud de la participación de nuevos actores en el campo político, el régimen salvadoreño inició una dolorosa transformación. Por eso, porque se trató de un parte aguas que cambió la correlación de fuerzas internas, posibilitando el inicio del complejo proceso que condujo a la conformación de un sistema político más plural en materia ideológica, en este trabajo ubicamos en esa coyuntura el momento iniciático de la transición salvadoreña.

Habíamos mencionado en el capítulo anterior que no existe consenso entre los observadores del caso salvadoreño respecto de cuándo fechar el inicio de la transición. Córdova Macías *et al* esbozan la polémica respecto de este punto: el golpe de Estado

⁹ Przeworski, A., “Algunos problemas en el estudio de la transición a la democracia”, en *Transiciones...* (Tomo 3), *op. cit.*, p. 92.

en octubre de 1979, el estallido de la guerra en enero de 1981, la instauración de la Asamblea Constituyente en 1982, la aprobación de la Constitución de la República en 1983, 1984 (año de la celebración de los primeros comicios regidos por la constitución de 1983) y la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992 serían las coyunturas en las que unos u otros autores ubican el inicio de la transición política en El Salvador, aludiendo a diferentes criterios. Dado que los Acuerdos de Paz posibilitaron el ingreso de la izquierda revolucionaria a la arena electoral, es enero de 1992 la fecha que ha encontrado mayor aceptación para definir el inicio de la democratización en El Salvador.

Vale la pena retomar la crítica de Rubén Zamora recogida en *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto*, según la cual:

Ubicar en 1979 el inicio de la transición democrática salvadoreña no deja de ser un contrasentido, pues implicaría afirmar la democracia con aumento de la violación sistemática de los derechos humanos, la democracia con control político castrense, la democratización con mayor injerencia de un poder externo; una cosa es iniciar una transición democrática con medidas de apertura política como sucedió en España y otra muy distinta es readecuar las instituciones políticas, como parte de una estrategia de contrainsurgencia, para sostener mejor una guerra de baja intensidad¹⁰.

Detectamos en Zamora que su preconcepto acerca de lo que la democracia debería de ser se fundamenta en las llamadas “democracias realmente existentes”. Si el rasero para evaluar los procesos de democratización centroamericanos son los sistemas políticos del Primer Mundo, parece lógico ver en el incremento de la violencia, la inestabilidad y la injerencia estadounidense contravenciones a los principios elementales de la democracia. Pero el hecho de que España quede en Europa y El Salvador en Centroamérica hace que las transiciones a la democracia en ambos países sigan trayectorias disímiles, aunque en ambos casos se cumpla aquello que los transitólogos denominan “transiciones desde gobiernos autoritarios”.

Esa diferencia radical es poco tenida en cuenta o escasamente valorada en los planteos que insisten en tomar al Primer Mundo como modelo y, a pesar de ello,

¹⁰ Zamora citado en Córdova Macías *et al*, *Construyendo la democracia... op. cit.*, p. 64. La Guerra de Baja Intensidad (GBI) se aborda en el tercer sub apartado de este capítulo.

analizar los procesos políticos únicamente a partir de los factores endógenos, sin considerar la relevancia del vínculo que estos guardan con los factores exógenos. Desde nuestra apreciación, no existe un tipo ideal de democracia a partir del cual todos los países puedan ser calificados. Existe una amplia gama de maneras de instaurar instituciones democráticas, de acuerdo con las posibilidades históricas, sociales, económicas y culturales de cada país. Esas posibilidades varían sustancialmente entre Europa y América Latina, tal como los propios teóricos de la transición a la democracia lo sostuvieron¹¹. Si la democracia representativa ha sido en efecto la forma política a la cual cada vez más países en el orbe han tendido a emular no es únicamente en virtud de los nobles valores e ideales democráticos —que los hay— sino sobre todo en función de determinados intereses geoestratégicos y económicos de las grandes potencias, cuya hegemonía se ha ejercido y se ejerce dentro de un orden internacional antidemocrático e inequitativo que condiciona el devenir político de los países periféricos de modos singulares.

La comparación de Zamora entre España y El Salvador como argumento para rechazar el golpe de Estado de 1979 como el origen de la transición política en este último país nos parece improcedente. Primero, porque omite el hecho que Torres Rivas resume bien cuando define a las sociedades centroamericanas como bloqueadas de

¹¹ Recordemos que la clásica obra *Transiciones desde un gobierno autoritario* es el resultado de un estudio comparativo entre las transiciones políticas en el sureste europeo y algunos países de América Latina. En su introducción a los casos europeos, Schmitter asegura que España, Portugal, Grecia y Turquía, pese a haber sido tradicionalmente marginados y haber permanecido largos años dentro de la periferia respecto de la Europa occidental, contaban con condiciones mucho más favorables para el establecimiento de la democracia que los países latinoamericanos estudiados. De acuerdo con su análisis, el que las sociedades civiles del sur europeo registraran niveles más altos de calidad de vida, alfabetización y especialización profesional y dieran cabida a una mayor diversificación de grupos reivindicativos (feministas, ecologistas, etc.) que las sociedades latinoamericanas contribuyó a que en Europa la propia sociedad ejerciera presión “desde abajo”, en pro de la ‘liberalización’ de los regímenes autoritarios. En segundo lugar, los actores políticos en el sur de Europa adoptaron un discurso favorable sobre la democracia antes que los actores latinoamericanos, entre los cuales no se había dado un enraizamiento ideológico de la misma. En tercer lugar, mientras que la Europa occidental presentaba un amplio ‘menú’ de formas democráticas que servían a los países del sur para elegir el propio diseño institucional a seguir (semipresidencialismo, parlamentarismo, etc.), América Latina contaba con un repertorio mucho más limitado, signado tanto por la influencia de Estados Unidos, como por sus propias constituciones decimonónicas. La fórmula presidencialista, bicameral, bipartidista, de votación por mayoría simple es, de acuerdo con el autor, más difícil de instrumentar y consolidar que cualquiera de las formas democráticas europeas. Schmitter, P., “Una introducción a las transiciones desde la dominación autoritaria en Europa meridional: Italia, Grecia, Portugal, España y Turquía”, en *Transiciones...* (Tomo 1), *op. cit.*, pp. 21, 22.

arriba abajo, lideradas por élites renuentes a cualquier mínima modernización del modelo de dominación. Segundo, porque separa la construcción del sistema electoral salvadoreño como componente de la *Guerra de Baja de Intensidad (GBI)* del proceso de democratización política. A nuestro juicio, ambos fenómenos no sólo no son separables, sino que el interés geoestratégico de Estados Unidos sobre su “patio trasero” presionó para la emergencia y puesta en vigencia del aparato electoral con el que actualmente cuenta El Salvador.

De acuerdo con Artiga-González, la transición a la democracia en El Salvador ocurrió a lo largo de los años ochenta y consta de dos elementos fundamentales: la guerra civil y la celebración de elecciones periódicas. A tal caracterización nosotros agregamos: sin guerra civil y sin intervención estadounidense el bloqueo de la sociedad salvadoreña no hubiera podido fracturarse hasta dar cabida a la inserción de la izquierda revolucionaria en la configuración del sistema político que hoy conocemos. Es comprensible que un demócrata de la talla de Rubén Zamora se resista a aceptarlo, pero lo cierto es que lo paradójico, lo condicionado, lo conflictivo, lo sangriento y lo contradictorio forman parte inextricable del camino de El Salvador hacia la democracia política. Eso es justamente lo que procuramos evidenciar en la reconstrucción de los hechos que proponemos a continuación.

Lo que este capítulo pretende poner en evidencia puede resumirse en los siguientes puntos:

- i) El por qué fechar en 1979 el origen de la transición a la democracia política en El Salvador.
- ii) La crisis de hegemonía que fracturó la alianza oligárquico-militar y dio paso a la emergencia de tres proyectos de nación, política y militarmente enfrentados entre sí: uno conservador, uno revolucionario y uno reformista-pro injerencista. La interacción de estos tres proyectos determina el devenir político de El Salvador a lo largo de toda la década de 1980.

- iii) La cantidad de recursos invertidos por Estados Unidos en la estrategia anticomunista implementada en Centroamérica convirtió a la primera potencia mundial en actor interno del conflicto salvadoreño durante la década de 1980. Aunque el intervencionismo estadounidense en el Istmo posee una raigambre histórica, la intensidad con la que se produjo en los ochenta (como respuesta a lo que la Casa Blanca consideró la amenaza expansionista de los proyectos revolucionarios cubano y nicaragüense) condicionó la reconfiguración del Estado salvadoreño.

2. La crisis de hegemonía como rasgo constitutivo de la coyuntura de definición

1979 fue decisivo para el proceso que años después daría en llamarse transición a la democracia en El Salvador. En octubre de ese año, un grupo constitucionalista al interior de las Fuerzas Armadas denominado “Juventud Militar” llevó a cabo un golpe de Estado contra el ala conservadora del ejército que detentaba el poder. En alianza con los sectores progresistas de la sociedad salvadoreña los líderes de ese grupo de militares progresistas instauraron la Primera Junta Revolucionara de Gobierno (JRG). Se trató del último golpe de Estado dentro de una tradición de 52 años de gobiernos militares impuestos por medio de elecciones fraudulentas o golpes de Estado. La lista de presidentes desde 1931 —año en el que el Ejecutivo pasó a manos militares— hasta 1982 —momento en el que la JRG cedió el poder a un presidente civil— muestra cómo las Fuerzas Armadas de El Salvador retuvieron el poder a lo largo de esos años, con contadas y efímeras excepciones:

Cuadro 2.1: Presidentes militares de El Salvador a lo largo del siglo XX¹²

¹² Fuente: Pág. web Casa Presidencial, República de El Salvador. Presidentes (a excepción del primero, los paréntesis son añadidos): <http://www.casapres.gob.sv/presidentes/index.htm>

1931-1935	General Maximiliano Hernández Martínez
1934-1935	General Andrés Ignacio Menéndez (Presidente provisorio)
1935-1944	General Maximiliano Hernández Martínez
1944	General Andrés Ignacio Menéndez
1944-1945	Coronel Osmin Aguirre y Salinas
1945-1948	General Salvador Castaneda Castro
1948-1950	Consejo de Gobierno Revolucionario
1950-1956	Teniente Coronel Oscar Osorio
1956-1960	Teniente Coronel José María Lemus
1960-1961	Junta de Gobierno de El Salvador (3 militares y 3 civiles)
1961-1962	Directorio Cívico Militar de El Salvador (2 militares y 3 civiles)
1962	Dr. Rodolfo Cordón
1962-1967	Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera
1967-1972	General Fidel Sánchez Hernández
1972-1977	Coronel Arturo Armando Molina
1977-1979	General Carlos Humberto Romero
1979-1980	Primera Junta Revolucionaria de Gobierno (2 militares, 3 civiles)
1980	Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno (2 militares, 3 civiles)
1980-1982	Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno(2 militares, 3 civiles)

No en vano la investigadora mexicana Irene Sánchez denominó al período que va de octubre de 1979 a marzo de 1980 “coyuntura de definición”¹³. Eran tiempos convulsos. La izquierda revolucionaria hacía sentir la fuerza que había venido acumulando a lo largo de la década del setenta por medio de huelgas, cierres de calles, tomas de tierras, fábricas y radiodifusoras, incendios, manifestaciones masivas, pintas callejeras, pronunciamientos públicos, acciones de propaganda, coaliciones políticas, detonaciones de bombas, secuestros de empresarios y de altos funcionarios locales y extranjeros, y operativos armados. Por su parte, la facción más dura de la Fuerza Armada y los aparatos represivos respondían a la movilización popular ejerciendo el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. El cronista salvadoreño Rafael Menjívar Ochoa termina su descripción del 16 de octubre de 1979, un día después de haberse consumado el golpe, afirmando: “Ese día fue una muestra de lo que serían los quince

¹³ Ver Sánchez, I., *Tiempo político y movimientos armados. El FMLN en El Salvador 1970-1992*, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 1997, pp. 55-60.

meses siguientes: los hechos eran tantos, y tan diversos, que parecía que todo ocurría al mismo tiempo, en una vertiginosa secuencia de causas y efectos”¹⁴.

Tres fraudes electorales consecutivos, en 1972, 1974 y 1977, en los que la alianza oligárquico-militar arrebató el triunfo a la oposición partidaria aglutinada en la Unión Nacional Opositora (UNO) —surgida en los años sesenta y formada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR, de corte socialdemócrata), y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS)— habían puesto de manifiesto la renuencia del modelo de dominación a aceptar su resquebrajamiento. Las posibilidades de lograr la inclusión de las demandas políticas, económicas y sociales de las mayorías populares en un sistema estructuralmente injusto¹⁵ y políticamente excluyente apelando a la vía electoral se vieron clausuradas. Las posiciones moderadas que apelaban a la modificación gradual del sistema, respetando los caminos institucionales, perdieron fuerza al tiempo que la radicalización de las posiciones de la izquierda y la derecha llevaban a una situación de extrema polarización.

El sector progresista que apoyó el golpe de Estado de 1979 y contribuyó a formar la primera Junta de Gobierno —dentro del cual destacaron cuadros de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)— tuvo como motivación fundamental abrir en el espacio político la posibilidad de absorber las demandas populares que se hicieron sentir con fuerza inusitada durante los últimos setenta, con el fin de evitar el clímax insurreccional y frenar la implacable respuesta represiva que la población, organizada y no organizada, estaba padeciendo. Se trataba, en definitiva, de evitar el estallido de la guerra civil, que se veía venir como algo inminente. La crisis política ponía en evidencia el agotamiento del régimen. La emergencia de la Junta

¹⁴ Menjívar Ochoa, R., *Tiempos de Locura. El Salvador 1979-1981*, FLACSO-El Salvador, San Salvador, pp. 121, 122. El autor desarrolla una exposición actualizada acerca de esta coyuntura. Para una versión formulada al calor de los propios acontecimientos, Cabarrús, C. R., *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983.

¹⁵ Para una síntesis explicativa del proceso de acumulación originaria del capital en El Salvador, articulado en torno de la producción y agroexportación del café, ver los primeros capítulos de: Gordon, S., *Crisis política y guerra en El Salvador*, Siglo XXI, México, 1989. Para un análisis de la situación económica del campesinado salvadoreño en las décadas previas al conflicto armado, ver: Cabarrús, C. R., *Ibid.*, específicamente el primer apartado de la segunda parte: “el apremio campesino”.

Revolucionaria de Gobierno fue síntoma de la caducidad de la vieja alianza oligárquico-militar y apuntaló la instauración de un sistema político más cercano a la democracia representativa. No sin chocar frontalmente, tanto con la posición anti-reformista y beligerante de la izquierda revolucionaria que desconfiaba de cualquier iniciativa emanada de la tradicional estructura de poder, como con las fuerzas reaccionarias, cuyo anticomunismo virulento condenaba a muerte a cualquiera que osara a levantar una voz disidente. Alarmada por la efervescencia social de finales de los setenta y por el fortalecimiento progresivo y veloz de las organizaciones guerrilleras, la extrema derecha abogaba por la eliminación física de toda manifestación de oposición, sin distinciones ni matices, con el objeto de restablecer un *status quo* en franca decadencia¹⁶.

2.1 La irrupción de la izquierda revolucionaria

Debido a que el modelo de dominación operaba con igual rigidez sobre las mayorías en todos los ámbitos de la sociedad —el económico, el político y el cultural— afectaba de modos diversos a los diferentes sectores que la conformaban. La lucha contra el autoritarismo se convirtió en una de las grandes banderas que unificó a un movimiento multclasista y variopinto, compuesto principalmente por campesinos, en menor cantidad obreros e importantes sectores de las capas medias, entre los cuales surgieron liderazgos que impulsaron la nueva avanzada en proceso de unificación. En el caso centroamericano resulta erróneo suprimir la esfera económica de la esfera política a la hora de valorar las causas de la crisis porque la identidad entre Estado, ejército y oligarquía, propia de las estructuras sociopolíticas en el Istmo, convirtió a la lucha de clases en una lucha contra el Estado y por ende en una lucha contra todo el sistema.

¹⁶ Sara Gordon lleva a cabo un recuento pormenorizado de los acontecimientos que precedieron al estallido de la guerra civil. Respecto de las medidas que tomara el General Carlos Humberto Romero —Presidente que sufrió el golpe de Estado perpetrado por la “Juventud Militar”— para legalizar la represión y violación sistemática de los Derechos Humanos con la que se daba respuesta al brote insurreccional, la autora afirma: “Aunada a las reformas al Código Procesal Penal, la Ley de defensa y garantía del orden público, favorecería la generalización de lo arbitrario. De este modo, la burguesía oligárquica multisectorial hacía pagar al resto de la sociedad su propia incapacidad de transformación y de modernización”, *op. cit.*, pp. 237 y 238.

La oposición era heterogénea en términos del origen de clase, pero lo era también en términos ideológicos: representantes de la socialdemocracia, del socialcristianismo y del marxismo-leninismo, entre otras corrientes, contribuyeron a engrosar las filas de un movimiento popular cada vez más descontento con el *status quo*. No obstante, desde el punto de vista de las vanguardias revolucionarias, no había lugar para reformas. La transformación sólo podía ser radical.

Al carácter anti autoritario de las luchas revolucionarias hay que añadirle el carácter antiimperialista que en cada nación centroamericana adquirió un significado particular, en relación con la naturaleza de la dominación imperialista que históricamente había sido ejercida, pero que constituyó un rasgo esencial en la defensa de la identidad nacional en contra de la conducta del gobierno estadounidense tradicionalmente proclive a favorecer a las oligarquías locales, proteger las dictaduras, salvaguardar ciertos intereses geopolíticos y garantizar la reproducción de un capital extranjero que fue colonizando sectores fundamentales de las economías locales.

La articulación de los sectores que desde distintas perspectivas preconizaban la transformación de la sociedad terminaron por confluir en un movimiento revolucionario que en Centroamérica desembocó “en lo que se conoce como ‘guerra popular revolucionaria’ que es la respuesta popular a una crisis social, cuyo carácter revolucionario está dado justamente por la naturaleza *predominantemente* militar del enfrentamiento político”¹⁷. En El Salvador, las organizaciones político-militares que empezaron a surgir a partir de 1970 proponiendo una transformación radical del modelo social por la vía armada y reivindicando programas marxista-leninistas, de liberación nacional, antifascistas y antiimperialistas fueron¹⁸:

¹⁷ Torres Rivas, E., *op cit.*, p. 50.

¹⁸ Un estudio de la historia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) puede verse en: Martín Álvarez, A., *De movimiento de liberación a partido político. Articulación de los fines organizativos en el FMLN salvadoreño (1980-1992)*, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004. Para el análisis de la evolución de las organizaciones político-militares salvadoreñas consultar el Capítulo III, pp. 117-169. Disponible en: <http://www.ucm.es/BUCM/tesis/cps/ucm-t28083.pdf>

- I) **Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)**, fundadas en 1970 por el legendario ex secretario general del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) , Salvador Cayetano Carpio o comandante Marcial, junto a un grupo de cuadros del mismo partido, quienes decidieron desprenderse de esa institución debido a la renuencia que primaba en ella para aceptar el camino de las armas¹⁹ . Inspirados en la experiencia china, adoptaron la concepción maoísta de revolución, conocida como “guerra popular prolongada”: tras una larga lucha militar y política, la alianza obrero-campesina debía hacer suyas todas las herramientas de combate y hacer avanzar la revolución desde el campo hacia la ciudad. Las apodadas “F” lograron fuerte arraigo entre la población campesina y estudiantil y constituyeron al Bloque Popular Revolucionario (**BPR**), —junto con el FAPU, las más grandes coaliciones de organizaciones sociales dentro del movimiento popular— como su frente de masas. Durante la guerra, encontraron en el departamento de Chalatenango su bastión fundamental.
- II) **El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)**, fundado por disidentes de las Juventudes Demócrata Cristianas y de las Juventudes del Partido Comunista y por cuadros de las organizaciones estudiantiles, hicieron su aparición en 1972²⁰. Adoptó una concepción militarista e insurreccionalista de lucha que lo llevó a destacarse por sus espectaculares operativos militares, buscando la pronta toma del poder. Tal concepción encontró detractores que terminaron por independizarse

¹⁹ Textos que testimonian la lucha de las FPL: Carpio, Salvador Cayetano, “Marcial”, *Nuestras montañas son las masas. Documentos escritos de la revolución salvadoreña*, publicado por Antonio Morales Carbonell, Viena, Edition Del Keil, 1999; y Sánchez Cerén, Salvador, “Leonel González”, *Con sueños se escribe la vida. Autobiografía de un revolucionario salvadoreño*, Ocean Sur, 2008.

²⁰ Un testimonio clásico del proceso revolucionario salvadoreño emanó de una de las dirigentes del ERP: Martínez, A. G., *Las cárceles clandestinas de El Salvador*, Universidad de Sinaloa, México, 1980. En él se narra la experiencia de tortura que vivió la autora, junto con otros presos políticos, a manos de las fuerzas represivas del Ejército salvadoreño en 1976. Se explica también el operativo de secuestro de un prominente empresario, llevado a cabo por el ERP para exigir la liberación de Ana Guadalupe Martínez.

de la organización, dejándola en una situación de relativo aislamiento hacia mediados de los setenta. Constituyó las Ligas Populares 28 de febrero (**LP-28**) como frente de masas, con presencia en organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles. Adoptó al departamento de Morazán como retaguardia estratégica, llegando a controlar gran parte de su territorio durante la guerra.

- III) **Las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN)**, más conocidas como RN, surgieron de una escisión del ERP que se oponía a la primacía de lo militar presente en esa organización. La ruptura definitiva se produjo tras el ajusticiamiento del poeta Roque Dalton y del comandante Pancho por orden de la dirigencia del ERP, en mayo de 1975²¹. La concepción revolucionaria de Dalton dio la pauta de lo que sería el distintivo de este grupo: la integración entre movimiento armado y movimiento popular. El poner el acento sobre el trabajo político, más que sobre el trabajo militar favoreció el establecimiento de alianzas con los sectores progresistas del país, incluidos cuadros del Ejército. Desarrollaron una exitosa labor diplomática. Al interior del país, sus lazos fueron estrechos con algunos sindicatos y organizaciones estudiantiles, lo cual le dio mayor arraigo en la urbe que en las zonas rurales. No obstante, el cerro de Guazapa, su núcleo en el campo, fue de gran simbolismo durante el conflicto, debido a su cercanía con San Salvador. Consiguieron la hegemonía en el Frente de Acción Amplia Unificada (**FAPU**) que (junto con el BPR) pasó a convertirse en el mayor frente de masas de El Salvador durante los setenta.

²¹ El ajusticiamiento de Roque Dalton y la muerte de Cayetano Carpio y la Comandante Ana María (Mélida Anaya Montes) han sido considerados como dos de los hechos más oscuros en la historia de la revolución salvadoreña. Continúan siendo temas tabú, a la espera de esclarecimiento. Una referencia al asesinato de Dalton y “Pancho”, en el marco de un testimonio sobre el surgimiento y desarrollo de la RN, puede encontrarse en: Mira Rico, Carlos Eduardo, *En silencio tenía que ser*, UFG Editores, San Salvador, 2003.

- IV) **El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)**, producto también de una división en el seno del ERP, fue el más pequeño de los grupos guerrilleros salvadoreños. Sus dirigentes abandonaron el ERP en 1973, debido a diferencias en torno a las estrategias de lucha, y fundaron la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT). Como ORT participaron en la creación de estructuras en El Salvador, Honduras y Costa Rica, pues consideraban que la lucha antiimperialista sólo podía ser eficaz conjuntando a los movimientos populares de toda Centroamérica. Después de tener un mando centroamericano centralizado, la organización fue cobrando independencia, dadas las exigencias de la maduración de las condiciones revolucionarias en El Salvador. Adoptó el nombre de PRTC en 1975, bautizó a su frente de masas Movimiento de Liberación Popular (**MLP**) y encontró en San Vicente, Suchitoto, Guazapa y Usulután sus baluartes durante la guerra²².
- V) **El Partido Comunista Salvadoreño (PCS)**. Aunque fue el último en aceptar la vía armada como método de transformación social, el PCS fue la primera organización política de izquierda en El Salvador. Fundado en 1930, en el contexto de una fuerte crisis económica y una marcada agitación sindical, surgió con la intención de convertirse en vanguardia de la clase trabajadora. Participó en elecciones durante los primeros días de 1932, obteniendo resultados favorables que no son admitidos por la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Al profundo descontento popular preexistente se sumó la indignación por ese fraude electoral, lo cual desencadenó una insurrección masiva. El PCS decidió guiar la rebelión hacia la toma del poder, pero su desarrollo incipiente no

²² El testimonio de una de las dirigentes del PRTC tuvo impacto —como en su momento impactó el de Ana Guadalupe Martínez— a nivel nacional e internacional. Se trató de literatura que consiguió comunicar lo que sucedía en El Salvador y ganar apoyo extranjero para la causa revolucionaria. Ver: Díaz, Nidia, *Nunca estuve sola*, UCA, San Salvador, 1998.

le permitió tomar control de la situación. Los planes del líder comunista Farabundo Martí fueron descubiertos, él y sus colaboradores (los universitarios Luna y Zapata) apresados y fusilados. Alrededor de 20 mil campesinos, en su mayoría de extracción indígena, fueron asesinados, acusados de comunistas y salvajes²³. Desde entonces el PCS fue proscrito y orillado a la clandestinidad, el comunismo se convirtió en el pretexto para legitimar la represión y a los sobrevivientes del partido les costó mucho reconstituir la organización. No fue sino hasta mediados de la década de 1950 cuando el PCS estableció relaciones formales con el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuyo lineamiento dictaba para los países “coloniales” del Tercer Mundo la necesidad de la alianza comunista y las burguesías nacionales, con el objeto de llevar a cabo revoluciones burguesas que allanaran el terreno para la llegada del socialismo. La consigna del comunismo internacional era la de implantar el socialismo por la vía pacífica, es decir, electoral, para no incurrir en conflictos que pudieran mermar fuerzas al desarrollo del “socialismo en un solo país” (la URSS). De acuerdo con el investigador mexicano Álvaro Martín Álvarez²⁴, esta directriz sería una razón de peso en la negativa del PCS a asumir la opción armada como estrategia revolucionaria. En 1979 los comunistas salvadoreños decidieron buscar la unificación con las demás organizaciones político-militares para llevar adelante la guerra

²³ La interpretación de los sucesos de 1932 en El Salvador continúa siendo objeto de polémica. Un texto clásico que propone una lectura de tales hechos en clave revolucionaria es: Dalton, Roque, *Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador*, Casa de las Américas, La Habana, 1983. A partir del impacto generado por esta obra en el imaginario colectivo de los sectores progresistas en El Salvador han venido surgiendo cuestionamientos de diverso tipo, tendientes a relativizar el protagonismo del PCS en los sucesos del 32. En años recientes, la controversia se ha decantado hacia posturas poscoloniales, proclives a reivindicar la perspectiva étnica para estudiar este fenómeno. Ejemplo de ello es la reciente publicación de Rafael Lara-Martínez, *Del Dictado. Miguel Mármol, Roque Dalton y 1932, del cuaderno (1966) a la “novela-verdad” (1972)*, Universidad Don Bosco, San Salvador, 2007. Allende a ésta controversia, una lectura obligada para el abordaje de los sucesos de 1932 es: Arias Gómez, Jorge, *Farabundo Martí*, EDUCA, Centroamérica, 1972.

²⁴ Martín Álvarez, *op. cit.*, pp. 122-139. Este señalamiento vale para la mayor parte de los PC en América Latina.

civil²⁵. Sin abandonar su raigambre pro-soviética, dieron a la revolución el carácter de “democrática, antioligárquica y antiimperialista, como paso previo a la revolución socialista”. Consideraban al proletariado, en alianza con el campesinado y con las capas medias progresistas, como el sujeto de la revolución, cuyo objetivo sería la destrucción del aparato político-militar que sostenía el *statu-quo*. A finales de 1979, el PCS creó su brazo armado: Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), sin dejar de considerar fundamental el trabajo político con los trabajadores urbanos. En ese sentido, ya en la década de 1960 había impulsado el frente de masas (organismo por medio del cual entró en alianza con la centro-izquierda para competir electoralmente) Unión Democrática Nacionalista (UDN), con fuerte presencia en sindicatos.

Estas cinco organizaciones operaron a lo largo de la década del setenta de modo inconexo e incluso antagónico, dándose encendidas controversias entre sus ideólogos y militantes, quienes reclamaban para su respectivo grupo la auténtica vanguardia de la revolución. “La caracterización del régimen y las formas de lucha a emplear contra él, estaban en el centro de la discusión”²⁶. En términos del trabajo político y de la articulación con el movimiento popular, esto significó la disputa por conseguir la hegemonía en espacios concretos como sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, barriales y de pequeños comerciantes. De ahí que cada organización armada tuviera su correlato en un frente de masas específico.

Los frentes de masas fueron modos de organización del movimiento popular vinculados a, e incentivados por, las organizaciones político-militares durante la fase

²⁵ Para un tratamiento del viraje estratégico que llevó al PCS a abandonar la vía electoral para adoptar la vía armada, ver la entrevista a Schafik Handal en: Harnecker, M., *op. cit.*, pp. 137-155.

Otra reflexión interesante de esta entrevista apunta hacia las razones que, según Handal, llevaron al surgimiento de las demás organizaciones revolucionarias y la conflictiva relación entre éstas y el PCS. También Menjívar Ochoa aborda abundantemente este último aspecto a lo largo de su obra, *op. cit.*

²⁶ Ribera, R., *Los partidos políticos en El Salvador entre 1979 y 1992. Evolución y cambios*, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 1996.

prebérica, en los últimos setenta. El cierre de espacios de participación política por la implementación sistemática del terrorismo de Estado y el intenso trabajo ideológico y logístico realizado por los grupos guerrilleros al interior de las organizaciones populares posibilitó la estructuración y fortalecimiento de conglomerados de movimientos, cuya presencia se hacía sentir por medio de huelgas, marchas, tomas y manifestaciones por reivindicaciones laborales y liberación de presos políticos. El grado de organicidad y el número de personas implicadas en estas acciones (decenas de miles) desafiaba la respuesta represiva emanada del Estado y ponía de manifiesto la urgente necesidad de cambios sustanciales en la configuración sociopolítica del país²⁷.

Con todo y que la crisis política, la crisis económica, la exclusión de las mayorías populares y la represión brutal y creciente eran hechos que radicalizaban a un número cada vez mayor de personas y organizaciones, el camino hacia la unificación estratégica de la izquierda armada salvadoreña no estuvo exento de dificultades. Un paso decisivo en tal dirección se dio a través de la coalición entre los frentes de masas cuando, en enero de 1980, el PCS, las FPL y la RN anunciaron la creación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). Menjívar Ochoa puntualiza: “el objetivo de la CRM no era la unificación de las organizaciones en un solo mando, sino la coordinación de acciones para potenciar su accionar y, en el peor de los casos, evitar que sus actividades interfirieran mutuamente, como ya había ocurrido”²⁸.

²⁷ La historia del movimiento popular en El Salvador y una explicación de por qué y cómo se da su articulación con las organizaciones político-militares y su consiguiente radicalización política, puede verse en: Pirker, K., *La redefinición de lo posible: militancia política y movilización social en El Salvador (1970-2004)*, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 2008.

Desde el punto de vista de las organizaciones político-militares, líderes e ideólogos tomaron ejemplo en la experiencia vietnamita y comprendieron que el proceso revolucionario en El Salvador sólo sería posible en estrecha vinculación con la población. En un país de apenas 21800 km cuadrados, catalogado como el más densamente poblado del continente y carente de cadenas montañosas o grandes selvas en las que albergar focos guerrilleros, llevar a cabo un desafío al sistema de dominación por medio de la vía armada sin contar con un sólido respaldo popular era prácticamente inviable. De ahí que, por ejemplo, Adolfo Gilly hable de “vietnamización” de la revolución salvadoreña, *Guerra y política en El Salvador*, Nueva Imagen, México, 1981, pág. 19. Roque Dalton y Cayetano Carpio se consideraban herederos del modelo vietnamita. Una explicación de la exitosa respuesta de las fuerzas subversivas vietnamitas ante la agresión del Imperio en alianza con los sectores reaccionarios, puede verse en: Dalton, Roque, “Las enseñanzas de Vietnam (apuntes)”, *Polémica Internacional*, Órgano Político del Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, No 3, El Salvador, junio de 1980.

²⁸ Menjívar Ochoa, R., *op. cit.*, p. 22.

La CRM nació junto al llamado explícito a la insurrección armada como única alternativa viable frente a la situación. Pocos días después de su fundación, en el mismo mes de enero, la CRM convocó a una manifestación a la que asistieron alrededor de 250 mil personas. En febrero, la CRM dio a conocer su plataforma programática de Gobierno Democrático Revolucionario (GDR), planteando la necesidad de derrocar al poder oligárquico e imperialista y disolver al ejército gubernamental para instaurar un poder verdaderamente popular. La efervescencia sociopolítica de aquellos días se incrementó con el temor a una posible invasión norteamericana y con la irrefrenable escalada represiva. “A partir de entonces, las acciones guerrilleras se recrudecieron. Los ataques a cuarteles de la Guardia Nacional [...] se intensificaron, y a las ejecuciones de miembros de ORDEN [uno de los más fuertes grupos paramilitares] vinieron a aunarse irrupciones de grupos armados en pequeñas localidades, durante las cuales los guerrilleros llamaban a la población a unirse a la lucha e impartían de manera pública instrucciones en el manejo de armas”²⁹.

En marzo de 1980 el Partido Demócrata Cristiano (PDC) entró a formar parte de la Junta de Gobierno, en contubernio con el Ejército y con el gobierno de los Estados Unidos. La división entre el ala conservadora, de carácter anticomunista, y la facción denominada Tendencia Popular en el seno del PDC se puso de manifiesto cuando esta última hizo pública su indignación por dicha alianza, argumentando que consideraba inviable la gobernabilidad sin el apoyo de las masas y calificando al plan de gobierno de la JRG como un “proyecto pro-imperialista”, “traidor a la patria”, cuya solución a la crisis era la aplicación de la política de “reformas con represión”. Todo ello condujo a la Tendencia Popular a separarse de la Democracia Cristiana y a fundar un nuevo órgano de representación: el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). La alianza entre el MPSC, el socialdemócrata (miembro de la Internacional Socialista) Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador (MIPTES) constituyó el Frente Democrático (FD), el cual se

²⁹ Gordon, S., *op. cit.*, p. 294.

fusionó a su vez con la CRM. A esa nueva alianza, que se hizo pública en abril de 1980, se la denominó Frente Democrático Revolucionario (FDR).

La adopción de la plataforma programática de la CRM por parte del FDR significó la fusión entre la centro-izquierda, con marcada presencia de intelectuales, y el movimiento de masas politizado y dirigido por las organizaciones político-militares. “Un total de unas sesenta organizaciones de diverso carácter se agrupaban bajo ese gran paraguas organizativo. Las manifestaciones y protestas se protegían con armas cortas y grupos de autodefensa. Había radicalismo en los planteamientos”³⁰. Los líderes del FDR emprendieron una intensa campaña de denuncia de la crítica situación salvadoreña a nivel internacional, logrando reconocimiento y apoyo para la causa revolucionaria, específicamente en Estados Unidos, México y Europa. En marzo de 1980 se había decretado el Estado de Sitio que anulaba las garantías constitucionales del ciudadano e imponía el toque de queda, impidiendo a la población circular por las calles después de las 5:00 pm.

El debilitamiento de las opciones moderadas y su inviabilidad al interior de la Junta de Gobierno eran ya un hecho consumado. La Democracia Cristiana se autoproclamaba como el centro, hostigado por las dos extremas. Pero en los hechos servía de fachada democrática a una Fuerza Armada que ejercía el terror como estrategia política. Una de las demandas principales del FDR fue, precisamente, el cese a la represión, además de exigir aumentos salariales, libertad de expresión e inclusión en la toma de decisiones sobre el rumbo del país. Esta imponente confederación de la izquierda organizada, con el consiguiente clima insurreccional a punto de ebullición, ejercía presión sobre los grupos guerrilleros, evidenciando la necesidad del trabajo mancomunado.

Desde la perspectiva de Martín Álvarez, en la superación de los obstáculos ideológicos, actitudinales y personales que impedían la unificación de las guerrillas fueron determinantes los siguientes factores: i) el triunfo de la revolución sandinista, en julio de 1979, en el cual habían intervenido las tres tendencias del Frente Sandinista

³⁰ Ribera, R., *op. cit.*, p. 41.

para la Liberación Nacional (FSLN) en alianza con los sectores progresistas de la sociedad nicaragüense³¹; ii) la escasez de armamento de la que adolecía cada organización político-militar; y iii) la presión de Cuba sobre los revolucionarios salvadoreños en pro de la superación de las pugnas internas y la formación de un solo frente. A estos elementos habría que añadir la unificación de los frentes de masas arriba señalada, la cual apuntaló desde las bases la coordinación de las dirigencias.

El antecedente inmediato de lo que poco después sería el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) surgió en mayo de 1980 con el nombre de Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), formada por el ERP, las FPL, la RN y el PCS junto con su brazo armado, las FAL. En junio se produjo otro de los episodios que demostró el poder de convocatoria y el nivel de coordinación que habían logrado las fuerzas revolucionarias para entonces, con el paro de labores que, convocado por la CRM, consiguió la suspensión de las actividades económicas a nivel nacional en casi un 90% durante dos días.

El FMLN empezó a existir como tal el 10 de octubre de 1980, adoptando ese nombre en honor a Farabundo Martí, líder comunista de la insurrección indígena y campesina de 1932. La primera alianza para su consolidación se dio entre las FPL, el PCS y el ERP. Pocos días después, se integraría la RN —que a causa de resquemores con el ERP había quedado inicialmente afuera— y en diciembre lo haría el PRTC, considerado poco representativo por las demás organizaciones, pero finalmente aceptado en la coalición. En palabras de Martín Álvarez: “[...] el FMLN fue en origen una alianza de conveniencia entre cinco organizaciones con pretensiones hegemónicas. La formación de la coalición les ofrecía mayor poderío militar, y la posibilidad de contar con armas y financiación por parte de los aliados del PCS [Cuba y la URSS]. Sin embargo, cada organización se integrará a la coalición revolucionaria manteniendo sus propios matices ideológicos, sus lógicas de funcionamiento, y sus estructuras de mando”³².

³¹ Testimonios relevantes de la lucha sandinista son: Cabezas, O., *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*, Siglo XXI, México, 1997; y Ramírez Mercado, S., *Adiós Muchachos*, Aguilar, México, 1999.

³² Martín Álvarez, *op. cit.*, p. 169.

El triunfo de la revolución sandinista reviste una importancia de primer orden para el proceso salvadoreño en esta coyuntura decisiva. Por una parte, catapultó las expectativas de la izquierda armada, llevándola a ver más cerca que nunca la posibilidad de la toma del poder por la vía militar. Por otra parte, intensificó el temor de la derecha hacia la concreción de tal posibilidad, lo cual le sirvió de justificación para recrudecer la represión, llegando a plantear que la solución para la crisis salvadoreña requería de la eliminación física de 200 mil personas³³. Y en tercer lugar, alarmó aún más al gobierno estadounidense que interpretó el arribo del sandinismo al poder como el inicio de un probable “efecto dominó” que amenazaba con incrementar la influencia de Cuba en el área centroamericana.

2.2 La moderación inmoderada

En el caso de El Salvador, la Doctrina de Seguridad Nacional sirvió de sustento ideológico al ejercicio del poder político que detentaban las Fuerzas Armadas desde 1931, proclives a asumir una actitud mesiánica frente a lo que consideraban su obligación de preservar la unidad y el orden nacional³⁴. Cuando, a finales de la década de los setenta, James Carter asumió el gobierno estadounidense y empezó a exigir a los gobiernos militares centroamericanos respeto a los Derechos Humanos, miembros de la facción más dura del Ejército pasaron a fortalecer las estructuras paramilitares que habían empezado a institucionalizarse a mediados de la década de los sesenta en las áreas rurales o a crear grupos nuevos que operaban al margen de la legalidad³⁵.

³³ Gordon, S., *op. cit.*, p. 304.

³⁴ Una teorización acerca del mesianismo propio de la institución castrense latinoamericana puede verse en la potente obra de Pilar Calveiro sobre la desaparición forzada en la Argentina de la dictadura: *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Colihue, Buenos Aires, 2004.

Una veta de investigación que continúa pendiente apunta justamente a las redes de cooperación y entrenamiento que se tejieron entre los aparatos represivos de los ejércitos del Cono Sur y sus homólogos centroamericanos. Fuentes testimoniales aseguran que militares argentinos y chilenos asesoraron a militares salvadoreños y guatemaltecos en métodos de inteligencia, tortura, desaparición y exterminio. Una referencia a esto puede verse en la nota periodística: O'Donnell, Santiago, “Matar a un monseñor”, *Página 12*, domingo 7 de marzo de 2010. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-141544-2010-03-07.html>

³⁵ La falta de voluntad de los poderes militares para garantizar el respeto de los derechos constitucionales fue puesta en evidencia durante este período en el que varios gobiernos de la región, entre ellos los de Guatemala

Siguiendo la lógica que los conducía a asumirse como “salvadores de la patria”, encargados de extirpar de ella los elementos dañinos, y desprovistos de la unanimidad de los mandos castrenses en esta determinación, algunos militares de alto rango recurrieron al ejercicio privado de la represión. Órganos de terror político como la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN)³⁶, la Unión Guerrera Blanca (UGB), los Escuadrones de la Muerte, la Organización para la Liberación del Comunismo y el Ejército Salvadoreño Anticomunista, entre otros, operaban en alianza con sectores de la clase dominante de la cual obtenían legitimidad y financiamiento³⁷. Así se analiza en el Informe de la Comisión de la Verdad el surgimiento de los cuerpos paramilitares:

El golpe de estado de 1979 alteró el escenario político en El Salvador. Uno de los polos en pugna, afectado directamente, estaba compuesto por un núcleo de militares que pretendían cerrar el paso a los grupos alzados en armas y a todo movimiento de reforma. Para ellos la Junta de Gobierno estaba ‘infiltrada por oficiales marxistas, lo cual podría ser fatal para la independencia y la libertad de la patria salvadoreña en caso de inacción por la parte anti-comunista del pueblo’”. El líder de esta corriente fue el ex-Mayor Roberto D’Aubuisson quien hasta 1979 había ocupado el tercer puesto en la jerarquía de ANSESAL [Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, aparato de inteligencia militar] y, al ser pasado a retiro, conservó parte de los archivos de la institución.

El ex-Mayor D’Aubuisson consiguió gran apoyo de personajes civiles con grandes recursos económicos que temían que sus intereses fuesen afectados por el programa de reformas anunciado por la Junta de Gobierno. Estaban convencidos de que el país se encontraba seriamente amenazado por una insurrección marxista que debían vencer. La Comisión de la Verdad obtuvo muchos testimonios de que algunos de los más ricos terratenientes y empresarios del país prestaron sus fincas, sus casas, sus vehículos y sus guardaespaldas para ayudar a los escuadrones de la muerte. También proporcionaron finanzas utilizadas para organizar y mantener escuadrones, en especial los dirigidos por el ex-Mayor D’Aubuisson³⁸.

Roberto d’Aubuisson Arrieta (1944-1992) perteneció a la Guardia Nacional³⁹, fue miembro dirigente de ANSESAL durante los años setenta y a partir de su retiro de la

y El Salvador, prefirieron prescindir del apoyo económico estadounidense a tener que rendir cuentas sobre esquemas mínimos de respeto a los Derechos Humanos, exigidos por la administración Carter.

³⁶ Una corta pero ilustrativa historia de ORDEN puede verse en Pirker, K, *op. cit.*, pág. 203.

³⁷ Gordon, S., *op. cit.*, pp. 304, 305.

³⁸ *De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador*. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, Naciones Unidas, San Salvador-Nueva York, 1992-1993, “El patrón de los Escuadrones de la Muerte”, pp. 139-144. Este documento es uno de los frutos de los Acuerdos de Paz. Se elaboró como parte de las iniciativas de la ONU en El Salvador, en aras de superar la impunidad.

³⁹ La Fuerza Armada de El Salvador estaba conformada por tres organismos o “cuerpos de seguridad”: la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional.

institución castrense se dedicó a nuclear en torno suyo a las fuerzas de extrema derecha en El Salvador. Hombre carismático y astuto, d'Aubuisson asumió el liderazgo del grupo de empresarios y profesionales que experimentó un proceso de politización articulado en torno de la oposición contra los esfuerzos reformistas de los gobiernos militares de los setenta y, a partir de 1979, de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Preocupados por la amenaza comunista que se cernía sobre el país y por carecer del control de la esfera gubernamental, éstos empresarios vieron la necesidad de consolidarse como una fuerza política y hacer valer su posición en el marco de la crisis de hegemonía imperante. El empresario Alfredo Mena Lagos y quien años después llegaría ser presidente de la República, Armando Calderón Sol, fundaron entonces el Movimiento Nacionalista Salvadoreño (MNS).

Revelando los nexos que pervivieron entre d'Aubuisson y la Fuerza Armada, una investigación periodística realizada para *Albuquerque Journal* (de Nuevo México) sostuvo: “Tres miembros del Alto Mando dijeron que después de renunciar formalmente, D'Aubuisson había sido contratado por el ejército durante unas seis semanas para que reorganizara los archivos centrales de ANSESAL [disuelto después del golpe] para el Estado Mayor... D'Aubuisson se robó una copia de los expedientes reorganizados, que se convirtió en la base para orientar la actividad de los escuadrones de la muerte”⁴⁰. d'Aubuisson se dio de baja del Ejército dos semanas después de producirse el golpe de Estado y se acercó al MNS manifestando su coincidencia con los planteamientos del grupo. Ante la desconfianza inicial de los empresarios, el ex militar les proporcionó una parte de los archivos de ANSESAL, dando con ello cabida a nueva y próspera alianza.

Bajo el liderazgo de d'Aubuisson, se fundó el Frente Amplio Nacional (FAN), movimiento caracterizado por un anticomunismo virulento que aglutinó a asociaciones de la empresa privada —cafetaleros, ganaderos y ejecutivos jóvenes—, al Frente de Mujeres y al MNS. En su faceta pública, el FAN apareció como un grupo de fuerte oposición al régimen y en el antecesor directo del partido político que dos años

⁴⁰ Craig Pyles y Laurie Becklund citados en Menjívar Ochoa, R., *op. cit.*, p. 115.

después se llamó Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Pero “por debajo del FAN había una red clandestina de escuadrones de la muerte con militares y civiles”⁴¹. Destacan los vínculos de este grupo con el ultra conservador partido militar guatemalteco Movimiento de Liberación Nacional (MLN)⁴². Cabecillas paramilitares, d’Aubuisson y sus colaboradores más cercanos han sido señalados como autores intelectuales y materiales del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. La Comisión de la Verdad estima en 817 el número de asesinatos llevados a cabo por los Escuadrones de la Muerte entre 1979 y 1992, entre los cuales 644 fueron ejecuciones extrajudiciales⁴³.

A inicios de 1980, la primera Junta Revolucionaria de Gobierno empezó a dar muestras de flaqueza. Sólo tres meses después de haber sido instaurada, en enero de ese año, los civiles que integraron la primera configuración —entre ellos un cuadro del PCS— optaron por retirarse de ella tras constatar que la retardataria alianza oligárquico-militar, si bien se había debilitado, no había perdido poder ni dejaría de descargar su furia represora sobre el movimiento popular. Fue entonces cuando se produjo el pacto entre la Democracia Cristiana (PDC) y la institución que había sido su principal opositora desde el surgimiento del partido en la década del sesenta: la Fuerza Armada. Se conforma así la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por los 2 militares golpistas y 3 cuadros democristianos. El programa de reformas propuesto por el nuevo gobierno incluía la implementación de una “Reforma Agraria integral” (con impulso al cooperativismo agrario), la nacionalización del comercio

⁴¹ *Ibid.*, p. 120.

⁴² Muestra de la cercanía entre los ejércitos salvadoreño y guatemalteco fue el hecho de que d’Aubuisson y sus colaboradores encontraran en Guatemala todo tipo de apoyo e incluso credenciales como miembros de la Fuerza Armada de ese país para poder circular libremente por su territorio, cuando en 1980 tuvieron que pasar al exilio y radicar allí. Queriendo evitar el contagio comunista, los militares guatemaltecos dieron soporte a los anticomunistas salvadoreños, en aras de “apagar el incendio en el casa vecina”. Primera parte de la entrevista realizada para esta investigación al “cafetalero”, amigo y colaborador de d’Aubuisson Antonio Cornejo, el 5 de diciembre de 2008 en San Salvador.

⁴³ *De la locura a la esperanza, op. cit.*, “Asesinatos de los Escuadrones de la Muerte”, 1. Caso Ilustrativo: Monseñor Romero, pp. 132-138; 2. El patrón de los Escuadrones de la Muerte, pp. 139-144.

El escritor salvadoreño Berne Ayala dedica su novela *La bitácora de Caín* a narrar la historia de la conspiración en la que paramilitares, altos empresarios e incluso un representante del Vaticano, planifican y llevan a cabo el magnicidio. Letras Prohibidas, San Salvador, 2006.

exterior y la nacionalización de la banca. Tal programa encontró desde el inicio el rechazo frontal del ultra conservadurismo, frente al cual el Partido Demócrata Cristiano aparecía como aliado del comunismo internacional.

La escalada represiva se recrudeció, pues al programa de reformas impulsado por la Democracia Cristiana iba aparejada la violencia de Estado que el sector más rechazado de ese partido no podía ni quería combatir. Por esa razón, las facciones de izquierda que inicialmente habían dado el beneficio de la duda a la Junta de Gobierno, confiando en las posibilidades de cambio que ésta abría, le retiraron definitivamente su respaldo, dando por clausurada esta vía de respuesta a la crisis. De ahí la definición del historiador salvadoreño-español Ricardo Ribera del Partido Demócrata Cristiano de entonces como un “extremo centro” que, más que atemperar la confrontación entre las extremas, la agudizó⁴⁴. En relación con la población salvadoreña organizada, las pancartas que encabezaban las multitudinarias manifestaciones callejeras de los frentes de masas expresaban su determinación a combatir: ¡A más represión más lucha!

Aunque los esfuerzos reformistas del PDC fueron adoptados como estrategia contrainsurgente y por eso contaron con el apoyo decidido del presidente Carter, la derecha salvadoreña los condenó por subversivos, pues atentaban contra el intocado *status quo* económico que había beneficiado a la élite oligárquica desde la instauración de la República. Por eso los democristianos fueron también reprimidos y asesinados. A su vez, la izquierda revolucionaria veía en la Democracia Cristiana a un simple instrumento de la Casa Blanca, cuya participación en el gobierno no significaba otra cosa que perpetuar la dominación oligárquica e imperialista.

Uno de los episodios más estremecedores de esta coyuntura fue el magnicidio, en marzo de 1980, de Monseñor Romero. El trabajo paramilitar de inteligencia, persecución, tortura y eliminación de líderes sindicales y estudiantiles, activistas sociales y sacerdotes se había intensificado y sistematizado a lo largo de la década del

⁴⁴ Ribera, R., *op. cit.* El punto de vista de los propios democristianos a cerca del papel que han desempeñado en la historia reciente de El Salvador, puede consultarse en: Duarte, Napoleón, *Duarte Mi Historia*, GP PUTNAM'S SONS, Nueva York, 1985; Rey Prendes, J. Adolfo, *De la dictadura militar a la democracia. Memorias de un político Salvadoreño 1931-1994*, INVERPRINT, El Salvador, 2008.

setenta. El sector progresista de la iglesia católica había empezado a sufrir persecución años atrás, debido a que su trabajo en las Comunidades Eclesiales de Base, inspirado en la Teología de la Liberación, contribuyó a la toma de conciencia política, social e histórica de la clase trabajadora, especialmente en el campesinado⁴⁵. Durante los últimos setenta, los asesinatos de religiosos, entre otras violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, llegaron a deteriorar las relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos⁴⁶, en cuyo gobierno había facciones opuestas a la violencia de Estado.

La cantidad de presos, desaparecidos, muertos y torturados por razones políticas⁴⁷ y la inexistencia de un aparato judicial que le hiciera frente a esa barbarie, llevaron a Monseñor Romero a desarrollar en el Socorro Jurídico del Arzobispado una exhaustiva labor de denuncia y de apoyo a los familiares de las víctimas, que no cesaba en el púlpito, desde donde pronunciaba airadas homilías contra la represión y la injusticia. En una de ellas solicitó al presidente Carter poner fin al apoyo militar para El Salvador (incluso envió a la Casa Blanca una pieza de correspondencia con esa solicitud) y en la última que pronunció demandó a los militares desobedecer las órdenes de sus superiores, en función del cese a la represión. “Debe prevalecer la Ley

⁴⁵ A la hora de valorar las causas del estallido revolucionario en Centroamérica, Alain Rouquié le atribuye un papel preponderante al trabajo pastoral en las Comunidades de Base. Si bien se trata de una perspectiva que tiende a privilegiar ese factor sobre otros que también es necesario considerar, no se puede negar la importancia de la influencia de la Teología de la Liberación en los procesos centroamericanos. Ver Rouquié, Alain, *Guerras y paz en América Central*, FCE, México, 1994, específicamente el capítulo IV “Religión y revolución”. Para la relación entre religión y revolución en el caso de El Salvador: Rouquié, Alain, *Las fuerzas políticas en América Central*, FCE, México, 1994, específicamente el apartado “La iglesia y las iglesias”, p. 101 y ss.

⁴⁶ Gordon, S., *Op. cit.*, Capítulo 6 “A sus órdenes mi capital”, p. 219 y ss.

⁴⁷ Adolfo Gilly recoge el informe presentado por el Socorro Jurídico del Arzobispado denunciando los asesinatos políticos en El Salvador, desde enero hasta octubre de 1980: “5503 personas —más de 600 por mes, más de 20 por día— [...] además de una impresionante lista de desaparecidos. De esos asesinatos, el 80 por ciento fue ejecutado por las fuerzas armadas y el 20 por ciento restante por las bandas paramilitares, dirigidas e integradas por miembros de esas mismas fuerzas armadas”, *op. cit.*, p. 132. Cabarrús, contabilizando el saldo de víctimas durante la etapa prebélica, en los últimos setenta, arroja las cifras: 10.000 muertos y 30.000 exiliados, *op. cit.*, p. 322. El mismo autor elabora una tabla en la que expone la cantidad de bajas dejadas por el ejército y las organizaciones político-militares: la desproporción es evidente, en el sentido apuntado por Gilly, aunque éste último no contabiliza las muertes ocasionadas por la guerrilla.

de dios que dice: No matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”⁴⁸.

Las voces de la extrema derecha se manifestaron en contra de la actividad del Arzobispo, al tiempo que las mayorías populares vieron en él al pastor de un pueblo que estaba siendo crucificado. Campos pagados en los periódicos de mayor circulación, editoriales y artículos de opinión llegaron a pedir la cabeza de Monseñor, como pedían también las de otros sacerdotes comprometidos con la lucha popular. Por eso su asesinato, el 24 de marzo en mitad de una misa en la capilla de la Divina Providencia, reflejó hasta dónde estaba dispuesta a llegar no sólo la mano represora del paramilitarismo, sino también la intolerancia en una sociedad profundamente dividida. Al funeral de Monseñor Romero, celebrado el domingo 30 de marzo, asistieron alrededor de 100 mil personas, entre los cuales se encontraban personalidades de la Iglesia Católica de diferentes países, en especial de Estados Unidos y de México.

En circunstancias normales, un acto así hubiera necesitado de todo un operativo de seguridad pública, pero no había nada normal en el país, y si la policía asistía no se esperaba que fuera para proteger, sino por lo menos para provocar. Los grupos de choque de las organizaciones de masas, en general formados por guerrilleros urbanos, estarían presentes, y las posibilidades de terminar en un enfrentamiento ante cualquier hecho eran altísimas. El gobierno, pues, ordenó el acuartelamiento de todos los efectivos militares y de los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional también fue retirada de las calles⁴⁹.

Eso no obstó para que, poco después de iniciada la ceremonia, cayera desde la azotea del Palacio Nacional una bomba que provocó la estampida de la multitud y la muerte por asfixia de quienes quedaron debajo de la marea de personas huyendo. Francotiradores apostados en los edificios que rodean la Plaza Barrios abrieron fuego, mientras los grupos de choque de la CRM incendiaron automóviles para cubrir la retirada de la muchedumbre. El saldo fue de al menos 50 muertos y 600 heridos. Menjívar Ochoa expone cómo el gobierno y los guerrilleros se culparon mutuamente

⁴⁸ Las homilias de Monseñor Romero pueden ser consultadas en: <http://www.sicsal.net/homilias.php>

⁴⁹ Menjívar Ochoa, R., *op. cit.*, pp. 170, 171.

de este evento⁵⁰ que produjo un impacto inconmensurable en las subjetividades de la gente humilde que habían encontrado amparo espiritual en el Arzobispo. Las filas de los grupos revolucionarios empezaron a engrosarse con más celeridad a partir de este momento, las protestas callejeras cedieron paso a la actividad clandestina y el movimiento popular-revolucionario se preparó con mayor determinación para la guerra.

En ese mismo mes de marzo de 1980, dos semanas después del asesinato de Mario Zamora —entonces Procurador General de Pobres, asesinado en mitad del festejo familiar por sus cumpleaños en su residencia, el 23 de febrero— Héctor Dada Irezi abandonó la Junta de Gobierno. Tanto Zamora como Dada eran reconocidos líderes democristianos, cercanos a la causa popular. La renuncia de Dada Irezi profundizó aún más la crisis gubernamental y evidenció la división interna del Partido Demócrata Cristiano. Mientras que el ala progresista se escindió de dicho partido y pasó a integrar las filas del FDR, los conservadores se aferraron a la cuota de poder que la permanencia en la Junta de Gobierno les proporcionaba.

Se estableció entonces una tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, liderada por el Ingeniero Napoleón Duarte. Ex candidato presidencial de la UNO —coalición que sufrió los sucesivos fraudes electorales de los setenta y que durante esa década fue depositaria del anhelo de apertura democrática de las mayorías— y a la sazón Secretario General de la Democracia Cristiana, Duarte se hizo elegir presidente y nombró como vicepresidente al coronel Jaime Abdul Gutiérrez, dejando afuera de esta alineación al coronel Adolfo Majano, líder de la “Juventud Militar” y fraguador del golpe de Estado de 1979. La expulsión del coronel Majano de la Junta y su marginación en el seno de la institución castrense puso de manifiesto dos cosas: primero, que en el pulso entre reforma y permanencia que se había venido librando al interior de las

⁵⁰ Hasta la fecha no se ha esclarecido quién dio la orden de reprimir a los asistentes a las exequias de Monseñor Romero. Menjívar Ochoa deja abierta la pregunta respecto de ¿quiénes tenían acceso al Palacio Nacional? Y ¿cómo, en caso de ser guerrilleros, lograron ingresar sin ser detectados por los guardias del Palacio? *Idem*, p. 170 y ss.

Fuerzas Armadas, el ultra conservadurismo había salido vencedor; y segundo, que, Duarte no ejercería control sobre el aparato militar salvadoreño.

En mayo de 1980, el predominio del ala conservadora en el Ejército se vio reflejado en el hecho siguiente: el coronel Majano ordenó la captura de Roberto d'Aubuisson y su grupo, bajo la acusación de estar fraguando un golpe de Estado para derrocar a la Junta de Gobierno. Las airadas protestas del sector empresarial se hicieron públicas por medio de concentraciones a favor de la liberación inmediata del mayor d'Aubuisson. Aunque desde entonces había fuertes indicios que involucraban al "Mayor" con el asesinato de Monseñor Romero y algunos sectores de la izquierda respaldaron el apresamiento, la fuerte presión de los aliados del líder derechista en la Fuerza Armada obligó a Majano a dejarlo en libertad y a suspender los cargos.

Sólo en virtud del apoyo de Carter a la Junta de Gobierno logró Napoleón Duarte impulsar tibias medidas desarrollistas, a contracorriente de los reales poderes políticos y sociales en la izquierda y la derecha del país. Prueba del grado de penetración estadounidense en El Salvador era que el Embajador Robert White se desempeñara en la Junta como un miembro más de ella, facultado en la toma de decisiones cotidianas del gobierno salvadoreño. Así de frágil era ese proyecto gubernamental. Quienes lo llevaron adelante, reivindicándose como opción intermedia en una situación de extrema polarización, contaron con el respaldo estadounidense porque eran la única alternativa en la reconducción del proceso en la línea contrainsurgente planteada por los Estados Unidos. Pero su capacidad para coordinar sectores sociales decrecía al tiempo que las opciones radicales iban en franco e irrefrenable ascenso. El Partido Demócrata Cristiano accedió, pues, al aparato estatal respaldado por una base social cada vez menos numerosa. El desprestigio que le supuso haberse aliado con los militares e intentar llevar adelante el proyecto reformista hasta las últimas consecuencias fue el precio que tuvo que pagar para no quedar relegado a la posición marginal a la que en todo caso se fue viendo orillado años después.

En ese momento, su incapacidad para establecer alianzas con el movimiento popular, su propia crisis interna, la dependencia que empezó a experimentar hacia el respaldo estadounidense, la insistencia en aplicar el binomio “reformas con represión”, el predominio del ala más conservadora de las Fuerzas Armadas sobre el sector moderado, el incremento del gasto militar, la antipatía que generó entre la clase dominante, la fuga de capitales, el cierre de fábricas y empresas, la caída de la actividad agrícola, la renuncia de varios miembros del gabinete y la conformación del Frente Democrático Revolucionario que, junto a la Coordinadora Revolucionaria de Masas, conjuntaban a todos los sectores de la izquierda en torno de un programa de gobierno de corte socialista, eran todos hechos que precipitaban la deslegitimación y el derrumbe de la Junta Revolucionaria de Gobierno. La misma Democracia Cristiana terminó por reconocer la imposibilidad de gobernar sin la participación del FDR en la estructura estatal⁵¹.

La promesa de llevar a cabo las reformas ofrecidas se desvanecía ante la resistencia obtusa de los sectores recalcitrantes y su predominio en las altas esferas del Ejército y el Estado. La Junta de Gobierno era vista, dentro y fuera del país, como represora e inoperante. Mientras tanto, la alianza entre la izquierda revolucionaria y la izquierda democrática fue superando los obstáculos que le impedían funcionar coordinadamente, procuró sobreponerse al nivel brutal de represión, acumuló fuerzas, ganó adeptos en el extranjero, se solidificó y robusteció.

La *coyuntura de definición* consistió para El Salvador en el padecimiento de una abierta crisis de hegemonía en la que tres proyectos de nación, uno socialista, uno reformista contrainsurgente y uno ultra conservador, competían por imponerse frente a los otros dos, sin posibilidad de conseguirlo. La Junta de Gobierno resultó ser una especie de Frankenstein, animado por una mano poderosa, pero sin posibilidad de sobrevivir por sí mismo en un ambiente sumamente hostil y en una situación de guerra civil todavía no declarada. La masacre de los 6 dirigentes del FDR, perpetrada el 27 de noviembre de 1980, poco más de un mes después del surgimiento del FMLN y en el

⁵¹ Cabarrús, C. R., *op. cit.*, p. 319.

marco de la realización de sus primeras maniobras militares como coalición, no auguraba más que el estallido del conflicto. Añadiendo aún más dramatismo a esos meses, el 2 de diciembre de ese año miembros de la Guardia Nacional secuestraron, violaron y asesinaron a cuatro religiosas estadounidenses, estremeciendo a la opinión pública a nivel nacional e internacional.

Durante los primeros días de 1981 se prolongó este clima sombrío con el asesinato, a manos paramilitares, del Presidente del Instituto de Transformación Agraria y dos de sus asesores estadounidenses en un distinguido hotel de San Salvador. Frente a estos crímenes contra sus ciudadanos y bajo la presión del escándalo ocasionado por tales hechos, los Estados Unidos suspendieron el apoyo económico hacia El Salvador por el lapso de un mes. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó la “ofensiva final” o “general” que dio inicio formal a la etapa bélica que predominó hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

2.3 Estados Unidos en Centroamérica. Reagan en El Salvador

La investigadora mexicana Eva Orduña divide el desarrollo de la política exterior estadounidense en cuatro grandes momentos: i) la consolidación de la Independencia de Estados Unidos como parte del afianzamiento de la soberanía nacional, de la cual proviene la “Doctrina Monroe”; ii) el desarrollo del imperialismo, momento en el que la expansión del poder económico adquirió un papel central, con las élites centroamericanas legitimando y cooperando en la construcción del Imperio; iii) la Guerra Fría, etapa en la que se intensificó el discurso mesiánico según el cual la ‘bondad’ de Estados Unidos y su responsabilidad por librar una batalla contra el mal para salvaguardar la paz y la democracia en todo el orbe justifica su intervencionismo; y iv) el neoliberalismo, en donde el supuesto ‘fin de las ideologías’ significó el triunfo de una sola ideología y la recuperación de la hegemonía por medio de la mundialización de un único sistema político y económico⁵².

⁵² Orduña, E., *Coacciones y oportunidades de la globalización: el caso de la Nicaragua sandinista y sus relaciones con Estados Unidos*, CCyDEL-UNAM, México, 2006, p. 168.

Durante la Guerra Fría, es decir, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos proveyó a los Ejércitos latinoamericanos entrenamiento militar y formación ideológica anticomunista, con el objeto de repeler la amenaza soviética en el hemisferio. En el mismo período, fue frecuente que las oligarquías nacionales depositaran en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la conducción gubernamental, mientras se dedicaban a conservar sus privilegios económicos. Así, el anticomunismo se convirtió en el pretexto de las clases dominantes y de los ejércitos latinoamericanos, y especialmente centroamericanos, para insistir en el silenciamiento de la oposición política por la vía violenta.

Pero la transformación de Cuba en un país socialista a partir de 1959 constituyó la materialización de la amenaza soviética justo en el circuncaribe, zona geográfica que Estados Unidos consideraba una extensión suya. La consolidación de la revolución cubana quebrantó la sensación de omnipotencia que permeaba a la relación de la primera potencia mundial con Centroamérica y el Caribe. Por eso Fernando Flores Pinel, especialista en relaciones internacionales, vio en ese hecho el parte aguas que dio inicio a la “centroamericanización de la Guerra Fría”. En su exposición acerca del desarrollo histórico de la seguridad nacional como constructo ideológico en el cual Estados Unidos fundó su política exterior y el grado de penetración que éste alcanzó en el Estado salvadoreño, Flores Pinel aporta elementos para la comprensión de la intersección entre los intereses de la primera potencia en nuestro continente, su expresión ideológica en la doctrina de seguridad nacional y hemisférica y la especificidad histórica de la estructuración del Estado en El Salvador⁵³.

El hecho de que las Fuerzas Armadas en América Latina hubieran alcanzado a lo largo del siglo XX tan altos grados de preponderancia política está íntimamente ligado tanto a la conceptualización estadounidense de la seguridad nacional y hemisférica, como a la necesidad de las élites económicas de los respectivos países de utilizar a los

⁵³ Flores Pinel, F., “El Estado de Seguridad Nacional en El Salvador: un fenómeno de crisis hegemónica”, en: *Centroamérica en crisis, op. cit.*, pp. 55-80.

ejércitos nacionales como guardianes de sus recursos y defensores de su clase ante las sublevaciones populares⁵⁴.

Antecedentes significativos del carácter que adquirió la política exterior estadounidense hacia Centroamérica a finales de la década de 1970 y durante los ochenta se encuentran en lo que Flores Pinel denomina “modelo kennediano” versus “modelo nixoniano” de seguridad nacional: dos modos de concebir la lucha contrainsurgente y antisoviética en el continente americano. John F. Kennedy —cuyo período presidencial, iniciado en 1960, fue interrumpido en 1963 con su asesinato— advirtió que su país había estado preparándose para una guerra regular contra la URSS, pero había descuidado el surgimiento de estallidos revolucionarios en diversos países del Tercer Mundo. Nota característica de su gobierno, fue, pues, el énfasis en que la lucha antisoviética debía librarse contra los procesos insurreccionales y las luchas de liberación nacional tercermundistas⁵⁵.

Kennedy abogaba por atender las causas socioeconómicas que ocasionaban los estallidos revolucionarios. Su método preventivo alentó a la filosofía de la Alianza para el Progreso, al tiempo que sus Fuerzas Armadas entrenaron a unidades especiales de los ejércitos locales en tareas contrainsurgentes que comprendían tanto el asistencialismo social como modo de acercar las tropas a la población, como el adiestramiento en guerras irregulares para responder a las ofensivas guerrilleras. En aras de garantizar la estabilidad política necesaria para implementar el programa de la Alianza, el gobierno de Kennedy favoreció la delegación de la responsabilidad de la conducción de los Estados centroamericanos en el estamento militar. Éste último, por

⁵⁴ Gregorio Selser investigó acerca de las razones que llevaron a los militares latinoamericanos a establecer con las oligarquías relaciones de extrema lealtad: éstas últimas ofrecieron a los altos mandos de los estamentos militares la posibilidad de ascender en la escala social por medio de relaciones de parentesco y otorgándoles libertad para administrar cierto tipo de negocios relacionados con el contrabando, el narcotráfico y la prostitución, entre otros. Ver Selser, G., “Centroamérica: entre la atrocidad y la esperanza”, en *Centroamérica en crisis, Ibid.*, pp. 7-28.

⁵⁵ Para una exposición detallada de la importancia de la doctrina contrainsurgente durante la administración Kennedy, consultar el texto escrito por un funcionario militar de dicha administración: Maechling Jr., Charles, “Contrainsurgencia: la primera prueba de fuego”, en: Klare, Michael T. y Peter Kornbluh (coordinadores), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad*, Consejo Nacional para la cultura y las artes/Editorial Grijalbo, México, 1990, pp. 33-64.

su parte, debía implementar medidas desarrollistas en los países del Istmo. Seguridad se asociaba con desarrollo, dado que el objetivo era desincentivar las simpatías populares hacia la causa revolucionaria.

El presidente Richard Nixon, quien gobernó Estados Unidos entre 1969 y 1974, partía de un diagnóstico distinto, según el cual el surgimiento de guerrillas obedecía a la patología social de determinados grupos, sin considerar las razones históricas ni socioeconómicas de estas manifestaciones de protesta violenta. Desde la concepción nixoniana, las sublevaciones eran fenómenos patógenos que debían ser perseguidos y destruidos con métodos policíacos⁵⁶.

A finales de la década de 1970, El Salvador no era el único país del Istmo que se encontraba en una situación crítica. También en Nicaragua y en Guatemala movimientos popular-revolucionarios hacían tambalear los cimientos de la sociedad y enfrentaban medidas contrarrevolucionarias feroces. La crisis centroamericana se produjo en un momento de reflujo de la hegemonía estadounidense a nivel mundial, lo cual repercutió en la radicalización de la política exterior de la primera potencia hacia la región. Además de enfrentar una crisis económica al interior de sus fronteras, hacia afuera Estados Unidos se encontraba desprestigiado tras la derrota de sus tropas en Vietnam y el fracaso de su operativo en la toma de la embajada de Irán. Su liderazgo estaba de capa caída en el globo.

La estrategia de James Carter —presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981— para restablecer lo que la Casa Blanca consideraba “el orden” consistió en la implementación del proyecto democratizador y del énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, con el objeto de golpear moralmente a la Unión Soviética y a los países bajo su esfera de influencia. Carter partió de reconocer que el discurso a favor de la libertad y la democracia ampliamente proclamado por su país era contradictorio con ciertas

⁵⁶ De acuerdo con Flores Pinel, esta visión “aportó a la doctrina de la seguridad nacional verdaderos perfiles autoritarios y totalitarios. Autoritarios porque erige como principio político básico [...] la sumisión incondicional a la autoridad y la aceptación de las imposiciones arbitrarias. Totalitarios porque la doctrina justifica un dominio completo del Estado sobre todos los grupos sociales, especialmente el de aquellos que se le oponen, cualquiera que sea su naturaleza histórica”, *op. cit.*, p. 68.

políticas diseñadas en el Pentágono. Atendiendo a los análisis causales de los brotes subversivos, de corte “kennediano”, Carter decidió contrarrestar las expresiones revolucionarias apostando por un proyecto reformista, encaminado a modificar las estructuras que servían de caldo de cultivo a las crisis sociales. Para América Latina se generó el concepto de “democracias viables”. Pero dos objetivos característicos de la Guerra Fría continuaron presentes: contener al comunismo y asegurar los intereses de los Estados Unidos en la región. Con base en ello se definieron como “viables”:

Los gobiernos elegidos mediante el voto popular que cumplieran por lo menos con dos requisitos básicos: en primer lugar, impedir el resurgimiento y la influencia de las organizaciones populares de inspiración marxista (dependiente de las características específicas de cada país, ello se lograría a través de diversos métodos que van desde la ilegalización de los partidos populares hasta el reconocimiento de su existencia en condiciones que imposibiliten efectivamente su acceso al poder); y en segundo lugar, asegurar que las opciones de desarrollo nacional y de política internacional no modifiquen substancialmente los intereses económicos, políticos y de seguridad de Estados Unidos en la región⁵⁷.

La política de Derechos Humanos estuvo destinada a limpiar la imagen del gobierno estadounidense como colaborador en la implementación del terrorismo de Estado en Latinoamérica. No obstante, su aplicación discrecional, siguiendo el criterio de la “lealtad” hacia Estados Unidos y no el nivel de violación de Derechos Humanos efectivamente presente en cada país, impidió el desarrollo de medidas sostenidas, unificadas y coherentes en ese sentido. Los triunfos sucesivos de las luchas de liberación nacional en distintos países de África, el apoyo cubano a Angola y el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua fueron interpretados por las fuerzas opositoras a Carter como resultados de la blanda política del presidente hacia los “enemigos”. Para las posiciones conservadoras, el concepto de Derechos Humanos pasó a ser sinónimo de debilidad, falta de liderazgo y pérdida del control de mando.

El académico y político chileno Luis Maira explica la derrota de la estrategia reformista de Carter en función de lo que considera una lectura chata de la realidad sociopolítica centroamericana. Un mal cálculo llevó a pensar que la ayuda militar

⁵⁷ Bermúdez, L., citada en Orduña, E., *op. cit.*, pp. 174, 175.

contraingente, la financiación de proyectos de gobierno “democratizadores” y el apoyo a actores políticos moderados bastaría para cumplir con el propósito de homogenizar al Istmo, transformando en democráticos regímenes signados por un perfil autoritario inveterado. Lo que los asesores de Carter pasaron por alto fue que el auge del movimiento popular en Centroamérica contaba con la acumulación de fuerzas y el nivel de politización necesaria para desestabilizar el esfuerzo reformista y adquirir un lugar protagónico en la configuración de la nueva estructura política de los países de la región⁵⁸. En el caso concreto de Nicaragua, Orduña señala como errores de Carter haber confiado en que se trataba de un país tradicionalmente controlado por la Casa Blanca y no haber fomentado la consolidación de un proyecto liberal en el seno de la burguesía nicaragüense. De ahí el desconcierto frente a la desobediencia de Somoza cuando, ante la petición del gobierno del país del norte de pactar con la oposición, el dictador se negó rotundamente. El mismo desconcierto que causó en Washington el triunfo de la insurrección sandinista.

Todo ello obligó al gobierno de Carter a redefinir su estrategia para una región que en el pasado había considerado como de bajo perfil; es decir, cuya situación no le ofrecía mayores complicaciones. Ahora, con la llegada al poder de un grupo no solo no apoyado sino ni siquiera previsto por Estados Unidos, en Nicaragua, y la toma de fuerza de un movimiento armado también independiente pretendiendo llegar al poder en El Salvador, la región adquiriría una importancia distinta. La nueva situación, según la lectura de Estados Unidos, implicaba problemas potenciales de suma trascendencia y exigía una estrategia diferente por parte de éste para eliminarlos o neutralizarlos. La estrategia que presentó Carter fue una combinación de aspectos de seguridad militar, con aspectos diplomáticos y económicos.

Con Carter se empezó a esbozar la política de agresión hacia Centroamérica. Después del triunfo sandinista, Carter tuvo la oportunidad de manejar la crisis de la región de una manera negociada y, sin embargo, optó por la política de violencia⁵⁹.

Autores como Adolfo Gilly (1981)⁶⁰, Alain Rouquié (1994)⁶¹ y Mario Vázquez (2008)⁶² coinciden con la tesis de Orduña cuando aseguran que la intervención decidida

⁵⁸ Maira, L., “Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica”, en *Centroamérica en crisis, op. cit.*, pp. 179-207.

⁵⁹ Orduña, E., *op. cit.*, p. 177.

⁶⁰ Gilly, A., *op. cit.*

⁶¹ Rouquié, A., *Guerras y paz en América Central*, capítulos VI y VII.

⁶² Vázquez, M., Seminario Monográfico “El Salvador: guerra popular y reforma política”, Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, agosto-noviembre, 2008.

y directa de Estados Unidos en el conflicto salvadoreño por medio de la inyección de cuantiosas inversiones en los rubros socioeconómico y militar, tuvo lugar con Carter a la cabeza, durante la fase prebélica. Pero las soluciones de Carter llegaron tarde. Los sectores conservadores en Estados Unidos cuestionaron duramente la posición del presidente. Asumiendo esa crítica, Ronald Reagan y sus asesores, deudores de la concepción “nixoniana” de seguridad nacional, propusieron endurecer las medidas, consiguiendo con ello el triunfo electoral e instaurándose en el poder entre 1981 y 1989.

La derrota de Carter no supuso una ruptura en materia de política exterior entre los dos gobiernos. Recordemos que ambos eran métodos distintos apuntando a un mismo objetivo: el restablecimiento de la hegemonía de la primera potencia mundial. Producto de su estudio comparativo de documentos oficiales de las administraciones Carter y Reagan, Luis Maira concluye que la capacidad de la burocracia profesional para absorber las diferentes posiciones dentro de sus propios esquemas permite la predominancia de una línea continua, denominada también “gobierno permanente”⁶³. En los albores de la toma de posesión de Ronald Reagan, Adolfo Gilly vaticinó: “Reagan se verá tentado a comenzar por proyectos pequeños pero concentrados para afirmar su nueva política. Y el peligro para Centroamérica reside en que pueda considerarla un escenario de tamaño ideal para sus primeras aventuras contrarrevolucionarias”⁶⁴.

La importancia de Centroamérica para Estados Unidos reviste un carácter estratégico en virtud de razones militares y geopolíticas, más no económicas. Para 1979, los analistas del Departamento de Estado tenían claro que la URSS no buscaría expandirse militar ni territorialmente en ninguna zona de Latinoamérica. A criterio de Eva Orduña, el declive que para entonces vivía el mundo socialista forzaba a la cúpula soviética a ocuparse de sus asuntos internos, más que a volcarse sobre el exterior. Y aunque ni la Nicaragua sandinista ni las revoluciones salvadoreña o guatemalteca representaban un peligro real para la seguridad de Estados Unidos, la mano dura de Reagan no podía permitir la instauración de una “segunda Cuba” en su “patio trasero”,

⁶³ Maira, L., *op. cit.*, p. 181.

⁶⁴ Gilly, A., *op. cit.*, p. 189.

a riesgo de perder credibilidad y confianza por parte de sus aliados en contra de la URSS. Además, del régimen castrista, a diferencia del soviético, se temía una pretensión expansionista y hegemónica en el área.

Así se entiende que el apoyo logístico y económico brindado a la contra nicaragüense y a la Fuerza Armada de El Salvador durante la década de 1980 haya llegado a ser incondicional y haya alcanzado sumas estratosféricas. “La asistencia militar norteamericana a la región ascendió vertiginosamente: de 10 millones [de dólares] que fueron otorgados en 1980, para el año 1984 alcanzó los 283.2; de éstos, el 60 por ciento tuvo como destino El Salvador. En la segunda mitad de la década, la ayuda llegó a ser de 852 millones de dólares, de los cuales las dos terceras partes correspondió a El Salvador”⁶⁵. El pequeño país se convirtió entonces en uno de los cinco principales receptores de divisas en concepto de ayuda por parte de Estados Unidos en todo el mundo. “Durante el curso de la guerra, Estados Unidos proporcionó US\$4.5 mil millones de ayuda económica al país y un poco más de mil millones de dólares en ayuda militar”⁶⁶. Así evalúa Orduña el impacto del ingreso de estos fondos:

Esta ayuda económica tenía el propósito de evitar a toda costa que la economía salvadoreña colapsara. En forma similar, pero en sentido inverso, se reaccionó respecto a Nicaragua [...] La política estadounidense aplicada sobre Centroamérica trajo para la región graves consecuencias económicas, de las cuales hasta la fecha no se ha podido recuperar. Las consecuencias fueron adversas tanto para los países que recibieron la ayuda, como para el que fue objeto de bloqueo y agresiones económicas. En el primer caso los resultados fueron negativos debido a que el apoyo consistió en medidas asistencialistas e inmediatas, que tenían como objetivo impedir que el gobierno aliado colapsara y con ello facilitar a los grupos enemigos la llegada al poder. El objetivo de las acciones era primordialmente político y no se buscaba en realidad reactivar la economía o impulsar un proyecto a largo plazo que se mantuviera y se desarrollara [...] Estados Unidos no hubiera podido lograr el desarrollo económico real y sostenido de los países a los que apoyaba (aun cuando ésta hubiera sido su intención), debido a que las economías de los países centroamericanos siempre han estado interrelacionadas. De esta manera, las medidas que tomó en contra de la economía nicaragüense afectaron en diversas formas a los otros países de la región⁶⁷.

⁶⁵ Vilas, C., citado en Sánchez, I., *op. cit.*, p. 90.

⁶⁶ Córdova Macías, R., *et al, op. cit.*, p. 83.

⁶⁷ Orduña, E., *op. cit.*, pp. 201, 202.

En la obra *Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica* la investigadora mexicana Lilia Bermúdez desarrolla una detallada explicación de la estrategia político-militar implementada por los Estados Unidos en Centroamérica para contrarrestar lo que la Casa Blanca consideraba la avanzada del comunismo en la región⁶⁸. En esta obra se esclarece por qué y cómo el alto mando militar estadounidense y los asesores de Ronald Reagan decidieron darle un viraje radical al tratamiento de las luchas de liberación nacional en el Tercer Mundo. La humillante derrota en Vietnam activó a los cerebros militares e ideológicos de la primera potencia, quienes cuestionaron duramente la política de Kennedy y reelaboraron los métodos para sofocar las erupciones revolucionarias. La idea de “tolerancia cero” frente a los brotes insurreccionales e incluso a la reversión de procesos políticos contrarios a los intereses estadounidenses fue cobrando fuerza al tiempo que militares y neoconservadores anticomunistas fueron recuperando liderazgos a nivel institucional e insuflando en la opinión pública el temor hacia un eventual triunfo de la URSS.

Los años ochenta debían ser el período en el que Estados Unidos demostrara plena capacidad para defender sus intereses vitales. Para ello debía evidenciar su superioridad en materia armamentística y hacer uso de la política exterior como un arma efectiva. La importancia de ganar legitimidad interna para esa actitud agresiva contra los países y los grupos “enemigos” hacía indispensable el equilibrio entre lo político y lo militar. Por eso los instrumentos de lucha abarcaban un amplio abanico que iba desde la diplomacia coercitiva hasta la intervención directa, pasando por la pugna ideológica destinada a conquistar las “mentes y corazones” de los estadounidenses en aras de legitimar internamente las incursiones bélicas en los países subdesarrollados. Extrayendo las lecciones propias de la experiencia en Vietnam y perfeccionando la doctrina contrainsurgente, las nuevas consignas fueron: flexibilizar las tácticas en los teatros de operaciones, no comprometer a las propias tropas, otorgar todo el soporte técnico y formativo posible a los ejércitos locales, restarle apoyo popular a los

⁶⁸ Bermúdez, L., *Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centroamérica*, Siglo XXI, 2ª edición, México, 1989. La información relacionada con la *GBI* que aquí presentamos fue extraída de esta investigación de Bermúdez.

movimientos insurgentes por medio de la realización de obras sociales, evidenciar lo más posible un objetivo político claro que incluía el impulso a la democracia representativa y estar preparados para esperar a que todas esas medidas produjeran el desgaste paulatino de las fuerzas enemigas.

Los formuladores de la política exterior hacia Latinoamérica clasificaron a los países en tres grupos: 1) los emergentes; 2) los aliados leales que no tenían la fortaleza de los emergentes (para los cuales se estableció una gradación entre los más leales hasta los indóciles) y 3) los casos críticos, en los que se encontraban los países enemigos y los amigos con fuerzas insurgentes con intenciones de derrocar al gobierno establecido. De los cinco países centroamericanos, tres fueron considerados en este último grupo (Guatemala, El Salvador, Nicaragua)⁶⁹.

La importancia que adquirió Centroamérica en razón de la lucha anticomunista llegó a ser tal, que en 1981 la analista del gobierno de Reagan, Jeane J. Kirkpatrick, calificó a la zona como “el lugar más importante del mundo para los Estados Unidos hoy en día”⁷⁰. Junto con el cuestionamiento del fracaso de la gestión de Carter en Centroamérica vino la decisión de Reagan de intervenir en la región haciendo uso de las recomendaciones de sus asesores, quienes pugnaban por poner punto final a la política de contención del comunismo para dar paso a medidas ofensivas. Dentro del rubro diplomático se dispuso establecer a El Salvador como “caso prueba” y enfocar en él la mayor parte de la atención y de los recursos, dejando a Nicaragua para un momento ulterior.

También se ejerció presión sobre los países de América Latina para que asumieran el conflicto en Centroamérica como un riesgo para todo el hemisferio, debido a su encuadramiento dentro de las coordenadas de la Guerra Fría. Por eso debían tomar medidas de rechazo contra los grupos armados y contra los gobiernos “enemigos” de los Estados Unidos. Esta “regionalización del conflicto” encontró eco especialmente en la dictadura militar de la Argentina (1976-1983), en la cual Estados Unidos encontró una aliada en la provisión de entrenamiento militar para la Contra nicaragüense, hasta que el apoyo estadounidense a Gran Bretaña en la guerra de Las

⁶⁹ Orduña, E., *op. cit.*, p. 184.

⁷⁰ *Idem.*

Malvinas (1982) generó la ruptura de las relaciones oficiales entre Argentina y Estados Unidos⁷¹.

Es bien sabido que Estados Unidos ocupó militarmente Honduras de manera acelerada desde 1983, introduciendo alta tecnología militar en una zona colindante con los países más conflictivos del Istmo. Los ejercicios militares de los soldados estadounidenses en territorio hondureño incluyeron por primera vez en la historia de América Latina el desplazamiento de tanques procedentes del país del norte. Las numerosas pruebas y maniobras de tropas estadounidenses en Honduras y Puerto Rico pusieron de manifiesto el objetivo de entrenar soldados dentro de la nueva *estrategia de despliegue rápido* —estrategia pensada para el Medio Oriente, particularmente los países de la OTAN, el Caribe y Centroamérica; de hecho, así operaron las tropas que invadieron la isla caribeña de Granda en 1984.

La *flexibilidad* pasó a convertirse en el elemento fundamental de la nueva estrategia y con la denominación “Conflicto de Baja Intensidad” o la alusión al “empleo de la fuerza” se buscó minimizar la carga belicista de tales conceptos. El significado de *victoria* dejó de estar asociado con la aniquilación militar, para adquirir un contenido eminentemente político, ligado a los objetivos preestablecidos. En palabras del secretario de Estado George Shultz: “El triunfo consistirá en negar la victoria al adversario de modo que se vuelvan posibles las soluciones políticas”⁷². En gran medida porque la implementación de esta estrategia encontró impedimentos dentro del propio Congreso de Estados Unidos, sus ejecutores optaron por entrenar a militares locales y apoyarlos en su lucha contra el comunismo. Eso fue lo que hicieron con el Ejército salvadoreño y con el Ejército Contrarrevolucionario nicaragüense. Pero es importante tener en cuenta que la invasión directa nunca dejó de existir como última opción ni de cernirse como una amenaza sobre la región.

La *Guerra de Baja Intensidad (GBI)* fue una estrategia político-militar diseñada para responder a la preocupación de las esferas de poder en Estados Unidos respecto

⁷¹ *Ibid.*, p. 185.

⁷² Shultz, G., citado en Bermúdez, L., *op. cit.*, p. 76.

de los nuevos focos de inestabilidad, considerados amenazas para la seguridad de la primera potencia. Figuras destacadas en la Casa Blanca, el Pentágono, los altos mandos castrenses y los sectores neoconservadores dentro de la academia y la sociedad civil estadounidense contribuyeron a perfeccionar la doctrina contrainsurgente y a generar la *GBI*, porque vieron en la multiplicación de experiencias revolucionarias en el mundo subdesarrollado una afrenta contra los intereses de su país. Por tratarse de guerras de guerrillas, es decir, de luchas irregulares, la respuesta debía ser también de distinto tipo.

De ahí que la *GBI* se caracterice por ser una guerra irregular, no convencional, destinada a producir el desgaste progresivo del enemigo y, por tanto, a durar años e incluso décadas. Fue considerada por sus estrategias como el punto más bajo dentro de una escala que incluía en segunda instancia la guerra convencional y, finalmente, la guerra nuclear total. Sus objetivos básicos eran: *a)* la contrainsurgencia, que fue aplicada en El Salvador; *b)* la reversión de procesos, que fue aplicada en Nicaragua y *c)* la lucha contra el terrorismo. La particularidad de este tipo de guerra exigía la actuación de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) cuyo entrenamiento especializado habilitaba a sus unidades como entrenadores de soldados ‘nativos’.

Las FOE estaban constituidas por: Boinas Verdes (entrenadores), Rangers (asesinos y destructores), Especialistas en Asuntos Civiles (encargados de establecer nexos con las comunidades en las áreas de conflicto y proveer apoyo en salud, educación, infraestructura, etc.), Especialistas en Operaciones Psicológicas (encargados de diseñar propaganda y estrategias de desprestigio contra los grupos subversivos, desalentar las simpatías y adhesiones hacia los insurgentes, ganar adeptos y apoyo social para el Ejército local y fomentar las hostilidades internas a favor de los objetivos estadounidenses), Fuerza Delta (operaciones encubiertas), Fuerza de Tarea (unidad secreta con aviación especial), Marina (tropas mar-aire-tierra, considerados como las mejor entrenadas de las FOE, entrenaban durante 1 año, el doble de los Boinas Verdes y seis veces más que los Rangers, eran combatientes altamente capacitados y también entrenadores), y Fuerza Aérea (responsables de la infiltración a

gran escala, exfiltración y operaciones de rescate en combate. En Granada infiltraron Rangers para el asalto aéreo inicial). Al interior de los Estados Unidos se generó una campaña masiva de promoción de la guerra, en la que sobresalió *Rambo* como el Boina Verde súper héroe. Militares salvadoreños y hondureños recibieron entrenamiento en tareas contrainsurgentes y guerra irregular por parte de las FOE en Honduras y se convirtieron en las tropas élite de sus respectivos países. Miembros de dichas unidades especiales se involucraron en la dirección de todos los aspectos relacionados con la guerra en El Salvador e incluso permanecieron en los teatros de operaciones.

Con el objeto de dosificar la intervención, se determinaron tres fases de agresión: i) “Insurrección latente e incipiente”, para la cual Estados Unidos debía prestar asesoría; ii) “Guerra de guerrillas”, para la cual el Ejército estadounidense debía establecer un comando de mando en el país sede, proveer equipo, entrenamiento, asesores y apoyo en combate; iii) “Guerra de movimiento”, para la cual Estados Unidos podía enviar tropas propias, aunque se esperaba que el ejército local suministrara la mayor parte del recurso humano. El *Manual de Campo* describía con detalle el arsenal de instrumentos necesarios para cumplir con las labores contrainsurgentes.

En síntesis, el *Manual de Campo* recoge los elementos de la vieja doctrina contrainsurgente: el papel primordial del ejército aliado en la tarea contrainsurgente, el carácter político del esfuerzo y su combinación con reformas económicas y sociales, la necesidad de combinar las operaciones militares con las de inteligencia, operaciones psicológicas, asuntos civiles y control de la población y recursos, y la legitimación del régimen aliado a través de la disminución de la violación a los derechos humanos⁷³.

Después de establecido El Salvador como el “caso modelo” para la puesta en práctica del eje contrainsurgente de la GBI, en 1983 se diagnosticó la situación de empate militar entre el gobierno salvadoreño y el FMLN y se emprendieron una serie de medidas en función de contribuir a que el ejército local ganara la guerra. Asesores estadounidenses tomaron las riendas de la planificación estratégica, mientras que los militares salvadoreños la llevaron a cabo. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas de El Salvador empezaron a profesionalizarse y a crecer en número. Al final de la década

⁷³ *Ibid.*, p. 121.

de 1980, la cantidad de miembros llegó a más de 60 mil. La ayuda armamentística también fue incrementada, incluidas unidades de aviación y, por medio de aviones especializados, empezó a operar una red de inteligencia que conectaba a Honduras con Panamá, el Pentágono y el ejército salvadoreño. En la institución castrense local se implantó un departamento de guerra psicológica, un centro de entrenamiento de tropas, una radio y un órgano de prensa.

En 1984 Washington estimuló el triunfo electoral de Napoleón Duarte y a partir de entonces le otorgó respaldo decidido al gobierno democristiano. En cooperación con Adolfo Rey Prendes, Ministro de Comunicaciones y Cultura, se desarrolló una campaña de desprestigio contra el FMLN y se procuró mejorar la imagen gubernamental. Aunado a ello, se buscó garantizar medios televisivos de propaganda pro gubernamental y se aplicaron técnicas como la captura de campesinos para pasarles videos antiguerrilla o la difusión de volantes con mensajes antiefemelenistas en zonas bajo control rebelde. El bombardeo aéreo fue un medio muy socorrido de ataque psicológico contra la población.

Estados Unidos proveyó de un Equipo Médico de Entrenamiento Militar al ejército salvadoreño, el cual reforzó su infraestructura para brindar atención médica a militares y civiles. Para ejercer el control de la población, la Policía de Hacienda salvadoreña impulsó medidas como: campañas de alfabetización y el “Movimiento de la Juventud Patriota”, con sus respectivas “brigadas de juventud” formadas por estudiantes paramilitares. Para desarrollar el rubro de ‘asuntos cívicos’ se creó el Instituto de Acción Cívica Militar en San Salvador. Desde allí se implementó el fallido plan Campaña Bienestar para San Vicente y Usulután, como parte de la estrategia de ‘pacificación’ de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas (CONARA), con la participación de los ministerios y la empresa privada. La idea era atacar militarmente los focos guerrilleros e implementar planes de reconstrucción en las zonas afectadas, incluyendo escuelas, carreteras, centros de salud, etc. Los planes de desarrollo se basaron en el financiamiento de la AID, la cual proporcionó 40 millones de dólares

anuales e involucró a organizaciones humanitarias como Care y Save The Children. Tras el fracaso del primer operativo, en el mismo 1984 se modificó el plan de acción cívica.

En 1985 la cantidad de personas desplazadas a raíz del conflicto ascendía a medio millón. Para el mantenimiento de los refugios en donde tales desplazados internos se albergaban, se destinaron USD\$92 millones en concepto de emergencia, cantidad equivalente a la quinta parte del presupuesto general de la ayuda estadounidense. Otro medio millón de salvadoreños había abandonado el país⁷⁴. Joaquín Villalobos, miembro de la comandancia general del FMLN, denunció el paso del “genocidio necesario” (1979-1981) al “genocidio encubierto”, por medio de bombardeos indiscriminados para conseguir el desalojo de la población de las zonas con presencia guerrillera. Washington no dejó de difundir una imagen positiva del gobierno salvadoreño, útil para su desempeño en la tarea contrainsurgente. Comprendiendo que sería difícil salir de la situación de empate militar, la administración Reagan determinó la continuación de la GBI⁷⁵.

Hacia mediados de la década de 1980, la comunidad internacional, especialmente los países latinoamericanos, y la oposición de Reagan en el Congreso habían dado muestras de rechazo hacia la enmarcación de la crisis centroamericana dentro del conflicto Este-Oeste y hacia la intervención de Estados Unidos en la región. De cara a la búsqueda de la reelección de Reagan, los neoconservadores se vieron forzados a modificar su discurso. Sólo entonces aceptaron que había causas internas que favorecían la permanencia de la crisis y hablaron de la necesidad de estimular el desarrollo social y económico para generar más justicia en Centroamérica. Sin

⁷⁴ El texto de Orduña aporta información valiosa acerca de cómo la injerencia estadounidense en Centroamérica modificó los patrones migratorios en la región. Respecto del desplazamiento forzado padecido por los salvadoreños durante el conflicto armado, la autora relata el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos hacia El Salvador y su negativa a reconocer el estatuto de refugiados a los desplazados por la guerra al categorizarlos como “migrantes económicos”, ver: Orduña, E., *op. cit.*, “Los refugiados centroamericanos”, pp. 217-225.

⁷⁵ A tono con el espíritu antiimperialista que encarnó en la izquierda de entonces, Adolfo Gilly escribió: “El más grande y rico país del continente, Estados Unidos, se está ensañando a vista y paciencia del mundo entero con el más pequeño, El Salvador. En este enfrentamiento desigual está en juego una parte del futuro de cada uno de nosotros, latinoamericanos. Pero no se trata solamente de eso. Está en juego también nuestra dignidad de pueblos secularmente oprimidos, vejados y explotados por los poderes imperiales. Por dignidad, por razón y por justicia no se puede dejar solo a El Salvador cuando la prueba decisiva se avecina”, *op. cit.*, p. 89.

embargo, el fomento del miedo al adversario, la magnificación de la capacidad militar de la URSS, el trabajo mediático a favor de la política intervencionista y la negativa frente a las propuestas de buscar salidas negociadas del conflicto se mantuvieron. Un discurso pronunciado por Reagan en marzo de 1986 resulta bastante ilustrativo al respecto:

Los soviéticos y los cubanos, utilizando Nicaragua como base, se han convertido en la potencia dominante en este corredor vital entre la América del Norte y la América del Sur. Afincados allí estarán en situación de amenazar el Canal de Panamá, entorpecer nuestras vías marítimas vitales del Caribe y, finalmente, actuar contra México. Si ocurriera esto, se producirían huídas en masa de gentes desesperadas hacia el norte, a las ciudades de la región meridional de los Estados Unidos, o a donde quedara alguna esperanza de libertad⁷⁶.

Orduña asegura que las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo estadounidense en torno a la crisis centroamericana fueron más de forma que de fondo, pues, en definitiva, Reagan contó con el apoyo del Congreso para desarrollar su política injerencista. En lo que respecta a la sociedad estadounidense, la autora identifica dos tipos de oposición contra el intervencionismo. Un grupo fue liderado por quienes conocían de primera fuente lo que ocurría en Centroamérica porque habían estado allí (miembros de la Iglesia, por ejemplo), que denunciaban los abusos cometidos por Estados Unidos y colaboraban con los refugiados centroamericanos en su país. Otro sector se oponía al cuantioso gasto generado por la intervención, argumentando que ese dinero debía ser usado para la política social interna en Estados Unidos. Aunque ejercieron ciertas presiones y lograron crear alguna conciencia entre sus coterráneos, ninguno de estos grupos llegó a ser numeroso ni a tener verdadera posibilidad de incidir en la modificación de la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica.

El norteamericano promedio de esta década siguió viéndose a sí mismo como el habitante del país mesiánico encargado de llevar la buena nueva de la libertad y la democracia a los pueblos oprimidos. De haberlo deseado, hubiera tenido a su alcance infinidad de pruebas que le mostraran los verdaderos alcances de las acciones de su

⁷⁶ Drago, T., citado en Orduña, E., *op. cit.*, p. 181. Una exposición sintética de la política exterior reaganiana puede verse en: Toussaint, M., *et al*, *Vecindad y diplomacia. Centroamérica en la política exterior mexicana. 1821-1988*, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México, 2001, pp. 190-193.

gobierno. Sin embargo, siguió aceptando la versión oficial que catalogaba a los estadounidenses no solo como los más buenos, sino también como los más capaces y los más poderosos. En este último sentido, se vanaglorió de los métodos de guerra sofisticados usados por su gobierno, y permitió que el nuevo prototipo de superhombre (difundido especialmente a través del cine y la televisión) fuera insertado en los valores de su sociedad. El hecho de que el pueblo hubiera elegido a Reagan para un segundo período presidencial muestra o la desinformación del electorado, o su preocupación predominante (sino es que exclusiva) por los asuntos internos: no importaba si el gobierno cometía, incluso, actos de terrorismo contra un país pobre, si era capaz de hacer crecer la economía estadounidense⁷⁷.

Con este apartado hemos pretendido mostrar el peso de la intervención estadounidense en la crisis centroamericana. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que la democracia representativa con la que actualmente cuenta El Salvador provenga en gran medida de la estrategia contrainsurgente de la primera potencia mundial adquiere un importancia capital a la hora de valorar la transición política salvadoreña. Desde las posiciones institucionalistas, este hecho tiende a ser soslayado en aras de valorar los avances y retrocesos de las instituciones democráticas en el país. Pero sin la aceptación de su origen y sin la discusión del carácter eminentemente histórico y geoestratégico del surgimiento de esas instituciones no nos parece posible evaluar a cabalidad la marcha de la institucionalidad salvadoreña.

Consideramos que esa evaluación no debe partir de la pregunta acerca de cuánto se acercan y cuánto se distancian las instituciones democráticas de El Salvador de las instituciones de las “democracias realmente existentes”. Debe partir de la pregunta más radical, acerca de cuánto la institucionalidad alcanzada en El Salvador es la adecuada para responder a los desafíos planteados por la búsqueda de la democracia. Búsqueda en la que, sin pretenderlo en su origen, participaron: las vanguardias revolucionarias, los sectores ultraconservadores, los demócratacristianos que en medio de la crisis de hegemonía se aliaron con los Estados Unidos y facilitaron con ello la utilización de El Salvador como país modelo para la puesta en práctica de la GBI, el ejército salvadoreño como ejecutor de la estrategia militar contrainsurgente planificada en Washington, entre otros actores que veremos con mayor detalle en el

⁷⁷ *Ibid.*, pp. 208, 209.

próximo capítulo. El intento por esclarecer la manera en la que este conjunto de fuerzas contribuyó al establecimiento de la democracia electoral en El Salvador nos parece más fecundo para comprender la evolución del proceso político salvadoreño que establecer parámetros de comparación entre el entramado institucional salvadoreño y el entramado institucional de las democracias representativas de los países industrializados, porque, desde nuestro criterio, la variable *actores* constructores de la democracia electoral pesa más sobre el resultado final que la variable *formas* que reviste dicha democracia.

Establecido a lo largo del capítulo que la izquierda revolucionaria, las fuerzas de la ultra derecha paramilitarizada, el Partido Demócrata Cristiano, las Fuerzas Armadas de El Salvador y el gobierno estadounidense fueron los actores protagónicos durante la crisis de hegemonía originada a raíz del golpe de Estado de 1979, veremos en el próximo capítulo cómo la interacción de esos actores determinó el surgimiento de tres proyectos de nación que disputaron el poder por todos los medios con los que contaban a su alcance y mantuvieron en guerra al país durante toda la década de 1980.

CAPÍTULO III La década de 1980: guerra civil, democracia electoral, regionalización y pacificación

Empezaremos retomando la discusión en torno de cuándo establecer el inicio de la transición política planteada por Ricardo Córdova Macías *et al* en la citada obra *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto*. Nuestra posición respecto de tal polémica fue especificada en el capítulo anterior. Volvemos sobre este tópico porque consideramos relevante mencionar que en dicha obra se optó por ubicar en 1983 el punto de partida de la democratización, siguiendo criterios eminentemente formales, procedimentales, tal como lo explican los autores:

Desde un punto de vista formal, la promulgación de la Constitución de 1983 sienta las bases para la recomposición política e institucional del país, contribuye al establecimiento progresivo de un entorno institucional favorable a la liberalización política y fundamenta nuevas bases de legitimización para el régimen político... [La ratificación de la Constitución] contribuyó al inicio de una recomposición política que restableció la elección democrática de la presidencia de la república subrayando su carácter civil, transformó a la Asamblea Constituyente en una Asamblea Legislativa unicameral, y enfatizó la independencia del poder judicial¹.

De ahí que su relato de la transición política adopte a los procesos electorales, la recomposición partidaria y la salida negociada del conflicto como ejes centrales. El propósito del presente capítulo es subrayar que el surgimiento y consolidación del sistema electoral que se dio en El Salvador de los años ochenta no ocurrió al margen del estallido y evolución de la guerra civil. Al contrario, fue planificado dentro del marco de la estrategia político-militar estadounidense, instrumentada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el propósito de restarle apoyo social a la insurgencia e ir provocando el aislamiento político del FMLN, meta que no consiguió.

La obra de Córdova Macías *et al* ofrece una valiosa sistematización de la pérdida en vidas humanas y de los daños materiales ocasionados durante el conflicto armado y en ningún momento desconoce la trascendencia de éste. También recoge uno de los esfuerzos académicos más significativos que se han hecho en años recientes en

¹ Córdova Macías, R., *et al.*, *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto...*, *op. cit.*, pp. 65, 66.

materia de transición política, en donde el apartado acerca de la negociación y la firma de los Acuerdos de Paz no tiene desperdicio. No obstante, en el relato histórico allí expuesto la guerra aparece como telón de fondo, mientras que los ciclos electorales son presentados como el fenómeno principal y los Estados Unidos como un actor secundario. No está de más recordar que al calor del conflicto, algunos analistas y líderes izquierdistas minusvaloraron la importancia de la regularización de las elecciones, absortos como estaban en los avatares de la guerra y convencidos de que el suyo era el único escenario en el que el futuro del país se estaba poniendo en juego.

Creemos que sobrevalorar cualquiera de los dos fenómenos conduce a error y que subestimar el papel desempeñado por la administración Reagan en el proceso equivale a omitir el peso del actor político que más recursos económicos invirtió en la guerra. La lectura formalista de la transición política conduce a la omisión de detalles históricos que desde nuestra perspectiva son centrales para comprender de dónde surgieron y quiénes son los actuales actores políticos del país y de qué naturaleza es la institucionalidad que se ha perseguido y continúa persiguiéndose en El Salvador. Desde una posición minimalista, el proceso se lee en términos de los resultados obtenidos en función de la meta última: la instauración de la democracia representativa. Por eso se otorga particular realce a elementos como las elecciones y el respeto del marco jurídico, considerados indispensables para la consecución de esa meta.

Los politólogos salvadoreños Córdova Macías y Artiga-González ponen en claro la particularidad de la implementación del sistema electoral salvadoreño. Córdova Macías establece una distinción entre dos niveles de competencia política: el *real* (en el cual el FMLN es una fuerza operante) y el *formal* (o legal, del cual el FMLN se encuentra excluido), siendo 1992 el año en el que ambos planos logran interceptarse plenamente². Artiga-González, por su parte, caracteriza a las elecciones salvadoreñas de la década de los ochenta como “semi-competitivas”³. En ambos casos se alude al hecho de que el espectro ideológico del sistema de partidos estaba incompleto porque

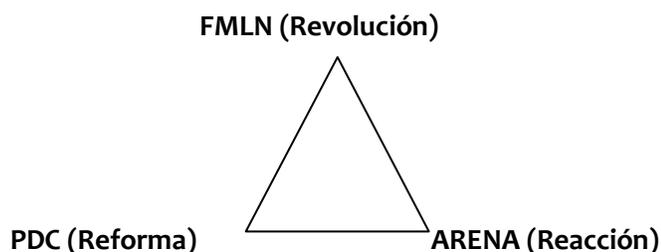
² *Ibid.*, pp. 78 y 81.

³ Artiga-González, Entrevista, San Salvador (06/05/09).

carecía del ala izquierda. Sólo entraban en competencia los partidos ubicados entre la centro-derecha y la extrema-derecha. Con esto coincidimos. Pero no consideramos lo electoral como lo más significativo de la década.

Sin desconocer el aporte de las valoraciones de estos autores, hacemos eco de la caracterización de los años ochenta propuesta por el historiador salvadoreño-español Ricardo Ribera como un período en el que tres proyectos de nación permanecieron enfrentados. Tales proyectos quedaron planteados durante la *coyuntura de definición*, como se vio en el segundo capítulo: uno ultra conservador o reaccionario, uno revolucionario y uno reformista pro-injerencista. En virtud de diversos factores internos y externos, los tres proyectos sufrieron metamorfosis notables hasta configurar el sistema político salvadoreño actual.

Figura 1: Las fuerzas políticas reales y actuantes en El Salvador durante la década de 1980.
Fuente Ricardo Ribera⁴.



Cabe señalar que el capítulo no está estructurado en función de estos tres proyectos, sino, sobre todo, de la relación de dos de ellos, el FMLN y ARENA, con el tercero, el PDC, que detentó el gobierno a lo largo de casi toda la década de 1980. Las relaciones conflictivas y violentas entre esos actores constituyen una de las principales características del período. Cada una de estas fuerzas construyó su identidad política en contraposición con los demás. En esa medida, los tres (y el gobierno estadounidense) se condicionaron mutuamente, forzándose a virajes tácticos, estratégicos y discursivos. Los tres resolvieron su extrema conflictividad confluyendo

⁴ Ribera, R., *Los partidos políticos en El Salvador...*, op. cit., p. 18.

en el formato electoral impulsado por Washington. Y no obstante, el alfil de la Casa Blanca, la Democracia Cristiana, fue el menos favorecido por tan paradójico desenlace. La marcada tendencia a hablar de “empate” para referirse a la solución negociada de la crisis salvadoreña tiene que ver con el hecho de que todas estas fuerzas se neutralizaron entre sí. Curiosamente, quien más debilitado salió del proceso, el PDC, fue el partido que más consistentemente respaldó la lucha por la instauración de la democracia representativa.

El objetivo de este capítulo es mostrar que El Salvador de la década de 1980 no fue un país en el que se empezaron a desarrollar una serie periódica de elecciones al calor de una progresiva liberalización política, a pesar de la conflictividad propia de la guerra. Fue un país en guerra en el cual:

- i) El FMLN como guerrilla alcanzó la profesionalización militar necesaria para hacer frente e impedir el triunfo del ejército nacional, respaldado técnica y financieramente por los Estados Unidos. La fortaleza militar de este grupo insurgente le permitió mantenerse cohesionado como actor político. Fue así como pudo conservar la legitimidad y lealtad de ciertos sectores poblacionales, a pesar de sus errores políticos, militares y humanos.
- ii) Después del repliegue que lo caracterizó durante la primera parte de la década, a finales de los ochenta el movimiento popular dio muestras de un notable resurgimiento. Su llamado a la finalización del conflicto fue uno de los elementos que contribuyó a la salida negociada del mismo.
- iii) Los sectores más retardatarios del país fueron presionados por Estados Unidos para encuadrarse dentro de la institucionalidad política emergente, a partir de lo cual surgió el partido ARENA.
- iv) El Partido Demócrata Cristiano, con Napoleón Duarte a la cabeza, se convirtió en el brazo político de la estrategia contrainsurgente estadounidense.

- v) La dependencia experimentada por los gobiernos salvadoreños respecto de los ingentes recursos proporcionados por Estados Unidos para evitar el colapso económico del país, los sujetaron a las decisiones políticas y a los intereses geoestratégicos de la primera potencia en el Istmo centroamericano.
- vi) El nombramiento de una Asamblea Constituyente, la aprobación de una nueva constitución, la elección y consolidación de una Asamblea Legislativa y la instauración de elecciones periódicas se inscribieron dentro de la estrategia contrainsurgente estadounidense. Se trató de la fundación de una nueva institucionalidad que fue ganando cada vez más legitimidad, en la medida en que hizo realidad parte de la utopía democrática anhelada por el pueblo salvadoreño.
- vii) La “regionalización del conflicto” influyó de manera decisiva en la “regionalización de la pacificación”.

3. Tres proyectos de nación y un desenlace inesperado

El colapso gubernamental que marcó el inicio de la transformación política de El Salvador devino en dos procesos: la unificación de los frentes guerrilleros en el FMLN para emprender una lucha revolucionaria de altos vuelos y el reacomodo del modelo de dominación sobre la base de una nueva institucionalidad jurídico-política. En ese sentido, aunque la Junta Revolucionaria de Gobierno fracasó en sus propósitos fundamentales, que eran evitar el estallido de la guerra civil e implementar un programa de reformas tendientes a modernizar el aparato de acumulación originaria en El Salvador, funcionó como gobierno bisagra entre el régimen político dominado por los militares y la inauguración de un nuevo sistema político, edificado de acuerdo a los preceptos formales de la democracia. La guerra y la edificación de ese nuevo sistema político constituyeron los fenómenos más relevantes de la década de 1980.

La instauración de la nueva estructura de poder, diseñada y financiada por Estados Unidos como estrategia para marginar políticamente a la subversión, se puso en marcha por medio de un calendario electoral que constaba de tres etapas: en 1982 la elección de una Asamblea Nacional Constituyente para modernizar la Constitución de 1962 y sentar las bases del arribo de los civiles al poder; en 1984 la elección del primer presidente civil desde 1931; y en 1985 las elecciones regulares de alcaldes y diputados. A esta primera ronda sucedieron otras dos jornadas electorales: las de alcaldes y diputados en 1988 y las presidenciales de 1989. El ciclo de elecciones libres y periódicas fue instalado y hasta la fecha no se ha visto interrumpido.

En un inicio, la expectativa del FMLN era conquistar el poder por medio de una ofensiva militar, antes de que Ronald Reagan asumiera la presidencia estadounidense⁵. Sin embargo, la fragilidad de la coalición revolucionaria, la carencia de armamento y la inexistencia de una insurrección popular nacional frustraron dicho propósito. Lejos de impedir el desarrollo de la guerra, este hecho inauguró una nueva etapa para la izquierda revolucionaria, durante la cual las organizaciones político-militares empezaron a consolidar sus retaguardias estratégicas, especialmente en el norte y el oriente del país, y a maniobrar militarmente de modo sistemático y sostenido. Los primeros años ochenta vieron nacer a un movimiento guerrillero cada vez más cualificado, en proceso de expansión, cuya legitimidad internacional fue en paulatino ascenso.

Tal y como se temía, el arribo de Ronald Reagan al poder, si bien no significó una ruptura respecto de la política exterior implementada por el presidente Jimmy Carter, sí intensificó el programa intervencionista hacia Centroamérica, dándole un cariz más agrio. Como vimos en el capítulo anterior, la llegada de Reagan a la Casa Blanca supuso para el Istmo, primero, que la crisis regional pasara a ser ubicada dentro de las

⁵ Ricardo Ribera complejiza ésta lectura lineal y recurrente, aduciendo que el FMLN buscó una negociación con Estados Unidos como parte de su agenda insurreccional, emulando la estrategia del Frente Sandinista previa al derrocamiento del dictador Somoza. “El FMLN, antes de lanzar su ofensiva del 10 de enero de 1981, buscó el dialogo [...], siendo Estados Unidos quien lo rechazó”, *Los partidos políticos en El Salvador...*, op. cit., p. 48.

coordinadas de la confrontación Este-Oeste y, segundo, que, en función de lo anterior, se convirtiera en el escenario en el que los Estados Unidos pusieran a prueba la *Guerra de Baja Intensidad (GBI)*. Mario Lungo Uclés la calificó como “una estrategia contrarrevolucionaria más inteligente de lo previsto y con giros novedosos”, e incluso le dio otro nombre: *estrategia contrarrevolucionaria para la región de carácter prolongado*⁶. Aunque este plan intervencionista desarrollado por Estados Unidos en Centroamérica entrelazó componentes militares, económicos y políticos, fue el primer rubro en el que más recursos se invirtió, en el que más empeño se puso y al que se dio mayor prioridad.

El carácter regional del experimento estadounidense a nivel político, tendiente a democratizar los regímenes del Istmo, se puso de manifiesto con la programación de elecciones en las mismas fechas en Guatemala que en El Salvador⁷. En este último país, pese a que la persistencia de la guerra fue una fuente de desestabilización permanente, la burguesía consiguió replantear su estrategia insertando exitosamente su proyecto político en el marco de la nueva institucionalidad que ella misma contribuyó a construir. Es así como el partido ARENA, liderado por Roberto d’Aubuisson, se convirtió en la expresión de un empresariado politizado y dispuesto a tomar las riendas del aparato estatal salvadoreño, después de haberlo delegado a la institución castrense a lo largo de medio siglo.

Algunos analistas del proceso salvadoreño (sobre todo los extranjeros) coinciden en subrayar la importancia del contexto regional y de los cambios en el orden internacional para poder comprenderlo a cabalidad. La contrarrevolución en Nicaragua y la contrainsurgencia en El Salvador formaron parte de la misma estrategia anticomunista diseñada y financiada por Estados Unidos. La millonaria injerencia de la primera potencia mundial en la crisis regional y la presión ejercida por la Casa Blanca sobre los países latinoamericanos para que sumaran esfuerzos en el objetivo de liquidar la supuesta amenaza soviética que se cernía sobre todo el continente, intensificó su

⁶ Lungo Uclés, M., *El Salvador 1981-1984. La dimensión política de la guerra*, UCA Editores, San Salvador, 1986, pp. 102 y 103.

⁷ Sánchez, I., *op. cit.*, p. 95.

magnitud hasta el punto de provocar la llamada “regionalización del conflicto”. El área en general se vio afectada de diversos modos⁸.

Las iniciativas multilaterales denominadas Contadora y Esquipulas resumen las inquietudes suscitadas en América Latina en torno de la crisis en el Istmo, evidenciando los alcances de la regionalización y abonando a la salida negociada del mismo. De ahí que consideremos pertinente hablar de una “regionalización de la pacificación”. Un actor internacional cuyo desempeño en el marco de esta situación convulsa vale la pena destacar es México, dado el impacto simbólico de la actitud que, en un inicio, decidió tomar frente a la región y la solución de la crisis. En el último numeral de éste apartado veremos que México, Colombia, Venezuela y los países centroamericanos impulsaron iniciativas en pro de la salida negociada de las guerras civiles que convulsionaron a la región. De esas iniciativas, los Acuerdos de Contadora y Esquipulas fueron los resultados más consistentes.

3.1 El FMLN y el movimiento popular durante la guerra

Si bien las organizaciones de izquierda habían desafiado abiertamente al régimen demostrando una combatividad admirable, el terrorismo de Estado ejercido durante los años previos a la “ofensiva final” había logrado desarticular al movimiento popular, diezmando a los mandos medios, incentivando el desplazamiento forzado y el exilio y golpeando la moral militante. Irene Sánchez se detiene en el análisis de este aspecto, develando que durante los meses previos a la ofensiva de 1981 la curva del auge insurreccional presentaba un declive que pasó desapercibido por las organizaciones político-militares, pero que sería determinante para la imposibilidad de

⁸ En sus “Notas sobre la crisis en Centroamérica”, Daniel Camacho expone las causas del colapso regional en términos del desarrollo capitalista: “La crisis no es un hecho aislado que se presenta en un lugar con caracteres más o menos propios; responde al desarrollo del capitalismo mundial y a las nuevas formas de control y hegemonía del capitalismo en la zona”: *La crisis centroamericana, op. cit.*, pp. 11, 12.

tomar el poder por medio de la ofensiva⁹. La autora explica el desenlace de la ofensiva militar en términos del desfase existente entre el tiempo político y la estrategia revolucionaria implementada por el FMLN. En pocas palabras, cuando el ánimo insurreccional del movimiento popular estaba en su punto más álgido, las guerrillas carecían de armamento y no habían logrado unificarse. Como contraparte, cuando el FMLN ya existía como tal y contaba con recursos armamentísticos aún precarios, pero suficientes para lanzar una ofensiva a nivel nacional, el ánimo de las masas había decaído drásticamente y la insurrección que debía posibilitar a la vanguardia revolucionaria conquistar el poder no se produjo.

Ricardo Ribera coincide con éste diagnóstico del “desfase”, ubicando su razón de ser en las divergencias entre los grupos guerrilleros. Según Ribera, estas divergencias constituyen “el pecado original” del FMLN, que lo “marcaría para siempre”¹⁰. Profundizando aún más en ese argumento, el examen de la ofensiva general del FMLN propuesto por Rafael Menjívar Ochoa abunda en detalles acerca de la desconexión que predominó en la práctica concreta de las organizaciones revolucionarias, más allá de las apuestas discursivas que proclamaban la unificación. Los dos autores, Ribera y Menjívar Ochoa, aluden a la desconfianza mutua que signaba las relaciones entre los grupos guerrilleros y a la pugna por predominar sobre los demás. Ejemplo de ello fue que, cuando se planificó la ofensiva, todos los grupos exageraron las cantidades de armas y de combatientes con los que efectivamente contaban. A la hora decisiva, la capacidad de fuego de todos era mucho menor de la prevista, además de otra serie de errores logísticos que se cometieron durante el ataque¹¹. Fallas de diagnóstico, de coordinación y de estrategia se entrelazaron para dar al traste con la ilusión de acceder al poder por la vía insurreccional. Desde entonces la unidad de la izquierda revolucionaria fue un hecho que posibilitó llevar a cabo la guerra

⁹ Cabarrús supo vislumbrar esto en su momento al pronosticar en 1980 el “descenso en la combatividad del pueblo no organizado” y la eventual falta de apoyo de la que, por esta causa, podría adolecer una ofensiva general, *Génesis de una revolución...*, *op. cit.*, p. 333.

¹⁰ Ribera, R., *op. cit.*, p. 46.

¹¹ Menjívar Ochoa, R., *op. cit.*. El conjunto de razones que, a juicio del autor, explican el fracaso de la ofensiva puede verse especialmente en la primera parte del libro: “Epílogo. Enero de 1981”, pp. 1-70.

y convirtió a la guerrilla salvadoreña en una de las más potentes del continente. Pero se trató de una unidad posible sólo en el terreno de la táctica y fue por eso mismo quebrantable.

La “ofensiva final” o “general”, llevada a cabo en enero de 1981, fracasó en su objetivo fundamental. Pero el afianzamiento de “zonas liberadas” controladas por el FMLN a partir de agosto de ese mismo año en 5 departamentos (Morazán, Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán), de un total de 14, y la incapacidad del ejército de asestar golpes contundentes a las fuerzas guerrilleras, mostraron que el FMLN estaba preparado para librar una guerra de larga data. La consolidación de esas retaguardias estratégicas, bajo la consigna de “resistir, desarrollarse y avanzar”, trasladaron al campo el escenario de la confrontación. Si durante los setenta y el año de 1980 las tensiones políticas se habían desarrollado en las áreas urbanas, la guerra transcurrió en zonas rurales. Un estudio acerca del perfil de los grupos poblacionales más afectados por el conflicto ofrece datos reveladores al respecto. Señala, en primer lugar, a los parientes de soldados, en segundo lugar, a los campesinos arrendatarios de tierra y simpatizantes de la guerrilla y, en tercer lugar, a los profesionales, seguidos de los jornaleros y los trabajadores industriales¹².

El FMLN se convirtió en un ejército que reclutó a una gran cantidad de campesinos y encontró en las poblaciones rurales sus bases de apoyo. Por afinidades ideológicas, convicciones políticas, solidaridad cristiana o miedo, éstas poblaciones prestaron servicios clandestinos a las fuerzas guerrilleras. Por esa razón, el ejército las calificó como “objetivos legítimos de ataque” que debían ser tratados igual que el enemigo armado. Para “quitarle el agua al pez”¹³, es decir, “limpiar” las zonas tomadas por las fuerzas insurgentes de habitantes que pudieran contribuir con sus posibilidades de sobrevivencia, los militares ejercieron operativos de “tierra arrasada”, consistentes

¹² Seligson y McElhinny (1997), citados en Pirker, K., *Ibid.*, pp. 205,206.

¹³ La frase “quitarle el agua al pez” se vincula con la metáfora de Mao Tse Tung, citada por Charles Maechling Jr.: “Los guerrilleros son los peces y el pueblo es el agua en que éstos habitan. Si la temperatura del agua es la adecuada, los peces se multiplican”, *op. cit.*, p. 50.

en bombardear cantones, pueblos y caseríos, quemar casas y cultivos, violar a las mujeres y ejecutar cruentas masacres, con el objeto de obligar a los pobladores a abandonar sus lugares de vivienda y deshabitar esos sectores.

Dos de las masacres más emblemáticas de ese período ocurrieron en el Río Sumpúl, en mayo de 1980 —cuando aún no estallaba “oficialmente” el conflicto— y en El Mozote, en diciembre de 1981. En el primer caso, se trató de un ataque contra campesinos del departamento de Chalatenango que, intentando huir hacia Honduras a través del fronterizo Río Sumpúl, fueron interceptados por aviones y helicópteros del ejército y atacados con bombas y metralletas. Más de 300 personas, mujeres, ancianos y niños inclusive, fueron asesinadas¹⁴. En el caso de El Mozote, las víctimas ascendieron a más de 1000 habitantes de una comunidad evangélica, no organizada ni simpatizante de la guerrilla, pero ubicada al norte del departamento de Morazán, cerca de uno de los campamentos del FMLN. Unidades del Batallón Atlacatl —uno de los batallones especiales, entrenados y financiados por el ejército estadounidense— a cargo del general Domingo Monterrosa, tomaron el pueblo y los cantones aledaños durante tres días en los que se dedicaron a fusilar a uno por uno de los ancianos, mujeres, hombres y niños que allí habitaban¹⁵.

La guerra se instaló en la vida cotidiana sobre todo del campesinado, que se vería de un modo u otro afectado por el conflicto. Así sintetiza Kristina Pirker la lógica que empezó a predominar desde entonces:

La situación de la guerra afectó al modo de vida de toda la sociedad salvadoreña, por lo cual tanto los sectores organizados como el pueblo no organizado tuvieron que diversificar sus estrategias de supervivencia. A diferencia del pueblo no organizado, los sectores organizados, al formar parte de una de las dos alianzas enfrentadas, se convirtieron en **actores de la guerra**. Esto significaba que todos sus actos de movilización, resistencia, protesta y negociación formaban parte de una estrategia más amplia que tenía como finalidad la derrota del adversario. Esta particularidad —que

¹⁴ Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, “Masacres de campesinos por la Fuerza Armada”, “Río Sumpúl”, *op. cit.*, pp. 126-129.

¹⁵ En la p. 118 del Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador se lee: “Más de quinientas víctimas identificadas perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no han sido identificadas”, *Ibid.*, “Caso ilustrativo: El Mozote”, pp. 118-125.

Una investigación exhaustiva sobre las víctimas de El Mozote y alrededores puede leerse en: Binford, L., *El Mozote. Vidas y memorias*, UCA Editores, San Salvador, 2007.

denominamos la *militarización de la política*— incidió profundamente en las prácticas políticas, modalidades de organización y jerarquías internas de las organizaciones populares, tanto de la izquierda como de la Democracia Cristiana¹⁶.

Y también del sistema político en su conjunto. Con “pueblo organizado” se hace referencia a los miembros del movimiento de masas que sobrevivieron a la represión sistemática de los últimos setenta y 1980, decidieron permanecer en el país y pasaron a tomar las armas o a ejercer funciones directamente vinculadas con la estrategia insurgente. En agosto de 1981 fue decretado el Estado de Emergencia Nacional. Las instituciones y fábricas del Estado fueron intervenidas militarmente hasta el final de la guerra, en 1992. Los derechos de asociación y sindicalización fueron prohibidos de facto, pese a que a partir de 1982 estuvieron permitidos por ley. Los sindicalistas, activistas de derechos humanos y líderes estudiantiles continuaron siendo perseguidos, detenidos y maltratados arbitrariamente. Los escuadrones de la muerte siguieron condenando a la desaparición forzada, la tortura y el asesinato a todo aquél que consideraran sospechoso de servir de enlace con el FMLN. Aunque los números varían dependiendo de la fuente, la cifra de alrededor de 38 mil muertos registrada entre 1980 y 1983 constituye cerca del 50% de la cantidad total de muertes violentas arrojada por los 12 años que duró el conflicto (alrededor de 80 mil)¹⁷. Dato elocuente acerca de cómo el terrorismo de Estado se agudizó durante los primeros años de la década de los ochenta.

La Comisión de la Verdad para El Salvador, establecida por mandato de los Acuerdos de Paz en 1992 como grupo *ad hoc* para ofrecer herramientas que

¹⁶ Pirker, K., *op. cit.*, p. 200. Mario Vázquez ha refutado la conceptualización “militarización de la política” propuesta por Pirker para caracterizar la década de 1980, argumentado que la política se hallaba militarizada en El Salvador desde mucho antes. Si bien el señalamiento de Vázquez no puede soslayarse, también es verdad que la guerra civil impuso nuevas dinámicas a los actores políticos salvadoreños. Es probable que pudiera encontrarse, como se sugirió, un término más adecuado para referirse a la realidad subrayada por la autora. No obstante, el fenómeno que ella refiere es digno de consideración y análisis, por cuanto la radicalización política de la izquierda revolucionaria supuso la puesta en práctica de una *contracultura*, como respuesta organizada ante un contexto socio-político históricamente violento. La polémica en torno de este punto tuvo lugar en la sesión del 2 de abril de 2008 del seminario libre sobre El Salvador, realizado en los salones de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

¹⁷ *Ibid.*, p. 204. Ver: Córdova Macías, R., *et al*, *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto...*, “Número de muertos y desaparecidos durante la guerra civil en El Salvador”, *op. cit.*, p. 61.

permitieran diagnosticar los daños ocasionados por el conflicto, documenta, con base en 22 mil testimonios, los hechos de violencia política perpetrados entre 1980 y 1991. El 70% de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos hacen referencia a acontecimientos ocurridos entre 1980 y 1984. El 85% de tales señalamientos implican a grupos militares y a escuadrones de la muerte, el 5% a miembros del FMLN y en el 10% de los casos no se logró establecer responsabilidad. Las acusaciones contra el frente guerrillero obedecen a la realización de “ajusticiamientos” que cobraron la vida de presuntos o efectivos delatores —mejor conocidos como “orejas”—, asesinatos recurrentes de alcaldes y reclutamiento forzoso de jóvenes¹⁸. Otra expresión de la violencia revolucionaria sostenida a lo largo del conflicto fue la destrucción de obras públicas, como puentes, carreteras e infraestructura del alambrado eléctrico, el sabotaje a la celebración de elecciones y la destrucción de los bienes de las cooperativas del sector reformado.

Estas cooperativas formaban parte del conjunto de reformas que la Democracia Cristiana se propuso implementar como parte de la estrategia contrainsurgente alentada por Estados Unidos. La creación de cooperativas se inició en 1981, en el marco de la tercera Junta de Gobierno, con Napoleón Duarte a la cabeza. Respondían a un plan de Reforma Agraria que constaba de 3 fases. Debido a que la reforma implicaba la expropiación de los medianos y grandes latifundios, cuando en 1982 el partido ARENA —instrumento político de la gran empresa— logró el predominio dentro de la Asamblea Constituyente, la profundización de la reforma agraria fue detenida.

Con todo, las cooperativas democristianas lograron impactar positivamente en unas 85 mil familias. Entre ese grupo poblacional se fomentó la creación de organizaciones populares pro gubernamentales que rechazaran la opción insurgente como manifestación de descontento y a su vez sirvieran de base social al Partido Demócrata Cristiano. Este tipo de relación clientelar entre ciertos segmentos populares y el gobierno había sido experimentada años atrás por el PCN, partido oficial de los

¹⁸ Ver: “Análisis estadístico de los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad”, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, *op. cit.*

militares, especialmente bajo el mandato de figuras progresistas dentro del ejército. El esquema se reeditaba: prohibición, persecución y represión sistemática contra las asociaciones opuestas al régimen versus permisividad y fomento de gremiales que contribuyeran a la legitimación del aparato gubernamental y sirvieran como válvula de escape ante las presiones sociales¹⁹. Un elemento novedoso dentro del régimen político liderado por Napoleón Duarte fue, de acuerdo con Pirker, la implementación de una política específicamente dirigida hacia la creación de organismos sociales pro gubernamentales.

El proyecto cooperativista se vio limitado porque la mayor parte del presupuesto gubernamental se decantó hacia el gasto militar en un contexto de guerra civil que sumergía al país en una grave situación de crisis económica. Muchos de sus beneficiarios abandonaron los cultivos a causa de la violencia y de la baja internacional en los precios del algodón, el café y el azúcar. Al no contar con títulos de propiedad de la tierra mientras no saldaran sus deudas con el Estado, los corporativistas permanecían en una situación vulnerable que les impedía el acceso a créditos para modernizar los cultivos²⁰. La pobreza, lejos de disminuir, aumentó. “Por ejemplo, entre 1980 y 1990 los salarios reales disminuyeron un 64 por ciento, y el salario mínimo real de los trabajadores agropecuarios alcanzó en 1989 sólo el 36,6 por ciento del nivel alcanzado en 1978”²¹. Otro ejemplo es que, de acuerdo a información arrojada por el BID, a principios de la década de los noventa, “el 55,7 por ciento de la población rural vivía por debajo de la línea de pobreza y el 81 por ciento no podía cubrir las necesidades básicas”²².

La segunda Junta de Gobierno había decretado la congelación de salarios, la prohibición del contrato colectivo y la represión contra cualquier protesta reivindicativa de los trabajadores, como supuesta salvaguarda de la seguridad nacional. “En los

¹⁹ *Ibid.*, pp. 216-220.

²⁰ El “cafetalero” Antonio Cornejo cuestiona el impulso a estas cooperativas asegurando que los mismos campesinos manifestaban sentirse capacitados para poner a producir la tierra, pero no para administrar una finca, ni para comercializar la producción. Entrevista, San Salvador (12/12/08).

²¹ Pirker, K., *op cit.* p. 212.

²² *Ibid.*, p. 216.

primeros años de la guerra civil, este marco jurídico, que prohibía de facto el activismo sindical, y el descenso de las actividades económicas por la guerra, los sabotajes y el quiebre de muchas empresas, deterioraron aún más las condiciones de vida de los sectores populares en la ciudad y en el campo”²³. Pese a las restricciones y al peligro implícito en la agremiación, durante 1983 empezó a reactivarse el movimiento popular, tanto en el campo como en las ciudades. Pirker delinea el mapa de las diferentes organizaciones de empleados gubernamentales, trabajadores de diferentes rubros, campesinos, repobladores, familiares de víctimas de la violencia política, estudiantes, etc., que a lo largo de los ochenta se agruparon en torno de demandas específicas. A diferencia del movimiento de masas de los setenta —cuyo discurso político fue radicalizándose públicamente—, éstos grupos se esforzaron por circunscribirse a las reivindicaciones de cada sector y procuraron deslindarse de toda vinculación partidaria. Tanto la amenaza constante a la actividad sindical, como la lucha entre el gobierno y el FMLN por convertir tales asociaciones en bases sociales que legitimaran sus respectivos proyectos de nación, imprimieron al movimiento popular emergente altas dosis de inestabilidad. De ahí que durante ese período se registren incontables reagrupamientos y modificaciones de los nombres y las siglas que permitían identificar a las organizaciones.

La necesidad de una mayor prudencia ideológica no impidió que la marcada polarización que caracterizaba al país permeara en la reconfiguración de las organizaciones. Dicha reconfiguración coincidió con una etapa de “estabilización” del conflicto. 1984 y 1985 fueron los años en los que menores bajas se registraron. La delincuencia aún no se había desatado en el país. Se trató de un período más bien “congelado”, que se recuerda por ciertos actores como uno de los más pacíficos en la historia de El Salvador²⁴. Durante los años siguientes cristalizaron dos grandes conglomerados de asociaciones de heterogénea composición, contrapuestas entre sí. Por una parte, las organizaciones que simpatizaban con el FMLN se aglutinaron a partir

²³ *Ibid.*, p. 212.

²⁴ Entrevista realizada para esta investigación al especialista en Derechos Humanos, de origen holandés, Ralph Sprenkels, el 24 de marzo de 2009 en San Salvador.

de 1986 en la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS). Por otra parte, en 1987 los grupos ligados al gobierno democristiano conformaron la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (UNOC). Aunque la UNTS albergaba en su seno a una mayor cantidad de organizaciones, la UNOC contaba con el respaldo institucional e incluso económico del entonces partido oficial. La pertenencia de ciertos dirigentes de una y otra asociación a los grupos insurgentes o a la cartera gubernamental evidencian los nexos que amalgamaban a las organizaciones con uno de los dos bandos enfrentados en el conflicto. UNTS y UNOC dotaron, pues, a cada uno de esos bandos de la legitimidad social que necesitaban para defender sus posturas. En esa medida, ambas asociaciones se convirtieron en actores relevantes y reconocidos dentro del campo político²⁵.

Más allá de sus diferencias políticas, un denominador común en el discurso de estas organizaciones populares de nuevo tipo fue la demanda del cese a la violación a los Derechos Humanos y de una salida negociada al conflicto. Respecto de lo primero, las presiones sobre todo internacionales a favor de esa misma petición consiguieron disminuir los operativos de “tierra arrasada” ejecutados por la Fuerza Armada, pero la situación general de los Derechos Humanos en El Salvador no mejoró sostenidamente. Hacia el final de la década, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) —por citar sólo uno de los organismos especializados en la materia—, aseguró en su informe anual de 1987-1988 que la situación de los Derechos Humanos en El Salvador durante ese período había empeorado²⁶.

²⁵ Pirker, K, *op. cit.*, pp. 223-233.

²⁶ “Dentro del período a que se refiere el presente informe las estadísticas de muertes ocurridas en El Salvador, durante el primer semestre de 1988, sin contar a las derivadas del conflicto armado, de acuerdo con las fuentes más confiables, son las siguientes: muertes atribuidas a asesinatos políticos cometidos por los escuadrones de la muerte de extrema derecha, 32; muertes atribuibles a las fuerzas militares y de seguridad, 48; muertes atribuidas a la guerrilla, 19. Durante todo el año de 1987, cada uno de esos grupos habrían sido, respectivamente, responsables de 24, 60 y 29 muertes, lo cual indicaría durante el presente año un aumento en lo que respecta a las muertes causadas por los escuadrones de la muerte”. Ver: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/cap.4b.htm>

En ese contexto, el activismo de “militantes bisagra” que fungían como líderes sindicales abanderando el discurso del sector al que representaban y sumándose a las peticiones de pacificación, al tiempo que formaban parte de alguno de los grupos del FMLN, da cuenta de la triple estrategia que la insurgencia desarrolló a lo largo de los ochenta: *i)* dar golpes contundentes que dieran muestras constantes de su poder de fuego; *ii)* alentar la organización social y mantener los nexos con el movimiento popular; y *iii)* abrir canales políticos, a nivel nacional e internacional, que legitimaran su accionar militar y le proporcionaran condiciones favorables en eventuales mesas de diálogo con el gobierno.

Mario Lungo Uclés ofrece un análisis de los primeros años de la guerra que sintetiza la posición del FMLN frente a los aspectos determinantes de la misma: el movimiento popular, la salida negociada, la plataforma programática de la insurgencia y el contexto internacional. Desde la perspectiva del autor, la contradicción entre lucha armada revolucionaria y lucha política de masas se resolvió en la rearticulación de un movimiento popular acorde con la nueva situación política del país y, por eso mismo, distinto del movimiento de masas del período 1977-1980. Pese a la notable diferencia entre ambas expresiones del poder popular y a la dificultad con que los revolucionarios asimilaron ese cambio, se trató de la vuelta a la ciudad y a la actitud demandante frente al Estado por parte de organizaciones diversas del sector productivo. En lo concerniente a la búsqueda de una negociación con el gobierno, Lungo Uclés señala que en tanto voluntad manifiesta del pueblo salvadoreño, el FMLN asumió la salida negociada como parte de su agenda política. Pero ello no era excluyente del sostenimiento y fortalecimiento de la iniciativa militar por parte de las fuerzas insurgentes. En sus palabras:

“[...] debemos hacer una apreciación que consideramos de *crucial* importancia para evitar desviaciones reformistas. *Incrementar a niveles cada vez mayores la lucha armada revolucionaria y la lucha política de masas es un imperativo estratégico* para el FMLN-FDR, ya que constituyen el eje fundamental de lucha, y si bien es cierto que esto contribuye a fortalecer las posibilidades de diálogo y negociación, este incremento no se hace en

función de este objetivo particular, ya que no constituye el componente esencial de la estrategia revolucionaria”²⁷.

La causa del entrampamiento de la salida negociada se encontraba, de acuerdo con Lungo Uclés, en las diferencias radicales en cuanto al diagnóstico de los principales problemas del país y en cuanto a las concepciones de diálogo manejadas por el FMLN y su brazo político diplomático FDR, por una parte, y por el gobierno demócrata cristiano, la Fuerza Armada y el gobierno estadounidense, por la otra. Mientras que la insurgencia daba al diálogo un lugar prioritario dentro de la negociación, la contraparte lo reducía a un mero uso táctico, en función de disimular su opción guerrillista²⁸. Durante los primeros años del conflicto e incluso antes del estallido del mismo, FMLN-FDR promovieron varias iniciativas de diálogo con el gobierno salvadoreño y con el estadounidense que fueron desatendidas. Ni Napoleón Duarte ni Ronald Reagan estaban dispuestos, en esa fase inicial, a reconocer al grupo insurgente como fuerza política. La demanda de ésta última por el cese a la injerencia norteamericana y por el establecimiento de un diálogo sin condiciones previas fue desoída por parte de un poder decidido a aniquilar militarmente al enemigo.

Un punto de inflexión en la historia de la lucha revolucionaria en El Salvador lo constituyó el asesinato de Mélida Anaya Montes, “comandante Ana María”, por orden de su compañero de vida y hombre fuerte de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, “comandante Marcial”, quien a su vez se suicidó en circunstancias poco claras. Siendo las FPL la organización más numerosa y potente del FMLN, tales hechos, ocurridos en 1983, conmocionaron a esa organización en particular y al ejército guerrillero en su conjunto. Es sabido que Marcial se oponía rotundamente a la negociación y había en ese aspecto un punto de choque infranqueable entre ésta y las posiciones más pragmáticas o moderadas dentro de las fuerzas guerrilleras; entre ellas la de la propia Ana María. Si bien las razones que produjeron la muerte de ambos dirigentes de las FPL

²⁷ Lungo Uclés, *op. cit.*, p. 64.

²⁸ *Ibid.*, p. 66.

no se conocen a ciencia cierta, a partir de entonces las voces menos intransigentes tuvieron más cabida dentro de la Comandancia General del FMLN²⁹.

En marzo y mayo de 1984 la celebración de las primeras elecciones presidenciales regulares después de 1931 modificó el panorama político salvadoreño. La elección de Napoleón Duarte en segunda vuelta constituyó un paso decisivo en el afianzamiento de la institucionalización de la democracia electoral. Mario Lungo Uclés advirtió éste fenómeno, pero la idea de que la crisis hegemónica de la oligarquía no lograba resolverse por medio de la democratización persistía en su análisis. En el siguiente apartado podrá apreciarse con más claridad por qué esa lectura de la coyuntura política electoral era errónea. Una novedad dentro de la dinámica que venía dándose fue la convocatoria emanada del presidente electo a un primer intento de diálogo con la insurgencia. Pero las diferencias entre ambas posiciones volvieron a manifestarse como insalvables: más que una negociación en la que Duarte se abriera a escuchar las posiciones de la guerrilla, lo que hizo fue proponerles que dejaran las armas y se incorporaran, sin más, a un proceso democrático del cual él se sentía adalid.

Respecto del planteamiento programático del FMLN-FDR hay que decir que varió sustancialmente a lo largo de la década. Lungo Uclés la explica en función de la transformación que fue experimentando la propia la lucha revolucionaria en el transcurso de su praxis³⁰. Para éste autor, el programa era uno más de los múltiples componentes que configuran un proceso revolucionario. Es necesario, advierte, que exista un planteamiento ideológico inicial que articule a las diferentes fuerzas en torno de objetivos comunes sobre la sociedad a la que se aspira. Pero tal planteamiento tendrá que irse modificando de acuerdo a las realidades concretas que la lucha misma va generando. En ese sentido, la plataforma de Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) proclamada por la Coordinadora de Masas a principios de 1980 y adherida por el FDR, respondió a la coyuntura generada por el golpe de Estado de 1979. Los propósitos de tal planteamiento pueden resumirse del modo siguiente:

²⁹ Ver Martín Álvarez, *op. cit.*, pp. 194, 195.

³⁰ Lungo Uclés, M., *Ibid.*, Capítulo Segundo, El problema del Programa Revolucionario, pp. 67-90.

Derrocar a la dictadura militar, destruir su maquinaria político-militar y establecer un gobierno democrático revolucionario; poner fin al poder político y económico oligárquico, sin afectar a los pequeños y medianos propietarios; romper definitivamente la dependencia del imperialismo yanqui; asegurar los derechos y libertades democráticas para todo el pueblo y elevar su nivel de vida; crear el nuevo ejército surgido fundamentalmente del ejército popular, con la incorporación de los elementos sanos y patrióticos del ejército gubernamental; impulsar la organización y la participación popular; autodeterminación y respeto mutuo en política exterior³¹.

Se trata de puntos considerados por el autor como adoptables por un programa reformista. Por eso la Reforma Agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior fueron abanderadas por la Junta de Gobierno tras el golpe de Estado. El carácter revolucionario del GDR en esa coyuntura específica descansaba, según él, en dos pilares: la abolición del ejército “burgués” y la ausencia de la vía electoral como posibilidad de acceso al poder. Hasta 1984, el FMLN-FDR no modificó esa plataforma. Pero en ese lapso de 4 años, el incremento de la intervención estadounidense, la profesionalización de los dos ejércitos enfrentados, la prolongación de la guerra, la apertura del ciclo electoral, la reactivación de la actividad gremial y el reconocimiento que la coalición revolucionaria había alcanzado nacional e internacionalmente, la llevaron a reformular su propuesta frente a la sociedad. Es entonces cuando surgen: la Plataforma del Gobierno Provisional de Amplia Participación (GPAP), hecha pública en enero de 1984, y la propuesta de establecimiento de un Gobierno de Consenso Nacional (GCN), formulada en la segunda ronda de conversaciones con el gobierno, en noviembre del mismo año.

Ambas propuestas representaron un viraje dentro del discurso insurgente, producto de intensos debates en su interior y objeto de críticas en la izquierda internacional, que acusaban al FMLN de estar renunciando a su proyecto revolucionario para abrazar una causa reformista. Lungo Uclés respondió a esos cuestionamientos subrayando el carácter táctico de dicho viraje discursivo, insistiendo en la importancia de su contextualización histórica —más allá de todo dogmatismo “maximalista”— y dejando en claro que “en ningún momento el FMLN ha pensado en abandonar las

³¹ *Ibid.*, p. 78.

armas”³². Así resume Martín Álvarez el polémico ideario efemelenista de mediados de los ochenta:

La plataforma del FMLN-FDR ofrecía, como alternativa a la consulta electoral, la integración provisional de algo similar a un gobierno de salvación nacional para intentar sacar a El Salvador de la crisis. En dicho gobierno tendrían cabida representantes de los más variados sectores sociales: campesinos, obreros, empresarios, profesionales, maestros, partidos políticos, ejército; con la excepción de la oligarquía y los militares más recalcitrantes. Se proponía por tanto, un gobierno plural que debía tomar medidas inmediatas para, más tarde, convocar elecciones.

Dichas medidas iban encaminadas, principalmente, a desmontar el aparato represivo del Estado, depurar las fuerzas armadas, esclarecer las violaciones de los derechos humanos y reorganizar el poder judicial. Asimismo, proponía derogar la Constitución de 1983 y disolver ARENA, el partido de la derecha, por considerarlo representante de los escuadrones de la muerte.

Por otra parte, se planteaban una serie de medidas de política económica y social, como la fijación de precios de los productos básicos y la implementación de un plan de empleo masivo. Tras estas medidas de carácter inmediato, se proponían una serie de reformas estructurales que debían definir las líneas maestras del futuro modelo económico y político³³.

Martín Álvarez concibe ese planteo como un ablandamiento de la inflexibilidad inicial del FMLN, por cuanto subyace en él la renuncia a ser el partido de vanguardia, único representante legítimo de los intereses populares, para aceptarse como una fuerza política entre otras en busca de una alianza multisectorial, sin desestimar la realización de elecciones ni la negociación y abriendo la posibilidad al abandono de las armas, dadas determinadas condiciones. Desde la perspectiva de éste autor, la negociación era la segunda opción efemelenista, después de la derrota militar del ejército gubernamental.

Como es bien sabido, en el proceso salvadoreño terminará por imponerse la salida negociada sobre la militar. Pero a la altura de 1987 esto aún no se veía como un hecho inexorable. En un texto del mes de abril de ese año, intitulado “¿Por qué no avanza El Salvador?”, el filósofo español-salvadoreño Ignacio Ellacuría expone su preocupación por el entrapamiento en el que había caído la situación del país. Este análisis señala al gobierno estadounidense, a la Fuerza Armada, al gran capital —

³² *Ibid.*, p. 85.

³³ Martín Álvarez, *op. cit.*, pp. 195, 196.

representado por el partido ARENA—, al gobierno democristiano y al FMLN como “las distintas fuerzas [que] tiran del cuerpo social en direcciones contrarias o divergentes, con lo cual no sólo no se avanza, sino que se está destruyendo al país”³⁴.

El desgaste ocasionado por tal destrucción empezó a ser manifestado cada vez con más fuerza por diversos sectores sociales durante los últimos ochenta, quienes demandaban con ímpetu paz para El Salvador. Sin duda ese clamor social influyó en la posición del FMLN en el lapso que media entre la formulación de las plataformas programáticas de 1984 y la siguiente propuesta denominada *Proclama a la Nación. La Revolución Democrática*, hecha pública en 1990. Respecto de este aspecto, Ellacuría señala a 1987 como el año en el que, además de preparar al pueblo organizado para una insurrección general, se dio un intenso debate político e ideológico en el seno del FMLN, “el cual se mostró en 1988 en la aceptación, no sólo de la entrada pública al país del FDR, sino, sobre todo, de la participación de la Convergencia Democrática (CD) en las elecciones presidenciales. Esta última discusión va a convertirse en uno de los goznes principales del giro del FMLN”³⁵.

Convergencia Democrática fue el nombre que adoptó la coalición integrada por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento Popular Social Cristiano (MPS) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN)—miembros del FDR—, cuando optó por convertirse en partido político y competir en los comicios de 1989. La inmersión de éste, el brazo político-diplomático de la insurgencia, al teatro electoral supuso un primer paso hacia su independización respecto del FMLN y su vuelta a la apuesta por el acceso al poder en un escenario afín con su posición ideológica. Ocho años habían transcurrido desde el inicio de la alianza entre la izquierda revolucionaria y la socialdemocracia. El paisaje político salvadoreño había cambiado considerablemente en ese período. La vía electoral que a finales de los años setenta se había visto clausurada, a inicios de los noventa mostraba signos de estabilidad y una mayor apertura frente al pluralismo ideológico.

³⁴ Ellacuría, I., *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989)*, Escritos políticos, Tomo I, UCA Editores, San Salvador, 1991, pp. 176, 177.

³⁵ *Ibid.*, Tomo III, “Una nueva fase en el proceso salvadoreño”, pp. 1856, 1857.

En vista de que la realización periódica de elecciones estaba poniendo en riesgo el apoyo popular a la insurgencia, ésta lanzó en enero de 1989 una *Propuesta de paz del FMLN para convertir las elecciones en una contribución a la paz*, exigiendo como requisito “tan solo la postergación por seis meses de los comicios y una serie de condiciones mínimas encaminadas a conseguir un evento electoral limpio”³⁶. Si bien no fue ésta la primera vez que el FMLN se declaraba dispuesto a participar en elecciones —pues ya había hecho mención a ello en 1984—, sí constituyó el planteamiento más blando respecto de las condiciones que proponía para integrarse al marco institucional³⁷.

Otro síntoma del desplazamiento que continuaba produciéndose en la posición inicial del FMLN fue la aparición de un texto firmado por Joaquín Villalobos, hombre fuerte del ERP y miembro de la Comandancia General del grupo insurgente. El documento, llamado *Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario*, puede considerarse el antecedente de la *Proclama de la Revolución Democrática*. Ellacuría recalca el hecho de que fuera publicado en dos partes, porque, a su juicio, ello muestra una evolución en el pensamiento de Villalobos. Extractando el contenido de la segunda parte, el entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) afirma:

Se sostiene la necesidad de una revolución democrática, donde el término democrático es entendido fundamentalmente en el sentido de las democracias occidentales. La revolución, posible y deseable en El Salvador, no es una revolución estalinista o vietnamita, como tal vez algunos lo pensaron anteriormente, sino que es una revolución democrática, que acepta el pluralismo de los partidos y de las elecciones, que se mantiene abierta a las ideas y a las prácticas del mundo occidental, especialmente a la libertad religiosa y a la idiosincrasia y a las tradiciones del pueblo salvadoreño, que acepta la economía mixta con buenas posibilidades para la empresa y el capital privado y, desde luego, para la iniciativa de los ciudadanos, que promueve la libertad de expresión y de organización y que mantiene buenas relaciones internacionales con todo el mundo, especialmente con Estados Unidos³⁸.

³⁶ Martín Álvarez, *op. cit.*, p. 198.

³⁷ El académico salvadoreño Carlos Acevedo analizó esta propuesta y las reacciones que suscitó en diversos sectores de la sociedad salvadoreña en el momento en que fue emitida: Acevedo, C., “La propuesta de paz más viable del FMLN”, en: *La paz en Centroamérica: Expediente de Documentos Fundamentales, 1979-1989*, CeIIICH-UNAM, 1989, pp. 58-75.

³⁸ Ellacuría, I., “Una nueva fase en el proceso salvadoreño”, *op. cit.*, p. 1868.

Aparece, pues, plasmado el giro discursivo que posibilitó el salto de la prioridad militar a la necesidad de la negociación por parte de las fuerzas revolucionarias. Ya en el planteamiento de *La Revolución Democrática* como tal, el cambio más significativo fue la propuesta de abolir completamente ambos ejércitos en función de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil. También se introdujeron manifestaciones en pro de una reforma al sistema electoral, al poder judicial y la propuesta de una nueva Constitución, mostrando la nueva disposición del FMLN a incorporarse a la incipiente institucionalidad del país. Hasta 1990 las demandas de un nuevo orden político y social por parte del FMLN se mantuvieron. Pero en el documento de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 fueron relegadas a un segundo plano. A partir de la firma de los Acuerdos, el FMLN consumó el cambio que se venía manifestando en su discurso convirtiéndose en un partido político e insertándose, con mucho más éxito que la Convergencia Democrática, a la competencia electoral.

3.2 La politización de la burguesía multisectorial: ARENA como proyecto político

La emergencia de ARENA fue consecuencia de la reacción de un grupo radicalizado del empresariado salvadoreño que, en plena *coyuntura de definición* (1979-1981), pugnaba por abrirse espacio en un escenario de abierta confrontación y crisis de hegemonía. Ese grupo asumió una iniciativa política ante tres situaciones amenazantes: i) la irrupción de la izquierda revolucionaria; ii) el retiro del apoyo incondicional que la Fuerza Armada le había venido ofreciendo durante los últimos 50 años³⁹; y iii) el respaldo estadounidense a las opciones centristas, buscando la marginación de los extremos, en el marco de la estrategia contrainsurgente. La primera respuesta frente a esa triple amenaza no fue, como vimos, fundar un partido político, sino desarrollar una

³⁹ “La oligarquía terrateniente, no solo había perdido ya su soporte ideológico principal (la iglesia católica), sino también el respaldo armado que le había permitido mantener el sistema dominación; pues la fuerza armada, por primera vez se declaraba públicamente anti-oligárquica”, Zamora, R., *La izquierda partidaria salvadoreña: entre la identidad y el poder*, FLACSO-El Salvador, 2003, pp. 19, 20.

estrategia paramilitar en busca de la eliminación física de toda oposición política y formar grupos de presión (como FAN o “Paz con Democracia”) en contra de un gobierno adverso a su intención de imponer una única concepción de nación. No es casual el hecho de que Roberto d’Aubuisson —un militar pasado a retiro a causa de su implicación en el expediente represivo de los setenta— se haya convertido en el símbolo heroico de lucha anticomunista y restablecimiento del orden⁴⁰.

Uno de los miembros fundadores de ARENA, el “cafetalero” Antonio Cornejo, rememora la preocupación con la que, a finales de la década de 1970, su gremio veía la posibilidad de que El Salvador “cayera”, como Nicaragua, bajo el control del comunismo internacional, en el contexto de la Guerra Fría⁴¹. A su juicio, la guerra “no era realmente de Nicaragua ni de El Salvador. Era de Rusia contra Estados Unidos”. En su relato resalta la negativa a aceptar la existencia del movimiento popular como actor fundamental durante la segunda parte de la década de 1970 en El Salvador y la existencia objetiva de una problemática social como caldo de cultivo para el surgimiento y robustecimiento de ese movimiento. Según Cornejo, “Centroamérica era una zona de bastante tranquilidad. No había problemas tan fuertes como para decir que llegarán a haber guerras”. “El Salvador era un país sano”. “Aquí no hubo una guerra interna, por problemas sociales internos”. “Fue más que todo una guerra impuesta”.

Cornejo subraya la importancia de un “foro político” que se llevó a cabo “por orden de los gringos” a mediados de 1981. De acuerdo con su declaración, en ese foro se determinó la apertura del ciclo de elecciones a partir de marzo de 1982 y se instó a d’Aubuisson y su grupo FAN a formar un partido político. El único partido sólido y formalmente constituido para entonces era la Democracia Cristiana, pues el Partido de

⁴⁰ Conviene leer la sección de historia “¿Quiénes somos?” de la página web de ARENA, para hacerse una idea de la sacralización de la figura de d’Aubuisson al interior del partido: <http://www.arena.com.sv/> Los correligionarios areneros le rinden homenaje público al fundador de su instituto político y hoy en día en una calle transitada de una zona exclusiva en la ciudad de San Salvador sobresale un busto del “Mayor”.

⁴¹ Entrevista realizada para esta investigación, el 5 de diciembre de 2008 en San Salvador. Cornejo, empresario del café, se reivindica como secretario privado y mejor amigo de Roberto d’Aubuisson. De hecho, la entrevista fue interrumpida por la vista de una de las hijas del “Mayor” a la residencia del entrevistado.

Conciliación Nacional (PCN) había pasado de ser el partido oficial a quedar disminuido a su mínima expresión tras la *coyuntura de definición*. Los demás eran apenas proyectos de partido, carentes de base social. La necesidad del empresariado anticomunista de contar con un instrumento de representación política que le permitiera insertarse en el teatro electoral y hacerle frente al partido democristiano se volvió inaplazable. Según Cornejo, los estatutos de lo que sería la nueva fuerza partidaria se redactaron en Guatemala copiando los del PCN, porque “no había que andar perdiendo el tiempo queriendo inventar tanto”.

ARENA se constituyó formalmente en septiembre de 1981 y fue logrando aglutinar en su seno a más sectores de la élite económica. “Sin embargo, en el proceso de consolidación del partido distintos sectores de la sociedad se sienten interpelados por la iniciativa política y se vinculan al mismo, rebasando así los límites de clase en la composición de ARENA —mas no en su dirigencia”⁴². La expansión de ARENA entre sectores importantes de las mayorías populares a lo largo de los ochenta puede explicarse en función de tres razones. En primer lugar, d’Aubuisson logró articular a los integrantes de las estructuras paramilitares, buena parte de ellos de extracción campesina, en torno del nuevo proyecto de consolidación de un partido político. No en vano Antonio Cornejo identifica al campesinado ligado al ejército como “gente de derecha” y a El Salvador como un país militarista (no olvidemos que d’Aubuisson era un líder ex militar)⁴³. Esa afirmación coincide con el fuerte arraigo con el que, hasta la fecha, cuenta ARENA en gran parte de las áreas rurales de El Salvador.

⁴² Lungo, I., *Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador (1989-2004)*, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-México, 2008, p. 79. Este trabajo explica el proceso por medio del cual la derecha salvadoreña se politizó y consiguió constituir un proyecto hegemónico exitoso, cuyo instrumento partidario fue ARENA.

⁴³ En la década de 1960 operaron en El Salvador las llamadas “patrullas cantonales”: versiones precoces de lo que más tarde serían las organizaciones paramilitares. Estas patrullas estaban formadas por campesinos que recibían acreditación del Ejército para vigilar sus respectivos “cantones” (caseríos) y garantizar el “orden”. Según Cornejo, muchos de los patrulleros habían prestado el servicio militar obligatorio y trabajaban voluntariamente, en virtud de la cuota de poder que esta actividad les agenciaba en sus respectivas comunidades. También alude al “machismo” arraigado en El Salvador cuando se le pregunta por la razón de ser de estas actividades, pues la vigilancia de los cantones les permitía a los campesinos “sentirse machos”.

En segundo lugar, la situación de guerra civil le permitió a d'Aubuisson —único vocero del partido durante sus primeros años de existencia— abanderar un discurso en pro de salvaguardar la seguridad, logrando hacer mella en la población empobrecida pero no organizada ni conscientemente vinculada al conflicto. En tercer lugar, el hecho de que ARENA haya ido creciendo y fortaleciéndose al mismo tiempo en el que iba constituyéndose una nueva institucionalidad, le permitió, especialmente hacia finales de los ochenta, hacerse de un aura favorable a la “democracia”, la “libertad”, la “paz” y el “progreso”.

Es importante recalcar que, no obstante el paralelismo con el que ocurrieron ambos procesos, la consolidación de ARENA como proyecto hegemónico trascendió al recambio del sistema político, en la medida en que se encaminó hacia la instauración de un nuevo modelo de dominación que hubiera pugnado por implantarse aún siendo otras las condiciones para hacerlo. Fue, precisamente, la capacidad arenera para afianzarse en los estratos bajos de la sociedad lo que le permitió sentar bases sólidas para el posterior establecimiento de su hegemonía⁴⁴. En virtud de la eficacia y agilidad con la que alcanzó esa tarea, consideramos equívoco el análisis que, al calor del conflicto y hacia mediados de la década, realizó Lungo Uclés respecto de la incapacidad de la oligarquía para recomponer su hegemonía.

Un recorrido por su trayectoria electoral durante los ochenta permite apreciar cómo ARENA se insertó con sorprendente éxito en el proceso democratizador. En el segundo semestre de 1981 tuvieron lugar las inscripciones de los partidos políticos de cara a las elecciones para estatuir una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello se exigía la firma de al menos 3000 afiliados. Seis partidos participarían en la contienda: el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Partido de Conciliación Nacional (PCN), el Partido Acción Democrática (AD), el Partido Popular Salvadoreño (PPS) y el Partido de Orientación Popular (POP). Además, se

⁴⁴ Lungo, I., *op. cit.*, Capítulo 3: “En busca de hegemonía”, pp. 70-89. La autora subraya al desarrollo ideológico como elemento inherente al proyecto político de ARENA. Muestra de la preponderancia que la burocracia del partido otorga a este factor es la existencia de un “Instituto Político Mayor Roberto D’aubuisson”, responsable del análisis coyuntural, el archivo histórico, la formación de cuadros, etc.

estipuló en 60 el número de diputados de la Asamblea, distribuidos de acuerdo a la población de cada circunscripción electoral y se acordó que todos los partidos contaran con el mismo número de espacios radiales y televisivos en los medios nacionales de comunicación para hacer públicas sus respectivas plataformas programáticas.

Para la celebración de los comicios, la Junta de Gobierno y el Consejo Central de Elecciones (CCE) organizaron el recibimiento de los observadores electorales enviados por la OEA, la ONU, la Cruz Roja Internacional y diversos partidos políticos extranjeros⁴⁵. El Salvador se vio envuelto en una reñida contienda electoral en la que ARENA se perfiló como la fuerza de oposición más importante frente al PDC. El “Mayor” Roberto d’Auibuisson encabezó una agresiva campaña, protagonizando los spots televisivos. Cuenta Antonio Cornejo que desde entonces se adoptó el lema “patria sí, comunismo no” como slogan del partido y que el primer mitin se llevó a cabo en Izalco, como lugar emblemático de la primera expulsión del comunismo en el país⁴⁶. De ahí en adelante las campañas electorales de ARENA han dado inicio en ese lugar.

En marzo de 1982 se llevaron a cabo las elecciones. Cumpliendo con su amenaza de boicotearlas, el FMLN logró impedir que éstas se realizaran en algunos municipios del oriente del país. Los resultados oficiales indican una afluencia importante de votantes, casi 1 millón y medio (ver cuadro 3.1), pero estas cifras no son confiables, pues se presume que, con el propósito de darle una mayor legitimidad al proceso, se respetaron los porcentajes correspondientes a cada partido, inflando el número de votos totales⁴⁷. Con todo, esta elección inauguró la *democracia electoral* en El Salvador. La estrategia contrainsurgente del gobierno estadounidense y su aliado el PDC empezaba a ponerse en práctica en la arena política, en aras de complementar la parte militar.

⁴⁵ Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, p. 321.

⁴⁶ La segunda parte de la entrevista a Antonio Cornejo para los fines de esta investigación fue realizada el 21 de abril de 2009 en San Salvador. De ella obtuvimos estas declaraciones.

Izalco es la segunda ciudad del departamento de Sonsonate, en el occidente del país, y fue uno de los lugares en los que se produjo el levantamiento y posterior matanza de 1932. A esos hechos alude Cornejo cuando se refiere a Izalco como lugar emblemático (ver pp. 18 y 19, Capítulo II de este trabajo).

⁴⁷ Ribera, R., “El momento actual visto en perspectiva histórica”, *Notas informativas UCA*, 20 de febrero de 2009, San Salvador, <http://www.uca.edu.sv/noticias/>

Lo desconcertante para ambos actores fue la potente emergencia de un tercero en cuestión: ARENA. Habiéndose fundado apenas 6 meses atrás, a partir de esa primera elección de la década se convirtió en el segundo partido más votado del país. Interrogado sobre las razones que, según su opinión, llevaron a ARENA a debutar con tanto éxito en el teatro electoral, Cornejo aduce la obligatoriedad de emitir el sufragio como parte de una práctica de la dictadura militar, especialmente en las zonas rurales. Antes de los ochenta, los campesinos debían mostrar al ejército su cédula marcada, como prueba de haber votado. Eso habría arraigado en el campo, más fuertemente que en las ciudades, la costumbre de salir a votar.

Cuadro 3.1: Resultado de las elecciones para Asamblea Constituyente en 1982. Elaboración propia⁴⁸.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea Legislativa	%
PDC	590.644 (40.2 %)	24	40
ARENA	430.205 (29.3%)	19	31.7
PCN	272.383 (18.6%)	14	23.3
AD	112.787 (7.7%)	2	3.3
PPS	44.900 (3.1%)	1	1.7
POP	17.378 (1.2%)	0	0
TOTAL	1'468.297	60	100

Haber conseguido el 29% de los votos en la elección de 1982 le permitió a d'Aubuisson aliarse con los demás partidos y liderar una mayoría absoluta, de 36 votos, en la nueva Asamblea Constituyente que constaba de 60 curules. Así contrarrestó a la mayoría relativa obtenida por el PDC y estableció una correlación de fuerzas distinta de la esperada en la Casa Blanca, cuyas apuestas seguían enfiladas hacia la opción “centrista” representada por la Democracia Cristiana. ARENA definió la Junta Directiva de la nueva Asamblea, integrada por cuadros de todos los partidos, y d'Aubuisson se convirtió en el presidente de la misma. En relación con las alcaldías, se llegó a la controvertida decisión de repartirlas en igual número entre los tres partidos

⁴⁸ Datos obtenidos en: Krennerich, M, “El Salvador”, en: Nohlen, D. (Coordinador), *Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe*, Cfr. <http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2052/17.pdf>
Ver también: Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, pp. 323 y 333. En ninguno de los cuadros de resultados electorales en este apartado se tienen en cuenta las abstenciones ni los votos inválidos.

mayoritarios (PDC, ARENA y PCN). San Salvador estaba ya a cargo de Alejandro Duarte, democristiano e hijo de Napoleón Duarte. La decisión respecto de ese, el principal consejo municipal, fue que continuara gobernado por Duarte hijo.

Haciendo valer el peso que continuaba teniendo en los asuntos políticos del país, la Fuerza Armada hizo elegir al Dr. Álvaro Magaña como presidente provisional de la República. Pero los representantes de ARENA en la Asamblea —que querían a d'Aubuisson en ese cargo— se las ingeniaron para limitar al máximo el margen de acción de Magaña: nombraron tres vicepresidentes (uno de ARENA, uno del PDC y uno del PCN), estipulando que toda medida tomada por el presidente debía contar con el concurso y aprobación de al menos dos de ellos. La separación entre dos grandes bloques no podía ser más evidente. Sin embargo, Magaña bautizó a su período como “gobierno de unidad”. Durante esos dos años (1982-1984) tuvo que maniobrar para limar asperezas entre ARENA y PDC e intentar acercar a los vicepresidentes de ambos partidos. Su iniciativa más relevante fue denominada “Pacto de Apaneca”, por ubicarse en Apaneca la finca personal de Magaña en la que se establecieron las reuniones para llevarlo a cabo. El pacto consistió en la firma de un acuerdo entre los partidos políticos con representación en la Asamblea, comprometiéndose a trabajar mancomunadamente en la puesta en marcha de una “plataforma básica”. A excepción de Acción Democrática (AD), todos los partidos rubricaron el documento que, más allá de la intención de unidad, no dio de sí frutos considerables.

Correspondió a los miembros de la Asamblea Constituyente revisar la Constitución que, en la época de los regímenes militares, había sido redactada tras un golpe de Estado perpetrado en 1950 y escasamente modificada una década después, en 1962. Antonio Cornejo y Julio A. Rey Prendes —para entonces secretario privado de d'Aubuisson y diputado por el PDC, respectivamente— coinciden en afirmar que a la Asamblea le llevó más de un año completar esta labor, gracias a la cual una nueva Constitución entró en vigencia a partir del 20 de diciembre de 1983. Pero las declaraciones del Dr. en derecho Santiago Orellana obligan a cuestionar esa versión oficial de los hechos. Orellana asegura que los textos de la Constitución de 1983 son en

un 80% los mismos que los de la Constitución de 1962 (a su vez redactados en 1950) y que la modificación de 1983 consistió, básicamente, en alterar la geografía constitucional: cambió el orden en el que aparecen los artículos y se hicieron algunas otras variaciones, más bien cosméticas. Pero la discusión que se abrió en la Asamblea Constituyente fue, a su juicio, intrascendente. Prueba de ello serían las constantes remisiones a 1950 que se dieron durante el debate constitucional de entonces. En definitiva, la Constitución de 1983 fue casi una copia de la de 1962, lo cual significa que el Estado salvadoreño continúa en lo fundamental rigiéndose por un cuerpo de leyes establecido en 1950⁴⁹.

En 1983 fue creada la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), cuya importancia radica en haberse convertido en el núcleo del pensamiento neoliberal en El Salvador. FUSADES sería la encargada de dar sustento intelectual y dotar de cuadros a las primeras gestiones gubernamentales de ARENA. En la fundación de este nuevo organismo se involucraron las figuras más representativas de la gran empresa nacional. El financiamiento que inicialmente recibiera FUSADES por parte del AID simbolizó una suerte de “reconciliación” entre la élite económica salvadoreña y los Estados Unidos, distanciados a raíz de la preferencia estadounidense por el PDC. “A la altura de octubre de 1985, con su documento de lineamientos para un nuevo modelo económico, FUSADES incidía ya fuertemente en la política económica del país y empezaba a ir generando una hegemonía ideológica al interior de ARENA. Este va abrazando el credo neoliberal como por un proceso evolutivo”⁵⁰. Mario Larín, actual comunicador institucional de esa organización, complejiza el epíteto de “tanque de pensamiento de la derecha” con el que la izquierda suele referirse a FUSADES. Según Larín, la estrecha relación que se dio inicialmente entre FUSADES y ARENA fue modificándose con el tiempo, al punto de que los gobiernos de ARENA, a partir de 1989, acuerparon cada vez menos las recomendaciones de FUSADES⁵¹.

⁴⁹ Entrevista realizada para esta investigación el 7 de diciembre de 2008 en San Salvador.

⁵⁰ Ribera, R., *Los partidos políticos en El Salvador...*, op. cit., pp. 56, 57.

⁵¹ Entrevista realizada para esta investigación el 27 de marzo de 2009 en San Salvador.

De cara a las elecciones presidenciales de 1984, durante los primeros meses del año se recurrió de nuevo a una agresiva campaña en la que ARENA acusaba al candidato democristiano Napoleón Duarte de ser un “comunista encubierto”, mientras que el PDC acusaba al candidato arenero Roberto d’Aubuisson de haber asesinado a Monseñor Romero. El hecho de que gremiales empresariales de peso, como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se manifestaran públicamente en contra de Duarte —violando la Ley Electoral y el propio reglamento gremial que prohibían la participación de estas instancias en política partidaria— permite concluir que el proyecto de ARENA estaba echando raíces en sectores amplios del empresariado. Sin embargo, la elección presidencial de entonces le dio el triunfo a Duarte.

Cuadro 3.2: Resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1984. Elaboración propia⁵².

Partido	Votos obtenidos	%
PDC	549.727	43.41
ARENA	376.917	29.78
PCN	244.556	19.31
PAD	43.929	3.46
PPS	24.395	1.92
PAISA	15.430	1.21
MERECEN	6.645	0.52
POP	4.677	0.36
TOTAL	1'266.276	100

Estos resultados mostraban una clara preferencia por el PDC, pero no alcanzaban la mayoría simple necesaria, de 51 %, para ratificar la elección. De manera que en mayo de 1984 se reeditó el proceso, con un período estipulado para propaganda y todos los preparativos electorales correspondientes. Duarte obtuvo entonces 752.625 (53.6%) y d’Aubuisson 651.741 (46.4%)⁵³, para un total de 1’404.366 votos. Estas cifras vuelven a ser poco confiables debido a la presunta inflación de la que

⁵² Datos obtenidos en: Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, p. 367.

⁵³ *Enciclopedia electoral latinoamericana... op. cit.*, pp. 324, 325.

también fueron objeto, siguiendo el mismo patrón: aumentar el número de votos, respetando los porcentajes obtenidos⁵⁴. Por otra parte, análisis coyunturales de ese momento atribuyen a la precipitación y la mala planificación del Concejo Central de Elecciones las irregularidades que se dieron a causa de la falta de una normativa legal establecida con suficiente anticipación, pues la Ley Electoral Transitoria fue aprobada hasta el 13 de febrero de 1984. No obstante, los comicios lograron legitimar ante la comunidad internacional y ante partes significativas de la población la fundación de la institucionalidad política en El Salvador.

“Pese a las dudas que generaba un registro electoral que no estaba suficientemente depurado como para garantizar la transparencia, sí hubo un esfuerzo por desvanecer el temor al fraude utilizando un nuevo sistema mecanizado y una nueva modalidad de desconcentración de puestos de votación, al establecer tres clases de urnas receptoras”⁵⁵. Los sistemas electrónicos, la microfilmación y el cómputo fueron avances tecnológicos implementados con el objeto de echar a andar un proceso electoral moderno y eficiente, desde el registro de los votantes hasta el conteo de los votos. En ese mismo orden de cosas, se favoreció la auditoría externa y la presencia de observadores internacionales en ambos comicios presidenciales.

Que haya sido Napoleón Duarte el presidente electo, con todo y el desprestigio que sobre él y su partido había caído como consecuencia de la gestión de ambos en la Junta de Gobierno, puede leerse como un modo de “cobrar” la deuda histórica dejada por los fraudes electorales de 1972 y 1977, en los que el ejército arrebató el triunfo a la coalición (la UNO) de la que Duarte participó como candidato. Pese a que en el cuadro 3.2 puede apreciarse una diversificación en el sistema de partidos, ésta no puede en realidad considerarse tal, por dos razones. Primero porque todos los partidos representaban diversos matices en el lado derecho del espectro ideológico, mientras que la izquierda continuaba careciendo de representación partidaria. Y segundo porque el escaso peso electoral de los partidos pequeños dio muestras de su poca

⁵⁴ Ribera, R., “El momento actual visto en perspectiva histórica”, *op. cit.*

⁵⁵ Córdova Macías, R., *et al*, *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto...*, *op. cit.*, p. 70.

representatividad. Sólo el PCN conservaba bases sociales importantes, específicamente en los sectores campesinos en los que había logrado hacerse fuerte décadas atrás. Pero su rápida alianza con ARENA en 1982 había evidenciado su falta de interés en convertirse en un actor político autónomo.

La naturaleza polarizante del sistema político salvadoreño a la que alude Zamora⁵⁶ se puso de manifiesto en este nuevo escenario, encarnada por el PDC y ARENA. Pero esa polarización ocurría al interior de un marco más amplio, determinado también por una polaridad aún mayor entre izquierda revolucionaria —al margen de la ley— y derecha en el gobierno. En atención a ello, Ricardo Ribera propone un esquema bidimensional de los poderes políticos realmente operantes en El Salvador a lo largo de los ochenta, utilizando la forma triangular para expresar la existencia de 3 polos políticos: el FMLN, abanderando el proyecto revolucionario, el Partido Demócrata Cristiano, aliado del gobierno estadounidense en su proyecto reformista, y ARENA, en representación del bloque reaccionario. De hecho, el FMLN se hacía sentir durante las coyunturas electorales atacando ideológica y militarmente al aparato electoral e implementando medidas como el decomiso del documento de identidad, la intimidación a posibles votantes y el boicot a las oficinas de telecomunicaciones, entre otras.

Las elecciones de alcaldes y diputados celebradas en marzo de 1985 confirmaron un estancamiento en la intención de voto a favor de ARENA que no le permitía superar el 30%. La simbólica alcaldía de San Salvador volvió a quedar, además, en manos de la Democracia Cristiana. Tal y como ocurrió tras la elección presidencial, en un inicio ARENA se negó a aceptar los resultados. Esta vez en alianza con el PCN, volvió a interponer un recurso de nulidad, argumentando que el PDC había usado recursos estatales para favorecerse y poniendo en tela de juicio la apoliticidad de la Fuerza Armada, ante lo cual el CCE reaccionó en defensa de la institución castrense⁵⁷.

⁵⁶ Zamora, R., *La izquierda partidaria salvadoreña...*, *op. cit.*

⁵⁷ Córdova Macías, R., *et al, op. cit.*, p. 72.

Una sensible disminución en el número de votantes, menos de 1 millón (según cifras oficiales, ver cuadro 3.3), afectó a todos los partidos en general y al PDC en particular, indicando a su vez un aumento en el abstencionismo. Córdova Macías *et al* señalan la disminución de la afluencia de votantes durante los últimos ochenta, probablemente a causa del endurecimiento de los controles en el proceso de votación, como la exigencia de emitir el sufragio en el mismo lugar en donde se había obtenido el documento de identidad. De acuerdo al estudio encabezado por tal autor, la reducción del número total de votos emitidos indica un desplazamiento entre el 1.5-1.4 millones en 1982-84, para estabilizarse alrededor de 1.1 millones entre 1985 y 1991⁵⁸.

Cuadro 3.3: Resultados de las elecciones legislativas de 1985. Elaboración propia⁵⁹.

Partido	Votos obtenido	Escaños en la Asamblea Legislativa	%
PDC	505.338	33	52.4
ARENA	286.665	13	29.7
PCN	80.730	12	8.3
PAISA	36.101	1	3.7
PAD	35.565	1	3.7
PPS	16.344	0	1.7
PAR	2.936	0	0.3
POP	836	0	0.1
MERECEN	689	0	0.1
TOTAL	965.204	60	100

A diferencia de su período al mando de la Junta de Gobierno (entre 1980 y 1982), Duarte fue en esta ocasión presidente electo y en la Asamblea Legislativa su partido era el mayoritario. Pero la derrota electoral condujo a ARENA a repetir la estrategia de aglutinar en torno de sí al resto de los partidos para asediar al gobierno democristiano. La Asamblea Constituyente pasó a convertirse en Asamblea Legislativa. De nuevo el PCN se alió con ARENA, esta vez a cambio de la presidencia de dicho órgano, además de agenciarse la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El poder Ejecutivo en manos de Duarte tuvo entonces al poder Legislativo y al poder Judicial en su contra

⁵⁸ *Ibid.*, p. 71.

⁵⁹ Datos obtenidos en: *Enciclopedia electoral latinoamericana...*, *op. cit.*, pp. 318 y 321; y en Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, p. 399.

a lo largo de todo el lustro. La prolongación de la guerra, la habilidad política de ARENA, la implacable injerencia estadounidense en los asuntos internos del país y las propias taras de la Democracia Cristiana limitaron significativamente el margen de acción de ese gobierno.

Pese a los cambios formales respecto del modo de acceso al control del aparato estatal, la tenaza política en la que Duarte se vio atrapado estuvo constituida por los mismos actores de principios de la década, operando de modo aún más intenso. Las fuerzas revolucionarias libraban una lucha armada en contra del gobierno y de la intervención estadounidense en El Salvador. El gobierno de Reagan, cuyo superlativo financiamiento impidió el colapso económico, imponía su voluntad en los manejos políticos y militares del país. Los sectores más rechazados de la Fuerza Armada, en quienes Duarte delegó el control total de la guerra, adquirieron un considerable margen de autonomía y poder. Y, por si lo anterior fuera poco, ARENA se erigió como un potente contrincante que usó todas las herramientas a su alcance para disputarle el poder, acusándolo de manejar con tibieza al FMLN y de ser inoperante en la conducción de la guerra para liquidar al movimiento guerrillero por medio de las armas.

Ellacuría señaló como causa del fracaso de Duarte en enrumbar al país hacia una salida efectiva de la crisis lo errado de su diagnóstico sobre la compleja problemática nacional. De acuerdo a ese análisis, Duarte sobreestimó los logros que en materia democrática se dieron, sin advertir que se trataba de una democratización circunscrita al ámbito formal que en nada contribuía a la solución de los problemas estructurales que estaban a la base de la crisis. Además de eso, el oportunismo, clientelismo y corrupción de los democristianos que rodearon a Duarte durante su gestión, provocaron que los problemas nucleares permanecieran prácticamente intocados a lo largo de su mandato. A Duarte le faltó, además, “comprensión adecuada del fenómeno revolucionario, al cual tildó de ser una agresión extranjera del comunismo internacional. Se plegó, pues, en lo fundamental al diagnóstico y a la solución norteamericana, tomadas desde otra perspectiva y con otros intereses, que no eran los

salvadoreños y centroamericanos”⁶⁰. La soberanía nacional fue así hipotecada por el presidente Duarte, cuyo mesianismo le impidió vislumbrar la magnitud de sus equivocaciones.

Tampoco tuvo auténtico interés en gestionar la salida negociada del conflicto, más allá de su afán por figurar en las cámaras, buscando una popularidad perdida que no consiguió recuperar. Para propiciar el diálogo, el FMLN exigía la transformación del sistema político y el reconocimiento de su liderazgo en las zonas que ya se encontraban bajo su control. El gobierno, por su parte, exigía la deposición de las armas por parte de la guerrilla y la presentación a elecciones, sin la mínima intención de cambiar las reglas del juego democrático. “Aquello era poco menos que un diálogo de sordos. No había bases objetivas para el entendimiento, ni voluntad política real para intentarlo”⁶¹. Hubo que esperar al final de la década para que tanto el escenario nacional como el internacional sufrieran modificaciones tan drásticas que forzaran a las partes a relajar su intransigencia original y a madurar sus posiciones hacia planteos más factibles. En definitiva, no fue éste un gobierno que favoreciera a las mayorías populares, cuyas condiciones de vida se vieron aún más deterioradas a causa del terremoto que en octubre de 1986 sacudió San Salvador, dejando un saldo de más de 1500 fallecidos, miles de desaparecidos y damnificados, además de las tres sequías que durante esos años castigaron la economía eminentemente agraria del país.

En su carrera por derrotar definitivamente a la Democracia Cristiana y conquistar el Ejecutivo, ARENA tuvo que replantear la imagen extremista que proyectaba con d’Aubuisson como cara oficial del partido. Para ello llevó a cabo un viraje estratégico consistente en moderar el discurso y modificar su composición, incorporando al sector económicamente dominante del país a la estructura de mando. Así daba muestras de apertura y de ser una fuerza política “dispuesta a superar sus intereses corporativos en pos de un interés más amplio”⁶².

⁶⁰ Ellacuría, I., “Duarte, el final de una presidencia”, *op. cit.*, Tomo III, p. 1840.

⁶¹ Samayoa, S., *El Salvador. La reforma pactada*, UCA Editores, San Salvador, 2002, p. 40.

⁶² Lungo, I., *op. cit.*, pp. 81, 82.

Conocido es el hecho de que la Casa Blanca rechazaba la posibilidad de la llegada de d'Aubuisson al Ejecutivo, debido a sus credenciales como líder paramilitar. Por eso no es de extrañar que, al ser interrogado al respecto, Antonio Cornejo culpara a los estadounidenses por haber “calumniado a Roberto”, negara la participación del “Mayor” en los crímenes de los que se le acusa, adujera que no ha existido una acusación formal en su contra (obviando que la Comisión de la Verdad lo señala como culpable de la muerte de Monseñor Romero, entre otros crímenes de guerra) y rememorara la animadversión que sentía “Roberto” hacia sus enemigos políticos en Washington. En la voz de Cornejo, d'Aubuisson fue tan víctima del intervencionismo estadounidense como lo fue el resto del país. Destaca en su discurso una posición muy crítica frente al papel desempeñado por Estados Unidos en El Salvador y en el resto de América Latina, al tiempo que declara su admiración por el país del norte, llegando a confesar que lo “republicano” del nombre del partido ARENA le vino dado en función de que el presidente Reagan era republicano y tanto d'Aubuisson como él pretendían que se los identificara con Reagan⁶³.

La simbiosis entre ARENA y la gran empresa quedó sellada en 1987 con el respaldo ofrecido por el partido a una huelga impulsada por la ANEP en contra de las medidas reformistas del gobierno de Napoleón Duarte. Para entonces ya estaba claro que, aunque la Democracia Cristiana así lo pretendiera, el PDC no se convertiría en el partido político de la élite económica: ésta ya tenía uno. Tanto el cambio de imagen de ARENA y la consolidación de sus alianzas, como el fracaso del gobierno de Duarte y la creciente pugna intestina en el PDC, repercutieron en beneficio del primero en los dos últimos comicios de la década. Tanto en 1988 como en 1989 las campañas electorales se centraron en las críticas hacia la gestión corrupta de la Democracia Cristiana y en lo fallido de su mandato. ARENA utilizó el lema adjudicado en los análisis económicos sobre América Latina a todo el continente para achacarle a Duarte la culpa de haber

⁶³ La contradicción parece resolverse en una declarada admiración por Estados Unidos como país (al cual Cornejo califica como país agrario, más que industrial), pero un rechazo a su política exterior injerencista, en virtud de la cual la potencia se arroga el derecho de calificar a los países latinoamericanos y determinar “quiénes están bien y quiénes mal”. Entrevistas, San Salvador (05/12/08, 22/04/09).

hecho de los ochenta la “década perdida” en El Salvador y subrayó su incapacidad para poner fin al conflicto armado y solventar la crisis económica que venía arrastrando el país.

En 1988 ARENA logró obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, hacerse de la alcaldía de San Salvador —con Armando Calderón Sol a la cabeza— e invertir la distribución de poder a nivel municipal, haciéndose de 178 alcaldías, mientras al PDC se agenció sólo 79. El haberse convertido en la primera fuerza político-electoral del país no le impidió volver a interponer el recurso de nulidad de las elecciones, en busca de la mayoría relativa en la Asamblea, que finalmente obtuvo gracias a que un diputado del PCN pasó a sus filas. El recurso fue de nuevo rechazado, pero entonces acudió con un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “La situación fue tal que hubo que posponer la instalación de la nueva Asamblea por un mes, generándose una situación anómala institucional y jurídicamente”⁶⁴.

Cuadro 3.4: Resultados de las elecciones legislativas de 1988. Elaboración propia⁶⁵.

Partidos	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea Legislativa	%
ARENA	447.696	30	48.1
PDC	326.716	23	35.1
PCN	78.756	7	8.5
PL	34.960	0	3.8
PAISA	19.609	0	2.1
AD	16.211	0	1.7
PAR	5.059	0	0.5
POP	1.742	0	0.2
TOTAL	930.749	60	100

El FMLN incurrió en nuevos actos de sabotaje contra el alambrado eléctrico, la infraestructura electoral y todo cuanto pudiera permitir el funcionamiento de las juntas receptoras de votos, pero tuvo que enfrentar dos operativos realizados por la Fuerza Armada con el fin de garantizar la realización de los comicios. La guerra continuaba estando en el primer plano de la vida nacional, pero “en lo que a la dinámica estricta del

⁶⁴ Córdova Macía, R., *et al*, *op. cit.*, p. 74.

⁶⁵ Datos obtenidos en: *Enciclopedia electoral latinoamericana... op. cit.*, pp. 318-321.

sistema político electoral corresponde, las elecciones legislativas y municipales de 1988 se realizaron en el marco de un sistema de partidos tendiente a su estabilización en torno a dos polos (PDC-ARENA), y bajo nuevas mecánicas e instrumentos electorales orientados a dar confiabilidad al proceso [el cual] se rigió bajo la normatividad de un nuevo Código Electoral”⁶⁶.

Destaca en esta coyuntura el surgimiento de la coalición Convergencia Democrática (CD), integrada por el MPSC, el MNR y el Partido Social Demócrata (PSD). Tal alianza fue el resultado del retorno de los dirigentes del FDR a El Salvador, en noviembre de 1987, en miras hacia su reinserción al sistema de partidos. Ésta se logró en octubre de 1988, cuando el CCE legalizó al MPSC y al MNR. La participación de la CD en las elecciones presidenciales de 1989 hizo notorio, como se apuntó al final del apartado anterior, que el nuevo sistema político estaba teniendo aceptación en los sectores de la izquierda moderada y que ésta última empezaba a deslindarse de la izquierda revolucionaria. Ellacuría vio en este hecho un síntoma de apertura hacia “nuevas posibilidades de diálogo y negociación en un clima de mayor flexibilidad y tolerancia. El FDR y la Convergencia Democrática, no obstante las presiones sufridas por parte de Estados Unidos, la Fuerza Armada y la mayor parte de los partidos políticos, no rompieron con el FMLN [lo cual resulta] decisivo, pues impide el distanciamiento definitivo del FMLN con el proceso político interno y, al contrario, aproxima el movimiento revolucionario al resto de los movimientos políticos”⁶⁷.

Las elecciones presidenciales de 1989 fueron las primeras en las que se usó carné electoral. En ellas ARENA se hizo del Ejecutivo, bajo el liderazgo del magnate Alfredo Cristiani, quien había sido catapultado como el nuevo rostro arenero⁶⁸. ARENA había pasado de sostener la reivindicación de la retrógrada alianza oligárquico-militar —por cuya pérdida culpaba al PDC y a la política exterior estadounidense— a erigirse

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 72, 73.

⁶⁷ Ellacuría, I., “Una nueva fase en el proceso salvadoreño”, *op. cit.*, Tomo III, p. 1858.

⁶⁸ En la conferencia “Configuración de la derecha salvadoreña”, desarrollada en el marco de la Mesa Redonda “Transición a la democracia en El Salvador”, CIALC-UNAM, 5 de noviembre de 2008, Irene Lungo caracterizó a Cristiani como la figura “aristocrática” de ARENA, elegida para suplantar el protagonismo de d’Aubuisson dentro del partido y encarnar la nueva imagen que la institución partidaria se propuso proyectar.

como promesa de modernización y democratización para El Salvador. Sin embargo, esa mutación no se dio sin contradicciones. La postura esencialmente militarista en la que coincidían ARENA y sus allegados ideológicos en el ejército predominó durante los primeros meses del nuevo gobierno, pero tuvo que ser modificada sustancialmente a raíz de la Ofensiva Militar "Hasta el Tópe", lanzada por el FMLN en noviembre de 1989. Por primera vez, después de casi diez años de guerra civil, el FMLN logró controlar durante casi una semana algunas áreas urbanas del país, incluidas ciertas colonias de San Salvador. La respuesta del ejército consiguió diezmar a la población guerrillera e incluyó el bombardeo de población civil ubicada en las zonas populosas de la capital. Sin embargo, el peso político de la ofensiva fue decisivo para el desenlace del conflicto.

Cuadro 3.5: Resultados de las elecciones presidenciales de 1989. Elaboración propia⁶⁹.

Partidos	Votos obtenidos	%
ARENA	505.370	53.8
PDC/AD	342.732	36.5
PCN	38.218	4.1
CD	35.642	3.8
MAC	9.300	1.0
UP	4.609	0.5
PAR	3.207	0.3
TOTAL	939.078	100

En esa atmósfera de extrema tensión y sensación de pérdida de control por parte de la institución castrense, una unidad del Batallón Atlacatl —autor de la masacre de El Mozote— ingresó a la residencia que el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, compartía con sus colegas de trabajo sacerdotal, académico y administrativo —ubicada en el propio campus universitario—, acabando con su vida, la de otros cinco sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas domésticas. El padre Ellacuría, en su característico ejercicio de reflexión constante sobre la realidad sociopolítica salvadoreña, había detectado de modo prematuro el entrapamiento militar al que estaba destinado el enfrentamiento. En consecuencia con ello, fue el primer y más sobresaliente defensor de la salida política del conflicto.

⁶⁹ Datos obtenidos en: *Enciclopedia electoral latinoamericana...*, op.cit., p. 325.

Por tratarse de una persona distinguida en el mundo académico salvadoreño e iberoamericano, con marcado ascendente sobre el sin número de alumnos que pasaron por sus aulas y de personalidades locales y extranjeras que se entrevistaron con él, su asesinato despertó el estupor de la sociedad salvadoreña y la indignación de la comunidad internacional, que por lo demás tenía al caso salvadoreño en el ojo de la mira. Las presiones para llevar ante la justicia a los militares responsables del crimen no se hicieron esperar. Seguido de ello vinieron las presiones de los sectores progresistas del Congreso y la sociedad norteamericana por frenar el apoyo económico a la Fuerza Armada de El Salvador y terminar con la guerra civil por el camino de la negociación.

Finalmente, constatado el hecho de que ninguno de los dos bandos podía vencer militarmente al otro y presionados desde dentro y fuera del país para entablar un diálogo de paz, gobierno y FMLN abandonaron su intransigencia en aras de ganar créditos con una sociedad que ya no resistía más guerra. Habiendo emanado del ala más radical del empresariado y habiendo defendido la solución militar como la única posible contra el FMLN (enarbolando la consigna “negociación es traición”), fue precisamente ARENA, bajo la presidencia de “Fredy” Cristiani, a quien le correspondió firmar con el FMLN los Acuerdos de Paz.

3.3 Regionalización del conflicto, regionalización de la pacificación

Aunque durante la guerra civil en El Salvador ninguno de los actores involucrados pudo vislumbrar con claridad que el enfrentamiento vería su fin en la mesa de negociaciones, un interesante análisis dialéctico del proceso salvadoreño sostiene la tesis de que, paralelo al desarrollo de la guerra, iba gestándose también el desarrollo de la paz. “No como algo posterior, sino prácticamente simultáneo”⁷⁰. El

⁷⁰ Ribera, R., “Historia de la paz”, El faro.net, San Salvador, 9 de marzo de 2006. Ver: <http://www.elfaro.net/dlgalp/firma/rr.asp>.

La misma idea es planteada por Galindo Escobar, D., en “La paz: el proceso inconcluso”, El Faro.net, San Salvador, 9 de marzo de 2006. Al respecto, el autor señala: “en realidad la guerra llevaba dentro de sí el germen de su autoeliminación”. Ver:

http://www.elfaro.net/Secciones/opinion/20060116/opinion5_20060116.asp

estudio reposado de la década de 1980 da cuenta de esta simultaneidad. En el desenvolvimiento de esta dialéctica entre paz y conflicto intervino un abanico de actores, cuyas posturas fueron modificándose de acuerdo con las exigencias del proceso, por un lado, y con los cambios sustantivos que a lo largo de éste período se produjeron en el ajedrez internacional, por otro.

En los apartados anteriores analizamos las transformaciones que tuvieron lugar en el FMLN, el movimiento popular y los partidos políticos legales a partir de la “coyuntura de definición” (1979-1981), hasta las elecciones presidenciales de 1989. También se pudo ver que la crisis económica no fue eficientemente atacada durante ese período y, por tanto, las condiciones de vida de las mayorías populares no mejoraron. Pero en el ámbito político se dieron dos importantes variantes: el fortalecimiento del sistema electoral y el relajamiento de las posiciones frente a la posibilidad de la salida negociada del conflicto.

Que el FDR hubiera adquirido identidad partidaria (formando el CD) para participar en los comicios de 1989, que el FMLN hubiera minimizado sus condiciones para ingresar a la arena electoral y que ARENA hubiera abandonado su negativa a negociar, fueron cambios significativos de cara a la consecución de la paz. El clamor popular en pro del fin de la guerra por el camino del diálogo estaba siendo escuchado. Pero éste clamor no era suficiente para aplacar los ánimos guerreristas de quienes aún no se convencían de abandonar las armas. Para ello hizo falta que también en el orden mundial se produjeran mutaciones importantes que ejercieron presión en pro de la pacificación, tanto de El Salvador, como de Centroamérica en su conjunto.

En el ámbito internacional se fueron imponiendo los procesos de negociación, como medios de solución a los conflictos, sobre los medios estrictamente militares. Gorbachov tomó la iniciativa, conjuntando su proceso de *perestroika* y *glasnot* interno con una actitud de semejante novedad radical en las relaciones internacionales, logrando acuerdos de gran significado con Reagan y promoviendo la solución de los conflictos regionales por la vía de la negociación. No sólo las superpotencias entraron por este camino, sino que también lo hicieron las medianas y las pequeñas, así como toda una serie de grupos revolucionarios armados. La Unión Soviética dio ejemplo en Afganistán y Cuba lo hizo en Angola. Prácticamente sólo Israel contradujo esto que

podría llamarse una nueva fase histórica, en la que las Naciones Unidas han logrado por fin desempeñar un papel de primerísima importancia⁷¹.

La inauguración de esta “nueva fase histórica” coincidió con el final del gobierno de Reagan, quien se había mantenido renuente a la salida negociada de la crisis centroamericana a lo largo de los ocho años en los que permaneció en el poder. Como se ha mencionado, la intervención de Estados Unidos en la región fue el resultado de una estrategia compleja que capitalizó las experiencias fallidas para la primera potencia en otras partes del globo y que se desplegó en diferentes vertientes: militar, económica, política y diplomática, siendo prioritaria la militar. El hecho de que al final de su mandato los asesores de Reagan terminaran reconociendo que la intervención militar en El Salvador había fracasado en su objetivo principal de derrotar al FMLN, enmarcado en una nueva atmósfera favorable a la negociación que permeaba las relaciones internacionales a nivel mundial, sin duda abonó a la modificación de la actitud del gobierno estadounidense frente a la crisis centroamericana.

En su recuento de los hechos que posibilitaron los Acuerdos de Paz en El Salvador, el académico y ex miembro del FMLN Salvador Samayoa da un lugar preponderante al arribo de Georg Bush al gobierno estadounidense (1989- 1993):

Los acontecimientos políticos de 1989 en El Salvador, en Estados Unidos y en el bloque de países socialistas cambiaron drásticamente las bases en las que se había sustentado la política hacia El Salvador durante los ocho años anteriores [...] Sólo de manera gradual y con la prudencia y el pragmatismo que caracterizaban la conducta política del nuevo inquilino de la Casa Blanca, la Administración del presidente Bush comenzó a reaccionar ante los dramáticos acontecimientos de 1989, hasta producir un viraje decisivo en la política hacia Centroamérica y, particularmente, en la posición de Estados Unidos en relación con las negociaciones para el logro de la paz en El Salvador⁷².

Años antes de producirse este relajamiento de las tensiones generadas por la confrontación Este-Oeste y precisamente en virtud de la hostilidad estadounidense hacia los procesos centroamericanos, en América Latina emergieron signos de alarma de cara al inicio y profundización de la crisis en el Istmo. Los vasos comunicantes que

⁷¹ Ellacuría, I., “Una nueva fase en el proceso salvadoreño”, *op. cit.*, p.1859.

⁷² Samayoa, S., *op. cit.*, p. 126.

históricamente han mantenido vivas las relaciones entre los países centroamericanos, más allá de las peculiaridades nacionales, funcionaron como correas de transmisión en diferentes niveles, también durante los convulsionados años ochenta. Desde décadas atrás, Estados Unidos había convertido a Honduras y a Panamá en sus principales plataformas militares en la región. Pero la utilización del territorio hondureño se intensificó en el período de la crisis regional, cuando la base de Palmerola (Honduras) empezó a ser utilizada como retaguardia de la Contra nicaragüense. El recrudecimiento de la guerra entre el ejército sandinista y la Contra problematizó las relaciones, tanto entre Nicaragua y Honduras, como entre Nicaragua y Costa Rica, quien también sufría las consecuencias de la persistencia y expansión del ejército contrarrevolucionario.

Por otra parte, la persecución y exterminio que durante los primeros años de la década de los ochenta padecieron los pueblos indígenas de Guatemala a manos del ejército de ese país provocaron el éxodo de cientos de miles de personas en busca de refugio en el sur de México. El ímpetu represivo de los militares guatemaltecos llegó al extremo de llevarlos a irrespetar la frontera y adentrarse en territorio mexicano, tras las huellas de “comunistas” que tenían que aniquilar. Las relaciones México-Guatemala, ríspidas en términos generales a lo largo de la historia de ambos países, experimentaron entonces nuevas fricciones⁷³.

A lo anterior hay que agregar que el discurso agresivo de Reagan frente a los brotes revolucionarios en el área y la aventura bélica de la primera potencia en Granada, daban pie para pensar en una intervención militar directa por parte de Estados Unidos en la región, en caso de no producirse los resultados esperados con el plan contrainsurgente. Un clima tan crispado y expansivo demandó la concurrencia de esfuerzos multilaterales que empezaron a emerger en los albores de la década, ocupando México un papel protagónico en las iniciativas regionales en pro de la pacificación subregional.

⁷³ Castillo, Manuel Ángel, *et. al.*, *Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala, Belice: la construcción de una frontera*, SRE, México, 2006, pp. 242-246. Respecto de la situación de los refugiados guatemaltecos en la frontera sur de México, ver: Toussaint, M. *et al*, *Vecindad y diplomacia...*, *op. cit.*, pp. 201-204.

3.3.1 La declaración franco-mexicana: nota disonante en la relegitimación del régimen

Poco después de la ofensiva general del FMLN en 1981 y antes de iniciada la celebración de la serie de comicios que se llevaron a cabo durante los ochenta, siendo aún el democristiano Napoleón Duarte presidente de la Junta de Gobierno, un hecho de impacto internacional supuso un fuerte revés al propósito de los gobiernos estadounidense y salvadoreño de invisibilizar al FMLN: la declaración franco-mexicana. La distante cordialidad que había caracterizado a la relación de México con Centroamérica sufrió durante los años setenta notables modificaciones. Por una parte, el posicionamiento de México frente a la crisis en el Istmo le permitió reivindicar cierta autonomía respecto de Estados Unidos y dar muestras de favorecer el establecimiento de un orden internacional más justo. Por otra parte, el hallazgo de nuevos yacimientos y el incremento del precio del petróleo a partir de 1973 incentivaron el interés mexicano en expandir hacia el sur su mercado petrolero⁷⁴.

Como se mencionó antes, el miedo a una invasión militar estadounidense estuvo latente, sobre todo durante los primeros años de la crisis en la región. México, gobernado entre 1976 y 1982 por el priista José López Portillo, abogaba por relajar las tensiones e intentaba servir de mediador en un conflicto que involucraba a sus países fronterizos en el norte y en el sur⁷⁵. La determinación con la que el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, y el embajador de México en Nicaragua y después encargado de negocios en El Salvador, Gustavo Iruegas, ofrecieron su

⁷⁴ A instancias de Venezuela, México firmó en agosto de 1980 el Acuerdo de San José, estableciendo el suministro de petróleo a Centroamérica en condiciones bastante favorables. Una referencia de esto, en el marco del balance sobre las relaciones entre México y El Salvador en este período puede leerse en: Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México. El Salvador*, CIDE, México, 1987.

⁷⁵ Es lo que lleva a Mónica Vereá y José Luis Barros a sostener en el prólogo de *La política exterior norteamericana hacia Centroamérica. Reflexiones y perspectivas* una posición que consideramos representativa de la mirada de México hacia el Istmo en los años de la crisis: “La magnitud internacional de los problemas de Centroamérica multiplica con fuerza inusitada la modestia de su geografía, de su población, de su economía, de su influencia. En ese puente se anuda una porción importante de las interrogantes con que encaramos el fin de siglo y, en ocasiones, parece estrangularse el destino de América Latina, separándonos, dividiéndonos, desalentándonos”, UNAM/Porrúa/FLACSO-México, 1991.

respaldo a los procesos revolucionarios centroamericanos hizo visible que la política exterior del sexenio de López Portillo era favorable a la gesta de los sectores de izquierda que impulsaban en el Istmo profundas transformaciones⁷⁶.

El intenso trabajo diplomático que venía desarrollando el FDR, representante del FMLN en el exterior, cosechó más frutos en Europa y Estados Unidos que en Latinoamérica, en donde la competencia librada contra el partido oficial (PDC) por ganar espacios y legitimidad fue más reñida. Cuba, México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá fueron países del área en donde los revolucionarios salvadoreños encontraron importantes reductos de solidaridad: acogida para refugiados y exiliados, redes de contactos que divulgaban la versión insurgente sobre lo que pasaba en El Salvador y desplegaban todo tipo de iniciativas para recaudar fondos, suministro de armas y aliados para el tráfico de las mismas, sucursales para labores de política exterior, centros de análisis y documentación e incluso soporte financiero e institucional a nivel gubernamental, emanaron de esos países a favor de la revolución salvadoreña. No obstante, las dificultades del sandinismo para sostener un gobierno asechado por la contrarrevolución, y la muerte, en 1981, del General Omar Torrijos —hombre fuerte en el país del canal— mermaron el apoyo prestado por Nicaragua y Panamá al FMLN-FDR, convirtiendo a México en un bastión fundamental de esta alianza insurgente en el área mesoamericana.

⁷⁶ La posición de Gustavo Iruegas respecto de la crisis centroamericana contrasta con la que una década después adoptaría respecto de la insurrección indígena en Chiapas, frente a la cual se mostró abiertamente en contra. Analistas e historiadores de la política exterior de México han interpretado la solidaridad mexicana hacia la izquierda internacional como parte de la estrategia priista —en diferentes sexenios y con distintos matices— para prevenir posibles injerencias en sus asuntos internos. Ver: González González, G., “México en América Latina. El difícil juego del equilibrista”, *Foreign Affairs En Español*, Octubre-Diciembre 2007. Disponible en:

<http://www.foreignaffairs-esp.org/20071001faenespessay070405/guadalupe-gonzalez-gonzalez/mexico-en-america-latina-el-difícil-juego-del-equilibrista.html>

La reacción de la Junta de Gobierno salvadoreña frente a la declaración franco-mexicana se apoyaría en argumentos de ese tipo, poniendo el dedo en la llaga sobre puntos sensibles como: la masacre de Tlatelolco, los fraudes electorales y el servir de santuario a la subversión, mientras en su interior México se caracterizaba por la ausencia de democracia y la imposición a toda costa de un partido único. Sara Gordon asegura que la declaración franco-mexicana le ocasionó a Gustavo Iruegas ser declarado persona *non grata* por el gobierno de El Salvador. Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México. El Salvador, op. cit.*, p., 57.

Preocupado por la contingencia de un desbordamiento de la guerra a nivel regional y decidido a asumir un rol protagónico dentro de este escenario, México empezó a manifestarse en contra de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica. “En 1981, poco después del ascenso de Ronald Reagan a la presidencia, México jugó el papel de intermediario entre el FDR-FMLN y Washington, auspiciando la realización de conversaciones secretas entre ambas partes”⁷⁷. Lo infructífero de esta tentativa llevó a México a hacer pública ante la comunidad internacional su preocupación por la extrema gravedad de la situación de guerra en El Salvador. Buscando mayor resonancia para este llamamiento, la iniciativa mexicana fue secundada por el canciller francés Claude Cheysson, cuyo presidente entre 1981 y 1995, François Mitterrand, quería legitimarse en Europa como hombre progresista⁷⁸. La declaración franco-mexicana salió a la luz en agosto de 1981, reconociendo que:

La alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan. En consecuencia es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis [...] Corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas las fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático⁷⁹.

La primera reacción de la Junta de Gobierno de El Salvador ante la publicación de semejante espaldarazo a la insurgencia fue intentar ocultar su salida en los medios de comunicación. Sin embargo, para entonces funcionaba ya el Sistema Radio Venceremos, órgano de difusión revolucionario que, sorteando dificultades de todo tipo, se mantuvo al aire a lo largo de los 11 años que duró la guerra. “La venceremos”, como era popularmente conocida, amplió cada vez más su radio de alcance en virtud

⁷⁷ *Ibid.*, p. 55. Es posible que estas conversaciones tengan que ver con el señalamiento de Ricardo Ribera acerca de la búsqueda de negociación impulsada por el FMLN antes de la ofensiva del 10 de enero de 1981.

⁷⁸ Charla sobre la declaración franco-mexicana, ofrecida por Mónica Toussaint en el Seminario Monográfico “El Salvador: guerra popular y reforma política”, Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, octubre de 2008.

⁷⁹ Para un análisis detallado de éste documento en el momento en el que fue emitido, ver: Ellacuría, I., “La declaración conjunta mexicano-francesa sobre El Salvador”, *op. cit.*, Tomo III, pp. 1235-1269.

de la frecuencia de onda corta, logrando llevar la voz del FMLN no sólo a radioescuchas nacionales, sino más allá de las fronteras salvadoreñas⁸⁰.

La Radio Venceremos se encargó de vitorear el comunicado mexicano-francés, tomándose incluso la libertad de trocar el concepto de “fuerza representativa” por el de “fuerza beligerante” y dando a conocer en el mundo lo que era sin duda una victoria política del FDR-FMLN en el parqués táctico del concierto internacional⁸¹. La declaración recibió la anexión de Nicaragua, Cuba, Ecuador y Panamá. Pero pocos días después de la salida del comunicado, en septiembre de 1981, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela firmaron un documento acusatorio contra México y Francia por intervenir en los asuntos internos de El Salvador. La llamada “Declaración de Caracas” puso de manifiesto el apoyo de estos países, muchos de ellos regidos por dictaduras militares, al gobierno salvadoreño mostrando claramente que la balanza a nivel latinoamericano no se inclinaba a favor de la insurgencia, sino de la oficialidad⁸².

Pronunciándose en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Napoleón Duarte protestó “enérgicamente por tal comunicado, puesto que no corresponde a la República de Francia, a los Estados Unidos Mexicanos, ni a ningún otro país señalar modelos de solución a los problemas internos de El Salvador, ni identificar internacionalmente a su antojo, a quienes en el país tienen legitimidad y representación política”⁸³. En septiembre de 1981, el líder democristiano emprendió una gira por los Estados Unidos, con el objeto de contrarrestar el efecto ocasionado por la declaración franco-mexicana.

Dicha declaración se convirtió en el elemento más visible dentro de un conjunto de eventos internacionales que desmentían la versión oficial, según la cual la

⁸⁰ Ver: Henríquez Consalvi, C. (Santiago), *La terquedad del Izote. El Salvador: crónica de una victoria. La historia de Radio Venceremos*, Editorial Diana, México, 1992; Paredes Coronel, H., *Radio Venceremos: un ejemplo de historicación de una práctica social*, Tesis de licenciatura en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 2008.

⁸¹ Según Menjívar Ochoa, la declaración franco-mexicana estuvo a cargo de cuadros de la más grande de las organizaciones político-militares salvadoreñas, las FPL, *op. cit.*, p. 46.

⁸² Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México. El Salvador, op. cit.*, p. 57.

⁸³ Citado por: Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, p. 313.

Democracia Cristiana era víctima del fuego cruzado entre la ultra derecha y la ultra izquierda, teniendo ambas poca representatividad real. Antes de darse a conocer la iniciativa mexicano-francesa, la Organización de Naciones Unidas (ONU) había formulado una resolución criticando la violación de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos en El Salvador; la Organización de Estados Americanos (OEA) se había ofrecido a servir de mediadora en el conflicto; la Internacional Socialista y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) habían manifestado su respaldo al FDR-FMLN (gracias a la pertenencia del grupo socialdemócrata MNR a ambos organismos); y un grupo minoritario de congresistas estadounidenses se oponían a la injerencia de su país en Centroamérica. Al referirse a estos hechos, el democristiano Rey Prendes los califica como una “ofensiva internacional”, dando cuenta del alto grado de indignación que causaron en el seno de su partido, el PDC⁸⁴.

Este recuento permite hacerse una idea de los alcances obtenidos por el desempeño político-diplomático del FDR y de cómo los logros a ese nivel formaron parte de la estrategia revolucionaria. Pero la intervención norteamericana no pudo ser detenida. Así pues, ni la “ofensiva general” impulsada por el FMLN devino en insurrección y toma del poder, ni la declaración franco-mexicana consiguió evitar que los Estados Unidos pusieran en marcha su proyecto militarista y democratizador en El Salvador. Entre 1981 y 1985, Estados Unidos otorgó a El Salvador más de 1700 millones de dólares, 85% en concepto de ayuda militar y 15% en programas de reformas y ayuda alimentaria⁸⁵. Para entonces, el pequeño país se había convertido en el principal

⁸⁴ *Ibid.*, pp. 312-314. Mónica Toussaint alude a la propuesta de un “Plan Regional de Distención” como la segunda muestra (después de la “declaración franco-mexicana”) del “activismo” en materia de política exterior mostrada por el gobierno lopezportillista a inicios de los ochenta: “Este plan proponía una solución negociada para El Salvador y un pacto de no agresión de Estados Unidos hacia Nicaragua y hacia el resto de los países centroamericanos, para lo cual México se ofrecía como mediador. Nicaragua vio este plan con buenos ojos, pero El Salvador lo consideró una intromisión, mientras que Estados Unidos resolvió adoptar una posición de frialdad en espera de los resultados de las elecciones salvadoreñas. Por todo ello, la iniciativa no prosperó”, Toussaint, M., “Centroamérica: entre la guerra y la paz. Del pacto de Corinto a los Acuerdos de Esquipulas”, en: *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, No 45, CIALC (antes CCyDEL)-UNAM, México, 2007, p. 146.

⁸⁵ Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México. El Salvador, op. cit.*, p. 37.

receptor de financiación estadounidense en América Latina y se encontraba entre los 3 primeros receptores a nivel mundial. Por esa razón, y también porque el FMLN logró un alto nivel de profesionalización militar, el camino hacia la paz sería largo y doloroso, especialmente para el campesinado local.

A lo largo de la década de 1980, el viraje de la política exterior mexicana reveló las inconsistencias atávicas de la actitud del gobierno de México hacia Centroamérica. Por una parte, la caída de los precios del petróleo le restó fuerza a México respecto de Estados Unidos. Por otra, la subida al poder del presidente Miguel De la Madrid (1982-1988) constituyó el primer paso hacia la neoliberalización en ese país, lo cual empezó a ser notorio en el plano de la política internacional⁸⁶. Si al inicio de la década México se opuso abiertamente al intervencionismo estadounidense y mostró su preocupación por conseguir la inclusión del FDR-FMLN en la reconfiguración del régimen político salvadoreño, liderando la conformación del Grupo de Contadora, ya para 1987 la posición mexicana frente a las reuniones de Esquipulas mostraban un claro repliegue respecto del liderazgo mexicano frente a la crisis subregional⁸⁷. Gordon evalúa la participación de México como un intermediario en problemas puntuales que, pese a su preocupación inicial por la situación de la región, no consiguió incidir de manera sustantiva en el conflicto salvadoreño. El gobierno de El Salvador, por su parte, sólo aceptaba de México “aquellas medidas que no interfieran con los objetivos que se han fijado quienes concurren a la reconstitución del régimen y que contribuyan a reforzarlo”⁸⁸. Lo demás era visto por el gobierno como intervencionismo y atacado como tal.

⁸⁶ Un abordaje de la mutación experimentada por la política exterior mexicana durante la administración de De la Madrid en: Toussaint, M., *et al*, *Vecindad y diplomacia...*, *op. cit.*, pp. 216-231.

⁸⁷ Seminario “Estados Unidos, México, Centroamérica. Política exterior de interés estratégico”, impartido por la historiadora mexicana Mónica Toussaint, Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, febrero-junio de 2008.

⁸⁸ Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México*, *op. cit.*, p. 75.

3.3.2 Contadora y Esquipulas: pasos hacia la regionalización de la paz

Con el propósito de afianzar su hegemonía en lo que consideraba su “zona de seguridad”, Estados Unidos hizo intentos por consolidar un organismo regional que hiciera suyos y defendiera los objetivos de la política que había definido para América Central, siendo uno de los principales aislar políticamente a Nicaragua, al tiempo que golpeaba militarmente al sandinismo⁸⁹. Fruto de ese intento fue la reunión que se produjo en enero de 1982, cuando los cancilleres de Costa Rica, El Salvador y Honduras —apoyados por Colombia y Venezuela— dieron a conocer la creación de la Comunidad Democrática Centroamericana, organismo dirigido a formalizar un bloque de naciones que luchaban por el establecimiento y consolidación de la democracia como único camino para lograr el desarrollo y la estabilidad de la región. “Los países firmantes destacaban la validez del camino electoral y se manifestaban contra el terrorismo, la subversión y la carrera armamentista, en una doble alusión tácita: la guerrilla salvadoreña y el régimen sandinista”⁹⁰. La posición oficial de estos tres países puso de manifiesto su alineación con el proyecto democratizador y la postura estadounidense frente a la crisis: ubicar la lucha insurgente en el terreno de lo ilegal y estigmatizar a los combatientes como terroristas.

Pero de nuevo México participó en una iniciativa contraria a los planes del norte, esta vez tendiente a promover la autonomía y la cooperación de los países del área en una salida negociada de los conflictos que amenazaban con desestabilizar crecientemente a la región. En palabras de Samayoa: “la vecindad fronteriza de México con Estados Unidos y Centroamérica lo situaba, en efecto, en una posición muy singular e incómoda ante el conflicto regional. En tales condiciones, era muy difícil que otros países compartieran su visión de la crisis y su particular sentido de urgencia”⁹¹. Además, como hemos mencionado, la crisis en el Istmo abrió para México la posibilidad geopolítica de replantear sus relaciones con Estados Unidos y ejercer su liderazgo en

⁸⁹ *Ibid*, p., 68.

⁹⁰ *Ibid*, pp. 64, 65.

⁹¹ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 57.

los países centroamericanos. Por eso el gobierno mexicano sostuvo a lo largo de la década —con más vehemencia al inicio que al final— su posición a favor del diálogo en el conflicto salvadoreño, de respeto a la autodeterminación en el caso de Nicaragua y su demanda de no intervención frente a Estados Unidos.

Aunque en los círculos internacionales México no llegó a ser plenamente comprendido en estos aspectos y su política exterior fue cuestionada por “izquierdista”, la preocupación por la profundización de la situación de guerra en el área cundió en el continente. Venezuela fue el país que se mostró más dispuesto a acompañar la iniciativa mexicana de aportar a la pacificación del área. No está demás señalar que no existía una especial afinidad ideológica entre ambos gobiernos, pero coincidían en su condición de exportadores de petróleo y no era extraño que pretendieran salvaguardar las posibilidades de comercializar el crudo en Centroamérica.

Simplificando bastante el intríngulis subregional de esta coyuntura, puede asegurarse que la participación extranjera en la pacificación centroamericana durante los ochenta estuvo determinada por la tensión entre los dos grandes bloques a los que hemos aludido: El Salvador, Honduras y Costa Rica, acuerpando los intereses estadounidenses de legitimar su intervención en el área, por un lado, y México y Venezuela, más los países que después se sumaron a sus esfuerzos en abierta oposición a esa intervención, por otro. Esto no significa que haya existido una alineación mecánica y permanente de dichos países a tales posiciones. Si algo caracterizó al período en cuestión fue, precisamente, la movilidad que experimentaron los actores, dando cuenta de influencias mutuas y mutaciones notables. Con todo, dos iniciativas multilaterales cristalizaron en este contexto, tan dinámico como tirante: el Grupo de Contadora y las reuniones de presidentes conocidas como Esquipulas I y II.

En enero de 1983, México y Venezuela concretaron las conversaciones que habían estado sosteniendo con Colombia y Panamá respecto de la situación en Centroamérica, en una reunión llevada a cabo por los cancilleres de las cuatro naciones en la isla panameña de Contadora. Huelga señalar que también Colombia y Panamá

tenían sus propios intereses a la hora de asistir a esta convocatoria. El primero buscaba capitalizar la experiencia centroamericana en pro de un manejo institucional exitoso de la guerra de guerrillas colombiana y el segundo estaba preocupado por la transferencia del canal y por la posibilidad de un incremento de tropas estadounidenses en su territorio. La declaración conjunta emanada del acercamiento entre los cuatro países “expresaba su preocupación por la injerencia foránea directa o indirecta; consideraba indeseable inscribir los conflictos en la confrontación Este-Oeste, y veía la conveniencia de eliminar los factores externos que contribuían a agudizarlos. Asimismo, contemplaba la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos de promoción del diálogo y de ampliar la participación a otros países interesados en la pacificación del área”⁹². El, así llamado desde entonces, Grupo de Contadora se convirtió en foro de discusión permanente sobre la problemática del Istmo e impulsó medidas tendientes a dinamizar la economía de la región⁹³, con el objeto de generar una atmósfera más favorable para las negociaciones.

El hecho de que los esfuerzos de dicho grupo se realizaran al margen de la Organización de Estados Americanos (OEA) significó la toma de distancia respecto de éste organismo, tradicionalmente supeditado al mandato de Estados Unidos. En ese sentido, Contadora contribuyó a la independencia de los países del área respecto de la potencia mundial. De cara a la situación subregional, un aporte significativo fue que en el *Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica*, publicada en septiembre de 1984, se reconoció que “las causas de la guerra en la región obedecían a injusticias internas estructurales y que, por consiguiente, la solución a ellas debía ir más allá de acuerdos sobre seguridad y aspectos militares”⁹⁴. Pocos días después de ser

⁹² Samayoa, S., *op cit.*, p. 69. De acuerdo con Mónica Toussaint, *et al*, Contadora reveló el cambio de posición de la administración de Miguel De la Madrid frente a la crisis centroamericana pues “equiparaba Cuba con Estados Unidos, considerándolo actor externo del conflicto; situaba a los rebeldes salvadoreños como fuerzas irregulares que, al igual que la Contra nicaragüense, tenían el objeto de desestabilizar a los gobiernos constituidos del istmo, y empezó a colocar los problemas de Nicaragua con Honduras en el centro de la crisis regional, sin considerar el conflicto en El Salvador”, *Vecindad y diplomacia...*, *op. cit.*, p. 222.

⁹³ Concretamente, el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), *Ibid.*, p. 70.

⁹⁴ Lungo Uclés, M., *op. cit.*, p. 110.

emitida, el acta encontró amplio respaldo al ser firmada por los cancilleres de la Comunidad Económica Europea, la ONU y la propia OEA. En julio de 1985, surgió el Grupo de Apoyo a Contadora, formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, además de producirse otros hechos que mostraron cómo estos esfuerzos estaban siendo aceptados por una parte significativa de la comunidad internacional.

Pero los directamente implicados en el conflicto se mostraban renuentes a suscribir el documento. Nicaragua no accedía a firmar el acta mientras Estados Unidos no asumiera compromisos y demostrara verdadera disposición a cumplirlos. El gobierno de Reagan, por su parte, se encargó de sabotear la iniciativa a través de la oposición que frente a ella presentaron El Salvador, Honduras y Costa Rica. Entre estos tres países, El Salvador era el más interesado en la hostilización militar y la presión contra Nicaragua para eliminar el apoyo político y armamentístico sandinista al FMLN y lograr el aislamiento de ambos proyectos revolucionarios. El afán de Contadora de coartar la ayuda militar estadounidense y favorecer la autonomía nicaragüense iba, pues, contra los intereses del gobierno salvadoreño. De acuerdo con Gordon, la propuesta de diálogo que el presidente Duarte hizo llegar al FMLN en octubre de 1984 obedeció, entre otros factores, al interés de su gestión por minimizar los alcances de Contadora⁹⁵.

Fue así como, para noviembre de 1985, Contadora se vio en una situación de franco estancamiento en relación con su propósito fundamental de pacificar Centroamérica. Samayoa atribuye este fracaso a lo limitado del enfoque con el que se abordó la compleja problemática del Istmo, dando visibilidad al deterioro de las relaciones entre los Estados de la región, pero omitiendo el abordaje específico de las guerras intestinas que se libraban no sólo en El Salvador y Nicaragua, sino también en Guatemala. Así diagnosticó Mario Lungo Úcles el esquema básico de Contadora hacia mediados de los ochenta: “Dos rasgos sustanciales se destacan a lo largo del proceso. El primero, el virtual olvido del FMLN-FDR como alternativa viable, popular y democrática; y el segundo las sugerencias de dedicar los esfuerzos principales a mediar

⁹⁵ Gordon, S., *Relaciones Centroamérica-México, op. cit.*, p. 75.

entre Estados Unidos y Nicaragua. En lo anterior subyace la idea de que la causa esencial de los conflictos en Centroamérica es la existencia de un gobierno revolucionario, con lo cual la exclusión del FMLN-FDR se explica por la necesidad de impedir o limitar su legitimidad”⁹⁶.

La estrechez de esta perspectiva se mantuvo en los lineamientos básicos de los intentos de pacificación que se llevaron a cabo durante la segunda mitad de la década. Pero hubo interesantes variantes. En abril de 1986, los ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, los del Grupo de Contadora y los del Grupo de Apoyo

fijaron un plazo perentorio para la firma del acta. Para satisfacer a Nicaragua, convinieron en que era imprescindible que *los países con vínculos e intereses en la región* se abstuvieran de proporcionar apoyo a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales que operaban en cualquiera de los países de la región. Estados Unidos, por su parte, dio señales de disposición a asumir obligaciones y a cumplirlas, siempre que todos cumplieran con los principios y obligaciones del Acta de Paz.

Este fue el primer viraje significativo, después de más de tres años de negociaciones, en dirección a superar uno de los fallos estructurales del proceso de paz, en su dimensión de conflicto entre estados, y seguramente también en su componente de enfrentamiento interno en Nicaragua. En efecto, el 15 de abril de 1986, los cinco gobiernos centroamericanos expresaron, por primera vez en todo el proceso, su disposición para terminar de negociar los puntos pendientes y proceder a firmar el acta⁹⁷.

La nueva actitud de los mandatarios del Istmo dio lugar a la Cumbre Centroamericana celebrada en mayo de ese mismo año en la ciudad guatemalteca de Esquipulas —de ahí el nombre de *Esquipulas I*—, en la cual los mandatarios de: Guatemala, Marco Vinicio Cerezo Arévalo; El Salvador, José Napoleón Duarte; Honduras, José Azcona Hoyo; Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra; y Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, reiteraron su voluntad de cumplir con la totalidad de los compromisos contenidos en el *Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica*. A partir de entonces se regularizaron las reuniones de presidentes de Centroamérica “como una instancia necesaria y conveniente para analizar los problemas más urgentes

⁹⁶ Lungo Uclés, M., *op. cit.*, p. 112.

⁹⁷ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 67.

que se presenten en el área en relación a la paz y al desarrollo regional, y buscarles soluciones adecuadas”⁹⁸.

Tania Ocampo llama la atención sobre el énfasis puesto en el documento resolutivo de tal reunión en la consecución de la democracia formal, recogiendo las líneas del mismo en las que se asegura “que la paz en América Central sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los Derechos Humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente, sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social”⁹⁹. Se trata del tono que caracterizó a todos los encuentros oficiales que se produjeron durante el segundo quinquenio de los ochenta, manifestando el deseo de paz, la urgencia de desmilitarizar el área, la necesidad de consolidar estructuras democráticas en cada uno de los países de la región y de conseguir mejoras en las condiciones de vida de la mayoría de los centroamericanos. En su análisis de los discursos recogidos en estos documentos, Ocampo coincide con el señalamiento de Samayoa al cuestionar la superficialidad con la que fue abordado el conflicto.

Paradójicamente, la apropiación que hicieron los gobiernos centroamericanos de la problemática de sus propios países se dio en dirección inversamente proporcional a la esfuerzo de Contadora. Este volvió a entramparse tras la salida, en junio de 1986, de una versión revisada de la primera *Acta para la Paz y la Cooperación* que fue de nueva cuenta rechazada por Reagan cuando Nicaragua accedió a firmarla. Una vez más, El Salvador, Honduras y Costa Rica se plegaron a la posición estadounidense. Lo fallido de esta iniciativa, insiste Samayoa, radicó en el establecimiento de un inexacto paralelismo entre Nicaragua y El Salvador. Y es que ni la Contra era equiparable al FMLN, ni el régimen sandinista se asemejaba al gobierno democristiano salvadoreño.

El bienintencionado pero infructuoso trabajo de Contadora abrió paso a la iniciativa de paz del presidente costarricense Óscar Arias, denominado *Plan Arias*, con

⁹⁸ Citado en *Ibid.*, p., 68.

⁹⁹ Ocampo, T., *El sueño de la paz. El fin de la guerra en El Salvador. La construcción de los Acuerdos de Chapultepec, 1992*, Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, México, 2008, p. 108.

base en el cual, en agosto de 1987, se acordó por los presidentes centroamericanos en una reunión en ciudad de Guatemala el *Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica*, más conocido como Esquipulas II. Según Samayoa, fue el presidente Arias el primero en introducir matices indispensables para hacer aterrizar la idea abstracta de la paz sobre el borrascoso suelo de lo concreto. Muestra de ello fue que su propuesta distinguía entre *movimiento insurreccional* y *grupo irregular*, aludiendo tácitamente al FMLN en el primer caso, y a la Contra en el segundo. La novedad de *Esquipulas II* respecto de *Esquipulas I* fue reconocer la necesidad de desarrollar procesos de paz internos, entre los actores de cada uno de los conflictos. Para ello, los gobiernos implicados se comprometían a declarar amnistía a favor de los alzados en armas y a garantizar la celebración de elecciones libres y competitivas, siempre y cuando la contraparte se encontrara desarmada. Por último, en el documento quedó estipulado el llamado de los mandatarios centroamericanos a los países regionales y extra regionales a abstenerse de proporcionar ayuda a los grupos insurgentes e irregulares que operaban en el Istmo.

Reconciliación nacional, diálogo de los gobiernos centroamericanos con sus respectivos grupos de oposición política, amnistía, democratización, cese de hostilidades entre las fuerzas internas de los países, elecciones libres, refugiados y desplazados, etc. fueron los temas que predominaron en el Documento de Esquipulas II sobre los temas de seguridad, desarme e injerencia de las grandes potencias en el escenario centroamericano¹⁰⁰.

Sin dejar de señalar las deficiencias vinculadas al simplismo en el análisis, a la miopía respecto de las características particulares del FMLN, y a la falta de especificidad de las propuestas de paz en general, Ellacuría saludó con entusiasmo *Esquipulas II*, calificándolo como “un hito histórico dentro del proceso centroamericano. Ha sido un nuevo impulso y con él se puede comenzar el camino de la paz, a pesar de haber obstáculos que le impidan avanzar más rápido. Cuando ese impulso pierda su vigor, será el momento de revivificarlo y fortalecerlo. Aunque se dan poderosos enemigos, son más y mejores quienes están dispuestos a ayudar. En cuanto es una iniciativa

¹⁰⁰ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 70.

centroamericana en busca de la paz por medios pacíficos, es tarea de todos apoyarla y defenderla contra quienes la obstaculizan”¹⁰¹.

Samayoa, en cambio, subraya la imposibilidad de éste acuerdo para convertirse en marco de referencia de las negociaciones de paz. Los dos autores tienen su momento de verdad. Ellacuría por cuanto celebra la inauguración de una nueva atmósfera en las esferas gubernamentales de la región, proclive al diálogo, la inclusión, la soberanía y la unificación regional. Su mirada estaba puesta, como se vio al inicio de éste apartado, sobre los cambios favorables a la paz que a nivel global y regional se estaban produciendo. Respecto del segundo autor es necesario puntualizar que, en su condición de protagonista del conflicto salvadoreño y su desenlace —Samayoa formó parte de la comisión negociadora del FMLN que firmó los Acuerdos de Paz con el gobierno de ARENA—, sigue una línea argumentativa que privilegia la instrumentación efectiva de las medidas que posibilitaron esos acuerdos, más allá de la intencionalidad de los actores que se manifestaron a favor de conseguirlos, pero cuyos discursos no trascendieron a más.

Desde el punto de vista de la dinámica insuflada por Esquipulas II a las relaciones internacionales dentro la zona, la historiadora mexicana Mónica Toussaint relata cómo “a partir de entonces se inició una febril actividad diplomática en la región, nunca antes vista: reuniones de presidentes, de vicepresidentes, de las cancillerías, de organismos regionales, la cual fue acompañada por el incremento de las relaciones de otros gobiernos con la región o con cada uno de los países del istmo”¹⁰². La autora identifica como “reuniones cumbres”: Alajuela, Costa Rica, enero de 1988; Costa del Sol, El Salvador, febrero de 1989; Tela, Honduras, agosto de 1989¹⁰³; San Isidro de Coronado, Costa Rica, diciembre de 1989; Montelimar, Nicaragua, abril de 1990; y Antigua

¹⁰¹ Ellacuría, I., “Propuesta de solución en el marco de Esquipulas dos”, *op. cit.*, Tomo II, p.1180.

¹⁰² Toussaint, M., “Centroamérica: entre la guerra y la paz...”, *op. cit.*, pp. 188, 189.

¹⁰³ En marzo de 1989 habían tenido lugar las segundas elecciones presidenciales de la década de los ochenta en El Salvador, de manera que fue Alfredo Cristiani Bukard quien asistió en representación del gobierno salvadoreño a Tela. En la *Declaración de Tela*, producto de dicho encuentro, se hizo un vehemente llamado al FMLN a deponer las armas, iniciar el diálogo e incorporarse a la vida democrática del país, Ocampo, T. *op. cit.*, p. 152.

Guatemala, junio de 1990. “En estas reuniones se estableció el compromiso de diálogo incondicional, la concertación del cese al fuego, la amnistía general y el pluralismo político como factor indispensable para alcanzar la democratización”¹⁰⁴.

Ocampo subraya la paulatina flexibilización de la posición oficial, evidente en las últimas declaraciones. Si al inicio la tendencia predominante de las voces gubernamentales fue a erigirse como los únicos representantes legítimos de sus pueblos —amparados en el hecho de haber resultado electos en los comicios que para entonces se celebraban periódicamente en toda la región—, en los documentos de finales de los ochenta se trasluce una actitud favorable a la incorporación de la “oposición armada” a la vida política de los países en conflicto. En el caso de El Salvador, tuvieron que ocurrir todos los fenómenos que a lo largo del capítulo hemos intentado consignar para que el gobierno accediera a reconocer al FMLN como un grupo insurreccional representativo de un sector poblacional, con el cual era necesario entablar una negociación y establecer determinados acuerdos.

Intentando sopesar en su justa medida las iniciativas multilaterales cuyas concreciones más sobresalientes fueron la declaración franco-mexicana, Contadora y Esquipulas, diremos que no decidieron el curso de los procesos de pacificación y democratización de la región, pero fueron pasos favorables hacia la distensión de la difícil situación en el Istmo, abonando a la capacidad de los países del área para hacerse cargo de sus propios problemas y buscar caminos para su solución. Un balance de los recambios ocurridos en Centroamérica y de las características más sobresalientes del período en cuestión, asegura que:

Entre las novedades importantes que produjeron los ochenta se cuenta la concepción y praxis del conflicto negociado. La guerra fue uno de los fenómenos centrales del conflicto centroamericano, el eje capital tanto en la percepción como en el desarrollo de los acontecimientos políticos durante toda la década. A su alrededor prevalecieron, con los resultados antes señalados, diferentes negociaciones en el área. Fue este un terreno de prolongado aprendizaje, de continuidad y de frecuentes rupturas, de fuertes influencias externas al área y aportes autóctonos decisivos. La definición de lo negociable, y la búsqueda del asentimiento por parte de los numerosos actores implicados, dio a la negociación una sofisticación hasta entonces no conseguida. No

¹⁰⁴ Toussaint., M., “Centroamérica: entre la guerra y la paz...”, *op. cit.*, p 189.

obstante sus limitaciones, las soluciones aportadas produjeron resultados específicos de alcances notables¹⁰⁵.

A lo largo de este capítulo hemos procurado exponer quiénes fueron los actores políticos más relevantes durante la década de 1980 y de qué manera las conflictivas relaciones que se establecieron entre ellos influyeron en la modificación de sus posiciones. Como pudo notarse, tales actores no fueron sólo nacionales, sino también internacionales. Destacan entonces, en el ámbito doméstico: el FMLN y la profesionalización militar de sus cuadros guerrilleros, el resurgimiento del movimiento popular en torno de demandas gremiales, la consolidación de ARENA como partido político, el deficiente desempeño de la Democracia Cristiana como partido gobernante y el protagonismo de la Fuerza Armada en un período caracterizado por la pervivencia de una guerra civil que mostró altibajos, pero se mantuvo a lo largo de doce años. Paralelo al desarrollo del conflicto armado se dio la aprobación de la Constitución de la República y la puesta en escena de la democracia electoral que operan hasta la fecha en El Salvador.

Dentro del ámbito internacional, destacan: la negativa del gobierno de Reagan a respaldar la salida negociada del conflicto; la escalada injerencista de la Casa Blanca que mantuvo a la Democracia Cristiana como aliado en la reconstitución del régimen dentro de la estrategia contrainsurgente y evitó el colapso de la economía del país; el protagonismo inicial de México, secundado por otros países, en pro de incentivar una salida negociada de la crisis centroamericana, reconociendo al FMLN-FDR como fuerzas beligerantes dentro del campo político salvadoreño y abogando por la soberanía y autodeterminación de los pueblos de la región; las iniciativas multilaterales de los países centroamericanos y sus vecinos que buscaban autonomizarse de la influencia estadounidense y desmarcar al conflicto centroamericano de las coordenadas Este-Oeste; y el final de la Guerra Fría como parte-aguas que inauguró una nueva fase en las

¹⁰⁵ Páez Montalbán, R., *La paz posible. Democracia y negociación en Centroamérica 1979/1990*, CCyDEL-UNAM, México, 1998, pp. 256.257.

relaciones internacionales, favorable a la negociación, y motivó en la Casa Blanca el viraje hacia el favorecimiento de la pacificación en Centroamérica.

Todos estos elementos son, desde nuestro punto de vista, determinantes para comprender los cambios profundos que experimentaría El Salvador durante la década de los noventa, respecto de lo cual versa el siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV. Acuerdos de Paz y *transición neoliberal* en El Salvador

En los capítulos anteriores explicamos cómo la crisis de hegemonía, que inició en El Salvador durante la década de 1970, llegó a su clímax con el golpe de Estado de 1979, fracturando el sistema de dominación tradicional y dando lugar al surgimiento de tres proyectos de nación que permanecieron en pugna a lo largo de la década de 1980: uno revolucionario, uno reformista-contrainsurgente y uno reaccionario. Los tres demostraron ser suficientemente fuertes como para impedir el predominio de sus adversarios, pero insuficientemente poderosos como para aniquilarlos. Las tensiones provocadas por la interacción de ésta tríada devinieron en el desarrollo simultáneo de dos fenómenos: el estallido de una guerra civil entre las fuerzas insurgentes y el ejército gubernamental, por una parte, y el asentamiento de las bases para la edificación de la democracia electoral y la reformulación de la estrategia de dominación de la burguesía, por la otra.

Al final de la década de 1980, el desgaste producido por doce años de conflicto bélico, la imposibilidad de los bandos enfrentados de vencer militarmente al adversario, el asesinato del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría , junto con cinco padres jesuitas y dos empleadas domésticas, el interés de la cúpula empresarial por impulsar el modelo económico neoliberal en el país, las presiones nacionales e internacionales en pro de la pacificación, la distensión del enfrentamiento Este-Oeste, la caída del muro de Berlín, la necesidad de la ONU de adquirir un rol protagónico en el Nuevo Orden Mundial y la derrota electoral del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, fueron todos hechos que coadyuvaron a la salida negociada del conflicto salvadoreño.

En el balance político de los años ochenta, el caballo de batalla por el que había apostado el gobierno estadounidense, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), salió mal librado de la contienda al mostrarse incapaz de solventar la crisis que en todos los órdenes enfrentaba el país e ir perdiendo sus bases de apoyo. Pero el proyecto democratizador, parte de la estrategia contrainsurgente financiada por los Estados

Unidos, logró enrumbarse hacia puerto seguro: un sistema de partidos legalmente constituidos, realización de elecciones periódicas, una afluencia significativa de votantes, paulatino desvanecimiento del fantasma del fraude, modernización de los mecanismos de registro de electores y conteo de votos, acompañamiento internacional de los procesos electorales y aceptación de los resultados, fueron elementos determinantes en la legitimación de la institucionalidad democrática salvadoreña. Que el PDC hubiera fracasado en su intento de mantenerse al mando del timón, no obstó para que ARENA y el FMLN hubieran terminado por convertirse en los principales tripulantes del barco. Así resume Mario Vázquez lo paradójico de éste desenlace:

La democratización del sistema político, si bien ha significado la ampliación de libertades y derechos, así como la apertura de amplios espacios de participación, representación y disenso, redundó también en la modernización y el fortalecimiento de la hegemonía oligárquica. Fenómeno que sintetiza el trayecto del cambio político en El Salvador iniciado gracias al empuje del "desafío revolucionario". La derrota estratégica de la insurrección popular y el posterior fracaso de la opción reformista demócrata-cristiana permitieron que el reordenamiento político se produjera en el marco de la recomposición hegemónica de la derecha oligárquica, la cual, pese a haberse opuesto activamente al proyecto reformista-contrainsurgente patrocinado por Estados Unidos, resultó ser la beneficiaria final de la intervención norteamericana¹.

Los tres proyectos, el revolucionario, el reformista y el reaccionario, terminaron, pues, co-determinándose y confluyendo en el cauce de la democratización, con sobrada ventaja para el emergente partido ARENA. Aunque las discusiones en torno de dónde fechar el comienzo de la transición a la democracia en El Salvador no han sido zanjadas, sí hay coincidencia en reconocer la firma de los Acuerdos de Paz como un momento fundacional de la democratización y como el evento socio-político de mayor trascendencia en la historia reciente del país, por cuanto significó la legalización de la izquierda revolucionaria, su conversión en partido político y su posibilidad de disputar el poder por la vía electoral. Tanto en la memoria de ARENA como en la de la Democracia Cristiana, persiste la idea de ubicar dentro de sus filas al "verdadero padre

¹ Vázquez, M., "Del desafío revolucionario a la reforma política. El Salvador, 1970-1992", en Ignacio Sosa (coordinador), *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*, CCyDEL-UNAM, México, 1999, p. 224.

de la democracia”². Y también el FMLN hace lo propio al reivindicar el papel de la lucha revolucionaria en la preparación del terreno para la democratización plena³. Pero más allá de sus respectivas defensas de lo protagónico de sus proyectos, lo cierto es que las tres fuerzas políticas enfrentadas terminaron haciendo suyo un esquema institucional impulsado en un inicio desde los Estados Unidos y cada vez más ampliamente aceptado como idóneo para El Salvador.

Es el forcejeo de los diversos actores el que los va obligando a modificar sus posiciones originales, hasta que llegan a un punto, digámosle así, de equilibrio, en donde todos se sienten satisfechos en donde están, que es el de los acuerdos, pero no es que lo buscaran. En todo caso si quisiéramos hablar de que eso es democracia, tendríamos que hablar de que la democracia llega a El Salvador por *default*, como un resultado no deseado de la acción de los actores. Ninguno en sus principios buscaba la democracia, buscaban eliminar al otro a toda costa⁴.

A partir de 1992, el país entero empezó a respirar los aires de un cambio que había estado gestándose desde años antes y, en efecto, un nuevo capítulo de la dolorosa vida política salvadoreña comenzó a escribirse. Atrás quedó casi medio siglo de dictaduras militares al servicio de un reducido grupo oligárquico, hegemónico y particularmente excluyente, y la consecuente respuesta de los movimientos insurgentes que emergieron con fuerza inusitada durante los años 70. Atrás quedó el

² Así lo expresaron el autor de los estatutos del partido ARENA, Ricardo Valdivieso y el director del Instituto de Ideología Mayor Roberto D' Aubuisson de ARENA, Orlando Cocal, en entrevistas concedidas para esta investigación en San Salvador, el 23 y el 29 de abril de 2009. Cocal, por ejemplo, asegura que “ARENA sentó las bases de la estabilidad en el país, pues desde que ARENA existe, hace 27 años, no hay golpes de Estado”. A ello añade que fue el miembro fundador de arena Ricardo Valdivieso quien propuso al Congreso de Estados Unidos la celebración de las elecciones de marzo de 1982. Valdivieso hace lo propio cuando reivindica el “abolengo de familia de d' Aubuisson”, del cual provienen sus nexos con la tradición liberal y republicana. El democristiano Rey Prendes, por su parte, titula el capítulo XIII de sus memorias: “El padre de la democracia. Gobierno del Ing. José Napoleón Duarte. 1984-1989”. Ver, Rey Prendes, J. A., *op. cit.*, p. 379.

³ Fermán Cienfuegos, comandante del FMLN, alude a ello en el texto “Se inicia una revolución democrática”, en: *Visiones alternativas sobre la transición*, Editorial Sombrero Azul, San Salvador, 1993. El también efemelenista Hato Hasbún habló al respecto en la entrevista realizada para esta investigación: “Nosotros abrimos las condiciones para actuar... ahora a uno en este trabajo ya no lo matan. Antes aquí hablábamos y sólo hablar era muerte segura. No digamos el estar organizados en un partido político como el FMLN y que estuviera compitiendo para tomar el poder mediante las elecciones [...] Nosotros sí decimos que con esa lucha del pueblo salvadoreño [la lucha revolucionaria] se generó una transición sin precedentes, porque había una fuerza distinta a las que definieron las transiciones anteriores, que eran definidas por el poder de la oligarquía, por el poder dominante, definían la transición que querían y la orientación. Esta no, esta ha sido una transición distinta, que tiene a las puertas la posibilidad de que nosotros ganemos las elecciones, de lo contrario no estaríamos a las puertas de las elecciones”, 18 de diciembre de 2008, México-San Salvador.

⁴ Artiga-González, A., entrevista (06/05/09).

conflicto en el que la sociedad salvadoreña estuvo inserta a lo largo de la década de 1980, dejando un saldo aproximado de 80 mil muertos y cuantiosos daños materiales, sociales y espirituales. La confrontación armada dejó de ser el medio de resolución de las diferencias ideológicas, para abrir paso al debate y la libre expresión de las ideas en foros y medios de comunicación. La “transición a la democracia” fue entonces formalmente inaugurada.

Tanto la democratización en El Salvador como la firma de los Acuerdos de Paz son procesos complejos, cuya comprensión reclama un enfoque multi-causal, que pondere la participación del conjunto de actores que los posibilitaron. Es lo que quisimos dejar en claro con el recuento de la década de 1980. En el presente capítulo daremos cuenta de cómo la salida negociada del conflicto dio lugar a un escenario político distinto del régimen militar anterior, mientras que en el ámbito socioeconómico las condiciones de injusticia estructural no sólo permanecieron intocadas, sino profundizaron su gravedad. La posguerra salvadoreña dio de sí la emergencia de fenómenos inéditos que ameritan ser examinados en detalle. Los más importantes de ellos fueron: la separación entre implementación de los Acuerdos de Paz en el marco político-jurídico, por un lado, y la implementación del programa de ajuste estructural y estabilización macroeconómica, por otro; la consolidación de ARENA como proyecto hegemónico en un contexto internacional en el que las superpotencias redefinieron el sistema de dominación mundial en torno del proyecto neoliberal; el surgimiento de una argolla financiera dentro de la élite salvadoreña que se convirtió en el nuevo eje alrededor del cual se concentró la riqueza y el poder político; la inmersión del FMLN en la vida institucional del país, lo cual trajo para la insurgencia fracturas y rearticulaciones importantes, al tiempo que fue creciendo como opción electoral en las nueve rondas electorales realizadas durante todo el período; y, finalmente, el auge de la violencia social que fue amedrentando cada vez más a la población, encontró una respuesta represiva por parte de los gobiernos de ARENA y le sirvió a éste último como pretexto para criminalizar la protesta social. El pico más alto

de ésta última se dio con la huelga de los trabajadores de salud en contra de la privatización del Seguro Social, durante los primeros años de la década de 2000.

4.1 El final de la guerra civil en El Salvador. 1989-1992: segunda coyuntura de definición en la transición política salvadoreña

Percatarse de la simultaneidad de las dinámicas de guerra y paz que atravesaron al conflicto centroamericano abona a la comprensión del final de la década de 1980, signado por la pervivencia de dos situaciones contrapuestas: la profesionalización, incremento y experticia de los ejércitos, por una parte, y la propagación de un clima favorable al abandono de las armas, por otra. Esto último se encuentra en estrecho vínculo con el fenómeno de “centroamericanización” de la Guerra Fría. En ese sentido, es bien sabido que mientras Estados Unidos desarrolló en el área una millonaria guerra de baja intensidad, destinada a desgastar paulatinamente al régimen sandinista y a impedir una correlación de fuerzas favorable al FMLN, Cuba y la Unión Soviética hicieron lo propio, proporcionado soporte armamentístico a los proyectos revolucionarios en el Istmo.

En el caso de Nicaragua, el ejército sandinista llegó a convertirse en el más poderoso de Centroamérica, con aproximadamente 70 mil miembros altamente capacitados para resistir la agresión de la contrarrevolución, la cual estuvo, a su vez, integrada por alrededor de 20 mil combatientes. En el caso de El Salvador, la Fuerza Armada pasó de contar con 16.108 efectivos en 1979 a tener 63.175 miembros en sus filas en 1991, especialmente entrenados en tareas contrainsurgentes, mientras que por parte del FMLN, aunque la cantidad de hombres-arma varió a lo largo del conflicto, tras la firma de los Acuerdos de Paz se contabilizaron 13 mil beneficiarios de los programas de reinserción⁵. En Nicaragua, pese al éxito militar del ejército revolucionario, la derrota le sobrevino al sandinismo en la arena electoral, cuando perdió contra Violeta Chamorro los comicios presidenciales de 1990. En El Salvador, las ofensivas guerrilleras no sólo se mantuvieron, sino que se recrudecieron en el período en el que la

⁵ Córdova Macías, *et al.*, *op. cit.*, p. 60; Pirker K., *op. cit.*, p.

Comandancia General llevaba a cabo las negociaciones que pondrían fin a la guerra. “Paradójicamente, en la misma medida que las fuerzas revolucionarias incrementaron su poderío militar, las perspectivas de alcanzar el triunfo y consolidar exitosamente un sistema político alternativo se fueron esfumando”⁶.

El período “bisagra” entre la situación de guerra y la consecución de la paz en El Salvador fueron los meses comprendidos entre noviembre de 1989 y enero de 1992. Por eso consideraremos tal lapso como la *segunda coyuntura de definición* dentro de la transición política salvadoreña. Teniendo como trasfondo la atmósfera internacional propicia para la solución negociada de los conflictos a la que se hizo alusión en el capítulo anterior, tres hechos ocurridos en dicha coyuntura pueden considerarse decisivos en la ubicación de la finalización de la guerra en el tablero político: i) el empate militar evidenciado por la ofensiva “Hasta el Tope” impulsada por el FMLN; ii) el interés de ARENA por desarrollar el proyecto neoliberal en El Salvador; y iii) el interés del Secretario General de la ONU Javier Pérez Cuellar en marcar un hito en la historia de ese organismo internacional antes de terminar su mandato, para lo cual el caso salvadoreño le fue excepcionalmente propicio.

Córdova Macías *et al* proponen una periodización del proceso de diálogo y negociación entre el gobierno salvadoreño y el FMLN a partir de la distinción entre dos grandes momentos⁷: el primero, la *fase de diálogo sin negociación*, abarca de 1984 a 1989 y se caracteriza por una serie de encuentros entre el FMLN y el gobierno democristiano en los que cada una de las partes se limitó a exponer sus demandas, sin mostrar disposición para escuchar al adversario ni emprender medidas concretas en pro de la pacificación. El segundo momento, denominado *fase negociadora*, abarca desde 1990 hasta 1992, corto período en el que se condensa una intensa ronda de negociaciones bajo el liderazgo de la ONU, cuya intervención aportó a la flexibilización de las posiciones de ambas partes, hasta alcanzar la firma definitiva de los Acuerdos de Paz.

⁶ Vázquez Olivera, M., *op. cit.*, p. 222.

⁷ Córdova Macías, R., *et al, op. cit.*, p. 85.

Durante la administración de Napoleón Duarte,

la oferta del gobierno consistió en procurar la incorporación de los insurgentes al ordenamiento constitucional vigente, ofreciendo a cambio la amnistía de los delitos imputados. Esta visión gubernamental estuvo fundada en la idea de que las causas que motivaron la guerra habían desaparecido, ya que se había producido un profundo cambio (la Constitución de 1983 y las elecciones de 1984) que daba paso a la democracia. Por el contrario, el FMLN sostenía que las causas seguían vigentes y que, por lo tanto, la deposición de las armas y la presentación de elecciones en condiciones de inseguridad no se podían dar, por ello exigían un proceso negociador previo a las elecciones que diera como resultado un gobierno de transición con participación rebelde y cuya principal tarea fuera la preparación y convocatoria a elecciones⁸.

Cuadro 4.1: REUNIONES A LO LARGO DEL PROCESO DIÁLOGO-NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL FMLN (OCTUBRE 1984-OCTUBRE 1989).Fuente: “La construcción de la democracia en El Salvador”⁹.

Fecha	Lugar	Temas abordados y consensuados
15 de octubre de 1984	La Palma, El Salvador	Crear una comisión u organismo mixto. Posibilitar la humanización del conflicto. Desarrollar mecanismos para incorporar a todos los sectores en la búsqueda de la paz. Celebrar otra reunión en la segunda quincena de noviembre.
30 de noviembre de 1984	Ayagualo, El Salvador	Aprobar las normas de procedimiento de la comisión especial. Facilitar el libre movimiento de personas y vehículos civiles entre el 22 de diciembre y el 3 de enero. Continuar con el diálogo para el logro de la paz (sin fijar fecha).
19 de septiembre de 1987	Sesori, El Salvador	A la reunión asistieron delegados del gobierno y el presidente Duarte. No llegaron los representantes de la guerrilla. [A pesar de no haberse efectuado, la reunión fue ampliamente difundida].
4-5 de octubre de 1987	Nunciatura Apostólica de San Salvador	Reiterar el respaldo y apoyo a los esfuerzos de paz que se expresan en Esquipulas II.
13-15 de septiembre de 1989	México	Acuerdo de México, que dota de carácter permanente al diálogo.
16-18 de octubre de 1989	San José, Costa Rica	Por primera vez representantes de la Fuerza Armada se sumaron a la comisión gubernamental. El tema fue el cese al fuego.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la negativa de Duarte a negociar obedeció al vínculo de su gobierno con la estrategia contrainsurgente estadounidense.

⁸ *Ibid.*, pp. 86, 87.

⁹ *Ibid.*, p. 85.

La dependencia experimentada por la administración democristiana respecto del soporte económico proporcionado por el país del norte a El Salvador le dejó muy poco margen de maniobra para definir términos propios de relación con el FMLN. También señalamos los esfuerzos de Contadora y Esquipulas como iniciativas de los gobiernos centroamericanos por apropiarse del reto de buscarle una salida política a la crisis en el Istmo, más allá de los límites impuestos por Estados Unidos para su abordaje.

Samayoa insiste en que fue necesario apartarse de los términos de referencia en los que estaba planteada *Esquipulas II* para modificar lo que él denomina el “escenario de la pacificación imposible” y lograr el inicio de la negociación salvadoreña. Y es que, de acuerdo con este autor, la insistencia de los gobernantes centroamericanos en sostener la *tesis de la simetría* que equiparaba los procesos nicaragüense y salvadoreño ponía en una situación desventajosa al FMLN al compararlo con la Contra nicaragüense, generando férreas reticencias en la cúpula guerrillera. Un acontecimiento decisivo que forzó el desplazamiento de la posición de ARENA respecto del FMLN y condujo a ambas fuerzas a la mesa de diálogo, fue la ofensiva insurgente “Hasta el Tope”.

4.1.1 “Hasta el Tope” y la situación de empate militar

El analista y político chileno Gabriel Gaspar Tapia sostiene que Alfredo Cristiani asumió el poder del Estado salvadoreño partiendo de tres supuestos erróneos, a saber: i) la percepción de que la guerrilla se encontraba debilitada estratégicamente, por lo cual sólo cabía negociar su rendición; ii) el convencimiento de que era posible combinar el crecimiento económico con la continuidad de la guerra; y iii) la confianza en que Estados Unidos mantendría su ayuda militar intacta para la Fuerza Armada de El Salvador, so pena de favorecer el ascenso de la guerrilla. Contradiciendo el primero de esos falsos supuestos, el FMLN impulsó la mayor muestra de su poder de fuego realizada durante la guerra. Y aunque tampoco en esta segunda incursión a la capital (la primera se dio en 1981) el componente insurreccional se hizo presente, con la ofensiva

llamada “Hasta el Tope” la insurgencia demostró, no sólo que no estaba derrotada, sino que estaba preparada para prolongar la guerra por tiempo indefinido¹⁰.

Así describe el ex combatiente y escritor Berne Ayala tal acontecimiento:

La ofensiva militar montada por la guerrilla del FMLN en la ciudad de San Salvador y el resto del territorio nacional, se desarrolló bajo un esquema de guerra urbana sin precedentes en la historia de América Latina, con la participación de más de seis mil combatientes y oficiales. En cien años ninguna guerrilla había combatido en una capital y sus principales ciudades en forma simultánea con tantos hombres y mujeres, con armas de infantería y artillería, contra un ejército gubernamental conformado por más de sesenta mil soldados al que le acompañaba una flota de cerca de cien medios aéreos de combate, sosteniendo batallas por más de mes y medio de manera ininterrumpida [...] La ofensiva de San Salvador y otras ciudades de importancia de El Salvador fue un evento militar complejo, extraordinario, único en su género [...] Si bien es cierto, en Cuba y Nicaragua puede hablarse de que hubo un componente insurreccional no visto en las batallas de la ofensiva de El Salvador, solo en este último caso la presencia de Estados Unidos fue determinante, ni a Batista ni a Somoza le fue brindada tanta ayuda militar, diplomática y económica como a la Fuerza Armada de El Salvador; en los mismos momentos de los combates de la ofensiva, el embajador norteamericano y militares gringos estuvieron organizando con el Estado Mayor la defensa de sus posiciones y el recibimiento de ayuda de emergencia¹¹.

Por su parte, Tapia y Córdova Macías *et al*, forman parte del sin número de autores que coinciden en ubicar al “empate militar” evidenciado con la ofensiva como el punto de inflexión que forzó a llevar la resolución del conflicto al escenario político. La respuesta del ejército frente a la avanzada subversiva fue contundente: las colonias populares con presencia guerrillera fueron bombardeadas y los cuadros efemelenistas diezmados en aproximadamente una tercera parte¹². A esto hay que agregar el asesinato a los jesuitas de la UCA, ocurrido durante la ofensiva, como un hecho inaceptable para la comunidad internacional. A partir de entonces, sectores

¹⁰ Gaspar Tapia, G., citado en Ocampo, T., *op. cit.*, pp. 99, 100. El ex comandante del FMLN Facundo Guardado desmiente esta afirmación, asegurando que, tras el fin de la Guerra Fría “nuestra derrota era cuestión de tiempo”, ver: Entrevista con Facundo Guardado, De la guerra a la paz, El Faro.net. El primer periódico digital latinoamericano. Disponible en:

<http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/dlgp/ofensivafinal/noticias7.asp>

¹¹ Ayala, B., *Al tope y más allá*, Cipitío Editores, San Salvador, 2005, pp. 115, 116.

¹² El Ministerio de Planificación estableció en 4.499 víctimas entre el 11 de noviembre y el 12 de diciembre, siendo las cifras mortales de 64 civiles, 428 efectivos de la Fuerza Armada y 1.526 del FMLN. Los daños económicos se estimaron en 597 millones de colones [alrededor de USD\$60 millones]. La disputa disminuyó en intensidad hacia el 9 de diciembre, ver: “El conflicto en El Salvador”, documento de *La Prensa Gráfica*, Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. San Salvador, 1992, p. 115.

progresistas del gobierno estadounidense se involucraron más activamente en el bloqueo a la asistencia militar brindada al ejército salvadoreño. Esta última fase del conflicto sintetiza bien lo que constituyó la naturaleza del mismo a lo largo de la década de 1980: la injerencia estadounidense no permitió el triunfo militar de la insurgencia, pero ésta última tampoco pudo ser derrotada por la vía militar.

Así, la consecuencia más importante de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 fue haber mostrado la imposibilidad de una solución militar al conflicto. William Leo Grande describe el impacto de la ofensiva guerrillera de la siguiente manera:

‘Como la ofensiva de Tet en 1968 por la guerrilla vietnamita, la ofensiva del FMLN fue más una victoria política que militar. Aunque no alteró fundamentalmente el balance militar, puso en tela de duda la lógica de Washington. La fortaleza y tenacidad de la ofensiva destruye la ilusión de que el ejército salvadoreño ganaba la guerra, y la respuesta brutal del ejército destruye la ilusión de que la democracia salvadoreña inhibía a los uniformados. La ofensiva demostró claramente que la guerrilla no estaba derrotada.’ [Leo Grande, 1998: 571]

[...] Semanas después del inicio de la ofensiva, representantes del FMLN primero, y los presidentes centroamericanos después, solicitaron a Naciones Unidas que efectuaran las acciones necesarias para reiniciar el diálogo entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, lo cual abriría las puertas a la fase de negociaciones propiamente tal¹³.

Ante la constatación de que una salida bélica del conflicto no sería posible, las presiones externas e internas de llegar a un acuerdo con el FMLN y la urgencia por desarrollar en El Salvador el programa neoliberal, el gobierno de ARENA optó por llevar a cabo una negociación que concretara el anhelo de paz expresado con vehemencia por sectores de la iglesia católica, asociaciones de refugiados, repatriados, familiares de víctimas de la violencia política y sindicatos de distintos rubros, entre otros sectores sociales. Junto al creciente clamor a favor de la paz, la guerra continuó teniendo un lugar predominante durante la mayor parte de la *segunda coyuntura de definición* (1989-1992). En ese sentido, Kristina Pirker asegura que el triunfo de ARENA en las elecciones “provocó un incremento en la violencia paramilitar en contra de las organizaciones

¹³ Córdova Macías, R., *et al*, *op. cit.*, p. 88.

populares identificadas con el FMLN o con el PDC y que culminó en el atentado a las oficinas de FENASTRAS y de COMADRES en octubre de 1989”¹⁴.

En lo que respecta al accionar insurgente, “Hasta el Tope” fue la más imponente iniciativa militar del FMLN en la fase final del conflicto, pero no la única, pues desde el momento en que se llevó a cabo, en noviembre de 1989, hasta la firma del Acuerdos de Nueva York, en diciembre de 1991, los distintos frentes guerrilleros mantuvieron contra la Fuerza Armada enconados combates. El hecho de que a lo largo de todo 1990-91 unidades del FMLN continuaran incursionando en San Salvador y otras ciudades para desarrollar operativos que ponían de manifiesto sus alcances logísticos y su capacidad bélica, mantuvo al ejército en permanente estado de alerta y en disposición ofensiva, no solo defensiva. El uso de la aviación, fortaleza indiscutible del ejército gubernamental, se vio drásticamente limitado en este período, después de que el FMLN tuvo acceso a misiles tierra-aire, provenientes del ejército sandinista, capaces de derribar un avión de un solo disparo. La URSS se negó a proporcionar éste armamento a la insurgencia salvadoreña, consciente de que ello alteraría la correlación de fuerzas predominante a lo largo del conflicto. Parece, pues, evidente que el FMLN se propuso y consiguió exhibir su poderío militar en aras de mantenerse fortalecido en la mesa de negociaciones. Respecto de las posibilidades militares de prolongar la guerra, el efemelenista Hato Hasbún asegura:

El jefe del Comando Sur nos preguntó: ‘¿Cuántos años podrían seguir peleando?’. 100, 200, dijimos. Y no era mentira, era verdad. Nosotros no venimos aquí a sentarnos para acallar las armas. Queremos acallar las armas, pero siempre que se cumpla esto, que abramos una transición hacia la construcción de una sociedad distinta, sino nos vamos de nuevo al terreno. Y no era machismo político, era verdad. El gobierno exigía que nosotros entregáramos las armas antes de sentarnos a negociar. ¡No! ¡No! Sólo después de que aprobemos esto con mediación de la ONU. ‘No, que la ONU sea un garante’. No, no, no, que la ONU sea un mediador. Y la ONU fue un mediador¹⁵.

Pero también la organización guerrillera estaba siendo presionada por las circunstancias para buscar un entendimiento con el gobierno y, como se vio en el

¹⁴ Pirker, K., *op. cit.*, p. 270. FENASTRAS era un protagónico sindicato vinculado al FMLN y COMADRES una asociación de madres de presos políticos.

¹⁵ Entrevista (18/12/08).

capítulo anterior, empezó a dar señales en ese sentido. Entre 1988 (justo después de la independización del FDR y la integración de sus miembros a la arena electoral) y 1992, la Comandancia General efemenista desarrolló una intensa labor diplomática en América Latina y Europa, en busca de apoyo para la salida negociada del conflicto y la reconstrucción de las zonas en guerra¹⁶. La propuesta de posponer seis meses las elecciones de marzo de 1989 para preparar su participación en ellas —a lo cual aludimos en el capítulo anterior— mostró una mayor disposición por parte del FMLN a incorporarse al sistema político nacional y significó el reconocimiento tácito de la legitimidad que tal sistema estaba adquiriendo en la sociedad salvadoreña, pues nunca antes había formulado una exigencia tan elemental. Los partidos políticos legalmente constituidos no sólo se negaron a aceptar tal solicitud, sino que la asumieron como signo de debilidad, supuesto que quedó derrotado con la ofensiva.

En el ámbito social, hacia 1988 empezaron a producirse sensibles cambios al interior del movimiento popular: en primer lugar, se estructuraron el Foro de Debate Nacional y el Comité Permanente de Debate Nacional como espacios de presión en pro de la pacificación; en segundo lugar, las diversas organizaciones experimentaron una disminución en su capacidad de movilización; y en tercer término, se dio la emergencia de un nuevo actor constituido por el movimiento de pobladores. “Entre las estructuras organizativas más importantes de este movimiento se encontraron el Consejo de Comunidades Marginales (CCM), el Consejo Coordinador de Comunidades (CCC) y la Unión Nacional de Damnificados de El Salvador (UNADES)”¹⁷. Que para entonces la brecha existente entre militancia activa —vinculada de un modo u otro al FMLN— y población no organizada —preocupada por procurarse la sobrevivencia en precarias condiciones económicas y en medio de la guerra— había crecido se hizo evidente cuando la ofensiva general “Hasta el Tope” no consiguió el respaldo insurreccional que la insurgencia esperaba. Si bien la ofensiva supuso un serio desafío militar para el

¹⁶ Martín Álvarez, *op. cit.*, p. 224 y ss.

¹⁷ Córdova Macías, R., *et al, op. cit.*, p. 87.

ejército de El Salvador, también demostró que el FMLN no contaba con el apoyo popular necesario para derrocar al gobierno por la vía armada e insurreccional¹⁸.

En lo relativo al impacto ocasionado por el revés electoral del sandinismo en la izquierda salvadoreña, concordamos con la apreciación de Pirker:

Con la derrota electoral del FSLN en Nicaragua, en febrero de 1990, el FMLN dejó de contar con una retaguardia extraterritorial estratégica, y el movimiento insurgente salvadoreño perdió su referente político central que había servido como modelo político e inspiración para la acción. Con esto se evidenció que un ciclo de la movilización revolucionaria estaba terminando y que la vía de lucha armada en Centroamérica estaba —para este momento al menos— agotada¹⁹.

Expresión de dicho agotamiento fue el giro discursivo publicado por el entonces miembro de la comandancia general del FMLN Joaquín Villalobos en su texto *Proclama a la nación. La revolución democrática*. Se trata de una versión más elaborada de una publicación previa, a la que aludimos en el capítulo anterior: *Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario*. Como vimos, Ellacuría saludó este texto señalando la aceptación del pluralismo político, la economía de mercado y el respeto a la idiosincrasia de los salvadoreños como novedades dentro del discurso del FMLN. “En realidad, el FMLN estaba sustituyendo un objetivo máximo —la revolución socialista— por otro más ajustado a la realidad del momento —una revolución abierta, flexible, pluralista y democrática— en el que los únicos elementos imprescindibles eran un cambio radical en la estructura agraria y una democracia pluralista”²⁰. Según Martín Álvarez, el derrumbe del bloque socialista y los cambios de ello derivados en el orden internacional reforzaron las posiciones que dentro del movimiento insurgente pugnaban por la negociación. De ahí que los postulados de la *Revolución Democrática* sirvieran de base para la agenda que fue discutida con el gobierno durante la *fase negociadora*.

¹⁸ Valoraciones recientes al respecto, emitidas por algunos de los protagonistas de la ofensiva, pueden verse en: “La ofensiva del 89, sin vencedores... ni vencidos”, *Vértice*, revista digital de *El Diario de Hoy*, 13 de noviembre de 2005. Disponible en: <http://www.elsalvador.com/vertice/2005/131105/analisis.html>

¹⁹ Pirker, K., *op. cit.*, p. 270.

²⁰ Martín Álvarez, *op. cit.*, p. 201.

4.1.2 La negociación

Córdova Macías *et al* dividen la *fase negociadora* en cuatro momentos. El primero inicia con la firma del Acuerdo de Ginebra, en abril de 1990, fecha en que las partes estipularon que la negociación se desarrollaría ininterrumpidamente y bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Este primer impulso, que termina en octubre del mismo año, encontró un serio revés en ese mes, cuando las posiciones se radicalizaron en lo relativo a la Fuerza Armada y el cese al fuego. Mientras el FMLN pugnaba por la desaparición total del ejército, el gobierno se negaba con rotundidad a aceptar tal demanda. Y, al igual que lo ocurrido durante la administración de Napoleón Duarte, el gobierno exigía el cese al fuego unilateral por parte del FMLN, mientras este último exigía modificaciones al sistema político antes de parar la guerra.

Con todo, los logros de ese primer lapso fueron: el establecimiento de la “Agenda general y calendario del proceso completo de negociación”; el acuerdo sobre el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, signado por las partes en el documento “Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos”; y el nombramiento de una comisión de verificación de la ONU, “la cual daría paso a la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) [...] ‘Se trataba de un papel sin precedentes para las Naciones Unidas, pues no sólo intervendría en los asuntos internos de un país miembro, sino que lo haría en términos que sobrepasaban su papel tradicional de mantenimiento de la paz’ [Oliver, 2000: 72]”²¹.

Tuvo que adquirir extrema gravedad el curso de los acontecimientos centroamericanos y tuvo que finalizar la Guerra Fría para que las Naciones Unidas empezaran a hacer notar, primero sutil y después más categóricamente, la necesidad de encuadrar el diálogo entre el FMLN y ARENA dentro de unos términos de referencia específicos para el caso de El Salvador, poniendo entre paréntesis el objetivo de pacificar la región. Las medias que el entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, y su delegado para asuntos centroamericanos, Álvaro de Soto, empezaron a tomar en aras de superar obstáculos atávicos que impedían solucionar la

²¹ Córdova Macías, R., *et al.*, *op. cit.*, p. 92.

crisis centroamericana por la vía política dieron un giro radical respecto de toda actuación previa de las Naciones Unidas hacia los conflictos en el globo.

El papel de la ONU en El Salvador sería en una doble dirección. Por un lado, frente a la comunidad internacional, trataría de favorecer una correlación de fuerzas que ayudaría a la solución del conflicto. Por ello se formó el Grupo de Amigos del Secretario General integrado por México, Colombia, España y Venezuela. Por otro lado, frente a la dinámica interna, en su carácter de intermediador desarrollaría las siguientes responsabilidades: a) Facilitador del diálogo ante los *impasses* producidos; b) aportación y asesoramiento técnico; y c) verificación de los acuerdos a través de la misión ONUSAL²².

Cuadro 4.2: REUNIONES Y ACUERDOS A LO LARGO DEL PROCESO DE NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL FMLN (ABRIL 1990 – ENERO 1992). Fuente: “La construcción de la democracia en El Salvador”²³.

No	Fecha	Lugar	Acuerdo alcanzado
1	4 de abril de 1990	Ginebra, Suiza	Acuerdo para inicio de las negociaciones con la mediación de las Naciones Unidas
2	16-21 de mayo de 1990	Caracas, Venezuela	Agenda general y calendario del proceso de negociación
3	19-25 de junio de 1990	Oaxtepec, México	No hubo acuerdo sustantivo
4	20-26 de julio de 1990	San José, Costa Rica	Acuerdo sobre derechos humanos
5	17-22 de agosto de 1990	Costa Rica	No hubo acuerdo sustantivo
6	13-18 de septiembre de 1990	San José, Costa Rica	No hubo acuerdo sustantivo
7	28-31 de octubre de 1990	México, D.F.	No hubo acuerdo sustantivo
8	3-5 de enero de 1991	México	No hubo acuerdo sustantivo
9	1-2 de febrero de 1991	México	No hubo acuerdo sustantivo
10	19-20 de febrero de 1991	Costa Rica	No hubo acuerdo sustantivo
11	21 de marzo de 1991	México, D.F.	No hubo acuerdo sustantivo
12	4-27 de abril de 1991	México, D.F.	Acuerdo sobre reformas constitucionales o acuerdo de México
13	14-17 de mayo de 1991	México	No hubo acuerdo sustantivo
14	25 de mayo - 2 de junio de 1991	Caracas, Venezuela	No hubo acuerdo sustantivo
15	16-22 de junio de 1991	Querétaro, México	No hubo acuerdo sustantivo
16	9-11 de julio de 1991	México, D.F.	No hubo acuerdo sustantivo
17	16-25 de septiembre de 1991	Nueva York	Acuerdo de Nueva York
18	12-22 de octubre de 1991	México, D.F.	No hubo acuerdo sustantivo
19	3-13 de noviembre de 1991	México, D.F.	No hubo acuerdo sustantivo
20	25 de noviembre – 11 de diciembre de 1991	San Miguel Allende, México	No hubo acuerdo sustantivo
21	16-31 de diciembre de 1991	Nueva York	Acta de Nueva York I
22	2-13 de enero de 1992	Nueva York	Acta de Nueva York II
23	16 de enero de 1992	México, D.F.	Firma de los acuerdos finales de paz

²² *Ibid.*, p. 91.

²³ *Ibid.*, p. 89. Las cursivas son nuestras.

Establecido que los temas a tratar serían: Fuerza Armada, Derechos Humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problema económico social y verificación por las Naciones Unidas, y superado el primer *impasse*, el segundo momento de la *fase negociadora* va de octubre de 1990 a abril de 1991. “La celebración de elecciones legislativas en marzo de 1991, la decisión del FMLN de no boicotearlas y, sobre todo, la obtención de ocho escaños en la Asamblea por parte de CD, crearon nuevas condiciones que facilitaron que el FMLN lanzara una propuesta en la que se planteaba una negociación intensiva y simultánea de diversos temas, entre los que estaban la reforma constitucional, el sistema judicial y el sistema electoral”²⁴. Debido a que la legislatura saliente debía ratificar las reformas a la Constitución definidas en los acuerdos antes del 30 de abril, éste fue el tema prioritario a lo largo de ese mes, cuyo resultado fue el “Acuerdo de México sobre Reformas Constitucionales”, destinadas a limitar el poder del ejército y reestructurar los sistemas judicial y electoral. Como señalan Córdova Macías *et al*, se trató de un paso trascendental, que apuntaló la negociación.

Al tercer momento de la *fase negociadora* los autores lo denominan *desentramamiento* y lo ubican entre abril y septiembre de 1991. Se trató de un semestre en el que las partes volvieron a manifestar sus desencuentros en torno del cese al fuego y la Fuerza Armada.

El FMLN condicionó la firma de un cese de hostilidades al cumplimiento de la ratificación de las reformas constitucionales, suspensión de la ayuda militar norteamericana y concertación de acuerdos políticos sobre depuración, reestructuración y reducción de la Fuerza Armada —ya que en las reformas acordadas no logró incluir la desaparición del ejército—. Por el otro lado, el gobierno no aceptó la depuración de la Fuerza Armada y propuso dejar abierta la posibilidad de que efectivos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Hacienda (PH) formaran parte de la nueva policía civil²⁵.

Pese a ello, la instalación de la Misión de Observadores de la ONU (ONUSAL), en julio de 1991, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo pactado en materia de Derechos Humanos y demás acuerdos, otorgó mayor credibilidad al proceso de

²⁴ *Ibid.*, p. 93

²⁵ *Ibid.*, p. 94

negociación. ONUSAL se compuso de cuatro divisiones: a) División de Derechos Humanos, establecida para verificar el cumplimiento del acuerdo de San José; b) División policial, cuya función era garantizar la transición que consistiría en desmontar los cuerpos de seguridad existentes y formar la nueva Policía Nacional Civil (PNC); c) División Militar, destinada a la verificación del cese al fuego, del desmontaje militar y la desmovilización; y d) División Electoral, establecida después de los *Acuerdos de Chapultepec* para la observación de las elecciones presidenciales de 1994²⁶.

Hasta este momento, Javier Pérez de Cuellar había delegado en Álvaro de Soto la participación en las reuniones entre el FMLN y el gobierno de El Salvador. No obstante, bajo el riesgo de que el nuevo *impasse* comprometiera el éxito del proceso y con ello la credibilidad de la ONU, Pérez de Cuellar asumió personalmente la conducción de las negociaciones. La propuesta de Naciones Unidas en esta coyuntura fue la creación de una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ). Dicha instancia se instaló en octubre de 1991, con el objeto de supervisar el cumplimiento de todos los acuerdos políticos alcanzados por las partes. El establecimiento de COPAZ fue uno de los convenios estipulados en el “Acuerdo de Nueva York”, documento que refleja la flexibilización de las partes en cuanto al nudo problemático de la discusión. “El FMLN accedió a retirar su demanda de fusión de los dos ejércitos, o su integración a la Fuerza Armada. A cambio pedía su integración a la PNC. Si bien inicialmente el gobierno rechazó dicha propuesta, reconsideró su postura, aceptando discutir la participación del FMLN en la PNC”²⁷. Gracias a eso, en Nueva York pudieron delimitarse las líneas sobre las que transcurriría la reforma de la Fuerza Armada, la creación de la PNC y el abordaje del problema económico-social.

La *recta final de la negociación*, cuarto momento de esta fase, va de septiembre de 1991 a enero de 1992 y giró en torno del delicado tema del cese al enfrentamiento armado. Si bien se lograron acuerdos acerca de la reducción y depuración de la Fuerza Armada, fue difícil llegar a una posición definitiva respecto del fin de la guerra.

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Ibid.*, p. 95.

El 2 de diciembre de 1991 Estados Unidos y la Unión Soviética emitieron una declaración en la que exhortaban a las partes a lograr el cese al fuego. Por su parte, el ‘Grupo de Amigos’ del Secretario General inició una intensa labor de cabildeo entre las partes, tratando de armonizar posiciones. Pero el 6 de diciembre, fue necesario que el Secretario de la ONU propusiera el traslado de las negociaciones a Nueva York con el objetivo de finalizar el conflicto. La reunión comenzó el 16 de diciembre tratando los temas de la PNC, la reducción del ejército y la incorporación del FMLN a la vida política. La presión por llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre se hacía más evidente al considerar que al final de ese día Pérez de Cuellar dejaba su cargo como Secretario General de la ONU²⁸.

Samayoa explica bien por qué ese plazo se convirtió en un factor decisivo:

La hora cero estaba determinada por la terminación del ejercicio de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de Naciones Unidas. Las opciones estaban claras: o se apresuraba la marcha y se llegaba a acuerdos definitivos antes de esa hora, o se dejaba pendiente toda la negociación para continuar bajo los auspicios del nuevo secretario general, el egipcio Boutros Boutros Ghali, cuyo interés por el problema salvadoreño era, en ese momento, una incógnita indescifrable. Los riesgos eran considerables. Si se dejaba pendiente la negociación podían perderse o desvanecerse todos los logros acumulados a lo largo de dos años de trabajo. El nuevo secretario no había tenido el más mínimo contacto con los problemas de El Salvador y Centroamérica. Sus prioridades probablemente no incluirían esta región del mundo, debido a las crecientes demandas de intervención de Naciones Unidas en escenarios de mayor relevancia geopolítica, configurados a partir de la descomposición del campo socialista y del fin de la confrontación global entre las superpotencias. No era seguro, además, que Boutros Ghali mantendría en sus funciones a los principales colaboradores de Pérez de Cuellar, que dominaban en todos sus detalles el proceso salvadoreño. El interés y la atención internacional a El Salvador tenderían, seguramente, a reducirse. La correlación de fuerzas políticas y militares en la que se sustentaban los avances de la negociación podía alterarse abriendo espacio al repliegue de las concesiones que ya habían hecho las partes en la mesa [...] La presión del tiempo actuaba para bien y para mal, en las dos direcciones. Se obtendrían ganancias con las concesiones que la contraparte estaría forzada a aceptar, pero se debilitarían en una medida correspondiente las posiciones propias, a partir de las concesiones que tendrían que hacerse en reciprocidad²⁹.

Aunque el cese al fuego definitivo fue firmado el 31 de diciembre de 1991, en el “Acta de Nueva York I”, aún fue necesaria una última ronda de negociaciones durante los primeros días de enero de 1992 para acordar el calendario de ejecución de los pactos alcanzados, la modalidad de incorporación del FMLN a la vida institucional y el calendario de reducción de la Fuerza Armada, después de todo lo cual las partes

²⁸ *Ibid.*, p. 96.

²⁹ Samayoa, S., *op. cit.*, pp. 586, 587.

suscribieron el “Acta de Nueva York II”. Con la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 las partes dieron por concluida la negociación, comprometiéndose a llevar a cabo, entre el primero de febrero y el 31 de octubre de ese mismo año, la creación de la PNC, la reducción de la Fuerza Armada y la transformación del FMLN en partido político. Durante ese lapso de nueve meses, “la guerrilla debía conservar sus armas, dentro de zonas definidas y bajo la supervisión de Naciones Unidas, como garantía de la implementación de los Acuerdos de Paz. Entre el 15 y el 31 de octubre de 1992, el FMLN debía destruir todas las armas en presencia y bajo la supervisión de las Naciones Unidas”³⁰.

El final de la guerra civil en El Salvador se firmó durante una célebre ceremonia en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Se trató de un acto solemne, protagonizado por: cinco representantes del Estado salvadoreño, encabezados por el entonces Presidente de la República Alfredo Cristiani; diez representantes del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encabezados por el líder comunista Shafick Hándal; el Ministro de Defensa y el Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña; tres mediadores de las Naciones Unidas, encabezados por el recién electo Secretario General, Boutros Boutros Ghali; el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Soaresel; el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Walker; el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson; y el entonces Presidente de México y anfitrión del evento, Carlos Salinas de Gortari.

Como representantes del “Grupo de Amigos” del Secretario General de la ONU, asistieron los jefes de Estado de Venezuela, Carlos Andrés Pérez; Colombia, César Gaviria; y España, Felipe González. Y como testigos de honor dentro de la comunidad internacional se hicieron presentes los mandatarios de Panamá, Guillermo Endara; Costa Rica, Rafael Ángel Calderón; Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro; Honduras, Rafael Callejas; y Guatemala, Jorge Serrano. Significativamente, “en la primera fila del bloque de invitados especiales figuraban el Secretario de Estado de Estados Unidos de

³⁰ Córdova Macías, *et al*, *op. cit.*, p. 97.

América James Baker, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Isidoro Malmierca”³¹.

El histórico acontecimiento fue presenciado, además, por un nutrido grupo de personalidades de El Salvador y del continente entero. Entre los salvadoreños, se encontraban los miembros del gabinete y otros altos funcionarios del gobierno, los presidentes del Órgano Legislativo, Roberto Angulo, y del Órgano Judicial, Mauricio Gutiérrez Castro, junto con diputados de la Asamblea Legislativa y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la familia del Presidente Cristiani, dirigentes de los partidos políticos, gremios empresariales, iglesias, universidades, movimientos sindicales, medios de comunicación y alrededor de 140 comandantes, jefes militares, ex combatientes lisiados, representantes político-diplomáticos, ejecutivos de prensa y cuadros administrativos de la estructura interna del FMLN. “La impresionante representatividad de sectores nacionales, gobiernos e instituciones internacionales reunidos el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, constituyó un verdadero modelo de ingeniería política en materia de construcción y expresión simbólica de consensos³²”.

Aproximadamente mil testigos³³ escucharon de viva voz los discursos de los firmantes. Correspondió a Shafik Handal ser el primer representante de una de las partes en tomar la palabra:

La firma del Acuerdo de Paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humana y progreso; ha sido la rebeldía indomable de miles y miles de salvadoreños, en su mayoría jóvenes y también niños —como los de Chapultepec [aludiendo a los Niños Héroe mexicanos]— la que ha conducido a que la Nación pacte este nuevo consenso que asegura a todos sus hijos iguales derechos de participación en la conducción del país [...] El FMLN ingresa a la paz abriendo su mano, que ha sido puño, y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido, como corresponde a un desenlace sin vencedores ni vencidos, con el firme propósito de dar comienzo a la unificación de la familia salvadoreña [...] Las partes en la negociación hemos terminado

³¹ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 593.

³² *Ibid.*, p. 605.

³³ Ver Flores García V., “*El abrazo de viejos enemigos*”, El Faro.Net. Primer periódico digital latinoamericano. Informe Especial, De la guerra a la paz, San Salvador, marzo 9, 2006, www.elfaro.net/dlgalp/firma/abrazo.asp

nuestro trabajo. Desde ahora, la nación entera asume el protagonismo de su propia transformación.

Por su parte, Alfredo Cristiani reconoció que:

Nos quedaríamos injustamente cortos si viéramos solo hacia el pasado inmediato para medir la magnitud de lo que ocurre en El Salvador de un tiempo a esta parte, la crisis en que se vio envuelta la nación salvadoreña en el último decenio no surgió de la nada, ni fue producto de voluntades aisladas, esta crisis tan dolorosa y trágica tiene antiguas y profundas raíces sociales, políticas, económicas y culturales en el pasado. Una de las perniciosas fallas de nuestro esquema de vida nacional fue la inexistencia o insuficiencia de los espacios y mecanismos necesarios para permitir el libre juego de las ideas, el desenvolvimiento natural de los distintos proyectos políticos derivados de la libertad de pensamiento y de acción, en síntesis, la ausencia de un verdadero esquema democrático de vida [...] Ahora podemos decir que la democracia salvadoreña nos pertenece a todos y que a su desarrollo y ensanchamiento progresivo procedemos todos por compromiso patriótico y por asunción compartida de responsabilidades históricas³⁴.

Pero no sólo quienes asistieron al evento celebraron con visible entusiasmo lo ocurrido. La comunidad internacional tenía los ojos puestos sobre el caso salvadoreño. El país más pequeño de América había logrado terminar por la vía pacífica un enfrentamiento bélico que a lo largo de doce años desangró y forzó al desplazamiento a su población de poco más de cinco millones de habitantes. Como corolario del tenso proceso de negociación que se había estado llevando a cabo durante dos años en Ginebra, México, San José, Caracas y Nueva York, la izquierda y la derecha salvadoreñas celebraban juntas la paz. Tal clima conciliatorio dio pie para esperanzarse con que había triunfado el poder del diálogo sobre el poder de las armas, con que había triunfado la razón sobre la fuerza. Las Naciones Unidas calificaron de “impecable” el modo en el que los Acuerdos terminaron con el conflicto.

En El Salvador, la población entera seguía paso a paso, en vivo y en directo, los desarrollos de la ceremonia de Chapultepec, a través de la cadena nacional de radio y televisión, absorbiendo con avidez las imágenes y las palabras que dejarían consagrada la paz. Las señales eran claras y elocuentes para todos. Los acuerdos de paz se estaban convirtiendo en un compromiso público y solemne de los salvadoreños ante el mundo entero. La comunidad internacional exigiría con celo el cumplimiento pleno de los acuerdos en todos sus componentes y compartiría la carga económica de la paz y la

³⁴ Un buen dossier de documentos relacionados con el proceso de paz salvadoreño puede consultarse en el Informe Especial de El Diario de Hoy “Acuerdos de Paz 1992-2002”, www.elsalvador.com/noticias/especiales/acuerdosdepaz2002/index.html

reconstrucción. Cada detalle de la ceremonia cerraba un poco más el espacio a cualquier expectativa de obstrucción o manipulación de los acuerdos. El escepticismo se transformaba poco a poco en esperanza y la paz comenzaba a percibirse como un proceso sólido, viable e irreversible, a la luz del impresionante respaldo nacional e internacional que se estaba expresando en el alcázar del castillo de Chapultepec³⁵.

Samayoa ve en el despliegue masivo de correligionarios de ARENA y militantes y simpatizantes del FMLN que asistieron a dos de las principales plazas del centro de San Salvador a desarrollar la jubilosa y pacífica celebración popular de la firma de los Acuerdos de Paz la legitimación otorgada por las bases sociales al simbólico acto reconciliatorio que estaba siendo protagonizado por las cúpulas políticas en la Ciudad de México. En contraposición a este espíritu, los sectores ultraconservadores dentro del ejército y la élite empresarial de El Salvador constituyeron una amenaza efectiva contra la consolidación de la paz que, pese a ellos, fue decididamente respaldada no sólo por el gobierno, el FMLN y las bases de ambos, sino por el gobierno de Estados Unidos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general. Según Samayoa, la majestuosa ceremonia del 16 de enero y su feliz recepción en los ámbitos nacional e internacional aislaron a las posiciones extremistas de derecha e izquierda que se oponían a los acuerdos y propiciaron una atmósfera de apoyo irrestricto al cumplimiento de los mismos, propagada por los medios locales y extranjeros.

4.1.3 La paz política

¿Qué cambió en El Salvador a partir de los Acuerdos de Paz? Mucho se ha hablado acerca del carácter político de la transformación que sufrió el país tras el fin de la guerra. Entre los autores que aquí hemos traído a colación, la tesis de licenciatura en historia de Tania Ocampo y la investigación del Dr. Córdova Macías *et al* representan las dos posiciones predominantes frente al hecho de que el fin de la guerra consiguió modificar el marco jurídico-institucional del país, pero no logró mejoras significativas en la superación de la injusticia estructural. Mientras la primera autora cuestiona lo que considera un concepto limitado de paz, reducido al cese al fuego, que omitió el

³⁵ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 593.

problema socioeconómico como detonante fundamental del conflicto, el segundo grupo de autores valora la capacidad de consenso que mostraron las partes en la consecución de los acuerdos, viendo en ello el punto de partida para la posterior metamorfosis institucional del país. Desde este último punto de vista, el fin de la guerra constituyó la superación del más grande obstáculo experimentado por los salvadoreños para la exitosa construcción de la democracia política. Veamos con algo de detalle ejemplos de ambos enfoques. Ocampo concluye su indagación afirmando que:

Efectivamente, se plantean medidas que democratizarían a El Salvador, sin embargo, se trataba de una democracia de carácter institucional, vertical. Esa que se construye desde el Estado y sus instituciones y no desde abajo y de manera horizontal. Es decir, la democracia liberal que reivindica el libre mercado, los derechos civiles y políticos y que ofrece paliativos para satisfacer el ámbito de los derechos sociales, como por ejemplo, para aliviar la pobreza pero que no busca solucionarla [...] Al final, el FMLN aceptaba insertarse en la realidad de esta democracia, aceptando las reglas del juego, es decir, al final aceptó convertirse en una oposición desarmada que pugnaría por su proyecto de nación a través de la propaganda y el juego electoral [No obstante, al circunscribirse al problema de la transición política,] los compromisos signados en el documento no representan una solución completamente satisfactoria a los problemas que venía arrastrando El Salvador y que fueron los que originaron la guerra³⁶.

Córdova Macías *et al*, en cambio, aseguran:

Los acuerdos no pretendieron la anulación de todas las causas de la guerra y mucho menos de todas las causas del conflicto social, ya que no tuvieron las condiciones de posibilidad para hacerlo. El contenido y naturaleza del pacto suscrito, y el proceso generado por el mismo fue un hecho de naturaleza eminentemente política, entendido por ello que estuvo orientado, en lo fundamental, a la reforma de componentes de la superestructura jurídico-institucional y cuyos actores protagónicos se definieron por el criterio de participación en la lucha por el poder del Estado. En este sentido, otros actores sociales y políticos fueron solo actores coyunturales y/o tangenciales y los acuerdos en materia económico-social sólo fueron un elemento estabilizador para garantizar la viabilidad del proceso político de pacificación³⁷.

Pese a las diferentes posturas, los distintos observadores coinciden en subrayar la creación de una atmósfera favorable al consenso y un andamiaje institucional destinado a fortalecer los medios políticos de resolución de las diferencias y acceso al

³⁶ Ocampo, T., *op. cit.*, pp. 177, 178.

³⁷ Córdova Macías, R., *et al*, *op. cit.*, p. 97.

poder del Estado, la desmilitarización de la sociedad y el respeto a los Derechos Humanos como conquistas de los Acuerdos de Paz. Los componentes de la superestructura jurídica que fueron reformados, en virtud de la intensa actividad desarrollada para tal fin por ONUSAL, COPAZ, la Comisión *Ad Hoc* y la Comisión de la Verdad pueden ser enumerados siguiendo el capitulado del documento de los *Acuerdos de Chapultepec*. Tal documento sintetiza los compromisos alcanzados por las partes y define la agenda que orientó su implementación.

Los capítulos I y II abordan lo relativo a la depuración, disminución y sujeción al poder civil por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, la abolición de los anteriores cuerpos de seguridad y la creación de una Policía Nacional Civil (PNC). Un primer dato relevante en este sentido es que el número de efectivos del ejército de El Salvador haya pasado de sumar 63.175 en los últimos años de la guerra, a disminuir a 31.000 en 1999 y a 15.500 en el año 2003. Córdova Macías *et al* acuerdan con Samayoa al afirmar que los Acuerdos de Paz renovaron completamente a la institución castrense³⁸.

Rasgos constitutivos de esa renovación fueron: la depuración de la que fue objeto por recomendación de la Comisión de la Verdad y la Comisión *Ad Hoc*, la drástica disminución de su presupuesto, el reemplazo del Alto Mando militar y la sujeción del mismo al poder del Ejecutivo, la reforma de sus principios doctrinarios, el que la formación de sus miembros pasara a ser responsabilidad de civiles, la disolución de los cuerpos represivos institucionales y paramilitares, el reemplazo de la División Nacional de Inteligencia por el nuevo Organismo de Inteligencia del Estado (controlado por civiles), la reforma a varios artículos de la Constitución que legalizaron estos cambios y

³⁸ Kristina Pirker, por su parte, muestra reparos en su valoración acerca de la conducta de la Fuerza Armada en el período posbélico: “El desigual trato que recibieron víctimas y victimarios puso en evidencia la doble agenda del gobierno salvadoreño en cuanto al cumplimiento de los compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos: Mientras ante la comunidad internacional el gobierno salvadoreño se había comprometido con la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en la agenda política interna esta temática fue subordinada a la lógica central de obtener la desmovilización del FMLN con la menor cantidad de concesiones institucionales posibles. Este resultado pone en evidencia también la fuerza y el ‘poder de veto’ de las Fuerzas Armadas que, si bien aceptaron una reducción del número de efectivos y una cierta reforma a los reglamentos internos, no aceptaron la integración de ex guerrilleros en sus estructuras y mantuvieron un alto grado de autonomía y facultades para participar en tareas de seguridad pública. Hasta el día de hoy el ejército sigue sin reconocer oficialmente su participación y responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra civil”, Pirker, K., *op. cit.*, p. 292.

la baja presencia de cuadros militares en el régimen político. A juicio de Córdova Macías, el ejército dejó de ser una “suprainstitución” que se encontraba por encima de todas las demás y tenía asignada una función política, para limitar sus funciones a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio (incluido el proporcionar ayuda en las crisis ocasionadas por los desastres naturales).

Ganancia indiscutible del proceso de paz ha sido la transformación orgánica, institucional, jurídica, política y cultural de la Fuerza Armada de El Salvador [...] La institución castrense observó un impresionante nivel de cumplimiento de los acuerdos que le correspondían [...] Ahora quedan muy pocos vestigios de la prepotencia que exhibieron los militares en el pasado. También quedan pocos vestigios de su legendaria impunidad. Ahora la Fuerza Armada se siente más cómoda y goza de una legitimidad social sin precedentes. Ya no es el blanco del repudio popular. Ya no es el centro de los ataques de la oposición. Ya no es el epicentro de los temblores políticos en El Salvador. Su actuación se enmarca, con ejemplar profesionalismo y disciplina, en el mandato constitucional, tal como este fue modificado en los acuerdos de paz³⁹.

La PNC nació como resultado de la separación entre las funciones estatales de proveer seguridad y defender el territorio nacional. Si de esta última tarea debe encargarse la Fuerza Armada, la primera quedó en manos de la nueva policía civil. De ahí que los acuerdos estipularan, además de su surgimiento, la abolición de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, tradicionales aparatos represores de la institución castrense. Las tareas de la PNC pueden resumirse en 2: garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública; y colaborar con el procedimiento de investigación del delito. Córdova Macías concibe la independencia de la PNC respecto de la Fuerza Armada como expresión de un nuevo enfoque en materia de seguridad ciudadana, dentro del cual se crea una institución “sobre la base de una nueva doctrina, una nueva organización, nuevos mecanismos de selección, formación y adiestramiento”⁴⁰. Asimismo, establece la cronología básica de su fundación y consolidación. En febrero de 1992 fue creada la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), órgano encargado de la educación de los cuadros policiales. En abril del mismo año fueron nombrados el director y el Consejo Académico de dicha instancia,

³⁹ Samayoa, S., *op. cit.*, p. 630.

⁴⁰ Córdova Macías, R., *et. al.*, *op. cit.*, p. 226.

mientras que en septiembre se creó el Ministerio de Seguridad Pública y se dio inicio a los cursos. Finalmente, entre 1995 y 2001 fueron aprobados un conjunto de reglamentos internos y leyes destinadas a regular el funcionamiento administrativo de la PNC y la conducta de sus miembros.

El proceso de creación de la nueva Policía Nacional Civil enfrentó desde el inicio una problemática compleja: a) [...] la integración de personas que se enfrentaron durante el conflicto; b) retrasos para la disolución de la Policía Nacional, intentos por nombrar ex-agentes de la Policía Nacional en la nueva PNC, en contraposición a lo acordado; discrepancias por la forma como fueron transferidas a la PNC la Unidad Especial Anti-narcóticos y la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos; c) la re-educación de antiguos policías de acuerdo al nuevo modelo de seguridad pública; d) el contexto de incremento de la delincuencia y de inseguridad impactó el proceso de formación del nuevo cuerpo policial, privilegiando los factores de cantidad sobre los de calidad, con el propósito de desplegar el nuevo cuerpo policial a nivel nacional en el período más corto posible; e) limitaciones desde el inicio en la infraestructura, recursos financieros y equipo necesario para la ANSP y la PNC; f) conflictos generados por visiones diferentes con respecto al nuevo modelo de seguridad pública⁴¹.

Aunque a tales deficiencias hay que agregar otras, relativas a la operatividad de los mecanismos de control interno y a la eficiencia del desempeño policial, Samayoa asegura que se trata de fallos enmarcados dentro de la debilidad institucional que ha caracterizado a la posguerra y que poco tienen que ver con los vicios atávicos de los antiguos cuerpos de seguridad⁴².

El tercer capítulo de los *Acuerdos de Chapultepec* se refiere a la reforma del sector judicial y a la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, fruto de la negociación fue el nombramiento de la Comisión *Ad Hoc* y la Comisión de la Verdad, con el propósito de elaborar y dar a conocer un documento que diera cuenta de los hechos más trascendentes de violación contra los Derechos Humanos y, sin poseer carácter vinculante ni jurídico, formulara recomendaciones en aras de superar la impunidad. En cuanto a la primera de estas instancias, se mencionó ya que sirvió como base para la depuración de la Fuerza Armada. La segunda, por su parte, elaboró un informe

⁴¹ *Ibid.*, pp. 227, 228.

⁴² Samayoa, S., *op. cit.*, p. 652.

detallado, denominado *De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador*⁴³, que se hizo público el 15 de marzo de 1993, impactando profundamente en la sociedad salvadoreña.

“Nunca antes el abuso de poder había sido expuesto públicamente con tal fuerza y autoridad en El Salvador. Lamentablemente, lo que siguió no fue un foro sobre la verdad y la reconciliación, sino una feria de reacciones muy diferentes e incluso antagónicas”⁴⁴. Cinco días después de publicado *De la locura a la esperanza...*, Alfredo Cristiani promovió la aprobación de la Ley de Amnistía General Para la Consolidación de la Paz “que dio amplia cobertura a hechos vinculados a la guerra, incluso a aquellos hechos acaecidos en el mismo período del presidente que promovió la ley, tal como fue el caso *jesuitas*. La Ley de Amnistía fue impugnada por vía constitucional, sin embargo sólo se tuvo respuesta por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el año 2000, en la cual se le dio validez constitucional”⁴⁵.

La aprobación de la Ley de Amnistía oficializó el absoluto rechazo que los sectores conservadores manifestaron hacia el Informe de la Comisión de la Verdad y cerró la posibilidad de que el aparato judicial salvadoreño proveyera verdad y justicia a las víctimas de las violaciones contra los Derechos Humanos ocurridas a lo largo del conflicto. Coincidimos con Córdova Macías en asegurar que dicho Informe, dirigido por 3 personalidades extranjeras nombradas por el Secretario General de la ONU: el ex presidente de Colombia Belisario Bentacur, el ex ministro venezolano Reynaldo Figueredo y el juez judío Thomas Buergenthal, es un hito en la historia de la nación centroamericana, por cuanto recoge la memoria de la violencia política ocurrida durante la década de 1980. De ahí que para los sectores progresistas constituya hasta la fecha un referente insoslayable.

En lo que respecta a las reformas del sistema de justicia encaminadas a conseguir una mayor independencia entre éste y los demás órganos del Estado, las más relevantes fueron: la asignación de no menos del 6% del presupuesto general de la

⁴³ *Op. cit.*

⁴⁴ Hernández-Pico, citado en Córdova Macías, *et. al, op. cit.*, p. 223.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 138.

Nación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la redefinición del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos. También se estableció que los magistrados de la CSJ, del CNJ y el Procurador de Derechos Humanos fueran elegidos por al menos dos terceras partes del total de diputados de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, se modificaron: el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penitenciaria, el Código de Familia y la Ley del Menor Infractor. Este conjunto de medidas apuntaló la impartición de justicia en El Salvador al mejorar el acceso a ella por parte de más cantidad de ciudadanos, disminuir sustancialmente el nivel de violación a los Derechos humanos por parte del Estado y establecer mayores controles y mecanismos de denuncia contra los abusos del poder. Sin embargo, los niveles de impunidad en el país continúan siendo alarmantes.

Un análisis sobre las dificultades para consolidar el Estado de Derecho en El Salvador de posguerra asegura que:

Muchas de las estrategias empleadas levantan preguntas por su aparente fracaso para solventar los problemas críticos, la pobre coordinación de esfuerzos [...], una voluntad política errática, una necesidad enorme de recursos técnicos y económicos, débiles o incipientes instituciones estatales encargadas de salvaguardar los derechos humanos, la tendencia de viejos vicios a presentarse bajo nuevas formas, la carencia de mecanismos adecuados de vigilancia dentro de las instituciones, una sociedad civil débil, y una enorme exclusión económica⁴⁶.

El capítulo IV de los *Acuerdos de Chapultepec* está dedicado al sistema electoral y establece a COPAZ como el ente responsable de realizar la reforma correspondiente. La sustitución del anterior Consejo Central de Elecciones (CCE) por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) contribuyó a conculcar la tradición del fraude e inauguró una nueva etapa en la que las elecciones se convirtieron en el único mecanismo legítimo de acceso al poder del Estado, aceptado incluso por la izquierda revolucionaria que a partir de entonces ingresó al sistema político. Otro hecho relevante en esta materia fue la aprobación del Código Electoral en 1993, destinado a regular los detalles relacionados con la celebración periódica de elecciones. Diversos estudios acerca de la democracia

⁴⁶ Popkin, M., citada en *Ibid.*, p. 154.

en América Latina aseguran que El Salvador cuenta con una democracia electoral sólida, pese a las deficiencias que el sistema presenta en lo relacionado con “el exceso de funciones administrativas en detrimento de funciones jurisdiccionales del Tribunal, la excesiva orientación partidista de sus integrantes o la calidad y solidez del registro electoral”⁴⁷.

Haciendo eco de las concepciones de democracia sostenidas por los teóricos Joseph Schumpeter y Samuel Huntington, Córdova Macías *et al* retoman como requisitos de las elecciones competitivas: a) el sufragio universal de adultos; b) la justicia en el voto; c) el derecho a organizar partidos y postular candidatos; y d) la periodicidad de los ciclos electorales. El cumplimiento de tales requisitos por parte del sistema electoral salvadoreño a partir de 1994 permite hablar de un salto desde elecciones “semi-competitivas”, tal como las califica Artiga-González, hacia elecciones competitivas a partir de esa fecha. Esto explica el hecho de que en las evaluaciones internacionales sobre la instauración y desarrollo de la democracia en América Latina El Salvador “apruebe” los ítems relacionados con la democracia electoral. Alineados en esa concepción de democracia formal, representativa, Córdova Macías *et al* consideran que el mayor aporte de los Acuerdos de Paz al proceso salvadoreño ha sido desmilitarizar y “electoralizar” el régimen político.

En el capítulo V de los acuerdos se procuró establecer una plataforma mínima en materia económico-social que proveyera estabilidad a la transición, bajo el entendido de que la orientación de la política económica no sería objeto de la negociación. Se trató, básicamente, de establecer garantías para la incorporación de los ex combatientes de ambas partes al quehacer productivo del país y para el manejo de las zonas de conflicto.

En este tema, esbozado por primera vez en el Acuerdo de Nueva York, se pactó el desarrollo de programas de reinserción a la vida civil y productiva, y programas de transferencias de tierras a ex combatientes, ex soldados y a pobladores de las zonas ex conflictivas. Se incluyen como mecanismos: La elaboración de un Código Agrario, la legalización del estado de la tenencia de predios e inmuebles en las zonas de conflicto; el establecimiento de programas de crédito, capacitación y asistencia técnica, y de

⁴⁷ *Ibid.*, p. 159.

medidas que sean necesarias para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural; la elaboración de formas convenientes para la cooperación externa directa destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades, la creación de un Foro para la Concertación Económica y finalmente la elaboración de un Plan de Reconstrucción Nacional⁴⁸.

Los capítulos VI, VII, VIII y IX de los *Acuerdos de Chapultepec* reglamentaron: la legalización del FMLN y su conversión en partido político, los detalles del Cese del Enfrentamiento Armado (CEA), la tarea verificadora de ONUSAL y el concentrado calendario de ejecución de los compromisos. Respecto de la incorporación del movimiento insurgente al escenario institucional del país, vale señalar que una tarea primordial de la implementación de los acuerdos fue garantizar la vida de los ex combatientes efemelenistas⁴⁹, así como el respeto a sus derechos de reunión, hacer proselitismo, contar con cedes de funcionamiento, nombrar candidatos y tener acceso a medios de comunicación.

Artiga-González sintetiza el contenido de los acuerdos, señalando el claro predominio de las cuestiones políticas: “Ocho de las nueve temáticas están referidas al nuevo régimen político. La restante (capítulo V) es de carácter socioeconómico. En las temáticas referidas al régimen político el grado de detalle de las formulaciones contrasta con la redacción de las temáticas referidas a lo socioeconómico. Esto es fundamental para entender el carácter político de los acuerdos y de la transición”⁵⁰. Asimismo, la escala de prioridades que se aplicó en la implementación de los acuerdos muestra qué rubros recibieron mejor y más inmediata cobertura. Córdova Macías *et al* proponen una cuantificación de la instrumentación de los acuerdos, agrupando las

⁴⁸ *Ibid.*, p. 111.

⁴⁹ A pesar de ello, “se produjeron numerosos asesinatos políticos a lo largo de 1993, fundamentalmente de militantes y cuadros del FMLN, entre los que cabe destacar los de Francisco Velis, miembro del Consejo Nacional del FMLN y de la Comisión Política del PRTC, y Mario López que había sido Secretario General Adjunto de ésta misma organización durante la guerra. Ante la amenaza que estos hechos representaban para la consolidación del proceso de paz, el Secretario General de la ONU promovió la creación en diciembre de 1993 del denominado Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador. El informe final del grupo documentó 49 asesinatos con motivación política desde el final de la guerra. El informe ponía asimismo de manifiesto la reaparición de los escuadrones de la muerte y elaboraba recomendaciones confidenciales para la resolución de dichos casos”, Martín Álvarez, *op. cit.*, p. 207.

⁵⁰ Artiga-González, A., citado en Córdova Macías, R., *et al*, *op. cit.*, p. 109.

acciones tomadas en 3 diferentes rubros y de acuerdo al orden en que se atendieron: i) la desmilitarización de la sociedad y el Estado (CEA, Fuerza Armada, PNC), concentró el 68.6% del total de las acciones; ii) la institucionalidad estatal y el sistema político-electoral (sistema judicial, sistema electoral, COPAZ y transformación del FMLN), concentraron el 18.6%; iii) el 12.7% se refiere al tema económico y social⁵¹. La desmilitarización fue, pues, el objetivo prioritario.

Volviendo sobre la polémica entre lo poco satisfactorio o lo aceptable y conveniente de este resultado, diremos que el carácter político de los Acuerdos de Paz definió el rumbo de la transición, en la medida en que ensanchó el escenario político y amplió el repertorio de los actores, pero también impuso límites a las posibilidades de expandir la democratización en el ámbito económico-social. El “desafío revolucionario” y la posterior pacificación consiguieron trastocar la exclusión política, pero no la exclusión económica. Esta última, por el contrario, encontró una fuente de legitimación en la transformación política experimentada por El Salvador a raíz de los Acuerdos de Paz. Tania Ocampo califica la pacificación salvadoreña como un acallamiento de las armas y Córdova Macías *et al* consideran que las partes de la negociación, convertidas en las principales fuerzas políticas durante la posguerra, trasladaron su enfrentamiento al terreno jurídico-institucional, fortalecido a raíz de los acuerdos. Un artículo de opinión publicado en 1994 explicaba tal fenómeno del siguiente modo: “El país se está transformando realmente, pero no tanto según el diseño consensuado en el Acuerdo de Paz, sino más bien según ‘lo que va saliendo’ por las concretas correlaciones de fuerza en cada coyuntura. Hay bastante contraste entre el concepto de transición redactado en los acuerdos y el alcance y orientación de la transición real; una evidente distancia entre el discurso y los hechos”⁵².

Desde nuestra apreciación, si la etapa bélica consistió en una enconada pugna entre tres proyectos de nación, la etapa posbélica se caracterizó por la confrontación entre dos proyectos, uno socialista-democrático y otro neoliberal, en un contexto

⁵¹ *Ibid.*, p. 125.

⁵² Ribera, R., “Transición democrática y proceso electoral”, *Revista de Estudios Centroamericanos ECA*, No 543-544, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 1994.

eminentemente político-electoral, no militar. Así las cosas, la reforma política terminó por volverse funcional al proyecto neoliberal de ARENA, mientras que en el FMLN supuso importantes fracturas y forzó a decisivos replanteamientos ideológicos en torno de cuál debería de ser el nuevo horizonte de lucha. Hubo quienes sostuvieron que el fin de la guerra debía conllevar el fin del FMLN y su planteamiento revolucionario. Esas facciones terminaron retirándose de la nueva institución partidaria en la cual predominaron las voces “ortodoxas”, defendiendo la necesidad de luchar por una distribución más justa de la riqueza a través de medios políticos, no armados.

Interrogado sobre la posibilidad del FMLN de haber logrado mejores resultados en lo socioeconómico durante la negociación, Hato Hasbún, militante histórico de las Fuerzas Populares de Liberación FPL, jefe de campaña del candidato presidencial de su partido durante 2008 y actual miembro del gabinete de Mauricio Funes asegura:

Ya el último día de la negociación, el conflicto era este: después de tantos años de estar en ese proceso, con tantos costos, nosotros dijimos: ya dimos un paso. Ahora tenemos que entrar a trabajar dentro del espacio democrático, hablando en términos políticos. Se abría un espacio democrático mínimo. ¿Qué era lo que nosotros teníamos como reto en ese momento? Bueno, ir ampliando. Desde ese espacio democrático mínimo o digamos —para no ser tan pesimista— desde el regular espacio democrático que se abría con la firma de los Acuerdos que estábamos firmando, trabajar sin las armas, es decir, con los puros recursos políticos y sociales para ir abriendo la posibilidad del proceso que no había terminado ahí. Shafick lo decía de la siguiente manera y lo definía bastante bien: nosotros, dentro del espacio abierto, seguíamos el proceso revolucionario. Esa fue la diferencia con Joaquín [Villalobos] y por qué Joaquín se separa. Para Joaquín ya no había que hablar de revolución, para Joaquín había que hablar de evolución, porque con la firma de los Acuerdos de Paz estábamos sentando la base democrática que había que desarrollar. Nosotros decíamos: ‘No, hay que construir todavía las condiciones para que esta base democrática sea duradera y firme’⁵³.

A nuestro criterio, el ex combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) e historiador mexicano Héctor Ibarra ofrece una justa valoración del proceso salvadoreño y su desenlace:

Analizando la Revolución Salvadoreña desde su perspectiva de larga duración —no sólo en el período reducido de la crisis política y la guerra civil—, podemos darnos cuenta de que una de las máximas aspiraciones de la sociedad, aparte de la necesidad de justicia

⁵³ Segunda parte de la entrevista a Hato Hasbún realizada para esta investigación, México DF-San Salvador, 18 de diciembre de 2008.

social, era [alcanzar] las libertades democráticas y [terminar con la] impunidad existente, lo que movía a amplios sectores de la sociedad a la lucha.

De modo que la gran movilización popular que se dio a lo largo del siglo XX, tiene como fundamento la lucha contra la dictadura y el militarismo. En tal sentido, el mayor logro alcanzado con la guerra civil y los Acuerdos de Paz de 1992, es haber acabado con la dictadura y el militarismo y haber refundado e institucionalizado la república democrática cancelada por la oligarquía conservadora, la dictadura militar y el gobierno norteamericano.

[De ese modo,] se logran a la vez restablecer los derechos civiles y las libertades propias de una democracia representativa y de un modelo económico-social liberal y capitalista. Proceso que en síntesis consume un tipo de revolución política con algunos cambios en lo social, pero de ninguna manera es una revolución social. Para ser revolución social, impondría como requisito la transformación radical de las estructuras socio-económicas del país⁵⁴.

4.2 El Salvador en la ARENA neoliberal

El economista salvadoreño Alexander Segovia diagnosticó la situación en la que El Salvador terminó la década de 1980 observando que la convulsión política y el ingreso de divisas en concepto de ayuda militar terminaron por colapsar la economía del país. Por una parte, el gobierno democristiano procuró compensar el aumento inflacionario adoptando una política de austeridad que incluyó la disminución en inversión social y la congelación de salarios. Por otra parte, el apoyo estadounidense sirvió para pagar los gastos del conflicto y funcionó de paliativo, pero evitó la adopción de medidas urgentes, como la reforma fiscal, que proveyeran al país de recursos propios para el cumplimiento de las obligaciones estatales. Resultados de tal combinación fueron: “el deterioro de la calidad y la cantidad de los servicios sociales, una marcada contracción de la infraestructura pública y un debilitamiento financiero e institucional del aparato estatal”⁵⁵. A ese panorama hay que añadir el debilitamiento de la tradicional élite agroexportadora en virtud de la reforma agraria impulsada por Napoleón Duarte y el trastorno sufrido por la estructura ocupacional a causa de los masivos flujos migratorios que afectaron al menos a un 20% de la población,

⁵⁴ Ibarra Chávez, H., *Brigada Rafael Arce Zablah ¡Misión Cumplida! Una historia contada por sus protagonistas*, Ediciones Expediente Abierto, México, 2009, pp. 199 y 203.

⁵⁵ Segovia, A., “La economía de guerra de los años ochenta”, en: *Ajuste hacia la paz. La política económica y la reconstrucción de posguerra en El Salvador*, James K. Boyce (coordinador), PNUD-Plaza y Valdés Editores, México, 1999, p. 74.

ocasionando el desplazamiento del campesinado a las ciudades y convirtiendo a las remesas familiares provenientes del exterior en una fuente protagónica de recursos a nivel nacional. Por todo ello, Segovia definió a El Salvador de la *segunda coyuntura de definición* como el *borrador de un nuevo país*⁵⁶.

4.2.1 La aristocracia financiera en el poder

En tales condiciones de crisis económica y política el arenero Alfredo Cristiani asumió el control del Ejecutivo en junio de 1989 (ver cuadro 3.5), con el desafío de lograr lo que la Democracia Cristiana no consiguió: poner punto final a la guerra y reactivar la economía. Sin embargo, los soportes con los que ARENA contó para emprender su primera gestión contrastan con el cuasi aislamiento político en el que fue quedando su antecesor, el PDC. En primer lugar, Cristiani obtuvo desde el principio el apoyo incondicional de un sector empresarial aún poderoso y determinante, beneficio del cual Duarte siempre careció. En segundo lugar, contó también con la mayoría parlamentaria, sin una oposición poderosa en la Asamblea Legislativa. En tercer lugar, la estabilidad política generada por la finalización del conflicto permitió administrar económicamente al país, proporcionó confianza a los inversionistas, provocó la reactivación de sectores deprimidos durante la guerra, liberó recursos antes destinados al gasto militar, incentivó el gasto público y favoreció la reactivación del comercio con Centroamérica. En cuarto lugar, el apoyo internacional a la implementación de los acuerdos y la legalización de la entrada de remesas —llevada a cabo durante esa administración— significaron el ingreso de ingentes cantidades de divisas que amortiguaron el creciente déficit fiscal y el impacto social ocasionado por la ejecución del nuevo modelo económico. Con todo, los niveles de pobreza continuaron siendo alarmantes⁵⁷.

Como miembro de la argolla empresarial más acaudalada del país, Cristiani representaba al sector de la burguesía que pugnaba por una dinamización de la

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ Segovia, A., “La actuación y las políticas macroeconómicas a partir de 1989”, *Ibid.*, pp. 77 y ss.

economía favorable a la creciente “financierización”, en detrimento de la agroexportación. Se trata del grupo al que Irene Lungo denomina *aristocracia financiera*⁵⁸, compuesto por una nueva generación de empresarios educados en el extranjero. En ese contexto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), organismo creado en la primera mitad de los ochenta e integrado por empresarios de ese mismo sector —Cristiani inclusive— jugó un papel de gran preponderancia, proveyendo de cuadros al gabinete entrante y diseñando el *Plan de Desarrollo Económico y Social* como programa del nuevo gobierno, que, “en síntesis, implica un conjunto de medidas de estabilización y ajuste estructural, una reforma importante del sistema comercial y tributario, así como un impulso general de la privatización y la liberalización económica”⁵⁹. Todo ello en función de “los tres ejes sobre los cuales debería operar la inserción de El Salvador a la economía internacional: el fortalecimiento del sector financiero, la cercanía del mercado estadounidense y el aprovechamiento de la mano de obra barata para producir bienes de consumo para el mercado externo”⁶⁰.

Como se mencionó en el apartado sobre el surgimiento de ARENA, FUSADES recibía financiamiento de la AID, además de estar vinculada por medio de sus intelectuales orgánicos a la Escuela de Chicago. No fue entonces de extrañar que tal entidad adoptara los lineamientos del Consenso de Washington (ver cita 91 del capítulo I) y las recomendaciones del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como fundamentos de la política económica que debía implementarse en El Salvador. De hecho, a partir del triunfo electoral de ARENA, el BM asumió las funciones hasta entonces desempeñadas por la AID en cuanto al redireccionamiento de la economía salvadoreña y la modernización de su empresariado.

Tal “modernización” consistió, básicamente, en poner la actividad económica al servicio de la productividad de la empresa privada. En función de ello se eliminaron las restricciones y controles para el funcionamiento del mercado; se fomentó la

⁵⁸ Lungo, I., *op. cit.*, p. 102 y ss.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 103.

⁶⁰ Pirker, K., *op. cit.*, p. 279.

acumulación de capital por medio de la privatización de bienes públicos y reducción del aparato estatal; se impulsó la exportación de productos no tradicionales (como el ajonjolí, el brócoli y el melón, entre otros) como respuesta ante la depreciación de la actividad agrícola producto de la guerra y del deterioro de precios a nivel internacional; en 1990 se adoptó un tipo de cambio fijo, medida destinada a terminar con el mercado negro y a preparar el terreno para la posterior dolarización de la economía; se redujeron los aranceles, se suavizaron las restricciones de las tasas de interés y se eliminaron los controles de precios de aproximadamente 200 productos; se llevó a cabo un programa de reforma fiscal que incluyó la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA); y se inició la reducción del Estado con la reforma de los ministerios vinculados al sector social, particularmente educación y salud, la venta de algunas propiedades estatales y la privatización de servicios públicos. “Sin embargo, el elemento central del programa de privatización era el sistema financiero. A fin de complementar la transferencia de bancos a manos privadas, se realizó una reforma financiera en cuyo marco el Banco Central se convirtió en una institución autónoma, se creó una bolsa de valores y se fortalecieron los mecanismos de supervisión y control”⁶¹.

Según Segovia, el programa de ajuste debía de ser implementado en dos fases, pero la ofensiva de 1989 impidió su puesta en marcha. Por eso el paquete de medidas empezó a impulsarse a partir de 1990. Aunque al final de la gestión de Cristiani los organismos financieros internacionales se mostraron satisfechos con el desempeño de la reforma económica en El Salvador y el gobierno de ARENA gritó a los cuatro vientos los buenos resultados reflejados en los índices macroeconómicos, algunos analistas no se mostraron tan optimistas. Segovia, por ejemplo, reconoció la disminución de la inflación como un punto a favor de dicha administración, pero la atribuyó al ingreso de remesas, la cooperación internacional y la decisión gubernamental de mantener el tipo de cambio fijo, aunque de hecho el precio del colón (nombre de la moneda salvadoreña antes de la dolarización), se hubiera elevado. Frente al aumento de inversiones privadas registrado durante ese período, el autor señaló el surgimiento de nuevas

⁶¹ Segovia, A., “La actuación...”, *op. cit.*, p. 88.

contradicciones, tales como: la exacerbada concentración de la riqueza en el sector financiero; el intento de fortalecer y diversificar las exportaciones al tiempo que se mantenía la sobrevaluación del colón; y la negativa de la empresa privada a desarrollar inversiones productivas, a causa de su tendencia a garantizar buenas ganancias con bajo nivel de riesgo⁶².

Se trató, en definitiva, de una administración cuya prioridad fue la juiciosa ejecución del proyecto neoliberal y la relegación de la política social, bajo la premisa de que el “crecimiento sostenido” terminaría “derramando” sus frutos sobre los pobres después. Cosa que, evidentemente, nunca sucedió, pues la erradicación de la pobreza exige una política decidida para contrarrestarla. Pero, además, numerosos estudios demuestran que la equidad es un requisito para el crecimiento y no una consecuencia de él. Así lo afirmó otro economista salvadoreño, Carlos Acevedo, en su análisis del problema del agro durante los primeros años post acuerdos. Aunque, siguiendo ese análisis, el sector agroindustrial dejó de ser el eje central de la economía salvadoreña a partir de los años ochenta, para mediados de los noventa continuaba teniendo una importancia capital en el abastecimiento de alimentos para el consumo interno, la producción de bienes de exportación, la absorción de mano de obra, la inversión en ‘capital natural’ y la dinamización de actividades económicas vinculadas a él. Consideraciones relativas a la mayor productividad de los minifundios que de los latifundios y a la falta de equidad en la tenencia de tierra como obstáculo para el crecimiento económico llevaron a Acevedo a defender la necesidad, no sólo de completar el programa de transferencia de tierras impulsado a partir de los acuerdos y destinado a favorecer a unas 70 mil personas, sino de llevar a cabo una reforma agraria completa, capaz de beneficiar a los más de 300 mil campesinos que para entonces se encontraban con poco o ningún acceso a la tierra⁶³.

⁶² *Ibid.*, p. 93.

⁶³ Acevedo, C., “El ajuste estructural, el sector agropecuario y el proceso de paz”, en *Ajuste hacia la paz...*, *op. cit.*, pp. 261-287. En su análisis sobre el impacto del neoliberalismo en Centroamérica, Pirker muestra la elevada tendencia a la agudización de la pobreza en general, pero sobre todo en los sectores rurales de los países de la región, *op. cit.*, pp. 306-307.

Mientras Segovia sintetizó el período 1989-1994 afirmando que “la economía salvadoreña ha pasado por un proceso de reestructuración sustancial: el mercado desempeña un papel mayor, el Estado tiene menos poder y el sector privado tiene más propiedades”⁶⁴, Acevedo advirtió sobre los peligros de dejar el agro a merced de las fuerzas del mercado: “ningún país industrializado del mundo somete los precios internos de los productos agrícolas a los dictados del mercado internacional. Por el contrario, los gobiernos de los países industrializados despliegan una amplia gama de intervenciones para apoyar los precios al productor y frenar las fluctuaciones de los precios internos. Una política de ese tipo está tan justificada en El Salvador como en Francia, Estados Unidos o Japón”⁶⁵. En ambos casos, los autores manifiestan su preocupación acerca de la continuidad de la pobreza y la ausencia de determinación de ARENA para combatirla⁶⁶.

Volviendo a la coyuntura que nos ocupa, para los mismos años en los que Segovia y Acevedo evaluaron la primera gestión de ARENA, el economista estadounidense James K. Boyce cuestionó el hecho de que las Instituciones Financieras Internacionales y el gobierno de Cristiani hubieran fijado como meta la estabilización macroeconómica —relativa a la política monetaria y fiscal— y el ajuste estructural corriente —es decir, la modificación de la estructura de la economía, incluidos los tamaños de los sectores público y privado— sin considerar que el contexto posbélico imponía condiciones especiales para la aplicación de cualquier modelo económico y requería recursos para la financiación a largo plazo de las nuevas instituciones democráticas, los programas de reinserción y las tareas de reconstrucción. Bajo el argumento de que sólo la separación entre la economía y la política conduciría al éxito de ambas, los nuevos tecnócratas procedieron en El Salvador como si la guerra no

⁶⁴ Segovia, A., “La actuación...”, *op. cit.*, p. 96.

⁶⁵ Acevedo, C., “El ajuste estructural...”, *op. cit.*, p. 271.

⁶⁶ Las propuestas de Alexander Segovia y Carlos Acevedo en pro de la vinculación de la reforma económica con la superación de la injusticia estructural en aras de lograr que la democratización política comprometiera a la esfera económica y la consolidación de la paz se cimentara sobre bases más profundas cobra mayor relevancia en este momento —15 años después de su formulación— dado que estos dos especialistas lideran el gabinete económico del actual presidente Mauricio Funes.

hubiera existido. Así, el Programa de Reconstrucción Nacional y el ajuste estructural se llevaron a cabo de forma simultánea, pero descoordinada. Más aún, el gobierno, alentado por las Instituciones Financieras Internacionales, subordinó la implementación de los Acuerdos de Paz a la estabilización económica⁶⁷.

Boyce cita una metáfora esclarecedora acerca del divorcio entre la intervención de las Naciones Unidas y la de las instituciones financieras: en un diagnóstico sobre los primeros años de la posguerra, Álvaro de Soto y Graciana Del Castillo describieron a El Salvador como un paciente en el quirófano “con el lado izquierdo y el lado derecho del cuerpo separados por una cortina y en cada lado le están haciendo una operación diferente”⁶⁸. Respecto de la “operación” concerniente al ámbito político, Elisabeth Wood cuestionó la tardanza que durante la administración de Cristiani padeció la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente en tres rubros: la depuración de la Fuerza Armada, el programa de transferencia de tierras y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC). Bien señaló Joyce (como lo señalan también Córdova Macías *et al*) que las negociaciones no terminaron con el cese de los disparos. Lo que ocurrió fue que se trasladaron a los nuevos escenarios abiertos por la firma de los acuerdos. Las tensiones entre las partes no sólo no mermaron, sino que en ocasiones se agudizaron hasta poner en peligro la totalidad del proceso, pues las diferencias conceptuales y la desconfianza mutua no se desvanecieron en Chapultepec.

Siguiendo a Wood, la elaboración del Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) se inició en 1991 y estuvo a cargo de la AID y un grupo de representantes de los países y organismos donantes denominado Grupo Consultivo. El PRN priorizaba la reinserción de ex combatientes del FMLN a la vida civil, la disminución de la pobreza absoluta y la promoción del bienestar humano, considerando tales metas como complementos del programa de ajuste y la inversión en infraestructura llevados a cabo por el gobierno. Frente al rechazo del FMLN a un plan al que consideraron vertical, no participativo, centralizado en las municipalidades, excesivamente preocupado por la reconstrucción

⁶⁷ Segovia, A., “Movilización de recursos internos”, *Ajuste hacia la paz...*, *op. cit.*, p. 161.

⁶⁸ Boyce, James K., *Ajuste hacia la paz...*, “Introducción”, *op. cit.*, pp. 23, 24.

de bienes inmuebles y limitado a un área geográfica reducida, el gobierno accedió a ampliar el acceso a recursos para favorecer a las ONG's y aumentó el número de beneficiarios. En marzo de 1992, Cristiani presentó ante el Grupo Consultivo las líneas estratégicas para continuar ejecutando el plan, ante lo cual la comunidad internacional prometió USD\$600 millones en concepto de ayuda a El Salvador. Para junio de ese año se habían recibido los primeros USD\$200 millones, casi en su totalidad provenientes de Estados Unidos.

Por esa misma fecha, la vaguedad del texto de los Acuerdos de Paz en lo relativo a la transferencia de tierras generó un serio revés al proceso. Además de manifestarse profundos desacuerdos sobre la extensión de las tierras que se transferirían, el número de beneficiarios y los métodos para el cambio de propietarios, “tampoco estaban en marcha los programas de capacitación y crédito prometidos, complementos necesarios de la transferencia de tierras”⁶⁹. La interrupción de la desmovilización de cuadros del FMLN a raíz de ello condujo a la ONU a mediar para superar el impasse. La propuesta emitida por dicha instancia se consideró como un anexo de los Acuerdos de Paz y estipuló como beneficiarios del reparto a: 7.500 ex combatientes del FMLN, 15.000 ex combatientes de la Fuerza Armada y 25.000 trabajadores de la tierra en usufructo de ella (o “tenedores”), así como la cantidad que debía recibir cada uno⁷⁰. “Cuando el programa fue dado por concluido, en 1999, habían sido entregadas 103,200 hectáreas –un 12 por ciento de las tierras cultivables- a 36,100 beneficiarios, de los cuales 27,481 eran desmovilizados del FMLN y tenedores en las zonas exconflictivas”⁷¹.

Otro momento crítico ocurrió meses después de la tercera reunión del Grupo Consultivo, convocada por el BM en abril de 1993. En junio de ese mismo año explotó

⁶⁹ Wood, E., “Los Acuerdos de Paz y la reconstrucción de posguerra”, en: *Ajuste hacia la paz...*, *op. cit.*, p. 121.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 122.

⁷¹ Pirker, K., *op. cit.*, p. 286. Las fuentes citadas por la autora en este apartado, “Ajuste y Acuerdos de paz”, aseguran que “en conjunto, las tierras redistribuidas por el PTT [Programa de Transferencia de Tierras] y la Reforma Agraria de los años 80 abarcaron para entonces aproximadamente un 40% de las tierras cultivables de El Salvador”.

en Managua un depósito clandestino de armas, misiles antiaéreos inclusive, propiedad del FMLN. El hecho puso a tambalear la implementación de los acuerdos, por cuanto evidenciaba la desconfianza de la ex insurgencia y ponía en tela de juicio el papel de la ONU. También este impasse fue superado.

Si bien, durante ese período se llevaron a cabo capacitaciones a ex combatientes de ambos bandos en temáticas agrícolas, empresariales y vocacionales, hechos como los obstáculos burocráticos dentro del programa de transferencia para el acceso a títulos de propiedad de la tierra y a créditos, la disminución del presupuesto propuesto por el FMLN para la reconstrucción, la pérdida de confianza de los donantes en la nueva Secretaría para la Reconstrucción Nacional (SRN) y la separación entre proyecto económico y recomposición del marco político, revelaron la displicencia de la administración Cristiani para cumplir con las metas planteadas en el PRN. Eso explica que, para 1995, los programas de reinserción hubieran recibido sólo la tercera parte de lo presupuestado⁷². En lo concerniente a las demoras en la depuración de la Fuerza Armada y las dificultades en la consolidación de la PNC —entre otras razones, a causa de la falta de cooperación de los militares en el traslado de infraestructura e información y de la intromisión de miembros del ejército en la nueva policía— Irene Lungo las interpreta como signos de oposición de los sectores reaccionarios frente a los Acuerdos de Paz y su implementación.

La primera administración del proyecto de derecha se caracteriza por ser un momento de tránsito hacia la redefinición del país, en el cual la negociación y la firma de los Acuerdos de Paz, por un lado, y la implementación de las medidas de ajuste estructural, por el otro, conforman los rasgos básicos del período. Por ello, no resulta extraño que en la consolidación de la *hegemonía neoliberal*, temáticas como democracia, paz o cambio económico se convierten en ejes centrales dentro de los discursos políticos de la derecha y como dispositivos ideológicos de legitimación⁷³.

La paz terminó por legitimar el triunfo electoral de ARENA, permitiéndole capitalizar para sí el discurso a favor de la democracia, la seguridad y la libertad que, junto con la apelación al nacionalismo, empezó a enarbolar cuando la *aristocracia*

⁷² *Ibid.*, p. 288.

⁷³ Lungo, I., *op. cit.*, p. 106.

financiera asumió el control del partido. Aunque en los hechos, el gobierno de Cristiani se desentendió de la implementación de los acuerdos y es bien sabido que el neoliberalismo se define por su antinacionalismo, en la retórica de su partido éste fue convertido en el “presidente de la paz”, símbolo de prosperidad y renovación para El Salvador. Así como el FMLN experimentó un cambio discursivo notable hacia finales de los ochenta, ARENA dio, a inicios de los noventa, palpables muestras de pragmatismo al sintetizar los rasgos de su identidad política ligada al anticomunismo radical con el nuevo espíritu conciliador que permeaba en Centroamérica y el mundo. De hecho, la consolidación de la *aristocracia financiera* en el poder político sobre la base de la concentración de la riqueza que la reforma económica le facilitó, con el consiguiente desplazamiento de la antigua élite agroexportadora de ambas esferas de influencia, se explica en virtud de su coincidencia con la consolidación de un Nuevo Orden Mundial que tuvo al neoliberalismo como eje fundamental.

El carácter formal de la democratización que se estaba llevando a cabo en El Salvador fue evidenciado por el fracaso del Foro de Concertación Económica y Social, espacio generado por los Acuerdos de Paz para posibilitar el diálogo entre representantes empresariales y sindicales (dos polos del sector productivo) en aras de definir conjuntamente el rumbo socioeconómico del país. Si bien los acuerdos “sentaron las bases para que el Estado respetara la integridad física de los activistas sindicales y campesinos, este respeto no significó que los representantes gubernamentales o empresariales los aceptaran como interlocutores y representantes legítimos de intereses sectoriales”⁷⁴. A este respecto, Pirker apunta dos señalamientos importantes. El primero compete a la comunidad internacional por su tolerancia hacia la negligencia del gobierno de Cristiani, el segundo, está dirigido al FMLN y su incapacidad para enfrentar la falta de voluntad gubernamental frente al cumplimiento de los acuerdos.

Interrogado sobre ese punto, Hato Hasbún aseveró:

⁷⁴ Pirker, K., *op. cit.*, p. 288.

Cuando se nos dice: ‘Uds. no tocaron las causas económicas en la negociación’, es cierto, no las tocamos. La gran prueba está en que uno de los ejes institucionales que conformamos para ir enfrentando esa situación, que era el Foro de Concertación Económica y Social, no pasaron ni tres meses cuando había desaparecido, no hubo posibilidad de integrar el Foro. Yo eso sí lo reconozco. Eso es el reto que tiene la sociedad salvadoreña, no solo el FMLN⁷⁵.

Pirker, por su parte, más que en términos de reto, valora esa ausencia en términos de derrota: “desde la perspectiva de las organizaciones populares, las limitaciones en la implementación de los Acuerdos de Paz significaron una derrota estratégica [...] las medidas instrumentadas no permitieron los cambios estructurales necesarios para resolver el problema de la desigualdad social en el país”⁷⁶.

A las dos décadas posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz Hasbún las denomina *transición neoliberal*, pues se caracterizan por la profundización de la reforma económica que hemos mencionado, impulsada por los tres gobiernos areneros que le sucedieron a Alfredo Cristiani: Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009). Elementos característicos de todo ese período, además de la continuación de la política económica y su repercusión en el agravamiento de la pobreza fueron: el estallido de la violencia social, la delincuencia común y el crimen organizado, cuya expresión más visible fue el auge de las pandillas juveniles o “maras”; la implementación de medidas represivas, como el Plan Mano Dura y el Plan Súper Mano Dura, para enfrentar el flagelo; la debilidad del aparato judicial como producto de la ineficiencia, la falta de recursos y en no pocos casos la subordinación del sector justicia hacia los intereses del partido ARENA; el incremento de las tasas migratorias, con el consiguiente aumento de remesas familiares fundamentales para la economía; el inusitado protagonismo de los medios de comunicación y la paulatina apertura de espacios de discusión y expresión de ideas divergentes; el aumento de los índices de abstencionismo y la separación entre

⁷⁵ Entrevista (México DF-San Salvador, 18/12/08).

⁷⁶ Pirker, K., *op. cit.*, p. 311.

partidos políticos y ciudadanía; y la continuidad de la polarización política en el nuevo escenario institucional, con ARENA y el FMLN como las principales fuerzas partidarias.

4.2.2 Del “presidente de la paz” al “defensor del Estado de Derecho”

En 1994 se llevaron a cabo las “elecciones del siglo”, bautizadas de ese modo por tratarse de los primeros comicios en los que participaría el FMLN y, además, porque en ese año coincidían —como sucede cada 15 años en El Salvador desde que se inauguró el actual sistema electoral— la elección presidencial con la legislativa y la municipal. La buena imagen de Cristiani como “presidente de la paz” y la cuidada y acaudalada campaña electoral impulsada por su partido le significaron réditos en todos los ámbitos en disputa a ARENA: Calderón Sol, quien hasta entonces había fungido como alcalde de San Salvador, se hizo de la presidencia de la República, la bancada legislativa de ARENA ascendió a 39 diputados y la gran mayoría de consejos municipales quedó bajo su control. Irene Lungo califica este resultado no sólo como el segundo triunfo electoral consecutivo de la nueva derecha, “sino, más importante aún, la primera victoria de la derecha empresarial dentro de unas elecciones democráticas en las cuales participan el Partido Demócrata Cristiano y el FMLN”, es decir, los dos proyectos contra los que el empresariado politizado se enfrentó durante la década de 1980⁷⁷.

Pese a que en la primera vuelta, celebrada en marzo, ARENA duplicó en votos a la coalición encabezada por el FMLN —los demás miembros eran los nuevos partidos formados por el ex FDR: Convergencia Democrática (CD) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)—, no alcanzó el 50% de los votos. Por eso fue necesario llevar a cabo una segunda vuelta, en abril, en la que el partido de derecha obtuvo 818.246 votos (equivalentes al 68% del total), mientras la colación de izquierda alcanzó 378.980 (es decir, el 31,65% de los votos emitidos).

⁷⁷ Lungo, I., *op. cit.*, p. 122.

Cuadro 4.3. Resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1994. Elaboración propia⁷⁸.

Partido	Votos obtenidos	%
ARENA	641.108	49,03
FMLN/CD/MNR	325.582	24,9
PDC	214.277	16,39
PCN	70.504	5,39
MU	31.501	2,41
MSN	13,841	1,06
MAC	10.813	0,83
TOTAL	1.307.627	100

Cuadro 4.4 Resultado de las elecciones legislativas de 1994. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea	%
ARENA	605.775	39	45
FMLN	287.811	21	21,4
PDC	240.451	18	17,9
PCN	83.520	4	6,2
OTROS	127.720	2	9,5
TOTAL	1.345.277	84	100

Rasgos distintivos del segundo período presidencial de ARENA fueron: los reacomodos, rupturas y divisiones internas experimentadas por ambos partidos mayoritarios tras la celebración de los comicios; la culminación del proceso de implementación de los Acuerdos de Paz por parte del nuevo presidente a quien incluso sus opositores caracterizaron como abierto, conciliador y políticamente hábil; la ola de protestas desatada por grupos de ex combatientes de ambos bandos organizados en torno de demandas relativas a su exclusión de los programas de reinserción; y la privatización de las telecomunicaciones, los ingenios azucareros, el sistema de trámites de tránsito y el sistema de pensiones. Uno de los hechos más significativo de esta gestión fue que El Salvador:

Después de haberse posicionado como el segundo país con mayores índices de crecimiento económico durante el primer quinquenio de los noventa, pasa al décimo tercer lugar entre las 19 economías latinoamericanas. Se trata de la desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía salvadoreña, que no deriva en una crisis aguda

⁷⁸ Datos provenientes del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, obtenidos en: “El Salvador. Resultados Electorales (1994-2006), Observatorio de Partidos Políticos de América Latina (OPAL), Universidad de Salamanca: <http://americo.usal.es/oir/Opal/elecciones/EleccionesElSalvador2006.pdf> Mientras no se indique otra fuente, los datos presentados en los cuadros de este apartado proceden de esta misma fuente.

dentro del sistema económico durante este período, lo cual se vincula a la continuidad del papel de las remesas familiares como sostén de la economía salvadoreña a lo largo de toda la posguerra⁷⁹.

Que el proceso de pauperización se hubiera mantenido a raya durante los noventa, década en la que el ajuste estructural fue implementado en toda Centroamérica, no se explica en virtud de la creación de empleo formal, sino de “la diversificación de las estrategias de los hogares pobres para incrementar sus fuentes de ingresos, entre ellas la incorporación de más miembros, especialmente de las mujeres, al mercado laboral y la emigración”⁸⁰. Pero ni el desaceleramiento económico ni las divisiones que empezaron a manifestarse en ARENA impidieron que el partido se mantuviera cohesionado y continuara adelante con su proyecto hegemónico. El arribo de Alfredo Cristiani a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) —instancia que centraliza el mando del partido— significó la reafirmación del núcleo financiero sobre los grupos conservadores que empezaban a mostrarse insatisfechos por el rumbo que el instituto político le estaba dando al país.

Sobre el FMLN, en cambio, recayó el peso de la derrota electoral. Las diferencias ideológicas que, en términos de Ricardo Ribera, habían constituido el “pecado original” de la alianza insurgente, llevaron a la separación definitiva de dos de las organizaciones que la habían constituido. El ERP y la RN anunciaron su salida del FMLN en diciembre de 1995. Cabe señalar que buena parte de las bases de ambas organizaciones permaneció en el FMLN, mientras que otro tanto manifestó su descontento ante esas pugnas de poder retirándose del activismo político. La escisión del ERP y la RN decantó en la conformación de un nuevo partido en 1995, el Partido Demócrata (PD), de efímera existencia. Este desprendimiento contribuyó a hacer más grande la brecha entre el FMLN y una parte del movimiento popular, porque gran parte de las organizaciones vinculadas al ERP y la RN terminaron por abandonar la estructura partidaria o sufrir, a su vez, escisiones internas. “De esta manera, la ruptura de la alianza político-militar

⁷⁹ Lungo, I., *op. cit.*, p. 119.

⁸⁰ Pirker, K., *op. cit.*, p. 305.

[entre el FMLN y el movimiento popular], que se dio con la inserción en la institucionalidad democrática, indujo la dispersión de las organizaciones populares, lo cual evidenció no sólo la fragilidad de las alianzas sectoriales, conformadas durante la guerra, sino también el debilitamiento de las bases sociales organizadas del FMLN”⁸¹.

Ejemplo claro de esto fue la crisis que envolvió al movimiento de Derechos Humanos durante la posguerra, cuando la inmersión del FMLN en la lógica electoral lo llevó a tomar distancia de reivindicaciones propias de la izquierda, muy sentidas por ciertos sectores de la militancia, como las relacionadas con el esclarecimiento de los crímenes de guerra. Sobre esto Ralph Sprenkels, académico holandés y ex militante de Derechos Humanos en El Salvador, señala:

La agenda del movimiento de Derechos Humanos, muy influenciada por el FMLN, muy cercana al FMLN siempre, como una especie de doble militancia, con un discurso de Derechos Humanos, pero una militancia política con el Frente, entra en crisis en el momento en que el Frente pierde el interés por el tema de la justicia. Tal vez previo al Informe de la Comisión de la Verdad, pero queda más manifiesto a partir de la publicación de la Comisión de la Verdad. Queda claro para los cuadros medios y los dirigentes del Frente que el costo político y el costo jurídico de seguir con una demanda a favor de esclarecimiento y justicia para los culpables de violaciones de Derechos Humanos iba a ser muy alto, porque se iban a ir a la cárcel varios del Frente, iban a estar abogando por su propio encarcelamiento, porque salen señalados, la Comandancia General completa. Porque la Comandancia General completa, como FMLN, tomó responsabilidad por asesinatos que no tienen ninguna justificación jurídica. El asesinato de los alcaldes y otros casos. Si ahí se hace justicia es igual que las desapariciones de los Escuadrones de la Muerte. No hay vuelta de hoja. Si se hace un proceso de justicia como debe ser, los responsables de esos actos van a la cárcel, los que dieron las órdenes van a la cárcel y las órdenes las dieron los de la Comandancia. Entonces entra en crisis la doble militancia. Yo era miembro de ese movimiento de Derechos Humanos en ese momento. Incluso participé en reuniones entre dirigentes del Frente y dirigentes del movimiento de Derechos Humanos para ver ‘qué vamos a hacer ahora, después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad’ y comienzan como a patinar: ‘somos del Frente, entonces debemos mantenernos quietos’, dicen algunos, otros dicen ‘no, pero hay que seguir con el tema de pedir justicia’. Y todas las organizaciones hacen crisis por esa contradicción. La posición dominante en los altos niveles del FMLN era que había que pasar la página⁸².

⁸¹ Pirker, K., *op. cit.*, p. 333.

⁸² Entrevista, San Salvador (24/03/09). Las violaciones contra los Derechos Humanos cometidas por el FMLN están documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad, literal E., Capítulo IV: “Violencia contra opositores por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, *op. cit.*, pp. 156-184. Las declaraciones de Ralph Sprenkels que hemos recogido aquí abren una veta de análisis de la historia reciente de El Salvador que apenas empieza a ser explorada por los investigadores y que remite al “desencanto”

Martín Álvarez sintetiza las diferencias entre el grupo formado por las dos ex guerrillas disidentes, de orientación socialdemócrata, y las agrupaciones que permanecieron dentro del FMLN defendiendo la vigencia del proyecto socialista (las FPL, el PCS y el PRTC), aludiendo a la misma diferenciación esbozada por Hato Hasbún: mientras que las cúpulas del ERP y la RN asumieron los Acuerdos de Paz como el final del esfuerzo revolucionario, las demás agrupaciones sostenían que los acuerdos fueron sólo el inicio de la transformación estructural por la que debía atravesar El Salvador⁸³. De cara a los comicios de 1997, la crisis se resolvió con la disolución formal de las FPL, el PCS y el PRTC en una única estructura partidaria, previo acuerdo sobre la permisividad hacia la existencia de diferentes tendencias ideológicas. “El FMLN debería convertirse en un partido de nuevo tipo: pluralista, con mecanismos para asegurar la democracia interna, y comprometido con la construcción de un proyecto socialista democrático”⁸⁴. Con todo y el descrédito que le significó al FMLN la ruptura con el ERP y la RN, pues evidenció su dificultad para llevar adelante una reestructuración mediada por la capacidad para lograr consensos en su interior, las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1997 registraron un ascenso en los votos a su favor. La coalición FMLN-CD llevó a su candidato Héctor Silva por primera vez al mando de la alcaldía de San Salvador.

Tales comicios reafirmaron la tendencia hacia la estabilización de la polarización política en El Salvador, ahora concentrada en torno a dos polos: ARENA y el FMLN. Córdova Macías *et al* afirman que del número aproximado de diez partidos que compitieron en cada ronda electoral durante el período 1994-2004, sólo cinco

posrevolucionario, sufrido sobre todo por algunos ex cuadros efemelenistas. Exponentes de tal desencanto son, por ejemplo, los escritores salvadoreños Berne Ayalá y Horacio Castellanos Moya. Respecto del desinterés del FMLN por el tema de justicia durante la posguerra, Sprenkels denuncia que sólo catorce años después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 2006, Shafick Hándal, alto dirigente del FMLN, solicitó públicamente la derogación de la Ley de Amnistía. Es probable que el pragmatismo mostrado por el FMLN durante la posguerra y expresado en hechos como los relatados por Pirker y Sprenkels, hayan repercutido en los altos índices de abstencionismo electoral que caracterizaron el período, dado que buena parte de la población politizada dejó de creer en el FMLN como alternativa de gobierno y esperanza de cambio.

⁸³ Martín Álvarez, *op. cit.*, pp. 268 y ss.

⁸⁴ Pirker, K., *op. cit.*, p. 318.

obtuvieron curules en la Asamblea Legislativa y constituyeron una oferta partidaria estable: ARENA, FMLN, PDC, PCN y CDU/CD. De acuerdo con los autores, los dos primeros captaron casi el 70% del total de votos válidos en 1997, cifra que experimentó incrementos considerables en los comicios siguientes (por ejemplo: 81% en 1999 y 93.39% en 2004)⁸⁵. Este fenómeno otorgó a las tres fuerzas minoritarias poder de decisión en materia de balances parlamentarios y apoyo o rechazo hacia las iniciativas del Ejecutivo.

Cuadro 4.5: Resultado de las elecciones legislativas de 1997. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea	%
ARENA	396.301	28	35,4
FMLN	369.709	27	33
PCN	97.362	11	8,7
PDC	93.645	7	8,4
CDU/CD	39.145	2	3,5
OTROS	123.441	9	11
TOTAL	1.119.603	84	100

Irregularidades y vacíos dentro del sistema electoral permitieron que, aún cuando el bajo número de votos debió conducir a la cancelación de los partidos pequeños en más de una ocasión —como de hecho sucedió en el caso de varias instituciones partidarias que emergieron durante la posguerra y fueron eliminadas—, los recursos interpuestos por los pequeños “viejos” partidos ante la CSJ los habilitaran para permanecer dentro del aparataje partidario. En este orden de cosas, no se puede dejar de señalar que el PCN y el PDC se convirtieron predominantemente en aliados estratégicos de ARENA en la Asamblea Legislativa, a cambio de espacios de poder en órganos como el TSE y la Corte de Cuentas.

En 1996, Calderón Sol dio por clausurados los Acuerdos de Paz, con lo cual se terminó de cerrar el espacio para la discusión respecto del rumbo socioeconómico que debía tomar El Salvador. La separación entre proceso político y proyecto económico que caracterizó a la administración de Cristiani se ratificó con la formalización del punto

⁸⁵ Ver: Córdova Macías, *et al*, “Democracia representativa”, *op cit.*, pp. 156-194.

final de los acuerdos, durante una gestión en la que la permanente reivindicación del Estado de Derecho fue un componente central del discurso presidencial. En su análisis del plan de gobierno de ARENA para 1994-1999, Irene Lungo señala la coexistencia discursiva del concepto de libertad con el de democracia individual, “de lo que deriva una noción fundamentada en elementos legales y no en transformar las relaciones autoritarias y jerárquicas que han caracterizado históricamente a la sociedad salvadoreña”⁸⁶. Lungo identifica esta inédita preocupación arenera por el Estado de Derecho con la primera reformulación al Consenso de Washington y la implementación de correctivos tendientes a fortalecer la calidad de las democracias y las instituciones político-jurídicas, de cara a la puesta en marcha de reformas económicas de “segunda generación”. “Incluso las instituciones de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, reconocen una serie de ‘fallas’ que deben ser corregidas mediante una serie de reformas institucionales, sin transformar el modelo de desarrollo”⁸⁷.

A la nueva apuesta por lo jurídico e institucional en el discurso de ARENA se sumó la defensa de las privatizaciones como medida necesaria para el progreso económico, de lo cual derivaría el bienestar social. El modelo neoliberal fue asumido como la única alternativa de crecimiento económico para el país. Por otra parte, la ola delincinencial que abatía a la población, hasta convertirse a finales de la década de los noventa en una preocupación aún mayor que el desempleo o la pobreza⁸⁸, encontró una respuesta represiva por parte de la PNC, además de convertirse en pretexto para criminalizar la protesta y obstaculizar espacios de resistencia contra la política económica⁸⁹.

⁸⁶ Lungo, I., *op. cit.*, p. 124.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 128.

⁸⁸ Así lo señalan diversos estudios realizados por José Miguel Cruz. En 2002 este especialista en el tema de la violencia señaló a El Salvador como el cuarto país más violento de América Latina después de Colombia, Guatemala y Honduras. Ver: Cruz., J. M. y Luis Armando González, “Magnitud de la violencia en El Salvador” en: Cardenal, R. y Luis Armando González, *El Salvador. La transición y sus problemas*, UCA Editores, San Salvador, 2002, pp. 208-225.

⁸⁹ Ver: Pirker, K., “Otro cierre del espacio político: Exclusión y criminalización de la protesta social”, *op. cit.*, pp. 290-295.

Después de 1997, el FMLN experimentó una nueva crisis, esta vez protagonizada por dos tendencias: la revolucionaria-socialista (“ortodoxos”) versus la tendencia renovadora (“renovadores”). Shafick Handal, Secretario General del Partido Comunista, y Salvador Sánchez Cerén, dirigente de las FPL, encabezaban la primera tendencia, la cual “sostuvo la necesidad de conservar el carácter revolucionario del FMLN, mostrarse opuesto a las privatizaciones de los servicios públicos, apoyar a los movimientos sociales y defender un proyecto de Estado benefactor y regulador del mercado”⁹⁰. Facundo Guardado, comandante de las FPL, lideraba a la tendencia renovadora, cuyo planteamiento era “que, para convertir el FMLN en ‘una opción de poder’, había que abrirlo hacia otras fuerzas políticas, sobre todo al empresariado, modernizar el discurso político del FMLN y adoptar una postura de centro, en vez de izquierda. En las elecciones presidenciales de 1999, la tendencia ortodoxa apoyó sólo parcialmente la campaña electoral de Facundo Guardado, lo cual no sólo contribuyó a la agudización de la crisis interna sino puso de manifiesto la poca unidad institucional del partido”⁹¹. La derrota electoral de Guardado posibilitó el retorno de la tendencia revolucionaria-socialista al control del partido y en 2001 él y otros “renovadores” fueron expulsados del FMLN, acusados de desacatar decisiones partidistas dentro de la Asamblea Legislativa. Dicha expulsión reafirmó la consolidación del proyecto fundacional del FMLN y clausuró la posibilidad de la coexistencia de tendencias divergentes. En adelante, la corriente socialista detentaría la hegemonía del partido.

Diversos analistas políticos del proceso salvadoreño interpretaron el segundo revés del FMLN en las elecciones presidenciales como consecuencia de su constante conflictividad interna. El dejar el Ejecutivo por tercera vez consecutiva en manos de ARENA, más que una muestra de aprobación hacia la política neoliberal y hacia las medidas represivas con las que se estaba procurando combatir el problema delincriminal sin buenos resultados, habría sido una manifestación de desconfianza y

⁹⁰ *Ibid.*, p. 318.

⁹¹ *Idem.*

rechazo frente a una opción de izquierda a la que se percibía como inmadura e incapaz de conducir los destinos del país⁹².

Cuadro 4.6: Resultado de las elecciones presidenciales de 1999. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	%
ARENA	614.268	51,96
FMLN	343.472	29,05
CDU/PSD	88.640	7,5
PDC	67.207	5,68
PCN	45.140	3,82
LIDER	19.269	1,63
PUNTO	4.571	0,36
TOTAL	1.182.567	100

Los nulos resultados de los gobiernos areneros en materia de combate a la pobreza y al crimen fueron contrarrestados con campañas electorales millonarias, destinadas a reforzar la polarización política, desacreditando al FMLN e inculcando miedo hacia la posibilidad de que éste se hiciera del control del aparato estatal. El discurso proselitista de ARENA se encargó de mostrar al FMLN como responsable de la violencia, el extremismo, la destrucción y el caos de la guerra, mientras que el partido de derecha figuraba como moderado, respetuoso de la legalidad e impulsador del progreso.

4.2.3 Sai Baba en El Salvador

Pese a que para 1999 el modelo neoliberal estaba mostrando sus profundas deficiencias en los índices de rendimiento económico en América Latina, Francisco Flores, presidente electo ese año, se empeñó en continuar con el proceso de consolidación del proyecto económico emprendido por Cristiani. En un análisis del desempeño del modelo económico hacia finales de los noventa, Acevedo señaló que la

⁹² Ver, por ejemplo: “El FMLN ante su fracaso electoral” o “Crisis poselectoral en el FMLN”, *Proceso*, Semanario de análisis coyuntural del Centro de Documentación y Apoyo a la Investigación CIDAI, Nos. 846 y 847, UCA Editores, San Salvador, ediciones de: marzo 10 y marzo 17, 1999. Disponibles en:

<http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc846.html>
<http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc847.html>

falencia relativa a la debilidad del aparato productivo doméstico y su poca competitividad en los mercados internacionales no fue corregida.

La dolarización de la economía a partir del año 2001 y la negociación y firma de una serie de Tratados de Libre Comercio con República Dominicana, Chile y México [...] se enmarcan en un contexto internacional adverso caracterizado por la crisis asiática — crisis financiera de alcance mundial— y la caída en los precios internacionales del café, lo cual, aunado a los frágiles equilibrios macroeconómicos en el país, deriva en un panorama de estancamiento a nivel nacional. Eso se expresa en un sector externo incapaz de sobreponerse a precios internacionales adversos, en la dependencia extrema de las remesas como sustento de la economía y en las condiciones de vida de la mayor parte de los salvadoreños que continúan siendo de las más bajas de América Latina⁹³.

El estancamiento económico sirvió como detonante de la crisis hegemónica que empezó a cobrar fuerza al interior del entonces partido oficial. La argolla financiera recibió fuertes cuestionamientos por parte del sector “nacionalista” y conservador. La manifestación más visible del descontento del empresariado se dio con la separación entre la influyente agremiación de empresarios ANEP y el presidente Flores. Lungo describe la gestión de éste último como una etapa de transición en la que el sector financiero que hasta entonces había detentado el poder dentro del partido y había defendido y practicado la transnacionalización de capitales, empieza a verse desplazado por un grupo emergente de empresarios de menor rango, con capital invertido en el país⁹⁴.

Se trató de una administración difícil: el modelo neoliberal cumplió diez años de haber iniciado su puesta en marcha en El Salvador, en medio de serios cuestionamientos en el ámbito latinoamericano y mundial; se registró un notable estallido de la movilización y la protesta social; la violencia social se recrudeció; y en 2001 se sucedieron dos terremotos (enero y febrero) que, además de dejar miles de damnificados sin vivienda y cuantiosos daños en infraestructura, evidenciaron la precariedad social que (como suele ocurrir ante estas contingencias en territorio salvadoreño) vulneró en extremo a los afectados. En definitiva, el balance de una

⁹³ Acevedo, C., citado en Lungo, I., *op. cit.*, p. 129.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 133.

década de haberse firmado los Acuerdos de Paz empezaba a ser favorable en términos formales, pero desfavorable en cuanto a respuestas concretas para la solución de los problemas estructurales y acuciantes para la mayoría.

Dos fenómenos evidenciaron el agotamiento que empezó a experimentar el proyecto arenero: los éxitos electorales del FMLN en los comicios legislativos y municipales de 2000 y 2003, y la movilización de los trabajadores de salud que impidió la privatización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Lejos de adoptar una posición conciliadora, el gobierno de ARENA se negó a negociar con los líderes del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISS) y el Colegio Médico, entre otros sectores que se sumaron a la huelga.

La resistencia en contra de la privatización del sistema de salud llevó dos veces a huelgas prolongadas [...], de septiembre 1999 a principios de marzo 2000 y de septiembre 2002 a febrero 2003. Las huelgas fueron declaradas ilegales con lo cual las autoridades del seguro social obtuvieron la justificación para retener los salarios de los trabajadores y médicos. Además se dictaron órdenes de aprehensión en contra de activistas y dirigentes sindicales y en varias manifestaciones intervino la policía con golpes y gas lacrimógeno que afectó a los manifestantes y la población cercana. Algunas clínicas y centros de trabajo del Seguro Social fueron “militarizados”, es decir, policías y militares entraron en los centros de trabajo para impedir con amenazas y represión en contra de los sindicalistas que continuara la huelga⁹⁵.

La inusitada capacidad organizativa y movilizadora mostrada por el sector salud —rubro que no se caracterizó por participar en las luchas sociales de las décadas precedentes— ofreció al FMLN la oportunidad de aproximarse nuevamente al movimiento popular y encontrar un eje de articulación común en torno del rechazo a la política privatizadora. Rechazo al que se sumaron otros sectores sociales, como lo indica el señalamiento de Ribera, esgrimido al calor de los acontecimientos: “La amarga experiencia de las privatizaciones ya efectuadas en el país explican por qué, pese a verse coyunturalmente afectado, el público tiende a comprender y a respaldar a los

⁹⁵ Pirker, K., *op. cit.*, p. 295.

médicos y sindicalistas en huelga”⁹⁶. La lucha contra la privatización de la salud se convirtió en escenario de la polarización política al encontrar su correlato en los poderes estatales. La facción efemelenista en la Asamblea Legislativa pugnó por la aprobación de la ley anti privatización propuesta por los huelguistas, al tiempo que el presidente Flores insistió en vetar la iniciativa. Expresión del nuevo acercamiento entre el FMLN y el sector salud movilizado fue el nombramiento de uno de los líderes de la huelga, el ex director del Colegio Médico Guillermo Mata Bennett, como candidato a vicepresidente por el FMLN en las elecciones de 2004.

Además del pulso sostenido contra el FMLN y los huelguistas del ISSS como nota constitutiva de la administración Flores, durante esta gestión se endurecieron las medidas destinadas a encarar el creciente problema de delincuencia y crimen organizado. En ese contexto, la PNC implementó el “Plan Mano Dura”, el cual recibió respaldo institucional en 2003, con la aprobación de la Ley Antimaras en la Asamblea Legislativa. Esta ley incluyó una serie de reformas al código penal y procesal penal orientadas a establecer un marco legal más rígido en el combate a la delincuencia juvenil y posibilitó el fortalecimiento del aparato represivo del Estado con la participación de militares en tareas de seguridad, algo inédito desde la firma de los Acuerdos de Paz⁹⁷.

Lungo ubica en 1999-2004 el período en el cual el proyecto impulsado por ARENA empezó a mostrar más nítidamente sus fisuras. “Se asiste al aumento de la conflictividad social; a la debilidad en los mecanismos de diálogo y negociación hacia el interior de la propia derecha, y entre ésta y otros sectores de la comunidad nacional; y

⁹⁶ Ribera, R., “Esa mercancía llamada salud”, artículo de opinión recogido en el libro inédito *Tiempos de transición. El Salvador entre la guerra y la paz*, San Salvador, 2008, pp. 223-225.

⁹⁷ Lungo, I., *op. cit.*, p. 136. La gravedad alcanzada por la situación de la violencia delincual y las pandillas juveniles ha exhortado a todo tipo de análisis, debates e investigaciones acerca del fenómeno. Entre la abundante bibliografía que se encuentra al respecto, puede verse: *El Salvador. Mapa de la violencia y su referencia histórica*, Centro de Monitoreo y Evaluación de la Violencia desde la Perspectiva Ciudadana, Open Society Institut (OSI)/Catholic Relief Service (CRS), San Salvador, 2008. Disponible en:

<http://www.insumisos.com/Mapa%20de%20violencia%20en%20El%20Salvador.pdf>

Ver también: Cruz, José Miguel, *Maras y pandillas en Centroamérica. Las respuestas de la sociedad civil organizada, Volumen IV*, UCA Editores, San Salvador, 2006; Cruz, José Miguel, *Maras y pandillas en Centroamérica. Pandillas y capital social, Volumen II*, UCA Editores, San Salvador, 2004; Cruz, José Miguel; Michelle Melara Minero y Edgardo Amaya, *Armas de fuego y violencia*, PNUD, San Salvador, 2004.

al fortalecimiento de los mecanismos de control y coerción social, entre otros”⁹⁸. La creciente captación de votos por parte del FMLN le permitieron al partido de izquierda conservar el control sobre la alcaldía capitalina y convertirse en la primera fuerza electoral del país al adquirir el derecho a gobernar los consejos municipales más poblados y lograr más escaños legislativos que ARENA. La abstención y el “voto de castigo” hacia el partido gobernante sin duda abonaron al triunfo electoral efemelenista en los primeros comicios de la década de los años 2000.

Pese a todo ello, los discursos del filósofo y seguidor de Sai Baba⁹⁹, Francisco Flores, a lo largo del período eran tan grandilocuentes que parecían referirse a una realidad ajena a la salvadoreña. Flores insistía en la estabilidad macroeconómica como una gran virtud, al margen de su falta de repercusión en la mejora en las condiciones de vida de la población. El semanario de la UCA *Proceso* comentaba al respecto:

Lo peor es que esta forma distorsionada de ver las cosas no sólo ha sido sostenida neciamente, sino que importantes decisiones han sido tomadas a partir de ella, con los subsiguientes efectos negativos sobre los sectores más vulnerables del país. Demás está decir que este empecinamiento en ver la realidad de una forma que va en contra de la evidencia y la razón [...] sino que tiene que ver con intereses que obligan a cerrar los ojos y a rechazar aquello que pone en jaque los compromisos adquiridos. De un gobierno ciego ante la realidad, no queda más que esperar tropiezos permanentes. El gobierno de Flores tropieza una y otra vez con la misma piedra, es decir, con la realidad de pobreza y marginalidad crecientes en los sectores populares. Sin embargo, las decisiones económicas —tributarias, salariales, monetarias, de privatización y de dolarización— no cambian de signo¹⁰⁰.

Cuadro 4.7: Resultado de las elecciones legislativas de 2000. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenido	Escaños en la Asamblea	%
ARENA	436.169	29	36,1
FMLN	426.289	31	35,2
PCN	106.802	14	8,8
PDC	87.074	5	7,2
CDU/CD	65.070	3	5,4
OTROS	88.865	2	7,3
TOTAL	1.210.269	84	100

⁹⁸ *Ibid.*, p. 137.

⁹⁹ Místico y líder espiritual de la India.

¹⁰⁰ Editorial, *Proceso*, Semanario de análisis coyuntural del Centro de Documentación y Apoyo a la Investigación CIDAI, No 981, UCA Editores, San Salvador, diciembre 19, 2001.

Necesario es señalar que fueron las últimas elecciones de los noventa y las de 2000 y 2003 las que experimentaron mayores niveles de abstencionismo durante la posguerra y que el TSE continuaba a esas alturas de la transición política mostrando serias deficiencias. En ello insiste el editorial del Semanario *Proceso* dedicado a comentar los resultados de las elecciones legislativas y municipales de 2000. Según ese texto, ni el revés de ARENA ni los buenos resultados del FMLN

deben hacer olvidar que la mayoría de la población salvadoreña en edad de votar no votó por ninguno de estos dos partidos. Su mayor desafío está en demostrarle que gobiernan para ella, [...] que las elecciones son un instrumento valioso para producir cambios, porque éstos ocurren en realidad. Sin ir más lejos, este proceso de cambio podría comenzar por la reforma radical del sistema electoral: es evidente que el padrón actual es obsoleto, que el mecanismo para emitir, vigilar y contar el voto es primitivo y que el Tribunal Supremo Electoral no tiene capacidad para controlar el proceso. Las irregularidades –confusión en el padrón, doble voto, compra de votos, sustitución de electores, material inadecuado, falta de información en un sistema complicado, falta de respeto al elector, etc.— se han vuelto a repetir, pero esta vez de una forma más general¹⁰¹.

Córdova Macías *et al* muestran cómo, durante esos cuatro comicios, sólo alrededor del 35.5% del electorado asistió a las urnas. Pero más que encontrar en los errores técnicos del TSE la razón principal de esa renuencia a emitir el sufragio, los autores la identifican con la falta de representatividad de los partidos y el ensanchamiento de la distancia entre el sistema de partidos y el grueso de la población en edad de votar. La persistencia de los problemas endémicos del país, la ausencia de una reestructuración interna en cada partido, los escándalos de corrupción protagonizados por ciertos funcionarios gubernamentales (entre los que destacan fraudes y malversación de fondos en las empresas estatales de servicios públicos, o a raíz de la privatización de las mismas¹⁰²); los límites impuestos por la legislación electoral (que, por ejemplo, define a los partidos políticos como el único medio de representación posible en El Salvador); y las irregularidades y anacronismos en el

¹⁰¹ “Elección sin representatividad”, *Proceso*, Semanario de análisis coyuntural del Centro de Documentación y Apoyo a la Investigación CIDAI, No 894, UCA Editores, San Salvador, marzo 15, 2000. Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc894.html>

¹⁰² Ver: Villalona, C. “La corrupción en El Salvador”. Disponible en: <http://www.lacorrupcionarenera.com/>

proceso electoral (como la desactualización del padrón, las demoras en la emisión del Documento Único de Identidad DUI o la no implementación del voto domiciliario) contribuyeron a mantener la brecha entre representantes y representados y generaron desconfianza hacia las instituciones partidarias y hacia el sistema electoral en general. Por eso “el contexto de elecciones libres y competitivas, al parecer no resultó suficiente para motivar una masiva participación ciudadana en el período”¹⁰³.

Cuadro 4.8: Resultado de las elecciones legislativas de 2003. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea	%
FMLN	475.130	31	34
ARENA	446.279	27	31,9
PCN	181.167	16	13
PDC	101.854	4	7,3
CDU/CD	89.090	5	6,4
OTROS	105.206	1	7,5
TOTAL	1.398.726	84	100

La virulencia con la que ARENA encaró las elecciones presidenciales de 2004 evidenció el temor experimentado por la gran empresa de perder el control del Ejecutivo. Lungo interpreta la apelación al anticomunismo de la que se valió la campaña electoral del partido en el gobierno en esta coyuntura como manifestación del vacío en la construcción ideológica, ante la pérdida de la capacidad para interpelar a amplios sectores poblacionales.

En ese sentido, se trata de una retórica anticomunista que busca tanto articular durante la campaña a los sectores más conservadores de la sociedad, como evadir la discusión en torno a las debilidades de un modelo de desarrollo que ha entrado en crisis. [Además de atemorizar a los segmentos incautos y carentes de criterio político dentro del electorado]. La capacidad interpelatoria del anticomunismo se relaciona con la persistencia de valores residuales de corte autoritario en la sociedad salvadoreña. En efecto, el comunismo no representa ya un peligro real, se trata más bien de un tema que articula elementos relacionados con la seguridad, que hacen eco en una sociedad plagada de inseguridades¹⁰⁴.

¹⁰³ Córdova Macías, R., *et al*, *op. cit.*, p. 165.

¹⁰⁴ Lungo, I., *op. cit.*, p. 141.

Cabe destacar el papel jugado por los medios de comunicación en la propagación del discurso electoral arenero. Sin duda uno de los cambios más notables experimentados por El Salvador a partir de la firma de los Acuerdos de Paz fue la paulatina ampliación de los espacios mediáticos de discusión política y la inclusión de las diversas figuras y tendencias ideológicas en programas de entrevistas, columnas de opinión, foros, etc. A ello aluden Córdova Macías *et al* en su apartado sobre participación y espacio público. Como contraparte de ello, los autores señalan como una de las falencias de la consolidación democrática la falta de canales institucionales que vehiculen las demandas de la población hacia las esferas de poder y de espacios que permitan y promuevan la participación ciudadana. El fracaso del Foro de Concertación Económica y Social al que hemos aludido antes es quizá la más palmaria muestra de esto a lo que Kristina Pirker denomina “cierre del espacio político”. También se ha mencionado que la ruptura de la alianza político-militar entre el FMLN y el movimiento popular y el ingreso del primero a la arena electoral repercutió en la dispersión de las organizaciones sociales, en su pérdida de capacidad de convocatoria y del ímpetu antisistémico que las caracterizó durante los años setenta. Así, la etapa posbélica vio emerger movimientos sociales de nuevo tipo, entre los cuales destacan las protestas de los ex combatientes, en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, y la lucha contra la privatización del ISSS, protagonizada por el gremio vinculado a la salud, en los años correspondientes al “cambio de milenio”.

Con todo, la hegemonía del modelo neoliberal impulsado por ARENA y la criminalización de la protesta social garantizaron que el sistema de dominación continuara excluyendo a las organizaciones de la toma de decisiones en el campo económico. Carlos G. Ramos subraya la división entre apertura política y exclusión de la esfera de decisión en los asuntos económicos como nota constitutiva de la transición iniciada a partir de los acuerdos¹⁰⁵. Y quizá el espacio que más apertura política experimentó fue, precisamente, el de los medio de comunicación. Sin embargo, los únicos dos periódicos de circulación nacional, los canales de televisión y las cadenas de

¹⁰⁵ Córdova Macías, *et. al.*, *op. cit.*, pp. 207, 208.

radio con mayor difusión tendieron durante la posguerra a cerrar filas con el partido en el gobierno durante los períodos electorales. La campaña iniciada desde 2003 por ARENA fue un particular ejemplo de esta alianza, dada la agresividad e insistencia con la cual el mensaje anticomunista y el temor hacia el FMLN fueron difundidos. El protagonismo de los *mass media* en esta coyuntura cobró mayor realce debido a que el candidato de la derecha provenía del nuevo empresariado con capital nacional invertido en empresas mediáticas y se había hecho de renombre como comentarista deportivo en los canales radiales propiedad de su familia. Elías Antonio Saca se convirtió en marzo de 2004 en el cuarto presidente consecutivo de ARENA, habiendo obtenido una abrumadora mayoría de votos en primera vuelta sobre su adversario, Shafick Hándal, del FMLN.

Cuadro 4.9: Resultado de las elecciones presidenciales de 2004. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	%
ARENA	1.314.436	57,51
FMLN	812.519	35,68
PDC/CDU	88.737	3,9
PCN	61.781	2,71
TOTAL	2.277.473	100

ARENA ganó pasando por encima de las más elementales reglas de la ética tanto en el ámbito privado —invadiendo los hogares salvadoreños, con su publicidad de miedo, a través de programas televisivos y llamadas telefónicas— como en el ámbito público: cines, periódicos, plazas, parques, empresas públicas y privadas... Todos estos espacios fueron usados para deslegitimar al FMLN, para asociarlo con los peores males pasados y presentes del país, para demonizar a quienes estuvieran vinculados, como militantes o meros simpatizantes, con el partido de izquierda. [...] En ese juego, los grandes medios de comunicación —TCS, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y las radioemisoras propiedad de la familia Saca— fueron una pieza fundamental. [...] Las elecciones fueron ganadas por los grandes medios de comunicación. ARENA no ganó por sus propuestas y planes de gobierno [...] ARENA ganó, en parte, porque las grandes empresas mediáticas hicieron del miedo el principal argumento de convencimiento (o de chantaje) social¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Editorial: “El cuarto triunfo de ARENA”, *Proceso*, Semanario de análisis coyuntural del Centro de Documentación y Apoyo a la Investigación CIDAI, No 1091, UCA Editores, San Salvador, marzo 24, 2004.

4.2.4 Saturación mediática y derrota electoral de ARENA

Las dinámicas que hemos venido consignando se mantuvieron a lo largo de la cuarta gestión arenera. No obstante, dos fenómenos caracterizaron el período 2004-2009: la sobre exposición de Saca en los medios, con lo cual su estrategia electoral se mantuvo a lo largo de todo el período, y la profundización de la crisis al interior de su partido. De hecho, el millonario gasto en publicidad (gasto respecto del cual el presidente Saca nunca rindió cuentas) puede ser leído como un intento de tapar lo segundo y más aún, de ocultar los signos de deterioro de un proyecto hegemónico que a esas alturas mostraba un El Salvador más violento, más polarizado social y políticamente, más vulnerable económicamente y estancado en todos los aspectos relacionados con la consolidación de la democracia: la modernización del aparato judicial, la PNC, el Ministerio Público, etc. Una nueva demostración de la polarización política se dio en los comicios municipales y legislativos celebrados en 2006, en los cuales las diferencias entre los partidos mayoritarios fueron mínimas.

Cuadro 4.10: Resultado de las elecciones legislativas de 2006. Elaboración propia.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea	%
FMLN	785.072	34	39,3
ARENA	783.230	32	39,2
PCN	228.196	10	11,4
PDC	138.538	6	6,9
CDU/CD	61.022	2	3,1
OTROS	1.956	0	0,1
TOTAL	1.998.014	84	100

En el discurso del FMLN, la persistencia de la pobreza en El Salvador y el fracaso del neoliberalismo como modelo de desarrollo nacional permitirían explicar su exitosa consolidación como la principal fuerza opositora a lo largo de los veinte años del posconflicto. Desde una perspectiva académica, Córdova Macías *et al* acuden a la teorización de Giovanni Sartori para valorar el fenómeno de la polarización política, explicándola en términos de “pluripartidismo de carácter bipolar”. Hato Hasbún, en cambio, afirma categóricamente que la “polarización política es expresión de la

polarización económica". La entrevista que pudimos llevar a cabo con Hasbún se realizó durante su liderazgo de la campaña electoral que llevó al periodista y candidato Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador, el 15 de marzo de 2009. En ese momento (diciembre de 2008) las encuestas daban por ganadora la fórmula electoral del FMLN, compuesta por Funes y el líder histórico de las FPL Salvador Sánchez Cerén.

Si la transición neoliberal hubiera generado condiciones adecuadas en empleo, costo de vida y posibilidades de educación y salud para la población salvadoreña, entonces hubiese triunfado. Fijáte cómo es la realidad de dialéctica. Pero como no hace eso, sencillamente porque no puede, porque sería su antítesis, entonces ¿qué pasa? Eso es lo que ha pasado en esta transición. Y nosotros no hemos caminado de la manera más consecuente en la generación de las condiciones de poder social para garantizar que podamos avanzar en el reto que nos quedó establecido a partir de la firma los Acuerdos de Paz. Yo soy de las personas que dice autocríticamente que el poder social que teníamos que haber construido poco a poco en aquél momento no se construyó como se debía. [...]

Nosotros salimos de los Acuerdos de Paz fortalecidos, porque en realidad como movimiento el FMLN logró liderar un planteamiento transicional, convertirse en una de las referencias de la transición y la otra referencia de la transición era la derecha, ya no era ni la Fuerza Armada ni los otros partidos políticos, como el PCN o el PDC, que quedaron como vagón de cola¹⁰⁷.

Cuadro 4.11. Resultado de las elecciones presidenciales de 2009¹⁰⁸.

Partido	Votos obtenidos	%
ARENA	1'354.000	51.32
FMLN	1'284.588	48.68
TOTAL	2'638.588	100

Cuadro 4.12. Resultado de las elecciones legislativas de 2009¹⁰⁹.

Partido	Votos obtenidos	Escaños en la Asamblea	%
FMLN	943.936	35	42,6
ARENA	854.166	32	38,5
PCN	194.751	11	8,8
PDC	153.654	5	6,9
CD	46.971	1	2,2
FDR	22.111	0	0,1
Otros	48.978	0	2,2
TOTAL	2.215.589	84	100

¹⁰⁷ Entrevista, San Salvador-México (18/12/08).

¹⁰⁸ Datos del TSE, obtenidos en: Political Data Base of the Americas, Georgetown University. Disponible en: <http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/EISal/pres09.html>

¹⁰⁹ Ibid., <http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/EISal/leg09.html>

Nuestra permanencia en El Salvador durante la coyuntura electoral del 15 de marzo de 2009 nos permitió presenciar el momento histórico en el que por primera vez la izquierda llegó al poder del Ejecutivo en El Salvador. A nuestro criterio, en esa fecha se ubica el cierre de la larga transición salvadoreña, iniciada a finales de 1979. Desde el punto de vista político, el país se transformó al punto de lograr una alternancia partidista que durante décadas no se creyó posible y que definitivamente no lo era antes del golpe de Estado del 79. El arribo de la izquierda a Casa Presidencial abrió una nueva fase en la historia de El Salvador que corresponderá evaluar a la luz de los frutos del nuevo gobierno.

El repliegue de la hegemonía arenera y su primera derrota electoral después de haber pasado invicto por cuatro comicios presidenciales dio pie a interesantes reflexiones autocríticas que vale la pena dejar consignadas, dado que la investigación nos permitió acceder a la voz de los propios areneros en esta particular coyuntura. El ingeniero Orlando Cocal, director del Instituto de Ideología Mayor Roberto D'Aubuisson, cuestionó el olvido de sus correligionarios de los principios del partido. Según su criterio, la solución no es “reinventarse”, como algunos proponen, sino recuperar la identidad, por medio del trabajo ideológico. ARENA adoleció de dicho trabajo gracias a su exitoso ascenso en el escenario electoral: “ganaba fácil”. Sin embargo, eso lo puso en desventaja respecto de la oposición. “Los salvadoreños somos propensos a olvidar [...] La izquierda a sus mártires los reconoce mucho, incluso a los de tercera o cuarta, como Rufina Amaya”. La falta de ideologización de la derecha los lleva a cohesiones precarias, en torno de intereses, no de valores. “Muchos areneros no conocen los estatutos ni los principios del partido. Ni siquiera el himno, que es diferente de la marcha. Por eso piden cambiar los estatutos sin conocerlos. Los cuestionan por haber surgido en guerra y transmitir odio, pero en realidad parten del amor a Dios”¹¹⁰. Para el Ing. Cocal, el discurso del miedo en el que se sustentaban las

¹¹⁰ Entrevista realizada para esta investigación en San Salvador el 29 de abril de 2009. Rufina Amaya fue la única sobreviviente de la masacre de El Mozote, a la cual se hizo referencia en el segundo capítulo de este trabajo. La marcha arenera es un conocido estribillo cuyo coro reza: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. ¡Patria sí, comunismo no!”.

campañas electorales areneras está agotado. Por eso se vuelve necesario recuperar la raíz católica, defensora de la familia y de la tranquilidad en virtud de lo cual los salvadoreños creyeron en ARENA.

Los salvadoreños somos conservadores, nos gusta tener cosas, cuidar nuestra familia, decidir sobre nuestros hijos. La mayoría de salvadoreños se reconoce como creyente, no ateo. La izquierda piensa que la familia es un invento burgués para explotar a la mujer y al hijo. Por eso se busca disminuir el rango de mayoría de edad. En Nicaragua es 16 años. Hay una gran diferencia entre las concepciones de familia. En ARENA hablamos de la propiedad y eso está muy arraigado en los diferentes sectores. La izquierda habla de revolución, nosotros hablamos de convivencia pacífica. ARENA es una alianza entre diferentes sectores sociales, aunque entre los mismos areneros no se entiende bien eso [...] El dirigente piensa que ya lo sabe todo, pero hay que trabajar mucho. El arenero debe analizar la realidad e interpretarla, porque muchos la deforman. En la lucha ideológica hay que saber responder ideológicamente.

Dentro del mismo tono crítico, Ricardo Valdivieso —miembro fundador del partido— identifica a Antonio Saca como el responsable de la derrota electoral de ARENA. A su juicio, uno de los mayores errores de Saca fue acaparar la presidencia del COENA (el máximo órgano de la derechista institución partidaria), además de ser el encargado de conducir el Ejecutivo. “Él ha trabajado bien en el gobierno, mal en el partido, porque no da el tiempo para todo. Estas cosas son difíciles de decir a un presidente en público, pero hay que decirlo. Durante la campaña no podía hablar. ¿Hoy quién me calla?”. En su opinión, el exceso de poder lo llevó a irrespetar la institucionalidad del país y a cometer arbitrariedades de las que ahora el partido entero se lamenta. El reto a partir de ese momento es recuperar ARENA

como visión de vida, para la vida. Por eso se hizo ARENA. El problema es que la mayor parte de la gente que rodeó al Mayor d’Aubuisson no entendieron eso. No sé si lo entienden a la fecha. Entienden el anticomunismo, entendieron el peligro que se cernía sobre Centroamérica cuando había milicias armadas en Nicaragua, 250 mil milicias, 250 mil soldados sandinistas, no nicaragüenses, sandinistas. Eso lo entendían. Pero la razón de ser de ARENA no la comprendieron, desafortunadamente. La razón de ser de ARENA es poner un poco de pensamiento en nuestra vida, pensamiento que se ha comprobado que las sociedades que lo han usado son las que más éxito han tenido sobre la faz de la tierra. Las sociedades que no han podido emplear esto son las sociedades a las que no les va muy bien. Léase América Latina, en general¹¹¹.

¹¹¹ Entrevista realizada para esta investigación, el 23 de abril de 2009 en San Salvador.

Optamos por cerrar con esta referencia a las milicias sandinistas y a la amenaza comunista porque constituye un ejemplo, entre el sin número de ellos que abundan entre los informantes y los autores citados en esta investigación, de la recurrencia al pasado y de cómo los discursos sobre el pasado constituyen una herramienta fundamental para la construcción de las identidades políticas de los actores salvadoreños. Contra la afirmación que recogíamos en la introducción de este trabajo acerca de que ARENA, el FMLN y el tribunal electoral de hoy en día nada tienen que ver con los que fueron antes, proponemos el relato que hemos construido a lo largo de los capítulos II, III y IV para demostrar que ni los principales partidos políticos ni la actual institucionalidad de El Salvador se comprenden sin su respectiva raigambre histórica. No sólo porque el sistema de partidos y el andamiaje político-institucional vigentes hoy en día surgieron en un momento determinado y a raíz de las tensiones y conflictos diversos que hemos procurado condensar, sino porque es ese complejo proceso el que explica los límites y las potencialidades de los actores y del escenario en el que se desenvuelven.

Quien mejor expresó el carácter contradictorio de la construcción de la democracia en El Salvador en el marco de esta investigación fue uno de los fundadores de ARENA, Antonio Cornejo, al manifestar en la entrevista su total desacuerdo con los procedimientos democráticos, al tiempo que rememoró con orgullo la participación de su partido en la construcción de los mismos¹¹². También el militante histórico del FMLN Hato Hasbún declaró que su partido estaba a las puertas de llegar al poder del Ejecutivo por medio del mecanismo electoral, “en el que antes no creíamos”. Desconociendo el protagonismo de los factores internacionales que determinaron el desenlace y el rumbo de la transición salvadoreña, Ricardo Valdivieso, fundador e ideólogo arenero, aseguró que tanto el logro de la paz como la construcción de la democracia obedecieron a esfuerzos eminentemente nacionales. Por ejemplo, al referirse al desempeño de la ONU en la firma de los Acuerdos de Paz, afirma categórico: “No es

¹¹² Entrevista, San Salvador (22/04/09). Argumentando en contra de la conveniencia de la democracia, Cornejo equipara el funcionamiento de la sociedad con el de una familia, para terminar concluyendo que no se puede complacer la voluntad de cada uno de los hijos, pues eso llevaría al caos.

que la ONU haya tenido éxito en El Salvador. Los salvadoreños tuvimos éxito en El Salvador”. “No hay que creer en pseudo-académicos que pretenden deslegitimar los procesos nacionales”.

Pero una tendencia fuerte dentro de la academia salvadoreña actual es la de subrayar los procesos nacionales y dejar de lado el influjo de los procesos internacionales sobre el devenir local. Es el caso del enfoque institucionalista. En el próximo y último capítulo del trabajo confrontaremos nuestro marco conceptual con dicho enfoque, de manera que podamos “cerrar el círculo” amarrando nuestro argumento sobre la funcionalidad de la democracia electoral respecto del proyecto neoliberal con la importancia de la profundización histórica para observar de qué manera esa funcionalidad fue tejiéndose y dejando también grietas aprovechables para el proyecto de oposición enarbolado por el FMLN. El diálogo con la perspectiva institucionalista nos permitirá evidenciar la importancia del relato histórico que hemos presentado en los capítulos II, III y IV en los que procuramos subrayar los elementos que la mirada institucionalista omite en sus análisis.

CAPÍTULO V. Politología y democracia electoral en El Salvador

Con el recorrido por la reciente historia política de El Salvador hemos querido mostrar cómo en ese país la dolorosa construcción de la democracia electoral terminó siendo funcional al proyecto neoliberal impulsado por el partido ARENA. Ambos fenómenos confluyeron en un clima cultural propicio y en un momento histórico que les permitió la potenciación mutua. Demostrado esto, el paso a seguir no es denostar los mecanismos democráticos como modos de organización del campo político, sino retomar la discusión respecto del tipo de democracia deseable para El Salvador y para América Latina en su conjunto. Por eso dedicamos este último capítulo del trabajo a exponer el planteamiento del politólogo salvadoreño Álvaro Artiga-González y a dialogar con él. La exposición del pensamiento de ese autor nos es útil para aproximarnos al enfoque institucionalista, es decir, a la concepción de democracia que ha predominado en las últimas décadas en el desarrollo político latinoamericano. Cuando las fuerzas políticas salvadoreñas emprendieron el camino de la “consolidación de la democracia” en aras de ponerse al día en aquello que tenía pendiente con el resto del continente, había un “modelo” de democracia predominante en el cual el país se insertó. ¿En qué consiste ese modelo? Es lo que podremos apreciar a continuación.

De cara al problema de la democracia, la estrecha imbricación existente entre la esfera académica y la empírica hace insoslayable la observación del debate teórico-metodológico. Ciertos pensadores de la democracia en América Latina han tomado un papel activo en su construcción. Los resultados de sus investigaciones forman parte de los insumos considerados para la planificación de las políticas públicas. La observación del desarrollo de la democracia en nuestro continente y la aproximación a la literatura que se ha ocupado de explicarla nos permite concluir que existe entre ambas una coodeterminación innegable: las democratizaciones, al menos en lo que respecta al diseño institucional de los Estados regionales, han ido adquiriendo perfiles más o menos cercanos a los prefigurados por la teoría politológica de la democracia. Por eso

el estudio de nuestras democracias pasa necesariamente por el estudio de nuestros teóricos de la democracia.

5.1 Gobernabilidad y democracia: una expresión del enfoque institucionalista

Entre los autores salvadoreños que hemos estudiado en el marco de esta investigación, quizá el más preocupado por los problemas teóricos y metodológicos que plantea la indagación sobre la democracia es Álvaro Artiga-González, actual coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Fruto de esa preocupación es una de sus obras más recientes: *Gobernabilidad y democracia en El Salvador. Bases teóricas y metodológicas para su medición*¹. Consideramos que las 505 páginas que la constituyen condensan bastante bien los modos de abordar la democracia que han venido predominando en América Latina durante los últimos años y que han encontrado en la Ciencia Política su nicho conceptual y su *modus operandi*.

Para exponer nuestra lectura de los planteos de Artiga-González realizaremos dos ejercicios. El primero consistirá en extraer de su texto las claves para comprender su concepto de democracia y cómo se desprende de ahí su propuesta específica de medición de la misma. Con el objeto de situar al autor dentro su contexto disciplinario y dentro del debate contemporáneo, acudiremos a otros autores que nos faciliten delinear el enfoque predominante de la politología o que sostengan posiciones críticas respecto de ese enfoque. Lo que pretendemos con este primer ejercicio es clarificar en qué consiste la mirada politológica institucionalista en la cual se reconoce nuestro autor. El segundo ejercicio consistirá en ofrecer una síntesis de la entrevista que sostuvimos con el autor para los efectos de este trabajo y en la cual nos ofreció su particular interpretación de la transición política salvadoreña². Durante ese intercambio, Artiga-González hizo frecuentes alusiones a su obra y se apoyó en los resultados de su investigación para sustentar sus afirmaciones. Por eso repasaremos

¹ Artiga-González, A., *Gobernabilidad y democracia en El Salvador. Bases teóricas y metodológicas para su medición*, PNUD-UCA Editores, San Salvador, 2007.

² Entrevista realizada para esta investigación el 6 de mayo de 2009 en San Salvador.

los indicadores adoptados por él para medir la gobernabilidad y la democracia en El Salvador y comentaremos algunos de sus resultados. Al final de este segundo ejercicio esperamos dejar claro cómo observa un politólogo institucionalista el reciente proceso político salvadoreño.

Empezaremos comentando que *Gobernabilidad y Democracia...* se elaboró con un objetivo didáctico: ¿cómo enseñarles a los estudiantes de posgrado a realizar investigaciones politológicas? Y ¿cómo construir conocimiento politológico en El Salvador? El autor asume, pues, un compromiso pedagógico. En ese sentido, conviene apuntar que tanto él como Ricardo Córdova Macías (director de FUNDAUNGO) imparten cátedras y seminarios sobre democracia y teoría política en la Maestría en Ciencia Política de la UCA, única en su especie en El Salvador. Es decir, se trata de académicos que no sólo construyen conocimiento científico de lo político en El Salvador, sino que también lo difunden a nivel universitario.

Junto a esa inquietud pedagógica, Artiga-González manifiesta su preocupación por la falta de bases empíricas sólidas para emitir juicios respecto de los asuntos políticos. Según su opinión, la excesiva ideologización del debate político salvadoreño conduce a posiciones demasiado optimistas o infundadamente pesimistas respecto de la marcha de la democracia en el país, generando confusión y enrareciendo el ambiente. A su juicio, El Salvador padece de “subdesarrollo en el análisis político”³. Por eso, además de ofrecer orientación metodológica a sus alumnos, otras motivaciones para llevar a cabo la obra fueron: i) contribuir al establecimiento de criterios ‘objetivos’ para *medir* la gobernabilidad y la democracia en El Salvador; ii) abonar en la construcción del conocimiento politológico en el contexto nacional, en aras de superar la mera trasmisión de modelos elaborados en contextos foráneos; iii) apuntalar el uso sistemático de indicadores propios y auscultar con ellos el estado de la democracia y la gobernabilidad para determinar, a futuro, cuánto se ha avanzado en esa materia; iv) identificar los principales desafíos que tiene El Salvador para lograr una gobernabilidad democrática; v) establecer una base empírica que permita desideologizar el debate,

³ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

cuestionando los usos frecuentes de los conceptos *governabilidad* y *democracia* en el medio salvadoreño⁴.

Tal como aparece anunciado en el subtítulo, la medición es el elemento fundamental de la obra. La lectura de la misma expresa el grado de importancia que las mediciones de gobernabilidad y democracia, tratadas como variables, han adquirido tanto para la Ciencia Política, como para los organismos internacionales de cooperación, los cuales dedican cantidades evidentemente generosas de recursos a la realización de investigaciones que permitan cuantificar y calificar el desarrollo de la democracia en América Latina. El propio *Governabilidad y democracia...* fue financiado con recursos del PNUD. La obra se divide en cuatro partes. La primera y la segunda están compuestas por síntesis de varias de las propuestas de medición de gobernabilidad y democracia en nuestro continente. Artiga dialoga con cada una, extrayendo de ellas las respectivas definiciones de ambos conceptos y sus respectivos procedimientos para la medición de los mismos. Los informes y métodos citados son: i) *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*⁵; ii) *Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002*⁶; iii) Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña⁷; iv) “Gobernabilidad y democracia”⁸; v) *Governabilidad, crisis y cambio*⁹; vi) *Sistema de indicadores de gobernabilidad jurídica e institucional*¹⁰; vii) *Informe sobre Desarrollo Humano*¹¹; viii) *Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2003*¹²; viii) *La*

⁴ Artiga-González, A., *Governabilidad y democracia...*, p. 244. En la introducción a la obra, el autor ofrece su propia enumeración de objetivos, de ella recuperamos nuestro punto iv); ver: p. 20.

⁵ Mark Payne, J., *et al.*, Banco Interamericano de Desarrollo BID-Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, Washington DC, versión actualizada 2006.

⁶ Kaufmann, Daniel, *et al.*, Banco Mundial, 2003. Disponible en:
<http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/govmatters3.pdf>

⁷ Varios autores.

⁸ Camou, Antonio, en: *Cuadernos de divulgación de la cultura democrática*, No. 6, Instituto Federal Electoral IFE, México, 1997.

⁹ Alcántara, Manuel, FCE, México, 1995; “Los retos políticos en la gobernabilidad democrática en América Latina”, en Camou A., *Los desafíos de la gobernabilidad*, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-FLACSO-México, México, 2001.

¹⁰ Ordoñez Chacón, Jaime y Rotsay Rosales, *¿Democracia sin reglas? Las debilidades del Estado de Derecho en la construcción democrática de América Central. Propuesta de un Sistema de indicadores de gobernabilidad jurídica e institucional para el Observatorio de la Democracia en Centroamérica*, Observatorio de la democracia en Centroamérica-Estudios para el Futuro, OEA, San José, 2004¹⁰.

¹¹ PNUD, 2002.

democracia en América Latina. *Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*¹³; ix) *Informe sobre Desarrollo Humano. El Salvador 2005*¹⁴; x) *Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia*¹⁵; xi) *Las instituciones democráticas en El Salvador: valoración de rendimientos y plan de fortalecimiento*¹⁶; xii) *Evaluar la calidad de la democracia: una introducción al marco de trabajo de IDEA Internacional*¹⁷; xiii) *Índice de desarrollo democrático*¹⁸; xiv) *Latinobarómetro*¹⁹; xv) *La cultura política de la democracia en El Salvador. Percepciones y realidades de la población salvadoreña*²⁰.

En la tercera parte de la obra, Artiga plasma su propia propuesta de medición de la gobernabilidad y la democracia y evalúa con ellas el régimen político salvadoreño. Según su criterio, los demás sistemas de medición son insatisfactorios porque no miden lo que prometen que van a medir. Ofrecen panoramas acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo de la democracia, la gobernabilidad o la “gobernabilidad democrática”, o bien, arrojan información valiosa sobre los resultados de su puesta en práctica. Pero no miden la democracia y la gobernabilidad en sí mismas. Muchas veces porque no es fácil acceder a la información específica necesaria para esas mediciones. En otras ocasiones, porque los investigadores se basan en ‘opiniones autorizadas’ o percepciones que resultan útiles hasta cierto punto y para la valoración de ciertos rubros, pero que no son confiables, debido a la inestabilidad y volatilidad que caracteriza a los puntos de vista subjetivos.

¹² PNUD, San Salvador, 2003.

¹³ PNUD, Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara, Buenos Aires, 2004.

¹⁴ PNUD, San Salvador, 2005.

¹⁵ Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible-PNUD-ASDI, San José, 2001.

¹⁶ Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES-Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España, San Salvador, 2005.

¹⁷ Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, Estocolmo, 2009. Disponible en: http://www.idea.int/publications/aqd/upload/Overview-Spanish-Web_inlay.pdf

¹⁸ Fundación Konrad Adenauer, informe 2003: <http://www.idd-lat.org/IDD2003.htm>; informe 2005: <http://www.idd-lat.org/IDD2005.htm>

¹⁹ www.latinobarometro.org

²⁰ Proyecto de Opinión Pública en América Latina de la Universidad de Vanderbilt OPAL, Córdova Macías, Ricardo; José Miguel Cruz y Mitchel Seligson, FUNDAUNGO- Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP/UCA-Universidad de Vanderbilt, 2005. Disponible en: <http://sitemason.vanderbilt.edu/files/kkAZBS/EL%20SALVADOR%202004.pdf>

Por eso, tomando en cuenta las herramientas proporcionadas por anteriores esfuerzos, Artiga se embarca en la construcción de un nuevo modelo de medición y lo aplica —de modo exploratorio y preliminar, no exhaustivo— a El Salvador. El cuarto y último capítulo de su libro está dedicado a la reflexión en torno de las tareas pendientes, vinculadas sobre todo con la conjugación de ambas variables: la “governabilidad democrática”. Como vimos, su objetivo es abrir camino a la producción de nuevas investigaciones politológicas.

Esta abundancia de trabajos de medición nos lleva a la pregunta sobre ¿por qué se volvió tan importante medir la democracia? Intentando dar respuesta a esa inquietud, acudiremos a la división del debate académico contemporáneo en torno de la democracia señalado por Artiga, quien alude a tres períodos: *transición*, *consolidación* y *calidad* de la democracia. Durante el primer período, la discusión se enfocó en el debilitamiento o ‘liberalización’ (o ablandamiento) de un régimen autoritario, cuya transformación va dando lugar a otro tipo de régimen, que puede o no ser democrático. El segundo período se preocupó por el problema de la conservación de los rasgos democráticos conquistados. Y el tercero se interesó por la profundización y expansión de las nuevas democracias. El conjunto de mediciones recuperadas por Artiga — muchos de cuyos títulos son explícitos en su intención (Observatorio de la Democracia, Auditoría de la Democracia, Evaluación de la Democracia, Latinobarómetro, Indicador de Governabilidad, etc.)— y la propuesta de Artiga inclusive, correspondería a la última fase de la discusión, pues procuran dar cuenta de qué tan gobernables son y en qué continúan siendo endeble e insuficientes las nuevas democracias²¹.

En la medida en que los regímenes autoritarios fueron dando lugar a nuevas democracias, la preocupación por evitar la reversión o involución se tornó central, tanto en los debates teóricos, como a nivel práctico. En el nivel teórico, se pasó de la “transitología” a la preocupación por la consolidación de las nuevas democracias. Sin embargo, en la medida en que los nuevos regímenes distaban de las prácticas de las

²¹ De acuerdo con Artiga-González, el problema de la gobernabilidad surgió una vez concluidos los períodos transicionales, pues se hizo necesario pensar en cómo hacer gobernables los nuevos regímenes, *Governabilidad y democracia...*, *op. cit.*, p. 18. Aquí pasaremos por alto los detalles respecto de la gobernabilidad para centrarnos en las cuestiones relativas a la democracia.

“viejas” democracias (desarrolladas y occidentales), sobre todo en el respeto al Estado de derecho, pronto se pasó a la preocupación por identificar qué tipo o clase de democracias se habían instaurado en la “tercera ola”. Junto a esta nueva preocupación teórica surgió otra, centrada más bien en la persistencia y ya no tanto en la consolidación. Así se abrió paso al discurso sobre la calidad de la democracia. La preocupación ya no era tanto una reversión autoritaria, porque parecía que no había alternativa política que disputara legitimidad a la democracia. Ahora el problema se centraba en el grado de democracia que mostraban los nuevos regímenes políticos, instaurados desde la década de 1990²².

Así define Artiga su propio quehacer y se sitúa en la corriente de pensamiento a la cual pertenece:

La nueva Ciencia Política de la UCA nace con un claro sesgo institucionalista. Influida por una abundante literatura politológica que se preocupa por el cambio de régimen (o transiciones desde regímenes autoritarios) y la consolidación de la democracia, las preguntas con las que comienza su andadura son aquellas que tienen que ver con el diseño institucional y su rendimiento. Las preguntas por la morfología y génesis de los sistemas de partidos, los efectos de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos, los condicionantes del comportamiento electoral aparecen en la primera línea de la agenda temática de investigación²³.

¿Cómo interpretar esta terminología? El sociólogo costarricense Jorge Rovira Mas nos ofrece una aproximación a la raigambre y evolución de la politología institucionalista²⁴. En primer lugar, Rovira especifica que el concepto de democracia propio de estas teorías politológicas se circunscribe a la esfera política, específicamente a los regímenes políticos que poseen o buscan implementar una democracia representativa, es decir, un sistema institucional por medio del cual resolver el problema del ejercicio del poder. La democracia representativa asegura la sucesión y el recambio de gobernantes, a través de la celebración periódica de elecciones. También Artiga-González pone de manifiesto esta precisión: la democracia —tal como él la entiende— se remite al ejercicio de la política y ese ejercicio se produce en una estructura institucional determinada. De acuerdo con Rovira, esta concepción

²² *Ibid.*, p. 129.

²³ Artiga-González, A., “La ciencia política en El Salvador...”, *op. cit.*, II. *Preguntas y respuestas de investigación*.

²⁴ Rovira Mas, J., “Consolidación de la democracia”. Disponible en:

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/consolidacion%20de%20la%20democracia.htm

de democracia fue originalmente formulada por Joseph Shumpeter (1883-1950) en el capítulo XXII de su clásico libro *Capitalismo, Socialismo y Democracia*²⁵. Rovira ubica a los pensadores que comparten esta concepción como parte del “linaje” shumpeteriano. No obstante, Artiga-González considera “minimalista” la idea de democracia entendida en términos meramente electorales. Si bien asume lo electoral como factor indispensable de la democracia, su posición pretende distanciarse de Schumpeter —en cuyo planteo percibe una defensa de la “democracia elitista”— para ir en busca de un concepto de democracia apegado a la raíz etimológica de la palabra: poder del pueblo. Para Artiga, a mayor participación mayor democracia²⁶.

En segundo lugar, Rovira recupera la interpretación de las “olas democratizadoras” de Samuel Huntington. En términos de la implementación de la democracia como régimen político en el mundo, Huntington divide la historia del Siglo XX en tres olas democratizadoras: la primera se dio entre 1828 y 1926; la segunda, entre 1943 y 1962; y la tercera, a partir de 1974 en adelante. Huntington distingue, también, dos grandes períodos de “contraolas”, es decir, de instauración de regímenes autoritarios: 1) 1922-1942; y 2) 1958-1975. Tanto Rovira como Artiga recuerdan el orden geográfico en el que ocurrió el tercer y último período de la democratización: el sureste europeo, con Portugal, Grecia, España y Turquía, inauguró tal período, seguido de cerca por el Cono Sur americano y por ciertos países de Asia, a los cuales se sumaron los países de la ex Unión Soviética y los países centroamericanos. Vale la pena agregar que en América Latina dicha tendencia empezó a manifestarse a mediados de los setenta en Ecuador, Perú y República Dominicana; durante los ochenta determinó las etapas posdictatoriales de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile; ejerció una influencia considerable en procesos particulares como el de Venezuela y México; y, desde cierto punto de vista, se inauguró en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala durante los noventa.

²⁵ Shumpeter, J., Editorial Claridad, Buenos Aires, 1942.

²⁶ Ver: Artiga-González, A., *Gobernabilidad y democracia...*, *op. cit.*, pp. 187-192; p. 450 y ss.

A esto se refieren, pues, los politólogos institucionalistas cuando afirman la pertenencia de las democratizaciones latinoamericanas a la “tercera ola”. La secuencia planteada por Artiga *transición-consolidación-calidad de la democracia* se comprende más cabalmente teniendo en cuenta este marco. Rovira considera a la transición y a la consolidación como conceptos siameses, que “marchan de la mano”. Pero una antecede a la otra. Para que ocurra la consolidación, debe haber concluido la transición. Procurando precisar, añadiremos que en la etapa de la transición los actores políticos nacionales se ven abocados a construir, afinar o modernizar los mecanismos electorales y a instaurarlos y regularizarlos, en sustitución de los métodos autoritarios y discrecionales de decisión sobre quién debe detentar el poder. Por su parte, los investigadores se muestran interesados en dar cuenta de cuándo y por qué se debilitan los regímenes autoritarios, qué define y qué caracteriza a esas transformaciones, quiénes las obstaculizan o estancan y quiénes posibilitan su avance y consolidación. Para Ricardo Córdova Macías, los análisis del período de transición se concentran, fundamentalmente, en el estudio de los actores políticos protagónicos, mientras que la fase de la consolidación da pie a la predominancia de los estudios sobre las instituciones²⁷.

Un referente clásico y fundacional entre los estudios de la transición sería la obra de Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores) *Transiciones desde un gobierno autoritario*²⁸. Se trata de una obra de 4 volúmenes que adopta el método comparativo para estudiar los casos de transición política en ciertos países de Europa meridional (Portugal, España, Italia, Grecia, y Turquía) y ciertos casos de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Los textos allí compilados son el resultado de un esfuerzo académico emprendido por un grupo de científicos sociales reunidos entre 1979 y 1983 en Washington DC, en el marco del Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson, para desarrollar un proyecto de investigación denominado: “Los períodos de transición

²⁷ Córdova Macías, R., Presentación de la obra de Artiga-González, A., *La política y los sistemas de partidos en Centroamérica*, FUNDAUNGO, San Salvador, 2002.

²⁸ Paidós, Barcelona, 1994 (primera edición: The Woodrow Wilson International Center, Washington, 1986).

desde la dominación autoritaria, perspectivas para la democracia en América Latina y Europa meridional”. Nos parece significativo que el propio Abraham F. Lowenthal, director de dicho centro y auspiciador de dicho proyecto, incorpore dentro de su presentación escrita de la obra un comentario en el que destaca del ex presidente estadounidense Woodrow Wilson (en honor al cual se bautizó la institución en cuestión) su “idealismo” y “visión internacional”, por un lado, y su ímpetu intervencionista sobre América Latina, por otro. El hecho de que los conceptos de *transición y consolidación de la democracia* hayan cobrado particular vigencia en el seno de la academia estadounidense no nos parece, pues, un dato menor. Máxime a sabiendas de que la politología salvadoreña se encuentra influenciada por esta escuela²⁹.

Aún reconociendo las enormes dificultades que la instauración de la democracia presentaba en América Latina a inicios de la década de los ochenta, O'Donnell valoró el hecho de su reivindicación en discursos políticos y académicos como una novedad esperanzadora para la región. En su “Introducción a los casos latinoamericanos”, el politólogo argentino da cuenta del relativo optimismo que empezó a cundir al respecto en el ámbito de las ciencias sociales:

El paisaje político de la América Latina (aparte de las experiencias revolucionarias de Cuba y Nicaragua) ha estado constituido por una fúnebre colección de diversos tipos de gobiernos autoritarios, mitigado a grandes trechos por democracias pactadas, no muy competitivas y socialmente restrictivas —y, por debajo de esta superficie muy poco inspiradora, yacen los cadáveres de muchas democracias abortivas, no pactadas— [...]

Mis esperanzas echan sus raíces en un factor sutil, pero potencialmente poderoso. Se trata del hecho de que hoy en día en la mayor parte de los países de América Latina (especialmente en los que recientemente han padecido o todavía padecen duros gobiernos autoritarios), ha surgido un elemento nuevo. En gran medida como consecuencia del penoso aprendizaje inducido por los fracasos de esos regímenes y por su represión y violencia sin precedentes, la mayoría de las fuerzas políticas y culturales de algún peso atribuyen ahora un alto valor intrínseco al logro y consolidación de la democracia política. Esto es por cierto una novedad y sus consecuencias merecen explorarse³⁰.

²⁹ “La ciencia política salvadoreña en el nuevo siglo nace más bien influenciada por la perspectiva anglosajona, de corte más empírico y probablemente con un sesgo más cuantitativista”, Artiga-González, A., “La Ciencia Política en El Salvador...”, *op. cit.*, *Diferencias internas más importantes dentro del ámbito de la politología salvadoreña*.

³⁰ O'Donnell, G., “Introducción a los casos latinoamericanos”, en *Transiciones... Tomo 2*, *op. cit.*, pp. 31, 32. La concreción y avance de los procesos transicionales dio pie al planteamiento, por parte de Schmitter, P., de

La segunda de las tres etapas de la discusión sobre la democracia, la de consolidación, estaría dirigida a la prevención de posibles regresiones autoritarias. En ese sentido, tanto los “transitólogos” sudamericanos, como los analistas centroamericanos de la transición han manifestado preocupaciones marcadas respecto de las probabilidades de involución de los procesos de democratización, al pervivir en ellos actores políticos y procedimientos fuertemente autoritarios. Rovira subraya los aportes de Leonardo Morlino y Juan Linz en la conceptualización de la consolidación de la democracia. El primero de estos autores entiende por consolidación el

proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis. [La *consolidación de la democracia*] es la ampliación progresiva de la aceptación de aquellas estructuras y normas para la resolución pacífica de los conflictos, un conocimiento cada vez mayor en la aceptación y el apoyo al compromiso institucional, el reconocimiento de la bondad de la fórmula de la ‘incertidumbre limitada’, o bien, en una palabra, progresiva ampliación de la legitimidad del régimen³¹.

Mientras que, a juicio de Rovira, Morlino insiste en el carácter procesual de la consolidación, Linz se enfoca en los resultados que ésta debe producir: “un régimen democrático está consolidado cuando una gran mayoría de la opinión pública, incluso en medio de grandes problemas económicos y de una profunda insatisfacción con los funcionarios, mantiene la creencia de que los procedimientos e instituciones democráticos constituyen el modo más apropiado de gobernar la vida colectiva y cuando el apoyo a las alternativas antisistema es pequeño o está más o menos aislado de las fuerzas democráticas”³². Componentes imprescindibles de la consolidación serían, pues: la legitimidad de la democracia como modelo y la adopción del Estado de derecho por parte del todo social como referente para la resolución de los conflictos. Para terminar de cerrar su acotación conceptual, Rovira extrae la siguiente frase de Huntington:

la “Transitología: la Ciencia o el Arte de la Democratización”, *Arenas. Revista sinaloense de Ciencias Sociales*, Primera Época, No 2, abril-septiembre, 1997, México, pp. 13-15.

³¹ Morlino citado por Rovira Mas, J., *op. cit.*, “B. Significados fundamentales”.

³² Linz citado por Rovira Mas, J., *idem*.

La democracia descansa sobre la premisa de que los gobiernos fracasan y de que por ello existen caminos institucionalizados para poder cambiarlos. La democracia no significa que se resolverán todos los problemas; significa que los gobernantes pueden ser cambiados, y la esencia de la conducta democrática es lograr esto último porque es imposible conseguir lo primero [...] Las democracias se consolidan cuando el pueblo aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero no necesariamente a todo lo demás³³.

Los teóricos que hemos mencionado, Shumpeter, Huntington, O'Donnell, Schmitter, Whitehead, Morlino, Linz, son algunos de los nombres consagrados dentro de la Ciencia Política. Ellos y otros más, en especial Robert Dahl, Manuel Alcántara, David Easton, David Held, Ronald Inglehart, Arend Lijphart, Seymour M. Lipset, Gaetano Mosca, Dieter Nohlen y Giovanni Sartori, forman el *staff* de interlocutores teóricos de Artiga. De sus interlocutores empíricos hemos hecho ya un recuento más arriba. *Gobernabilidad y democracia...* se ocupa de exponer cómo al interior de este ámbito disciplinario, en su versión institucionalista, cada autor, bien sea el que propone un sistema de medición, el que elabora hipótesis y teorías o el que se dedica a desarrollar ambas tareas, posee un concepto particular de democracia. La claridad respecto a esta diversidad es algo ampliamente compartido por los politólogos: no existe una definición única de democracia. Lo que hay es un debate abierto respecto de ella, que va nutriéndose de múltiples aportaciones y críticas y que va transformándose al calor de los acontecimientos históricos. Por eso no sólo el de Artiga, sino que la mayor parte de los trabajos provenientes de ese campo de estudio se ocupan de especificar en qué posición de la discusión se sitúa el autor, qué se entenderá por democracia y bajo qué significados se usarán los demás conceptos clave en cuestión.

Aunque hay que decir que desde las formulaciones de Shumpeter hasta nuestros días la corriente de la Ciencia Política a la que pertenece Artiga-González no sólo ha incrementado, sino también ha complejizado su producción, consideramos pertinente proponer una enumeración de los supuestos básicos y los puntos de partida compartidos por los autores de los cuales hemos hecho mención: i) la afirmación de la

³³ Huntington citado por Rovira Mas, J., *idem*.

democracia política como el único, y para algunos el mejor, de los regímenes posibles³⁴; ii) la afirmación de que la instauración y consolidación de la democracia representativa debe darse dentro de los márgenes del Estado-nación; iii) un uso frecuente de metodologías de investigación comparativas, sobre todo para extraer las similitudes entre los procesos políticos de dos o más países; iv) la convicción de que, independientemente de las semejanzas encontradas entre los casos, las razones de la transformación de los regímenes deben encontrarse en las actitudes de los actores, en los diseños institucionales y en el desarrollo de los procesos locales; v) un claro distanciamiento, cuando no abierto rechazo, de la teoría marxista y sus derivados, cuya crítica asocia indisolublemente los procesos políticos con los procesos económicos³⁵; vi) la búsqueda de nuevos marcos explicativos tendientes a dar cuenta de lo político por lo político mismo, desvinculándolo analíticamente del resto de las esferas de la realidad.

Artiga-González formuló con meridiana claridad la posición epistemológica de su disciplina al cuestionar la inexistencia de la Ciencia Política en El Salvador:

La ciencia política exige, a nivel epistemológico, la autonomía relativa: explicar lo político por lo político. Pero como la tradición es explicar desde la base económica y social lo político y lo jurídico, entonces [se cree que] la toma del poder te va a permitir hacer todo, lo cual no es cierto desde otras lecturas. La sociedad salvadoreña no tiene

³⁴ Así lo expresa, por ejemplo, el PNUD en su informe sobre la democracia en América Latina. Al referirse a este trabajo, Artiga-González especifica que se divide en dos partes: una corresponde al *Debate conceptual sobre la democracia* y la otra al resultado de la investigación sobre el estado de la democracia en nuestro continente. En una página introductoria al debate conceptual se lee: “Este Anexo presenta algunos de los principales conceptos y tópicos que pertenecen al campo de debate de y sobre la democracia, asumiendo desde el comienzo que la definición de sus sentidos —irreductibles a unidad alguna, pero exigidos al mismo tiempo de precisión y certidumbres— forma parte, también, de las tareas que permiten su desarrollo y enriquecimiento. Partiendo de la premisa de que la democracia es la única forma de organización política de las sociedades con capacidad de aprender y transformarse a sí mismas sin perder sus atributos fundamentales, se entiende que es a partir de una reflexión y un pensamiento sistemático sobre la democracia que las sociedades pueden avanzar en el mejor conocimiento de sus necesidades y sus déficit, y al mismo tiempo, en el mejor funcionamiento de sus instituciones y sus prácticas políticas”, PNUD, 2004.

³⁵ O’Donnell, por ejemplo, pone de manifiesto lo que él considera el fracaso de la apuesta revolucionaria a nivel continental. En su opinión, la izquierda radical en los países del Cono Sur, no sólo no cumplió con su cometido y fue prácticamente aniquilada, sino que dio lugar a la emergencia de dictaduras regresivas y sangrientas, muy lejanas a los ideales de justicia social. Su planteo sugiere que la democracia procedimental tiene más probabilidades de conseguir la estabilidad política necesaria para emprender medidas en pro de la igualdad, mientras que las revoluciones, con la consecuente respuesta represiva que desencadenan, terminan por alejar más a los países de ese objetivo, O’Donnell, G., “Introducción a los casos latinoamericanos”, en *Transiciones... (Tomo 2)*, op. cit., pp. 25, 26.

especialistas en Ciencia Política que hagan lecturas politológicas, que consideren que hay un ámbito de autonomía de la política y que lo que hay son relaciones de interdependencia con otras esferas, pero no de causalidad. Institucionalmente eso se expresa en la inexistencia en el país no sólo de escuelas, de departamentos, sino incluso de profesionales en ciencia política. Entonces, claro, las lecturas tienen que ser otras, que vienen de otras zonas que tienen otros principios, otros supuestos, otras premisas. Yo siempre critico: de economía hablan los economistas, de medicina hablan los médicos, de psicología hablan los psicólogos [...] *pero de política hablan todos y todos creen hacer el análisis político*³⁶.

Es pertinente señalar que ante el predominio de este enfoque “politicista” dentro del debate, especialmente durante la década de 1990, reaccionaron autores de variopintas procedencias y de disciplinas distintas a la ciencia política, tales como la sociología, la filosofía y la historia, que empezaron a llamar la atención sobre lo que consideraron una concepción demasiado reducida de democracia. A su juicio, el entusiasmo despertado por la transición y la consolidación de la democracia condujo a un sobredimensionamiento de la esfera política, a costa de una invisibilización de las determinantes económicas, sociales, jurídicas y culturales. Se trata, en resumen, de la discusión entre la forma “minimalista” y la forma “maximalista” de entender la democracia.

Como vimos, la concepción “minimalista” define a la democracia como un engranaje de instituciones encargado de regular la competencia electoral entre los diferentes actores políticos para acceder al poder del Estado y gobernar una sociedad. Desde ese enfoque, *transición y consolidación de la democracia* pueden definirse como momentos de un proceso mediante el cual una sociedad x, que carece de una estructura institucional que garantice el funcionamiento de mecanismos democráticos, va alcanzando cada vez mayores niveles de democratización hasta llegar a constituir un *régimen político democrático*. El problema de la democracia se circunscribe al establecimiento de unas determinadas reglas del juego y a las garantías para su

³⁶ Entrevista, San Salvador (6/05/09). Las cursivas son nuestras. La misma crítica es sostenida por Abelardo Villegas, quien califica de “materialismo vulgar” la tendencia a explicar lo social como dependiente de lo económico, *op. cit.*, Capítulo V “Democracia y riqueza”, pp. 75 y ss.

cumplimiento. Una vez establecidos los mecanismos institucionales, podrá considerarse democrático el funcionamiento de toda sociedad que se apegue a ellos.

La posición “maximalista” considera insuficiente esta manera de concebir la democracia argumentando que el correcto funcionamiento de mecanismos como el electoral no garantiza la mejoría de las condiciones de vida de las mayorías y, por tanto, la “democracia procedimental” no lleva necesariamente a una “democracia social” (o sustantiva) en la que todos los ciudadanos puedan vivir y ser realmente considerados como tales. Quienes pugnan por esta definición amplia de democracia aducen, además, que la persistencia de las desigualdades socioeconómicas en América Latina fragiliza todo proceso de democratización, pues las estructuras institucionales que logran erigirse se hallan cimentadas sobre bases endebles que terminan, más temprano que tarde, siendo erosionadas³⁷.

Desde el punto de vista “maximalista”, los defensores de la democracia procedimental, es decir, los politólogos que comparten el enfoque que aquí hemos sintetizado, son “minimalistas”, pues, aunque hayan ampliado su repertorio de definiciones de democracia y expandido su alcance más allá de lo meramente electoral, insisten en identificar democracia con régimen político, circunscribiéndola al correcto funcionamiento institucional y, por ende, al ejercicio de determinadas “reglas del juego”. El hecho de que en el contexto latinoamericano se hayan cumplido ya tres décadas de haber dado inicio la transición a la democracia y se hayan instaurado exitosamente en casi todos los países democracias electorales sin que eso haya contribuido a mejorar las condiciones de vida de las mayorías ha generado cuestionamientos severos al discurso “politicista”, “transitológico” y democratizante. Argumentando acerca de cómo la desigualdad estructural se ha incrementado en

³⁷ Horacio Cerutti cuestiona las teorías de la transición a la democracia haciendo hincapié en el olvido de la dimensión histórico-estructural del que éstas adolecen y señalando las aporías en las que recaen sus autores al postular, por ejemplo, que el fortalecimiento de la democracia requiere del fortalecimiento de la cultura política democrática y viceversa. Ver: Cerutti, H., *Democracia e integración en nuestra América* (ensayos), Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2007. Un autor que se ha encargado de desarrollar el análisis socio-histórico en contra posición con el “politicismo transitológico” es Atilio Borón en su *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, 2003. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/estado/estado.html>

dirección directamente proporcional a la consolidación de las democracias electorales en el subcontinente, el politólogo argentino Atilio Borón expresa la crítica siguiente:

Los problemas reales que acosan la marcha de la democracia en América Latina trascienden holgadamente aquellos referidos a la exclusiva mecánica del régimen político. Esas cuestiones son muy importantes, pero permanecer encerrados en una concepción ‘politicista’ de la democracia obnubila nuestra visión y es el camino más seguro para cooperar con el restablecimiento del autoritarismo en la región [...] Planteado en otros términos: la tarea que tiene frente a sí el demócrata latinoamericano va mucho más allá de asegurar la restauración de las formas políticas congruentes con los principios fundamentales del régimen democrático. Aparte de eso —una tarea ya de por sí tan extenuante como el trabajo de Sísifo— también debe demostrar que la democracia es una herramienta eficaz para asegurar la transformación social y la construcción de una *buena sociedad*³⁸.

En el mismo tenor crítico, el filósofo argentino-mexicano Horacio Cerutti asegura: “En América Latina las teorías de la transición ayudaron en su momento a conceptualizar el paso de dictaduras militares a procesos de apertura. Sin embargo, no han sido suficientes para dar cuenta de la situación ulteriormente gestada por ese mismo tránsito, el cual dista bastante de una consolidación. Algunos, irónicamente, han hablado de estas democracias supuestamente recobradas como *democracias de baja intensidad*”³⁹.

Desde el punto de vista “minimalista”, las tareas referidas a la construcción de la democracia en términos meramente jurídico-institucionales son de tal envergadura y presentan tal nivel de complejidad en países como los latinoamericanos —el propio Borón las equipara con el “trabajo de Sísifo”— que las exigencias planteadas por los “maximalistas” parecerían fuera de lugar. Como afirma Huntington en la cita recogida por Rovira y reproducida arriba: la democracia política está destinada a resolver el problema de la alternancia gubernamental. Un gobierno podrá responder a algunas demandas sociales, pero no a todas. Por eso debe ser sustituido. Si bien, en la politología existe esa tendencia, es necesario mencionar que en la actualidad es

³⁸ Borón, A., *op. cit.*, pp. 238, 239.

³⁹ Cerutti G., H., *op. cit.*, pp. 31, 32. Para citar un ejemplo de lo señalado por Cerutti relativo a nuestro objeto de estudio: Sermeño, A., *El Salvador: una transición democrática de baja intensidad (1992-1995)*, Tesis de Maestría en Ciencia Política, Facultad de Ciencias políticas y Sociales, UNAM, México, 1996.

frecuente encontrar académicos de esta disciplina que declaran haber tomado distancia de la posición “minimalista” vinculada a lo electoral, e incluso apuntan hacia la expansión de la democracia allende a los márgenes del régimen político. En ese sentido argumenta recientemente O’Donnell cuando afirma que la inclusión del concepto de algún tipo de igualdad en los discursos democráticos conservadores es un logro del debate contemporáneo, tomando en cuenta que antes lo usual desde este tipo de posiciones era justificar la desigualdad. Manifestando preocupación por la situación latinoamericana en la cual democracia política e inequidad socioeconómica coinciden tan tranquilamente, asegura —en colindancia con sus declaraciones de los ochenta en *Transiciones desde un gobierno autoritario*— que las mayorías populares deben hacer uso de las herramientas democráticas para luchar por la conquista de sus derechos sociales, aún aplazados⁴⁰.

Interrogado respecto de la confrontación “maximalismo” versus “minimalismo”, el politólogo salvadoreño Ricardo Córdova Macías aseguró que los maximalistas no niegan la necesidad ni la importancia de la construcción y pervivencia de mecanismos institucionales como modo privilegiado de resolver los conflictos sociales⁴¹. Lo que está en juego es cuál debe ser el alcance de la democracia, no si deben o no existir procedimientos democráticos. Atilio Borón, por ejemplo, rechaza las posiciones ultraizquierdistas y ultraderechistas que proponen la renuncia a todo proceder democrático. Apelando a las formulaciones de Rosa Luxemburgo, propone al socialismo como una profundización de la democracia⁴². La necesidad de la democracia no se pone en duda. Coincidentemente, Horacio Cerutti califica de “irrenunciable” su apuesta por la democracia y, sin embargo, enfatiza en que “democracia se dice y se

⁴⁰ De la inquietud por tomar distancia del “minimalismo” da cuenta el subtítulo añadido por el PNUD a su informe sobre la democracia en América Latina: “Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, así como las reflexiones recogidas en el ya citado *Debate conceptual sobre la democracia*. La cita que extrajimos de O’Donnell, G. forma parte de sus “Notas sobre la democracia en América Latina”, recogido en ese documento, p. 62 y ss. Ver, ahí mismo: Conaghan, Catherine, “Más allá del minimalismo: una agenda para unir democracia y desarrollo”, pp. 107-120. También el interés manifestado por Artiga-González en nuestra entrevista acerca de adoptar lo “micro” y lo “subjetivo” como ejes de nuevas investigaciones muestra sus pretensiones de ensanchar el horizonte de la investigación politológica.

⁴¹ Entrevista realizada para esta investigación, San Salvador, 16 de abril de 2009.

⁴² Borón, A., *op. cit.*, p. 236.

práctica de muchas maneras. Sus definiciones y sentidos no son siempre compatibles y en el trasfondo del debate terminológico subyace el ineludible y siempre presente, aunque no pocas veces camuflado, conflicto social”⁴³.

¿Cómo se posiciona Artiga-González en medio de este debate? Veamos:

Históricamente la democracia siempre se entendió en términos políticos, desde los clásicos griegos hasta los posmodernos. En algunos momentos y en determinadas zonas geográficas, se incluyó una dimensión económica e incluso social. Pero ello no eliminó nunca la dimensión política de la democracia. Tal vez se contraargumente que se propone una definición mínima. En parte es cierto. Pero considero que es el mínimo necesario para que podamos entendernos. Además, aunque se trate de una definición mínima, eso no dice sin más qué tan mínimo es lo que se pide. [...] Lo mínimo puede no ser tan fácil de alcanzar, o una vez alcanzado, puede ser difícil mantenerlo [...] El fijarse en las democracias realmente existentes [como él considera a: Europa occidental, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, Costa Rica y Uruguay] no significa que se olvide la democracia como ideal. Al contrario, significa mantener un cierto pensamiento utópico que jalone las concreciones históricas hacia la realización cada vez mayor del ideal democrático. De esta manera, lo que se tiene en la historia son regímenes más o menos democráticos. Si imaginamos un *continuum* que va de menos a más, podríamos colocar sobre él los diversos regímenes políticos, según su menor o mayor nivel de democracia que *realicen*⁴⁴.

Su apuesta iría en el sentido esbozado por Córdova: restringir democracia a la esfera de lo político, en la cual todos pareceríamos estar de acuerdo. Recordemos que el objetivo de Artiga-González no es teórico, sino empírico. Por eso, aunque manifiesta su apuesta por la democracia sin ambages⁴⁵, es explícito en su intención de no detenerse a discutir sobre cuál definición de democracia es mejor que otra, sino en encontrar criterios “objetivos” para evaluar la marcha de la democracia en El Salvador. De acuerdo con su apreciación, bajo el concepto *calidad de la democracia* subyace la aceptación tácita de las democracias con adjetivos que empezaron a acuñarse en los casos latinoamericanos: “democracias delegativas”, “electorales”, “no consolidadas”,

⁴³ Cerutti, H., *op. cit.*, p. 91.

⁴⁴ Artiga-González, A., *op. cit.*, pp. 180, 181.

⁴⁵ “A los regímenes de la órbita soviética, bien se les personalizó denominándolos stalinistas, bien se les “historizó” llamándoles *socialismos reales o históricos*. ¿Por qué, entonces, no se podría hablar también de *democracias reales o históricas* para referirnos a las democracias realmente existentes? ¿Por qué dudar de su carácter democrático por más imperfecta que sea la concreción histórica de ese ideal? O planteado de otra manera. No hay que desechar la democracia solo a partir de los vicios o deficiencias que su concreción histórica ha producido. Lo que se necesita es eliminar estos vicios o deficiencias. No a la democracia como aspiración”, *Ibid.*, p. 181.

“de baja intensidad”, etc.⁴⁶. Las mediciones de allí emanadas buscan determinar qué tan cerca o lejos se encuentran los regímenes del ideal democrático. Pero, más que postular adjetivaciones, Artiga-González propone diseccionar los componentes del sistema político y analizar cada uno de ellos observando su avance, estancamiento o retroceso en ese *continuum* imaginario que va de menos democrático a más democrático. Tal como lo aseveró en nuestra entrevista, ese sería el modo correcto de explicar la complejidad del proceso, porque no hay una marcha homogénea hacia la democracia. Hay dimensiones del sistema. De lo que se trata es de analizar cada una de esas dimensiones.

Buscando escapar de lo que denomina el “mar conceptual” en torno de las definiciones de democracia⁴⁷, el autor opta, como ya se dijo, por la etimología de la palabra, concentrándose específicamente en dos rasgos esenciales de la misma: participación y rendición de cuentas. Los niveles de participación y la capacidad para generar espacios en los que la ciudadanía pueda exigir cuentas sobre el desempeño gubernamental definen, a juicio de Artiga-González, qué tan democrático o poco democrático es un régimen. Respecto de la gobernabilidad, lo definitivo sería la capacidad del régimen para tomar decisiones e implementarlas. Preciado esto, el autor solicita que su trabajo sea evaluado en función de los indicadores que ofrece. Si su investigación arroja datos útiles para determinar cuánto participa el electorado salvadoreño en la toma de decisiones gubernamentales y en su implementación, y qué tan bien funcionan los mecanismos institucionales de rendición de cuentas del régimen político en El Salvador, entonces habrá cumplido con su cometido.

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 237-238. Artiga-González considera que ese abanico de adjetivaciones para las nuevas democracias obedece, por un lado, al hecho de compararlas con las “democracias desarrolladas” y, por otro, a la diversidad conceptual de la cual, como hemos visto, él no pretende ocuparse. Simplemente, deja registrado que cada analista encuentra su propia denominación, de acuerdo con su modelo de democracia.

⁴⁷ Artiga-González presenta una muestra de ese debate como corolario del segundo capítulo de *Gobernabilidad y Democracia...*, *op. cit.*, “Modelos de democracia y diseños institucionales”, pp. 178-233.

5.1.1 ¿Transición hacia dónde?

Ya en la introducción de *Gobernabilidad y Democracia...* Artiga-González deja asentadas sus reservas respecto de hacia dónde se dirige la transición en El Salvador. Pero en el intercambio que sostuvimos con él fue enfático en afirmar que aplicar el concepto de transición a la democracia al caso salvadoreño es equívoco. Lo que se da, sostiene el autor, es una *transición desde un régimen autoritario*, tal y como lo postularon quienes él reconoce como clásicos de la “transitología”: O’Donnell, Schmitter y Whitehead. Suponer que lo ocurrido fue un tránsito hacia la democracia equivale a pensar con el deseo —continúa su argumentación— siguiendo una línea teleológica que lleva a ver en la realidad lo que sólo existe como ideal. Pero el camino hacia la democracia no era inexorable, no tenía necesariamente que ocurrir. Hubo, sí, un cambio de régimen, asegura, y eso conduce a la pregunta por ¿cuál es la naturaleza del nuevo régimen? Su obra procura, justamente, dar cuenta de ello. La liberalización del régimen autoritario de corte militar abrió paso a tres escenarios posibles: un régimen autoritario de corte civil, un régimen democrático o —siguiendo a Morlino— un régimen híbrido en el que rasgos democráticos confluyen con rasgos autoritarios. Si había tres resultados posibles, ¿por qué la premura hacia la denominación *transición a la democracia*? Porque predominó la tendencia ‘teleologizante’, insiste. Pero también reconoce que los analistas recogen el discurso democratizante dominante a nivel internacional.

Artiga-González considera el 15 de octubre de 1979 y el 16 de enero de 1992 como fechas simbólicas: la primera (el momento en que ocurrió el golpe de Estado que puso fin al ciclo de dictaduras militares en El Salvador) marca el inicio y la segunda el final de la transición salvadoreña. Lo que a su juicio ocurrió en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz fue un pacto entre élites en el que el FMLN se comprometió a poner fin a la guerra, a cambio de su incorporación a la arena electoral y del respeto a la vida de sus militantes. El hecho de que este pacto haya sido llevado a cabo por la dirigencia insurgente, sin el concurso del grueso de la militancia efemelenista, y el que los Acuerdos hubieran terminado decantándose hacia un convenio estrictamente político,

donde los aspectos socioeconómicos fueron dejados de lado, constituyen, para Artiga-González, las pruebas de que las verdaderas causas de la guerra fueron políticas. Cuestionando las lecturas de la historia que afirman la injusticia y la desigualdad como causas del conflicto, el autor asegura que una vez resuelta la exclusión de la participación de una élite (la cúpula guerrillera), el conflicto llegó a su fin. La injusticia y la desigualdad continuaron e incluso se incrementaron y ya no hay guerra, entonces esas no eran las causas. La transición política fue una transición elitista y lo que se inauguró en El Salvador a partir de entonces no fue una democracia, sino un *elitismo competitivo*⁴⁸. Siguiendo esta lógica, el período de la consolidación estaría marcado por el ingreso de un nuevo competidor al juego de las élites. Lo que se consolidó no fue la democracia —pues no la había—, sino las reglas de un nuevo juego político entre élites.

Partimos de un régimen autoritario con características militares, un régimen de una dictadura militar institucionalizada. Todo eso es correcto. Ese es el punto de partida y el quiebre del golpe de Estado de octubre del 79. A partir de ahí El Salvador, desde mi punto de vista, transita por una vía que combina como características sobresalientes la realización de elecciones y el conflicto armado. La mezcla de esas dos propiedades define el carácter de la transición salvadoreña.

Los Acuerdos de Paz son el pacto para realizar elecciones limpias, libres, competitivas, y la eliminación del conflicto armado. Todas las elecciones desde el 82 hasta el 94 no son elecciones limpias, competitivas. Son elecciones semi-competitivas [...] Los Acuerdos son unos acuerdos elitistas para la incorporación de una élite que estaba excluida al juego de las élites. El *demos* es el ausente, el que le da el carácter democrático al asunto, es el ausente.

Lo que viene después es la implementación de unos acuerdos y ya eso es un nuevo régimen. Se acabó la transición. Hay unas nuevas reglas del juego. El pacto es un nuevo régimen político y eso es lo que cambió. Por eso lo demás no iba a cambiar, porque el problema era un problema político⁴⁹.

De acuerdo con Artiga-González, el desencanto que sobrevino a El Salvador durante la posguerra se vincula con el exceso de optimismo que acompañó a los Acuerdos de Paz. Se creyó que el ingreso de la izquierda revolucionaria al sistema de partidos daba inicio, finalmente, a la democracia. Pero tanto el aparataje institucional,

⁴⁸ Artiga-González, A., publicó un libro con ese título. En la entrevista (San Salvador, 06/05/09) nos aclaró que, aunque el texto contiene un análisis de las elecciones y no una explicación teórica de ese concepto, quiso expresar allí lo que a su juicio se estaba constituyendo: “un régimen de competencia entre élites”. Ver: *Elitismo competitivo. Dos décadas de elecciones en El Salvador (1982-2003)*, UCA-Editores, San Salvador, 2004.

⁴⁹ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

como la actuación de los políticos, empezaron a mostrar sus deficiencias y fisuras. Un aura de desánimo y desconcierto empezó a permear sobre el paisaje nacional. Quizá el nombre del primer número de la *Revista Estudios Centroamericanos ECA* en 1997 ilustre esa incertidumbre: *¿Transición hacia dónde?*⁵⁰. Artiga-González lo explica como un error de interpretación, un equivocado punto de partida para el análisis. Una lectura más cauta del proceso hubiera prevenido el desencanto posterior. Reconocer que lo que había en 1992 era un régimen distinto al anterior pero aún no era una democracia, hubiera evitado la discusión que se generó entonces, basada en falsos supuestos.

Para no incurrir en ese tipo de errores, Artiga-González prefiere separar el entramado institucional de las políticas que emanan del gobierno e introducir la categoría de dimensiones del sistema político para expresar la complejidad del proceso. Es decir, una cosa son las instituciones, otra las políticas generadas por esas instituciones, otra las relaciones que se establecen entre esas instituciones, otra la relación entre cada una de esas instituciones y la ciudadanía, otra las condiciones necesarias para la permanencia de las instituciones y otra los resultados de la existencia y accionar de esas instituciones. Para Artiga-González, ser fiel a la realidad implica analizar cada uno de estos aspectos por separado. Según su apreciación, en El Salvador los procesos de transición y consolidación arrojaron cambios significativos respecto de la construcción de un andamiaje institucional distinto al que existía antes. Pero la convivencia de esos cambios con una cultura política autoritaria que no fue modificada dio como resultado un régimen más bien híbrido, con diversos componentes y productos contradictorios, no siempre satisfactorios.

Yo no creo que sea democracia lo que hay en el 92. Se firmaron unos papeles, pero las instituciones y todo lo demás siguen funcionando como antes, porque eso tiene otra lógica. Por eso es que después comienzan a hablar de retrocesos, pero porque tienen una visión muy optimista: 'llegamos a una democracia'. Cuando empiezan a ver que aquello no funciona: 'estamos retrocediendo'. Pero también podemos decir: es que no llegamos a la democracia, llegamos a otro tipo de régimen, donde esas cosas no tienen por qué funcionar. Al contrario, es una característica de ese régimen, en el que existen ese tipo de organizaciones públicas, pero que no funcionan como uno pensaría que

⁵⁰ *Revista Estudios Centroamericanos ECA*, No. 579-580, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 1997.

funcionan en una democracia, sino que funcionan para otras cosas, para proteger a las élites.

[...]

El mismo hecho de que haya elecciones y no se cuestionen, eso es un avance respecto de lo que había. Puede ser que en otras áreas haya simplemente estancamiento, las cosas siguen como antes. A quienes leían la transición a partir de 1992 [sería bueno recomendarles] no leerla como un movimiento homogéneo de todas sus dimensiones posibles. Ahí lo que puede haber es que unas dimensiones van más rápido, otras van más despacio, otras están estancadas. O sea, es una cuestión más compleja que simplemente hablar de “la transición”. *En realidad deberíamos de hablar de las transiciones de cada una de las dimensiones.* La constitución de un sistema de partidos, digamos: cómo eso va cambiando en un período que hemos denominado de transición⁵¹.

Recordemos que Artiga-González defiende dos componentes básicos de la democracia: 1) la participación de la comunidad política en la toma de decisiones vinculantes (es decir, válidas para todo el sistema social) y en la implementación de esas decisiones⁵² y 2) la rendición de cuentas, pues “si el demos es el depositario de la soberanía, entonces, aunque la delegue en un acto electoral, debe mantener la capacidad de pedir cuentas; cuentas no sólo contables, sino información, explicación de la gestión en general, a los funcionarios”⁵³. Las democracias realmente existentes — no la utopía democrática, sino las democracias concretas, enfatiza— cuentan con mecanismos eficientes para garantizar la operatividad de estos dos componentes. Las elecciones, las revocatorias y los referendos, son modos directos de participación y ejercicios de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, sin mediaciones. Como no todos los asuntos públicos pueden decidirse acudiendo a estos mecanismos, el sistema político diseña un entramado institucional encargado de cumplir con esas funciones⁵⁴.

En el caso de El Salvador, ese entramado institucional empezó a construirse en 1982. Actualmente, su estructura fundamental está constituida por: los aparatos Ejecutivo (Presidencia de la República), Legislativo (Asamblea Legislativa) y Judicial

⁵¹ Entrevista, San Salvador (06/05/09). Las cursivas son nuestras. La tesis de Maestría de Artiga-González consistió, precisamente, en una investigación sobre los sistemas de partidos en Centroamérica. Publicada por FUNDAUNGO, *op. cit.*

⁵² Artiga-González, A., *op. cit.*, p. 238.

⁵³ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

⁵⁴ A partir de este párrafo presentamos un repaso del 3er capítulo de *Gobernabilidad y Democracia...*, *op. cit.*, pp. 235-437.

(Corte Suprema de Justicia CSJ), 268 Consejos Municipales (o alcaldías, a nivel nacional), el Ministerio Público (conformado por: Fiscalía General, Procuraduría General, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Procuraduría de los Derechos Humanos) y el sistema de partidos políticos (del cual forman parte: FMLN, ARENA, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Cambio Democrático (CD). El desafío planteado por Artiga en su *Gobernabilidad y Democracia...* es implementar un sistema de medición que le permita evaluar el funcionamiento de este aparataje. Debido a la abundante literatura existente acerca del desempeño municipal en El Salvador, explica, su objeto de estudio son las instituciones de alcance nacional. Para proceder a la medición, pone entre paréntesis la gobernabilidad y la democracia como conceptos, procurando ocuparse de ellos en tanto fenómenos, es decir, de darles seguimiento con base en determinados indicadores.

Para medir la gobernabilidad en El Salvador, Artiga-González construyó dos indicadores: 1) la capacidad para tomar decisiones vinculantes o *capacidad decisoria*; 2) la capacidad para implementar las decisiones o *capacidad ejecutiva*. Porque una cosa es tomar una decisión y otra ejecutarla. Quienes toman las decisiones vinculantes son, a su juicio, las instancias Ejecutiva, Legislativa y Judicial —a la injerencia de otras instancias las llama “influencias” o “presión”. En función de ello, se dio a la tarea de contabilizar y establecer el rendimiento para el primer indicador, la *capacidad decisoria* en: a) la producción legislativa (expresada en cantidad de reformas constitucionales, leyes, decretos, etc., emitidos); b) la aprobación del Presupuesto General del Estado; c) los vetos presidenciales; d) la constitucionalidad de las leyes (cantidad de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional); e) la producción de gobierno (evalúa la eficacia de la elección de los funcionarios por cargos públicos y el nombramiento de los funcionarios que han de formar el Ministerio Público). Para evaluar el segundo indicador, la *capacidad ejecutoria*, Artiga se fija en: a) la ejecución presupuestaria; b) la estabilidad del gabinete, c) la recaudación tributaria; d) las reacciones sociales contra las decisiones políticas; e) las reacciones institucionales contra las decisiones políticas; f) el mantenimiento del orden público y uso ilegítimo de la fuerza.

Para medir la democracia, los indicadores fueron: participación y rendición de cuentas. Ya hemos dicho que, para Artiga-González, a mayor participación mayor democracia. Cuantos más actores y puntos de vista participen en la toma de decisiones, más democrático será el funcionamiento del Estado. Esto no significa sustituir a las instituciones ni a las instancias gubernamentales, sino abrir espacios para la concurrencia de diferentes voces. Luego el gobierno toma las decisiones y los funcionarios públicos las ejecutan. La evaluación de la participación en el instrumento de Artiga-González comprende el análisis de: a) la participación electoral; b) la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías; c) el voto de las mayorías legislativas; d) los gobiernos municipales mayoritarios y minoritarios; e) las iniciativas de ley; f) los mecanismos de la democracia directa.

La participación en la selección de los gobernantes debe ir acompañada por la capacidad para premiar o sancionar a los mismos, según haya sido su desempeño en el cargo para el cual fueron seleccionados. De hecho, las elecciones no solo permiten o posibilitan la participación del *demos* en la selección de gobernantes, sino que, en el mismo acto, puede posibilitarse el premio o la sanción por su gestión en el período anterior. Ese es el punto de partida para considerar la rendición de cuentas como dimensión fundamental de la democracia⁵⁵.

La rendición de cuentas posee, siguiendo a Artiga-González, dos dimensiones básicas: 1) la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público; 2) la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. La falta de alguno de estos dos componentes impediría el ejercicio de rendición de cuentas. En El Salvador, los diversos ministerios de la administración pública entregan informes de labores anuales a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, y pese a estar establecido en la Constitución, las comisiones legislativas no analizan ni discuten esos informes, tampoco deducen responsabilidades y mucho menos emiten sanciones. Por tanto, la rendición de cuentas queda trunca, resulta fallida. Rendición de cuentas no es sinónimo de transparencia. La transparencia o puesta en la vitrina pública de la información relativa a la gestión gubernamental es sólo un componente de la rendición de cuentas, no el único. Artiga-

⁵⁵ Artiga-González, A., *op. cit.*, pp. 344, 345.

González asegura que en El Salvador la rendición de cuentas se asocia automáticamente a la corrupción y eso genera resistencia para su puesta en práctica. No obstante, la rendición de cuentas no necesariamente tiene que ver con fraude, sino también con ineficiencias que deben ser justificadas. El fin último de la rendición de cuentas es evitar los abusos de poder. Los regímenes autoritarios no poseen este tipo de controles. La rendición de cuentas es un rasgo constitutivo e infaltable de la democracia, “sin rendición de cuentas no hay democracia”⁵⁶.

¿Frente a quién se ejecuta la rendición de cuentas? Aquí Artiga-González distingue dos niveles: el vertical, ejercido por la ciudadanía en las elecciones; y el horizontal, ejercido por las instancias estatales destinadas a ello. Las elecciones son el sistema institucionalizado de rendición de cuentas a nivel vertical por antonomasia. Pero también hay otros recursos, como los monitoreos y observatorios, cuyos diagnósticos, aunque no sean vinculantes, pueden contribuir a apuntalar procesos de rendición de cuentas a nivel horizontal. Artiga-González fecha en 1994 la realización de las primeras elecciones libres en El Salvador. No obstante, para comprobar en qué medida las elecciones que se han llevado a cabo desde entonces en el país han operado como rendiciones de cuentas se necesitaría contar con estudios de opinión pública que indagaran por las causas del voto y no sólo por las preferencias partidarias de los electores. Ello es necesario porque el voto puede obedecer al disciplinamiento ideológico-partidario o a motivos afectivos más que racionales.

Respecto del plano horizontal, Artiga-González retoma la propuesta metodológica de O’Donnell (2001) para observar el entramado institucional encargado de la rendición de cuentas en El Salvador, el cual consta de: la Corte de Cuentas — regula la Hacienda Pública, la ejecución del Presupuesto General del Estado y la gestión económica—, la Fiscalía General de la República —trabaja en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y está a cargo de perseguir la corrupción—y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) —fiscaliza, tutela y promociona los Derechos Humanos . Tanto la Corte de Cuentas como la fiscalía comparten una mala

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 342-354.

imagen frente a la ciudadanía, debido a los nexos de los directivos de estas instituciones con los dirigentes de ciertos partidos políticos. Su rendimiento es, a criterio de Artiga-González, insatisfactorio. Un dato preocupante por él señalado es que tanto la PNC como la propia Fiscalía enfrentan demandas ante la PDDH, lo cual podría deberse a la pervivencia de prácticas autoritarias en las instituciones estatales, o a sesgos en los juicios de la PDDH.

Al final de la tercera parte de su trabajo, Artiga comenta las “condiciones necesarias” para el desarrollo de la democracia. A la luz de lo que distintos teóricos de la democracia han propuesto como esquemas acerca de cuáles deben ser estas condiciones, el autor establece sus indicadores en función de la participación y la rendición de cuentas. Para valorar cómo se encuentra El Salvador en materia de “condiciones necesarias” para la participación y la rendición de cuentas, Artiga acude a los resultados de otras mediciones que incluyen o versan sobre El Salvador (el Banco Mundial, PNUD, Freedom House, FUSADES, IUDOP, Latinobarómetro), arrojando información acerca de: *a)* el Estado de derecho; *b)* la ciudadanía económica; *c)* la ciudadanía social; *d)* las condiciones culturales y político-institucionales. Los resultados de estas mediciones ubican a El Salvador en posiciones medianas respecto de otros países en cuanto a su desempeño en estos rubros.

Hemos hecho este repaso recuperando elementos que nos permitan mostrar desde dónde observa Álvaro Artiga-González a El Salvador, cuál es su lente. La investigación del autor que hemos sintetizado apretadamente aquí busca explicar por qué la marcha del país hacia la democracia está rezagada, sin acudir a las visiones “maximalistas” de democracia. La transición política salvadoreña fue, a juicio del autor, una transición hacia el “elitismo competitivo”, es decir, hacia un tipo de régimen distinto al régimen militar anterior y compuesto por algunos rasgos democráticos, pero aún no democrático en todas sus dimensiones. Artiga-González ve las taras del avance de la democratización en El Salvador en el diseño institucional del régimen y en las deficiencias de su funcionamiento, evitando el argumento de la ausencia de igualdad a nivel socioeconómico.

De acuerdo con *Gobernabilidad y democracia...*, algunas limitaciones en el diseño institucional salvadoreño de cara al logro de una mejor y más amplia democracia serían: i) la normativa constitucional que faculta a los altos funcionarios públicos a generar iniciativas de ley e impide que otros sectores sociales, como la universidad pública, puedan generarlas; ii) la baja participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales; iii) que la nomenclatura para ocupar escaños en la Asamblea Legislativa esté formada por una lista cerrada, de modo que el electorado sólo pueda definir el partido por el que vota, pero no las personas por las que está votando; iv) que los consejos municipales de las alcaldías estén formados en su totalidad por miembros del partido que obtuvo la mayor parte de los votos, en lugar de estar compuestos por miembros de los diversos partidos, de acuerdo a los porcentajes obtenidos por cada partido en las elecciones; v) la ineficiencia mostrada por los organismos encargados de la rendición de cuentas. Ésta última es quizá la más grave, tomando en cuenta que en el modelo de Artiga-González la rendición de cuentas es fundamental para la democracia. Él mismo cuestiona: “no sé cómo podemos hablar de democracia si no tenemos la capacidad del *demos* de controlar a sus propios gobernantes”⁵⁷.

Que El Salvador se haya reinventado a sí mismo en materia institucional no garantiza que el desempeño de sus sistema político sea democrático. Lo es en algunos sentidos, pero no en otros. La corriente de la Ciencia Política que hemos estudiado aquí asegura que el carácter de la transición a la democracia define el carácter del régimen hacia el cual se transita. De ahí que Artiga-González vincule las taras del diseño institucional salvadoreño con el carácter eminentemente autoritario que imperó en El Salvador, no sólo durante los años ochenta, sino a lo largo de los 200 años que tiene de existir como nación.

La cultura política no cambia con la firma de los Acuerdos. Como decían los transitólogos: ‘el gran dilema de las nuevas democracias es construir democracia sin demócratas’. ¿Cómo se hace eso? Los salvadoreños hemos sido autoritarios desde [...] la colonia, la independencia, hay repúblicas autoritarias, regímenes autoritarios, los

⁵⁷ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

caudillos militares, la sociedad es autoritaria, todas las instituciones son autoritarias, la iglesia, la escuela, el ejército...

Hay una matriz cultural autoritaria, adecuada a un ejercicio político autoritario. ¿Cómo se cambia eso? Hay formas. Uno, que haya un contingente de gente que vivió en una democracia y viene y sustituye a todos esos e introduce en la sociedad unos patrones que en esa sociedad no existían. O se mueren todos los que estaban ahí y una generación nueva está siendo socializada en comportamientos y valores democráticos, los practican y simplemente por cambio generacional se produce el cambio cultural. Obviamente nada de eso ha pasado en el país. Entonces los mecanismos y los procedimientos democráticos están ahí como formalidades, con lo sustantivo que sería lo autoritario. Por eso se pervierte una Sala de lo Constitucional que debe velar por la constitucionalidad de las leyes, por el Estado de derecho como piso mínimo de un régimen democrático, resulta que termina obedeciendo al juego de los intereses de determinados actores. Es más, hasta se reparten la Corte [Corte Suprema de Justicia CSJ] y la Sala en términos de la representación de intereses. Hay una Corte, hay una separación de poderes, hay un diseño institucional que aparece en las democracias realmente existentes, pero que no funciona como funciona allá, probablemente porque la matriz autoritaria es la que llena de contenido. Entonces, cuando hablamos de transición a la democracia ¿de qué estamos hablando?⁵⁸

La matriz autoritaria enraizada en la historia y la idiosincrasia salvadoreñas estaría imposibilitando la construcción de la democracia en el país. Ni siquiera lo que se ha avanzado en materia de diseño institucional es atribuible a los actores políticos que jugaron papeles protagónicos durante la fase de la transición, en la década de 1980. Ni el proyecto político del FMLN, ni el de ARENA, ni el de los Estados Unidos tenían por horizonte la construcción de la democracia en El Salvador.

Es el forcejeo de los diversos actores el que los va obligando a modificar sus posiciones originales, hasta que llegan a un punto, digámosle así, de equilibrio, en donde todos se sienten satisfechos en donde están, que es el de los Acuerdos, pero no es que lo buscaran. En todo caso, si quisiéramos hablar de que eso es democracia, tendríamos que hablar de que la democracia llega a El Salvador por *default*, como un resultado no deseado de la acción de los actores. Ninguno en sus principios buscaba la democracia, buscaban eliminar al otro a toda costa. La imposibilidad de eso, más la imposibilidad de generar riqueza de manera sostenida, más el fin de la Guerra Fría, más los intereses que puedan tener el Grupo de Amigos y el Grupo de Contadora en la región, llevan a abrir la coyuntura que facilita la negociación y el pacto de Acuerdos en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala⁵⁹.

⁵⁸ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

⁵⁹ Entrevista, San Salvador (06/05/09).

5.2 Latinoamericanismo versus politicismo. El otro abordaje

Con lo dicho hasta ahora hemos querido exponer un punto de vista dominante dentro del debate académico en torno del proceso político salvadoreño. Frente a él proponemos, un enfoque histórico-filosófico que, tomando en cuenta los aportes y aciertos de la politología, los trascienda en la búsqueda de una mirada más abarcadora. Es justo dejar consignado aquí algo que quedó claro durante el intercambio que sostuvimos con él: Artiga-González rechaza los abordajes totalizantes de la realidad. Primero, porque considera que tienden a ser teleológicos y a juzgar *lo que es* a partir de *lo que debería ser*; a su juicio el proceso debería invertirse. Segundo, porque la totalidad podría incluso no existir, “eres tú la que dice que hay una totalidad, pero en realidad lo que hay son todos estos procesos individuales, probablemente conectados”, nos dijo. Si bien entre su interpretación y nuestro balance de la transición salvadoreña hay puntos de contacto y coincidencias, de su politicismo anglosajón y de nuestra formación filosófica, histórica y latinoamericanista se desprenden dos modos diferentes de leer la historia reciente de El Salvador. Lo propio del institucionalismo salvadoreño es abstraer los aspectos eminentemente políticos y explicar sus dinámicas y desarrollos. Nuestra perspectiva aspira a ofrecer un “cuadro de la transición” que evidencie los procesos políticos locales en su relación con los procesos económicos y culturales a escala mundial.

Compartimos con Artiga-González la afirmación de que el 15 de octubre de 1979 se produjo la ruptura definitiva del modelo de dominación oligárquico-militar que había predominado hasta entonces. Por eso ubicamos en esa fecha el inicio de la transición política salvadoreña. Acordamos también con su caracterización de esa transición como un proceso en el que convivieron dos situaciones: la guerra civil y la celebración periódica, ininterrumpida y cada vez más tecnificada de elecciones. Pero diferimos de su aseveración de que las causas del conflicto se remiten exclusivamente a lo político y nada tienen que ver con lo socioeconómico. Contemplando también el aporte de Ricardo Córdova Macías *et al*, del cual hemos nutrido este trabajo, y considerando que ambos autores comparten un concepto ‘politicista’ e ‘institucionalista’ de democracia,

explicitamos que no creemos posible analizar la transición política salvadoreña al margen de los cambios radicales que ocurrieron en el contexto internacional al finalizar el siglo XX. Y esos cambios tuvieron como eje la recomposición de la hegemonía estadounidense en torno del proyecto económico neoliberal. Por eso el trabajo de Córdova Macías *et al* es útil, pero insuficiente.

Nuestras diferencias con los planteos de los institucionalistas salvadoreños podrían resumirse en los siguientes puntos: i) no compartimos la afirmación de que la política pueda estudiarse al margen de la economía, porque la evidencia histórica arroja suficientes pruebas acerca de cómo los intereses económicos condicionan las decisiones políticas, lo cual ha sido y es particularmente patente en El Salvador; y ii) consideramos incompleto el estudio de los procesos políticos locales sin tomar en cuenta los vínculos geopolíticos y geoestratégicos entre los países. Invisibilizar el carácter inequitativo de las relaciones Norte-Sur impide la comprensión cabal de los obstáculos para la construcción de la democracia que enfrentan los países de nuestro continente.

No concordamos con la afirmación de Artiga-González sobre la inexistencia de demócratas en El Salvador ni con su convicción en que se necesitaría que un contingente de “inmigrantes demócratas” sustituyera a los actores políticos salvadoreños para fundar una democracia auténtica. Más bien consideramos que las condiciones históricas en las que se ha desarrollado la sociedad salvadoreña (entre las que se cuenta, ciertamente, la terquedad antidemocrática de las élites económicas) y la relación de El Salvador con Estados Unidos pusieron cortapisas a las aspiraciones de democracia sentidas y reclamadas por las mayorías populares en diferentes momentos del Siglo XX. La democracia no es una cualidad biológica de los individuos que venga inoculada en su estructura genética. Tampoco es una suerte de “estado puro” de las sociedades industrializadas, pues en la historia de éstas puede verse también la conflictividad de la construcción democrática y la pervivencia de rasgos autoritarios, no solo en su interior, sino también en su modo de relacionarse con los países periféricos. No existe un único camino hacia la democracia. Los recorridos históricos hacia ella son

tan diversos como las sociedades que los emprenden y turbulentos en magnitudes proporcionales a los obstáculos interpuestos para su construcción. En ese sentido, siguen siendo vigentes las afirmaciones esgrimidas por Edelberto Torres-Rivas a inicios de la década de 1980, dentro de su reflexión sobre la violencia que ha acompañado a la construcción de la democracia en Guatemala:

Si la experiencia de otras sociedades no bastara, la de Centroamérica es suficiente para vigorizar la convicción política —y también el razonamiento teórico— de que *la democracia representativa o democracia burguesa no es un resultado históricamente necesario del desarrollo capitalista. Es solo una posibilidad social en el espacio de coyunturas políticas que pueden ampliarse o fracasar.* En el seno de una cultura política autoritaria se explica que las formas de vida democráticas aparezcan siempre como objetivos de troyanos y troyanos. Unos desde el poder, posponiendo su utilización a la espera de una madurez cívica popular que no reconocen. Otros desde la oposición, proponiendo su aplicación para alcanzar el poder que se escapa [...]

Es en este cuadro de tensiones, conflictos, violencia y muerte que el problema de la democracia burguesa debe considerarse. Sabemos ya que la democracia no es solo el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas; tampoco la presencia mayoritaria de un proletariado industrial la determina o garantiza. *Como estructura política de relación entre clases, la democracia es siempre resultado de luchas sociales que terminan por imponerla. La burguesía no la otorga como concesión graciosa ni como característica inherente a su poder de clase. Se construye la convivencia democrática en un proceso siempre inédito. No siendo la democracia la única forma del poder capitalista, las luchas por implantarla constituyen hoy en Centroamérica una de las reivindicaciones más importantes y más subversivas. Las fuerzas populares están experimentando que frente al 'estilo' de dominación imperante, las batallas por la democratización de la vida política forman parte de un programa de renovación y progreso social*⁶⁰.

La construcción de la democracia política en El Salvador se enmarca dentro del proyecto de recomposición hegemónico de Estados Unidos, articulado en torno de la implementación del modelo neoliberal a escala mundial. La habilidad del partido ARENA, y concretamente de la *aristocracia financiera* que asumió el control de esa institución, consistió en subirse en la cresta neoliberal para articular desde allí la reconfiguración de la hegemonía económica, política y cultural de una élite que dejó de ser la agroexportadora y pasó a ser financiera. Nada de esto se menciona en los estudios sobre institucionalidad democrática emprendidos por Artiga-González y por

⁶⁰ Torres-Rivas, E., “Vida y muerte en Guatemala. Reflexiones sobre la crisis y la violencia política”, en: *Centroamérica en crisis, op. cit.*, pp. 29, 53, 54. Las cursivas son nuestras.

Córdova Macías *et al.* Es llamativo que los politólogos salvadoreños eviten sistemáticamente aludir a la política económica implementada durante la posguerra y referirse al neoliberalismo, mientras economistas como Alexander Segovia y Carlos Acevedo —hoy en día funcionarios del gabinete del presidente Mauricio Funes— no deslinden sus análisis sobre los desafíos que en materia económica adquirió El Salvador de posguerra de la dinámica en pro de las conquistas democráticas. Los institucionalistas evaden el tema económico, pero los economistas de la transición salvadoreña le dan centralidad al problema político. Como referentes teóricos, los politólogos adoptan a pensadores anglosajones y europeos. Asimismo, como modelos de democracia reconocen las que funcionan en las grandes potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. Sin embargo, en sus análisis no consideran el contexto mundial en el que las instituciones se desenvuelven y observan el problema de la inequidad estructural como un indicador más entre los otros, como parte de las “condiciones necesarias” para el establecimiento de democracias políticas satisfactorias. ¿Será que las taras del diseño institucional tienen tan poco que ver con el modelo económico? ¿Será que las dificultades para consolidar la democracia en El Salvador tienen tan poco que ver con la profunda antidemocracia imperante en el orden internacional?

Compartimos la afirmación de los teóricos que, como Atilio Borón, ven en América Latina el lugar en el que al menos dos proyectos distintos de democracia se encuentran en pugna. Por eso la disputa entre “minimalismo” y “maximalismo” es una cuestión de primera importancia para el presente y el futuro del subcontinente. ¿Cuál es el proyecto democrático dominante? La obra de Artiga-González permite concluir que el minimalismo, con todos sus matices y gradaciones, es el que está marcando la parada. No porque las democracias latinoamericanas funcionen ya como las democracias “modelo” del Primer Mundo, sino porque en los discursos oficiales ese “modelo” no se pone en duda: ese es el régimen al que deben aspirar nuestras sociedades. Hacia esa dirección se mueven hoy en día las democratizaciones. De ese tipo de democracia habla Artiga-González cuando afirma que “el mundo es hoy más

democrático que hace 25 años”⁶¹. Por eso no hay investigación financiada por el PNUD, el Banco Mundial, el BID, etc., que no incorpore al grueso de los países de América Latina como objetos de análisis. En el caso del Banco Mundial, Artiga-González mismo señala que la razón de ser de ese tipo de estudios es la necesidad de saber a qué países otorgar préstamos y a cuáles no. Y también alude al hecho de que del PNUD provengan los fondos para su estudio sobre gobernabilidad y democracia en El Salvador. ¿La relación entre democratización y proyecto económico impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales puede ser más clara?

El aparataje conceptual y metodológico del que da cuenta Artiga-González y al cual él contribuye a ensanchar se encuentra atravesado por un ideal que es la construcción de una democracia procedimental eficiente. Nuestro estudio de sus planteos nos permite concluir que, aunque rechace sistemáticamente la teleología, su concepción de democracia también es teleológica, pues no sólo adopta como modelo a las “democracias realmente existentes”, sino que defiende abiertamente una “utopía democrática”. En las interpretaciones “sociológicas” de la transición salvadoreña él cuestiona la persistencia de un ideal, de un “querer ser”, que impide una lectura correcta de los hechos. Pero en su defensa de la democracia y en su proceder metodológico con base en un *continuum*, ese “querer ser” es más que evidente, toda vez que el final del *continuum* es un *telos*, es decir, un horizonte establecido en el presente como el futuro deseable. Ese horizonte es el ideal democrático que él adscribe.

No pensamos, como él, que respecto de este asunto exista escisión posible entre concepto y fenómeno. El concepto determina al fenómeno, porque de hecho el fenómeno se construye conceptualmente. No existe una democracia *per se*, objetiva, a la que podamos *medir*, al margen de nuestra idea de ella. Sólo podemos calificar la democracia, y más aún medirla, con base a una idea previa de cómo debe de ser ésta. Nadie que defienda la democracia puede negar que posee un ideal de sociedad. Desde el punto de vista ético, la democracia es y ha sido la aspiración de organizar

⁶¹ Artiga-González, A., *op cit.*, p. 450.

políticamente a la sociedad de un modo justo. Pero existen acepciones diversas para el concepto de justicia. Las democracias “realmente existentes” ponen de manifiesto el predominio de una idea de justicia accesible para ciertas élites, no para la mayoría de los seres humanos.

Frente a la interpretación de Artiga-González y haciendo pie en esa contraposición entre maximalismo y minimalismo a la que aludimos en el capítulo I, proponemos como categorías de análisis de la transición política salvadoreña a la *democracia escéptica* y la *democracia utópica* como dos modos de entender y hacer la democracia. En el primero predomina lo formal-procedimental, mientras que el segundo pugna por la consecución de la democracia en su acepción más amplia, incluidos los factores socioeconómicos. En El Salvador, la confrontación entre estas dos tendencias adquirió la gravedad de una prolongada guerra civil. Pero elementos externos, relativos al orden internacional y a la política exterior estadounidense hacia América Central, combinados con elementos internos, propios de la crisis de hegemonía que caracterizó al país durante la década de 1980, fueron empujando el proceso hacia la configuración de una institucionalidad que tuvo por modelo a la democracia procedimental, a cuya estructuración se incorporaron, contribuyendo a perfilarla, el partido ARENA y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La tensión dialéctica entre ambas concepciones de democracia se resolvió durante la posguerra a favor de la *democracia escéptica*, sin que por ello la *utópica* dejara de existir ni de hacerse presente.

¿Por qué *escéptica* y *utópica*? El proyecto neoliberal como eje vertebrador del Nuevo Orden Mundial reeditó y puso en boga una concepción procedimental de democracia que fue impuesta por los países del Norte a los del Sur. Los ‘transitólogos’ se dedicaron a estudiar el tránsito desde regímenes autoritarios hacia democracias electorales eficientes. Por otra parte, ciertos actores políticos y ciertos pensadores han pugnado por introducir valores de fondo en el seno del procedimentalismo. La concepción transitológica de democracia es escéptica desde el punto de vista teórico porque prescinde de la ética y soslaya la discusión en torno de los contenidos morales

de las decisiones políticas. Y lo es también desde el punto de vista práctico, porque está sostenida sobre un orden mundial autoritario que la supedita y restringe a los intereses del mercado. Se exige democracia desde la antidemocracia. Se invita a la democratización partiendo de la incredulidad en la instauración de la democracia. *Democracia escéptica* significa democracia sostenida sobre la incredulidad en sí misma. No se democratiza para que haya más democracia, sino para conservar el autoritarismo mundial reinante. No se promueve la democracia en función de la liberación de la sujeción a la que se encuentran sometida la mayoría, sino con el objeto de mantener a raya a esa mayoría para que quienes se apropian de la riqueza puedan continuar disfrutando impunemente de ella.

Atilio Borón hace hincapié sobre esta contradicción en varios apartados de su *Estado, Capitalismo y Democracia*. A modo de ejemplo: “La recuperación democrática de nuestra región tropieza con un mercado mundial cuyos centros dominantes se han vuelto más escépticos acerca de las virtudes de la democracia en sus propios países, y bastante indiferentes cuando no disimuladamente hostiles ante los intentos de instituirlos en las sociedades dependientes”⁶².

El antagonismo entre mercado y democracia convierte la lucha por la ampliación democrática en una lucha con potencial revolucionario, en la medida en que los pueblos sean capaces de poner en manos de sus representantes las herramientas que los procedimientos democráticos les ofrecen para decidir sobre sus destinos. A eso nos referimos con *democracia utópica*, a la búsqueda permanente de los movimientos populares de distinto tipo por usar los instrumentos democráticos a su favor y para su beneficio. Como se trata de una lucha que, pese a sus costos y sacrificios, no ha alcanzado sus metas, la veta utópica se mantiene vigente. Las aspiraciones de más y mejor democracia continúan. De ahí que, tal como lo señala Borón, la sola palabra *democracia* resulte subversiva para las élites económicas reaccionarias. De ahí también la insistencia de este autor en recuperar los planteos de Rosa Luxemburgo que vinculan democracia con socialismo, en donde socialismo equivale a profundización radical de la

⁶² Borón, A., *op. cit.*, p. 247.

democracia, a democracia ligada a distribución equitativa del ingreso y, por tanto, a revolución.

Hinkelammert sintetiza con rotundidad la situación actual de la democracia, sin claudicar, sin embargo, a la necesidad que tenemos de ella. La tensión dialéctica entre los dos modos de concebir la democracia a la que hemos aludido se expresa bien en la reflexión siguiente:

La teoría de la democracia hoy dominante es la de Schumpeter, Huntington, Downs y Hayek. Democracia allí es un sistema de dominación que hoy ha sido impuesto como tal. Es un mercado de votos que respalda el mercado de bienes y servicios. Elegimos a aquellos que nos dominan. La democracia como se nos presenta hoy tiene mucho parecido con el mercado, y ambos tienen valores, éticas, pero son éticas de procedimiento; por tanto, éticas funcionales [...] Asegurar la democracia sigue siendo importante, porque la lucha por el control de los poderes —de los democráticamente elegidos— y por la introducción de valores humanos y de una sociedad más justa presupone esta misma democracia. Sin embargo, esta lucha no se puede garantizar por ‘democratizaciones’, sino solamente por la introducción de estos valores en las estructuras del poder democrático, lo que es una lucha por el poder. Por eso no conviene hablar de la búsqueda de una sociedad más justa con el término ‘democratización’⁶³.

Llegados a este punto, es pertinente traer a cuenta el señalamiento de Artiga respecto del carácter autoritario de la idiosincrasia salvadoreña. Señalamiento en el que coinciden —como se mencionó en el primer capítulo— otros teóricos de la democracia en América Latina que encuentran en el autoritarismo uno de los principales obstáculos para el florecimiento de sistemas políticos democráticos en nuestro subcontinente. No se trata, pues, de sostener que existen *demócratas escépticos* ‘puros’ enfrentados a *demócratas utópicos* ‘puros’, sino de tomar la contraposición entre *democracia escéptica* y *democracia utópica* como pauta para leer la transición política salvadoreña, sin perder de vista que dicha transición ocurrió dentro de un contexto profundamente autoritario y antidemocrático en el que, por lo mismo, se mantuvo latente, palpitante e hizo explosión la necesidad histórica de una mayor

⁶³ Hinkelammert, F., “Democracia no es igual a justicia”, en *Solidaridad o suicidio colectivo*, Universidad de Granada, 2005, pp. 123-125.

inclusión de los excluidos en los frutos del trabajo, en el incremento de la producción y en la conducción de los destinos del país.

Esta propuesta analítica no impide reconocer que también al interior de las distintas fuerzas políticas salvadoreñas la pugna entre la democracia escéptica y la utópica ha estado y continúa estando presente. Quizá una de las metamorfosis más interesantes de cuantas caracterizan a El Salvador contemporáneo sea el desplazamiento de las posiciones de los actores políticos hacia planteos sustancialmente distintos de sus discursos originales, fruto de pugnas con los demás actores, pero también de forcejeos internos respecto del sistema socio-político deseable para el país y del modo idóneo de construirlo. Dichas modificaciones ocurrieron como resultado de procesos complejos, en cuya explicación los observadores no estamos de acuerdo. De ahí la relevancia de poner de manifiesto las distintas posiciones.

Nuestra tesis es que a lo largo de las tres últimas décadas, pero con especial énfasis durante la década de 1990, en El Salvador fue conformándose un nuevo modelo de dominación que pasó de ser oligárquico-militar a adquirir la forma de una *democracia neoliberal*. Es decir, de un tipo de democracia descreída y desencantada que dio lugar a un nuevo aparato político-institucional. Esa democracia escéptica encontró un permanente cuestionamiento por parte de otro tipo de democracia: la *democracia utópica*. Esta última condensó y condensa el anhelo de apertura política históricamente negado por las clases dominantes a las mayorías populares y se expresa también en luchas específicas, como la llevada a cabo por las mujeres en aras de ganar espacios y poder político en escenarios tradicionalmente androcéntricos. La extrema polarización política, las crisis internas y las fracturas experimentadas por el FMLN y ARENA —en las cuales se puso de manifiesto el autoritarismo imperante al interior de ambas instituciones partidarias— y la emergencia de un movimiento feminista cuestionador de la centralidad masculina del poder son quizá los hechos que en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz visibilizan mejor cómo el problema de la democracia

continuó enfrentando a los actores políticos entre sí y cuestionándolos al interior de su propia institucionalidad.

La lectura propuesta por Artiga-González del desenlace del conflicto armado como el inicio de un *elitismo competitivo* simplifica el proceso sociopolítico salvadoreño porque niega la participación del pueblo, tanto en el surgimiento y consolidación del movimiento revolucionario que durante los ochenta materializó la lucha por la utopía democrática haciendo posible el sostenimiento de una guerrilla crecientemente profesionalizada, como en el fortalecimiento del derechista partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que, haciendo gala de una particular habilidad y capacidad de maniobra, llegó a convertirse en el partido oficial durante las dos largas décadas de la posguerra, legitimado sobre la democracia electoral, escéptica. Escepticismo y utopía son, pues, dos polos analíticos que surgieron de esta investigación, dando cabida a futuras indagaciones.

Conclusiones

En su prólogo a la polémica obra de Horacio Castellanos Moya, *El Asco*, Roberto Bolaño asegura que, tras la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ingresó de lleno al capitalismo salvaje. En este trabajo hemos procurado explicar por qué y de qué manera ocurrió esa inmersión. Nuestra conclusión más relevante es que la transición política salvadoreña coincidió con la configuración del Nuevo Orden Mundial, es decir, con el predominio de la unipolaridad imperialista y el replanteamiento de un nuevo modelo de dominación que, a través del neoliberalismo, consiguió asentarse en prácticamente toda América Latina y en buena parte de los demás continentes del globo terráqueo. El éxito del proyecto neoliberal del partido ARENA en El Salvador se asienta sobre esa transformación del mundo ocurrida a finales del siglo XX.

El principal propósito de esta investigación fue comprender el proceso político salvadoreño durante el período 1979-2009, es decir, durante las etapas bélica y posbélica a través de las cuales ha transitado recientemente El Salvador, experimentando transformaciones notables. Haber adoptado la transición política como eje de análisis nos condujo a la discusión que en torno de los conceptos *transición* y *consolidación de la democracia* sostienen politólogos, historiadores, filósofos y científicos sociales latinoamericanos, entre los cuales pueden distinguirse dos grandes posiciones: el ‘minimalismo’, defensor de la democracia procedimental, representativa, política o formal, y el ‘maximalismo’, defensor de la democracia sustantiva, socioeconómica, integral. Dar cuenta de la historia política reciente de El Salvador implicaba también dar cuenta de ese debate, porque las transformaciones de las que ha sido objeto el pequeño país centroamericano están atravesadas por el predominio de la concepción de democracia minimalista en el ámbito centroamericano, latinoamericano y mundial.

Ese predominio de un concepto de democracia ligado al funcionamiento eficiente de los mecanismos electorales y las instituciones gubernamentales está, a su vez, ligado al predominio del neoliberalismo como eje vertebrador de la recomposición

de la hegemonía de las grandes potencias y de Estados Unidos en particular, tras el derrumbe del mundo socialista. De ahí que autores como el politólogo cubano Roberto Regalado afirmen la existencia de una *democracia neoliberal*, sustentada sobre un formalismo institucional que termina siendo funcional a la ‘*financierización*’ de la economía, propia del neoliberalismo. Aludir a la funcionalidad de la democracia formal respecto del modelo neoliberal puede parecer una obviedad ante los ojos del lector que haya seguido de cerca los derroteros enfrentados por América Latina a lo largo de las tres últimas décadas. Si hemos dedicado tres capítulos de este trabajo a reconstruir la historia reciente de El Salvador para evidenciar eso que parece obvio, es porque en la actualidad un enfoque dominante en el estudio de la transición política salvadoreña, el enfoque institucionalista, propone una lectura que omite la alusión a esos nexos entre procesos políticos y procesos económicos.

Con dos de las más recientes investigaciones provenientes del institucionalismo salvadoreño hemos establecido nuestro diálogo: *Gobernabilidad y democracia en El Salvador. Bases teóricas y metodológicas para su medición*, de Álvaro Artiga-González, y *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado*, específicamente la parte dedicada a El Salvador elaborada por Ricardo Córdova Macías, *et al*, y titulada “La contribución del proceso de paz a la construcción de la democracia en El Salvador” (1992-2004), ambas obras publicadas en 2007. De éste último texto recuperamos información valiosa para nuestra reconstrucción histórica. El estudio más detenido del primer texto nos permitió explicitar los supuestos teóricos, metodológicos y empíricos con base en los cuales trabaja el institucionalismo, para terminar puntualizando por qué razones no los compartimos y por qué proponemos otra lectura, filosófico-histórica y latinoamericanista, de la transición política salvadoreña.

Los abordajes institucionalistas de la transición no nos resultan satisfactorios, porque ofrecen balances del desempeño de las instituciones democráticas salvadoreñas sin aludir, o mencionando superficialmente, el trasfondo histórico de ese entramado institucional y sin hacer mención del contexto económico e internacional en

el que se inscribe el accionar de las instituciones. Esto es así porque se adoptan los países industrializados del orbe, que poseen democracias políticas estables, como modelos del funcionamiento democrático, pero no se analizan las relaciones antidemocráticas que caracterizan el intercambio entre las grandes potencias y los países periféricos. La valoración del rendimiento institucional consiste, básicamente, en analizar cuánto las instituciones democráticas se han acercado a esos modelos considerados óptimos y cuánto les falta aún por perfeccionarse. Frente a esta lectura, proponemos la expuesta en este trabajo en el cual se ha buscado dar cuenta de las peculiaridades de la transición política en El Salvador, insistiendo en la importancia de dotar de hondura histórica al análisis y procurando no perder de vista la predominancia de los nexos entre la política y la economía, y entre los procesos locales, regionales y mundiales.

Nuestro marco interpretativo parte de la convicción en que la ciencia en general, y las ciencias sociales en particular, se encuentran íntimamente vinculadas con la realidad social de la cual emergen y frente a la cual reaccionan. Las ciencias son una actividad más de la sociedad, que surge en su seno y responde a determinados intereses. De ahí la importancia de develar los postulados ideológicos que subyacen tras las apuestas epistémicas. El minimalismo aspira a una democracia “bien engrasada”, que quepa dentro de los límites del capitalismo. El maximalismo se encuentra restringido dentro de esos límites, pero vislumbra un horizonte más lejano, aun indefinido, pero más justo. Aunque el concepto de justicia continúe siendo una discusión pendiente, no zanjada.

Haber constatado que las democratizaciones en América Latina en general y en Centroamérica en particular se han encontrado condicionadas por el replanteamiento del orden mundial durante la pos Guerra Fría nos llevó a reafirmar el carácter complejo y multifacético de la realidad. El complejo entramado de aspectos que se determinan entre sí para producir lo que aprehendemos como “real” obliga al abordaje de los fenómenos desde diversos lentes disciplinarios. Si entre las ciencias naturales las fronteras se van volviendo cada vez más borrosas, cómo no sucederles lo mismo a las

ciencias humanas, destinadas a inteligir a un todo social que nos determina y condiciona históricamente. Afirmar un corpus de conocimiento que pueda ir más allá del corpus social que lo hace posible y lo instrumentaliza no parece posible. ¿Se puede separar el ámbito de lo político del ámbito económico y del ético, sin que la política pierda su razón de ser? ¿Tiene sentido producir conocimiento acerca del comportamiento político sino es en función del ejercicio de la política? ¿Existe la objetividad en el estudio de la política?

Marx señaló cómo el fetichismo de la mercancía es una ilusión basada en las características reales del intercambio de mercancías. La ilusión se sostiene porque el intercambio de mercancías es necesario para la sociedad. Del mismo modo, la ilusión de la democracia se sostiene porque las sociedades necesitan encontrar mecanismos para canalizar las diferencias, gestionar los conflictos y ponerse de acuerdo a la hora de decidir en función del conjunto. El fetichismo de la mercancía y el fetichismo de la democracia política son constructos ideológicos, elaborados históricamente en función de intereses particulares. El que las transiciones a la democracia en los países periféricos se encuentren condicionadas por los países poderosos del orbe no exime de la necesidad de resignificar la democracia, dotarla de contenido y redireccionarla.

El neoliberalismo y su particular concepto de sociedad mundial, la *democracia neoliberal*, constituyen hoy las prácticas discursivas, políticas y económicas dominantes. Pero, al igual que sucede con la fetichización del dinero, se trata de discursos y prácticas construidos socialmente, no de hechos naturales contra los cuales no se pueda combatir. Y una de las armas con las que es necesario llevar a cabo ese combate es la razón, una *razón sentiente*, afectada, grave, comprometida. Contra el cinismo de la propuesta antropológica y sociológica del proyecto neoliberal, que levanta los hombros frente a la pauperización de la mayoría de la población mundial queriendo decir, y diciéndolo de hecho: “hay hambre, hay miseria, hay enfermedad, hay muerte ¿Y QUÉ!?”, es preciso continuar insistiendo en el sinsentido de la subordinación frente al mercado y en la irracionalidad de un sistema mundial autoritario, autodestructivo y cruel.

El hecho de que sostengamos una posición crítica respecto de los procesos de democratización latinoamericanos no nos habilita para invalidar, sin más, a la democracia como mecanismo de gestión política y social. Al contrario, pensamos que el problema de la democracia no se resuelve descalificándola de lleno. Hemos considerado necesario trazar las coordenadas socioeconómicas en las cuales encuadrar a la transición a la democracia, tal y como ésta se ha venido dando en América Latina en general y en El Salvador en particular. Llevar a cabo este ejercicio nos permitió concluir que la democracia electoral ha sido funcional al neoliberalismo.

Concluimos también que, en virtud de esa relación, los discursos que reivindican la democracia con frecuencia lo hacen en aras de negar su práctica efectiva y de impedir su profundización. Pero, ¿cómo erigir democracias sobre la base de contenidos éticos? ¿En qué consistiría profundizar la democracia? Bajo el argumento de que el funcionamiento democrático es un valor en sí y un logro de la civilización se nos invita a aceptar la democracia política, electoral, como el mejor de los sistemas posibles. Pero si ese sistema es funcional respecto de una estructura de poder de suyo autoritaria, inhumana y autodestructiva, ¿cómo refundar la democracia? ¿Qué tipo de renovación cabe para ella? ¿Existe otra democracia posible?

Y es que la democracia no puede ser sólo un predicamento al que se alude en abstracto. Hacer democracia exige diseñar e implementar procedimientos por medio de los cuales ésta pueda operar. No se equivocan los politólogos cuando enfatizan en la importancia de los procedimientos en los procesos de democratización. El politólogo salvadoreño Ricardo Córdova Macías expresa bien esto cuando, interrogado acerca de la pugna entre “minimalismo” y “maximalismo” aclara que, pese a sus diferencias, ninguna de las dos posiciones niega la necesidad de establecer mecanismos democráticos¹. No se trata, pues, de renunciar a la búsqueda de democracia, sino de cuestionar los supuestos éticos y epistemológicos sobre los que ésta ha pretendido fundarse y de develar sus nexos con el poder, precisamente porque de esos supuestos y de esos nexos provienen sus límites.

¹ Entrevista concedida para esta investigación, San Salvador, 16 de abril de 2009.

Al proponer un modo de organización económica, el proyecto neoliberal lleva implícito un modelo de sociedad y un modelo de ser humano, aunque no los asuma. “Y de allí que haya, por consiguiente, un sistema mundial de comunicación, un sistema mundial de estilos de vida y, desde luego, un sistema político mundial: el sistema de la democracia representativa, una manera mundial de entender y aceptar la actividad del hombre, el hombre sin transcendencia, el hombre como sujeto y objeto de las apetencias de la vida ordinaria, el hombre en el afán de lucro y disfrute, el hombre que encuentra en ello el principio y fin de su razón de ser”².

Un cierto triunfo del discurso posmoderno, que se propagó tan rápidamente como la ola neoliberal y paralelamente a ella, proveyó de herramientas discursivas al fracaso de los ideales de transformación, al tiempo que se produjo la solidificación del proyecto capitalista y se impusieron sin cortapisas sus tradicionales valores: el individualismo, la búsqueda de ganancia a corto plazo, la ausencia de solidaridad, la insensibilidad frente a las carencias y desgracias ajenas, la acumulación de objetos, la mercantilización de todo lo que se necesita para vivir y, por supuesto, de la democracia representativa. En ese contexto, la transición a la democracia ha servido de catalizador político- social, ubicándose a caballo entre el desencanto respecto de los proyectos emancipatorios y la reedición de un capitalismo que ha mostrado durante las últimas décadas sus garras más fieras.

Ahora, como antes, la promesa de democracia encubre el afán de desigualdad. Pero ahora se trata de una *democracia escéptica*, que se niega a sí misma, inauténtica. Se defiende una democracia sostenida sobre una institucionalidad homogeneizante, restrictiva, colonizada, que asfixia la creatividad de los actores locales para pensar formas de organización más compatibles con las propias idiosincrasias y más asertivas respecto de las propias problemáticas. No se democratiza para que haya más democracia, sino para conservar el autoritarismo mundial reinante. No se promueve la democracia en función de la liberación de la sujeción a la que se encuentran sometida la

² Maza Zavala citado en Ibisite, F. J., “Neoliberalismo y globalización”, *op. cit.*

mayoría, sino con el objeto de mantener a raya a esa mayoría para que quienes se apropian de la riqueza puedan continuar disfrutando de ella.

Retomando el debate en torno de la democracia que divide a los teóricos de América Latina entre “maximalistas” (quienes abogan por un concepto de democracia que incorpore el aspecto socioeconómico) y “minimalistas” (quienes para definirla la circunscriben a los aspectos estrictamente político-institucionales), y abrevando de fuentes filosóficas que han abordado el problema de la democracia insistiendo en la problematización ética que ésta entraña, extraigo de mi investigación dos conceptos que, a mi juicio, permitirían continuar profundizando en el estudio de la democratización en El Salvador. La *democracia escéptica*, electoral, formal y, desde los ochenta en adelante, neoliberal, se encuentra permanente cuestionada por la *democracia utópica*, sustantiva, socioeconómica, integral. Mi hipótesis es que la transición política en El Salvador puede leerse como el resultado de la tensión dialéctica entre ambas, de tal suerte que la *democracia utópica* ha podido ir ensanchando, lenta, contradictoria y no siempre conscientemente, los resquicios dejados por la *democracia escéptica*, a favor de ciertas demandas sentidas por diversos sectores representados en el movimiento popular.

De esas claves analíticas podría emerger la explicación del triunfo electoral del FMLN en el 2009 y podrían contribuir también a explicar el nacimiento de nuevos actores políticos que rechazaron lo que consideraron el “electorerismo” del FMLN y rompieron por izquierda con él, o del contestatario y autónomo movimiento feminista que nació cuestionando las prácticas autoritarias que perviven en el seno efemenista. La extrema polarización política, las crisis internas experimentadas por el FMLN y ARENA, la escisión entre el FMLN y muchas de sus bases de apoyo durante la posguerra y la emergencia de un movimiento feminista cuestionador de la centralidad masculina del poder son quizá los hechos que en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz visibilizan mejor cómo el problema de la democracia continuó enfrentando a los actores políticos entre sí y cuestionándolos al interior de su propia institucionalidad.

Si Artiga-González propone un *continuum* que va de menos a más democracia, nosotros proponemos una relación oscilante y conflictiva entre dos polos. Hay momentos en los que la balanza oscila para un lado, hay momentos en que oscila para el otro, pero ninguno desaparece, ambos van dando de sí y ese dar de sí da lugar al desenvolvimiento del proceso. Desde el pensamiento utópico, desde nuestro deseo, la democracia debe ser vista como medio y no como fin, como un instrumento de los actores del campo político para usarse de acuerdo con las necesidades domésticas, no como modelo impuesto por los países del norte a los cuales tenemos que calcar. Si la democracia es un medio, el término transición a la democracia es incorrecto, porque la democracia no es un lugar al que se pueda acceder, sino un instrumento con el cual podría conducirse la sociedad hacia mejores terrenos.

Fuentes

Bibliografía

Ardao, Arturo, *América Latina y la latinidad*, CCyDEL-UNAM, México, 1993.

Argueta, Manlio, *Un día en la vida*, 8va edición, EDUCA, San José, 1996.

Arias Gómez, Jorge, *Farabundo Martí. Esbozo biográfico*, EDUCA-Centroamérica, 1era edición 1972.

Artiga González, Álvaro, *La Política y los sistemas de partidos en Centroamérica*, FUNDAUNGO, San Salvador, 2000.

Artiga González, Álvaro, *Gobernabilidad y democracia en El Salvador. Bases teóricas y metodológicas para su medición*, PNUD-UCA Editores, San Salvador, 2007.

Ayalá, Berne, *Al tope y más allá. Testimonio de la Guerrilla Salvadoreña desde la Ofensiva de 1989 a los Acuerdos de Paz*, 1º Edición, Sombrero Azul, San Salvador, 1996; 2º Edición, Sombrero Azul, San Salvador, 1997; 3º Edición, Cipitío Editores, San Salvador, 2005.

Ayalá, Edwin Ernesto (Berne), *Las copas del castigo*, Letras Prohibidas, San Salvador, 2004.

Ayalá, Berne, *La Bitácora de Caín*, Letras Prohibidas, San Salvador, 2006.

Azpuru, Dinorah, Ligia Blanco, Ricardo Córdova Macías, Nallely Loya Marín, Carlos G. Ramos y Adrián Zapata, *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado*, Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo (IDRC)/FyG Editores, Guatemala, 2007.

Barba, Jaime (compilador), *La democracia hoy*, Istmo Editores, San Salvador, 1994.

Barros Horcasitas, José Luis y Mónica Vereá Campos (coordinadores), *La política exterior norteamericana hacia Centroamérica. Reflexiones y perspectivas*, Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América-UNAM/FLACSO-México/Porrúa, México, 1991.

Benítez Manaut, Raúl y Ricardo Córdova Macías (compiladores), *La paz en Centroamérica: Expediente de documentos fundamentales, 1979-1989*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, México, 1989.

Bermúdez, Lilia, *Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica, Siglo XXI*, 2ª edición, 1989 (1ª edición 1987).

Binford, Leigh, *El Mozote. Vidas y memorias*, UCA Editores, San Salvador, 3ª reimpresión 2007, (1ª edición 1997).

Bloch, Marc, *Introducción a la historia*, FCE, México, 2000.

Borón, Atilio, "El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina", *Revista Mexicana De Sociología*, No. 2, Año 39, Vol. 39, abril-junio, México, 1977.

Brecht, Bertolt, *Las visiones y los tiempos oscuros*, UNAM, México, 1989.

Burgos, Elizabeth, *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia*, Siglo XXI, México, 1992.

Cabarrús, Carlos Rafael, *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983.

Cabezas, Omar, *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*, Siglo XXI, México, 1997.

Calderón, Fernando, *Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica*, Siglo XXI-UNAM, México, 1995.

Calveiro, Pilar, *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina*, Colihue, Buenos Aires, 2004.

Calveiro, Pilar, "Los desafíos de la memoria", en Maya Aguiluz Ibargüen y Gilda M. Walkman, *Memorias (in)congénitas. Contiendas en la historia*, CEICH-UNAM, México, 2007.

Canto Chac, Manuel, "La disputa teórica sobre las organizaciones civiles: Un asunto político ideológico", en: Jorge Cadena (coordinador), *Las organizaciones civiles Mexicanas Hoy*, CEICH-UNAM, México, 2004.

Cardenal, Ernesto, *Canto Nacional*, Siglo XXI, México, 1973.

Cardenal, Rodolfo y Luis Armando González (compiladores), *El Salvador: la transición y sus problemas*, UCA Editores, San Salvador, 2002.

- Carr, Edward, *Qué es la historia*, Ariel, Barcelona, 2003.
- Cassigoli, Rossana y Jorge Turner (coordinadores), *Tradición y emancipación cultural en América Latina, Siglo XXI*, México, 2005.
- Cassigoli, Rossana, “Abdicación cívica o historia contra la memoria”, *Perfiles Latinoamericanos*, No 27, FLACSO-México, 2006.
- Castellanos Moya, Horacio, *Perfil de prófugo*, Claves Latinoamericanas, México, 1987.
- Castellanos Moya, Horacio, *La diáspora*, UCA Editores, San Salvador, 1989.
- Castellanos Moya, Horacio, *El arma en el hombre*, Tusquets, Barcelona, 2001.
- Castellanos Moya, Horacio, *Insensatez*, Tusquets, México, 2004.
- Castellanos Moya, Horacio, *Tirana memoria*, Tusquets, Barcelona, 2008.
- Castillo, Manuel Ángel; Mónica Toussaint Ribot y Mario Vázquez Olivera, *Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala, Belice: la construcción de una frontera*, Secretaría de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático, México, 2006.
- Centro de Estudios Internacionales (varios autores), *Centroamérica en crisis*, El Colegio de México, 1980.
- Cerutti Guldberg, Horacio, *Filosofar desde nuestra América. Ensayo problematizador de modus operandi*, Porrúa/CCyDEL/CRIM/UNAM, México, 2000.
- Cerutti Guldberg, Horacio y Mario Magallón Anaya, “Historia de las ideas y filosofía latinoamericana ¿Disciplina fenecida?”, Casa Juan Pablos/Universidad de la ciudad de México, México, 2003.
- Cerutti Guldberg, Horacio, *Democracia e integración en nuestra América* (ensayos), Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2007.
- Clemens, Charles, *Guazapa*, UCA Editores, San Salvador, 1985.
- Colom, Yolanda, *Mujeres en la alborada*, Artemis Edinter, Guatemala, 1998.

Corominas, Jordi, "Sociedad mundial y democracia", ECA, Estudios Centroamericanos, No. 618, abril, UCA Editores, San Salvador, 2000, pp. 417-441.

Dalton, Roque, *El Salvador (Monografía)*, Casa de las Américas, La Habana, 1963.

Dalton, Roque, *Las historias prohibidas del pulgarcito*, Siglo XXI, México, 1974.

Dalton, Roque, *Un libro rojo para Lenin*, Nueva Nicaragua, Managua, 1979.

Dalton, Roque, *Miguel Mármol y los sucesos de 1932 en el Salvador*, Casa de las Américas, La Habana, 1983.

De Riz, Liliana, "Formas de Estado y desarrollo del capitalismo en América Latina", *Revista Mexicana De Sociología* 39, No. 2, 1977.

Dos Santos, Theotonio, "Socialismo y fascismo en América Latina hoy", *Revista Mexicana De Sociología* 39, No. 1, 1977.

Dos Santos, Theotonio, *Imperialismo y Dependencia*, Era, México, 1978.

Ellacuría, Ignacio, *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989)*, 3 Tomos, UCA Editores, San Salvador, 1993.

Ferro, Marc, *Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero*, FCE, México, 2000.

Figueroa Ibarra, Carlos (compilador), *América Latina. Violencia y miseria en el crepúsculo del siglo*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 1996.

Figueroa Ibarra, Carlos, *Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala*, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos/Grupo de Apoyo Mutuo, México, 1999.

Figueroa Ibarra, Carlos; Salvador Martí i Puig y Alberto Martín Álvarez (editores), *La izquierda revolucionaria en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral*, Catarata, Madrid, 2006.

Filc, Judith, "Desafiliación, extranjería y relato biográfico", en: Ana Amado y Nora Domínguez, *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*, Paidós, Buenos Aires, 2004.

Flores Olea, Víctor y Abelardo Mariña Flores, *Crítica de la globalidad: dominación y liberación en nuestro tiempo*, FCE, México, 1999.

Flyvberg, Bent, *Making Social Science Matter*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Fonseca, Elizabeth, *Centroamérica: su historia*, EDUCA/FLACSO-Costa Rica, San José, 2001.

Fucik, Julius, *Reportaje al pie de la orca*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1995.

García, Rolando, *El conocimiento en construcción; de las formulaciones de Jean Piaget a las teorías de sistemas complejos*, Gedisa, México, DF, 2000.

García Rolando, *Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación de la investigación interdisciplinaria*, Gedisa, Barcelona, 2006.

Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición: De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Paidós, Buenos Aires, 1962.

Gilly, Adolfo, *Guerra y política en El Salvador*, Editorial Nueva Imagen, México, 1981.

Gordon, Sara, en: Adolfo Aguilar Zinser y Rodrigo Jauberth Rojas (coordinadores), *Relaciones Centroamérica-México. El Salvador*, Programa de Estudios de Centroamérica (PECA), Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), México, 1987.

Gordon, Sara, *Crisis política y guerra en El Salvador, Siglo XXI*, México, 1989.

Gurrieri, Adolfo, *La obra de Prebisch en la CEPAL*, FCE, México, 1982.

Guerra Vilaboy, Sergio, *Breve historia de América Latina*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

Harnecker, Marta, *Pueblos en armas. Guatemala. El Salvador. Nicaragua*, Era, México, 1984.

Hernández, David, *El Salvador modelo por armar. Para una cartografía histórico-literaria*, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador, San Salvador, 2006.

Halperín Donghi, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina*, Alianza, Madrid, 1969.

Henríquez Consalvi, Carlos (Santiago), *La terquedad del izote. El Salvador: crónica de una victoria. La historia de Radio Venceremos*, Diana, México, 1992.

- Hernández, Alfonso, *Poesía en armas*, San Salvador, 1979.
- Hinkelammert, Franz, *Solidaridad o suicidio colectivo*, Universidad de Granada, Granada, 2005.
- Holbraad, Carsten, *Las potencias medias en la política Internacional*, FCE, México, 1989.
- Hopenhayn, Martín, *Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la Modernidad en América Latina*, FCE-Chile, Santiago, 1994, (2ª edición, México, 1995).
- Ibisate, Francisco Javier, “Neoliberalismo y globalización”, *ECA, Estudios Centroamericanos*, No. 600, octubre, UCA Editores, San Salvador, 1998, pp. 893-908.
- Ibisate, Francisco Javier, “¿Hacia un pos-neoliberalismo?”, *ECA, Estudios Centroamericanos*, No. 615, enero-febrero, UCA Editores, San Salvador, 2000, pp. 59-77.
- Iztapalapa (varios autores), *revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, No 20, *Centroamérica: entre el conflicto y la democracia*, UAM, México, 1990.
- Johnson, Janet Buttolph y Richard A. Joslyn, *Political Science Research Methods*, 3rd ed., Congressional Quarterly, Washington DC , 1995.
- Klare, Michael T. y Peter Kornbluh (coordinadores), *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad*, Consejo Nacional para la cultura y las artes/Editorial Grijalbo, México, 1990.
- Kohut, K. y Mackenbach, W. (editores), *Literaturas centroamericanas hoy desde la dolorosa cintura de América*, Iberoamericana, Madrid, 2005.
- Lara-Martínez, Rafael, *Del Dictado. Miguel Mármol, Roque Dalton y 1932, del cuaderno (1966) a la “novela-verdad” (1972)*, Editorial Universidad Don Bosco, San Salvador, 2007.
- López Bernal, Carlos Gregorio, “Indígenas, comunismo y nacionalismo: secuelas del levantamiento de 1932”, *Anuario de Investigaciones 2. Las identidades en El Salvador. Compilación*, Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, Universidad Dr. José Matías Delgado, San Salvador, 2002.
- Lungo Uclés, Mario, *El Salvador 1981-1984. La dimensión política de la guerra*, UCA Editores, San Salvador, 1986.
- Magallón Anaya, Mario, *La democracia en América Latina*, CCyDEL-UNAM/Plaza y Valdés, México, 2003.

Mariátegui, José Carlos, *Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana*, ERA, México, 1979.

Mariátegui, José Carlos, *Textos básicos*, México, FCE, 1991.

Martí, José, *Nuestra América*, Colección Pequeños Grandes Ensayos, UNAM, México, 2004.

Martínez, Ana Guadalupe, *Las cárceles clandestinas de El Salvador*, Universidad de Sinaloa, México, 1980.

Menjívar Ochoa, Rafael, *Tiempos de Locura. El Salvador 1979-1981*, FLACSO- El Salvador, San Salvador, 2006.

Miranda, Porfirio José, *Racionalidad y Democracia*, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1996.

Montes, César, *Mi camino: la guerrilla*, Planeta, México, 1998.

Montobbio, Manuel, *La metamorfosis del pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador*, Icaria Antrazyt/FLACSO, Barcelona, 1999.

Moore, Stanley, *Crítica de la democracia capitalista*, Siglo XXI Editores, 6ª edición en español, 1981.

Navarrete, Jorge Eduardo (coordinador), *La reconstrucción de la política exterior de México: principios, ámbitos, acciones*, UNAM, México, 2006.

O'Donnell, Guillermo, "Reflexiones sobre las tendencias de cambio en el Estado Burocrático-Autoritario", *Revista Mexicana De Sociología* 39, No.1, 1977.

O'Donnell, Guillermo, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead (editores), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, Barcelona/Buenos Aires/México, 1994 (1ª edición 1988).

Olvera, Alberto y Leonardo Avritzer, "El concepto de sociedad civil en el estudio de la transición democrática", *Revista Mexicana de Sociología*, No. 4, UNAM, México, 1992.

Osorio, Jaime, *Fundamentos del análisis social*, FCE-UAM, México, 2001.

Páez Montalbán, Rodrigo, *La Paz Posible. Democracia y negociación en Centroamérica 1979/1990*, CCyDEL-UNAM, México, 1998.

Payeras, Mario, *El mundo como flor y como invento*, Boldó y Clement Editores, México, 1986.

Payeras, Mario, *Los días de la selva*, Casa de las Américas, La Habana, 1980.

Payeras, Mario, *Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca*, Magna Terra, Guatemala, 1997.

Payeras, Mario, *Poemas de la Zona Reina*, Artemis Edinter, Guatemala, 2000.

Pellicer, Olga, *México y el mundo: cambios y continuidades*, Miguel Ángel Porrúa, México, 2006.

Pimentel, Luz Aurora, *El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa*, UNAM-Siglo XXI, 3ª edición, México, 2005.

Ragin, Charles, *Constructing Social Research; The unity and diversity of method*, Pine Forge, Thousand Oaks, 1994.

Ramírez Mercado, Sergio, *Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista*, Editorial Aguilar, México, 1999.

Regalado Álvarez, Roberto, *América Latina entre siglos. Dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda*, Ocean Sur, edición actualizada, 2006.

Rey Prendes, Julio Adolfo, *De la Dictadura Militar a la Democracia. Memorias de un político salvadoreño. 1931-1994*, INVERPRINT, San Salvador, 2008.

Ribera Salas, Ricardo, *Los partidos políticos en El Salvador entre 1979 y 1992. Evolución y cambios*, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 1996.

Rico Mira, Carlos Eduardo, *En silencio tenía que ser. Testimonio del conflicto armado en El Salvador (1967-2000)*, UFG Editores, San Salvador, 2003.

Rivera, Ana Kelly; Edy Arelí Ortíz Cañas; Liza Domínguez Magaña; María Candelaria Navas (compiladoras), *¿Valió la pena?! Testimonios de salvadoreñas que vivieron la guerra*, San Salvador, Sombrero Azul, 1995.

Rodríguez, Octavio, *La teoría del subdesarrollo de la CEPAL*, Siglo XXI, México, 1971.

Roig, Arturo Andrés, *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*, FCE, México, 1981.

Rojas Hernández, Mario, *Globalización financiera, despojo y radicalización de la dominación capitalista*, Editorial Dríada, México, 2008.

Romero, José Luis, *Situaciones e ideologías en América Latina*, Universidad de Antioquia, Medellín, 2001.

Roque Baldovinos, Ricardo, “Literatura y Política”, *Revista ECA*, No 595-596, UCA, San Salvador, 1998.

Rouquié, Alain, *Guerras y paz en América Central*, FCE, México, 1994.

Rouquié, Alain, *Las fuerzas políticas en América Central*, FCE, México, 1994.

Rowles, James, *El conflicto Honduras-El Salvador (1969)*, EDUCA, Centroamérica, 1980.

Salazar Bondy, Augusto, *¿Existe una filosofía de nuestra América?*, Siglo XXI, México, 1975.

Samayoa, Salvador, *El Salvador. La reforma pactada*, UCA Editores, San Salvador, 2002.

Samour, Héctor, *Voluntad de Liberación. Génesis y constitución del proyecto de filosofía de liberación de Ignacio Ellacuría*, UCA Editores, San Salvador, 2006. Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/deptos/filosofia/web/admin/files/1203712190.pdf>

Samour, Héctor, “La función liberadora de la filosofía y el método de historización de los conceptos en Ignacio Ellacuría”, *Teología y Liberación, Primer Congreso Internacional Ignacio Ellacuría, intelectual, filósofo y teólogo*, Embajada de España en México/Universidad del Claustro de Sor Juana/Fundación Ética Mundial, 24-26 de agosto, México, 2009.

Sansón, Josué, “El testimonio: de la unidad problemática a la historia por construir”, *Posgrado en Estudios Latinoamericanos*, inédito, México, 2008.

Schiavon, Jorge A., Daniela Spenser y Mario Vázquez Olivera (editores), *En busca de una nación soberana. Relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX*, CIDE, México, 2006.

Simón Bolívar, “Carta a Jamaica”, en José Martí, *Nuestra América*, Colección Pequeños Grandes Ensayos, UNAM, México, 2004.

Steve, J. Taylor y Robert Bogdan, *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados*, Paidós, Buenos Aires, 1990.

Suarez, Vicente, “El liberalismo en Centroamérica”, en *El liberalismo y la reforma en México*, Escuela Nacional de Economía, UNAM, México, 1957.

Todorov, Tzvetan, *Los abusos de la memoria*, Paidós, Barcelona, 2000.

Toussaint, Mónica; Guadalupe Rodríguez de Ita y Mario Vázquez Olivera, *Vecindad y diplomacia. Centroamérica en la política exterior mexicana. 1821-1988*, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México, 2001.

Toussaint, Mónica, “Centroamérica: entre la guerra y la paz. Del pacto de Corinto a los Acuerdos de Esquipulas”, en: *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, No 45, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC, antes CCyDEL)-UNAM, México, 2007.

Vázquez, Mario R., “Del desafío revolucionario a la reforma política. El Salvador, 1970-1992”, en Ignacio Sosa (coordinador), *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*, CCyDEL-UNAM, México, 1999.

Viezzler, Moema, *Si me permiten hablar... Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia*, Siglo XXI, México, 1978.

Villegas, Abelardo, *Arar en el mar: la democracia en América Latina*, CCyDEL-UNAM/Plaza y Valdés, México, 1995.

Weffort, Francisco, “Democracia y revolución”, en *Cuadernos Políticos*, No 56, México, enero-abril, 1989.

Yin, Robert, *Case Study Research: Design and Methods*, Sage, Thousand Oaks, 1994.

Zamora, Rubén, *La izquierda partidaria salvadoreña: entre la identidad y el poder*, FLACSO-El Salvador, San Salvador, 2003.

Zea, Leopoldo, *La filosofía Americana como filosofía sin más*, Siglo XXI, México, 1972.

Documentos

De la locura a la esperanza. La guerra de doce años en El Salvador, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, Naciones Unidas, San Salvador/Nueva York, 1992/1993.

El Salvador, Acuerdos de Paz, 1992.

Planteamientos Programáticos del FMLN

Polémica Internacional, Órgano político del Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, EPOCA II-No 3, El Salvador C.A., Junio de 1980.

Tesis

Corominas, Jordi, *Ética primera. Aportación de X. Zubiri al debate ético contemporáneo*, Tesis de Doctorado en Filosofía, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, 1998. Disponible en:

<http://www.uca.edu.sv/deptos/filosofia/web/index.php?cat=7&searchk=C>

Cruz, Gustavo Roberto, *Crítica a la política-estética racializada desde el movimiento indígena en Bolivia (aproximación filosófica a la liberación indígena-popular)*, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 2008.

Lungo, Irene, *Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador (1989-2004)*, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-México, 2008.

Martín Álvarez, Alberto, *De movimiento de liberación a partido político. Articulación de los fines organizativos en el FMLN salvadoreño (1980-1992)*, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004.

Ocampo Saravia, Tania, *El sueño de la paz. El fin de la guerra en El Salvador. La construcción de los Acuerdos de Chapultepec, 1992*, Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2008.

Paredes Coronel, Heriberto, *Radio Venceremos: un ejemplo de historificación de una práctica social*, Tesis de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, UNAM, 2009.

Pirker, Kristina, *La redefinición de lo posible: militancia política y movilización social en El Salvador (1970-2004)*, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2008.

Sánchez, Irene, *Tiempo político y movimientos armados. El FMLN en El Salvador 1970-1992*, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1997.

Sermeño, Ángel, *El Salvador: una transición democrática de baja intensidad (1992-1995)*, Tesis de Maestría en Ciencia Política, Facultad de Ciencias políticas y Sociales, UNAM, México, 1996.

Umaña, Lorena, *Representaciones sociales y prácticas de la inseguridad en la posguerra en el Área Metropolitana de San Salvador, AMSS. Estudio de casos (Soyapango, San Salvador y Antiguo Cuscatlán)*, Tesis de Maestría en Estudios Políticos y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 2007.

Hemerografía

Iruegas, Gustavo, “Se lee cada cosa”, *La Jornada*, lunes 11 de junio, México, 2007.

_____, “Y el PPP se levantó y anduvo”, *La Jornada*, jueves 27 de abril, México, 2007.

_____, “Porque es preciso”, *La Jornada*, miércoles 3 de enero, México, 2007.

_____, “Principios vrs. intereses”, *La Jornada*, lunes 30 de enero, México, 2006.

_____, “La traición del güero”, *La Jornada*, jueves 20 de octubre, México, 2005.

_____, “Los principios y los fines”, *La Jornada*, miércoles 21 de septiembre, México, 2005.

_____, “Un falso dilema”, *La Jornada*, viernes 19 de agosto, México, 2005.

_____, “El mal de América”, *La Jornada*, viernes 5 de agosto, México, 2005.

_____, “México-Cuba”, *La Jornada*, martes 4 de mayo, México, 2005.

Menjívar, Elmer, “Los cuadernos de Ellacuría”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 2005.

_____, “Los secretos de la paz”, Enfoques, La Prensa Gráfica, San Salvador, 2006.

Fuentes electrónicas

Alcantara, Manuel, et al, *Guía bibliográfica sobre procesos electorales y partidos políticos en América Latina, 1980-1992*, San José, Costa Rica, 1993,
<http://www.ismaelcrespo.es/bibliografia/procesos-electorales-y-partidos-politicos-en-america-latina/>

Anderson, Perry, “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en: *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Emir Sader y Pablo Gentili (compiladores), 2ª. Ed. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2003: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf>
ARENA, página web del partido: <http://www.arena.com.sv/>

Artiga-González, Álvaro, “La ciencia política en El Salvador: sus primeros pasos”, *Revista de ciencia política*, volumen 25, No. 1, 2005, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2009. Versión electrónica:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2005000100012&script=sci_arttext

Borón, Atilio, *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, Colección Secretaría Ejecutiva, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2003: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/estado/estado.html>

Casilda Béjar, Ramón, “América Latina y el Consenso de Washington”, *Boletín Económico de ICE* (Información Comercial Española), No 2803, abril-mayo, 2004: http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2803_19-38__4F750124143128257278CDB775B3F4F9.pdf

Chávez, Suchit, “De la realidad a las letras”, Prensa gráfica.com, San Salvador, 2007: <http://archive.laprensa.com.sv/20070119/cultura/694199.asp>.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos (OEA), Informe anual 1987-1988, Capítulo IV: El Salvador, <https://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/cap.4b.htm>

Dada Hirezi, Héctor, “El Salvador. Elecciones y democracia”, *Nueva Sociedad*, No 132, Julio-Agosto, 1994, pp. 22-28, http://www.nuso.org/upload/articulos/2344_1.pdf

“De la guerra a la Paz”, Informe especial (serie de artículos, entrevistas y reportajes sobre el proceso de paz en El Salvador), El Faro.net. El primer periódico digital latinoamericano, San Salvador, 2006, www.elfaro.net

FMLN, página web del partido: <http://www.fmln.org.sv/index.php>

González, Antonio, “Aproximación a la obra filosófica de Ignacio Ellacuría”, <http://www.geocities.com/praxeologia/barceie.html>

González González, Guadalupe, “México en América Latina. El difícil juego del equilibrista”, *Foreign Affairs* en español, Octubre-Diciembre, 2007, <http://www.foreignaffairs-esp.org/20071001faenespessayo70405/guadalupe-gonzalez-gonzalez/mexico-en-america-latina-el-difcil-juego-del-equilibrista.html>

Guadarrama, Rocío, “Paradigmas y realidades de los movimientos sociales”, *Estudios Sociológicos* 15, 1997, http://www.fecode.edu.co/descargas/enf/paradigmas_realidades_mov.doc

Lara-Martínez, Rafael, “Cultura de paz: herencia de guerra. Poética y reflejos de la violencia en Horacio Castellanos Moya”, *Istmo: Revista virtual de estudios literarios y culturales*, No 3, enero-junio, 2002, <http://collaborations.denison.edu/istmo/no3/articulos/moya.html>

Marini, Ruy Mauro, “La lucha por la democracia en América Latina”, *Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano*, No 1, Buenos Aires, CLACSO, octubre, 2001, <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/cuadernos/marini/marini.pdf>
Ver también: http://www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm

Nohlen, Dieter, (Coordinador), *Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1993, <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2052>

O'Donnell, Santiago, “Matar a un monseñor”, *Página 12*, domingo 7 de marzo de 2010, Buenos Aires: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-141544-2010-03-07.html>

OPAL, Observatorio de Partidos Políticos de América Latina, Universidad de Salamanca, El Salvador, Resultados Electorales (1994-2006), <http://americo.usal.es/oir/opal/elecciones/EleccionesElSalvador2006.pdf>

Revista Diálogo Centroamericano:
<http://www.ciponline.org/dialogue/0901dia.htm>

Ribera Salas, Ricardo, “El momento actual visto en perspectiva histórica”, *Notas informativas UCA*, San Salvador, 20 de febrero de 2009, <http://www.uca.edu.sv/noticias/>

Rojo, Heródoto, *El Salvador, de la esperanza a la negociación*, Parte XIII, “Negociación, Gobierno-FMLN y los Acuerdos (1989-1992)”, <http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos/junio2005/salvador13.htm>

Salamanca, Elena, “Mi novela tiene un sesgo de poder”, Edwin Ernesto Ayala nos da la primicia de su primera novela publicada, *Prensa Gráfica.com*, San Salvador, 2005: <http://archive.laprensa.com.sv/20050226/cultura/128974.asp>

SAPRIN (Red Internacional de la Sociedad Civil para la Revisión Participativa de las Política de Ajuste Estructural), *Ajuste Estructural. Informe SAPRI. Una investigación participativa realizada por la Sociedad Civil y el Banco Mundial*, Colección Libros de Encuentro, Intermón Oxfam, versión castellana, Barcelona, 2005: http://books.google.com.mx/books?id=ooUrWt3m10UC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=ajuste+estructural+en+El+Salvador&source=bl&ots=aD8Z773MJX&sig=32sU_cIlow9ZNflxkGgvvakW3Ok&hl=es&ei=t22ZS62APIHWNKqkwHo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=oCAGQ6AEwATgU#v=onepage&q=ajuste%20estructural%20en%20El%20Salvador&f=false

Stoll, David, *Rigoberta Menchú y la historia de todos los guatemaltecos pobres*, Nódulo, 2002, <http://www.nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm>

Zamora, Rubén, “En el 94 sabremos quién ganó la negociación”, entrevista a *Revista Envío*, No. 123, Universidad Centroamericana UCA, Managua, 1992, <http://www.envio.org.ni/articulo/2296>